

**MINERÍA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y RESPUESTAS CAMPESINAS:  
una ecología política de transformaciones territoriales**

**MINERÍA,  
MOVIMIENTOS  
SOCIALES  
Y RESPUESTAS  
CAMPELINAS:**

**una ecología política de  
transformaciones territoriales**

**ANTHONY BEBBINGTON**  
*Editor*

*IEP Instituto de Estudios Peruanos*

**CEPES**

CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS SOCIALES

Serie: Minería y Sociedad 2

- © ANTHONY BEBBINGTON
- © IEP INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS  
Horacio Urteaga 694, Lima 11  
Telf. (511) 332-6194 Fax (511) 332-6173  
E-mail: publicaciones@iep.org.pe  
Web: www.iep.org.pe
- © CEPES CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS SOCIALES  
Av. Salaverry 818, Lima 11  
Telf. (511) 433-6610 Fax (511) 433-1744  
E-mail: cepes@cepes.org.pe  
Web: www.cepes.org.pe

Impreso en Perú  
Primera edición, mayo de 2007  
1 000 ejemplares

ISBN: 978-9972-51-172-1  
ISSN: 1994-2966

Hecho el depósito legal  
en la Biblioteca Nacional del Perú: 2007-07385

Registro del proyecto editorial  
en la Biblioteca Nacional: 11501130700191

*Cuidado de edición:* Mercedes Diones  
*Corrección de estilo:* Lourdes Abanto  
*Diagramación:* Silvana Lizarbe  
*Promoción y ventas:* Elizabeth Andrade

*Prohibida la reproducción total o parcial de las características gráficas de este libro por cualquier medio sin permiso de los editores.*

**BEBBINGTON, ANTHONY**

*Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales.* Lima: IEP: CEPES, 2007. (Minería y Sociedad, 2)  
MINERÍA; MOVIMIENTOS CAMPESINOS; MOVIMIENTOS SOCIALES; DESARROLLO RURAL; AMÉRICA LATINA

W/08.13.01/M/1

## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>13</b>
<b>SECCIÓN 1</b>	
<b>UNA ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA MINERÍA     Y LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL .....</b>	<b>21</b>
I. Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras <i>Anthony Bebbington .....</i>	<b>23</b>
<b>SECCIÓN 2</b>	
<b>ECONOMÍA POLÍTICA Y TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL .....</b>	<b>47</b>
II. Neoliberalismo, minería y cambios rurales en Cajamarca <i>Jeffrey Bury .....</i>	<b>49</b>
III. La reestructuración territorial y las bases de la reforma agraria: comunidades indígenas, minería aurífera y el Banco Mundial <i>Eric Holt-Giménez .....</i>	<b>81</b>
<b>SECCIÓN 3</b>	
<b>RESISTENCIAS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y DESARROLLO TERRITORIAL     EN ZONAS MINERAS .....</b>	<b>115</b>
IV. Minería y política: la recreación de luchas campesinas en dos comunidades andinas <i>Gerardo Damonte .....</i>	<b>117</b>

V.	Movimientos sociales, lazos transnacionales y desarrollo territorial rural en zonas de influencia minera: Cajamarca-Perú y Cotacachi-Ecuador <i>Anthony Bebbington, Jeffrey Bury, Denise Humphreys Bebbington, Jeannet Lingan, Juan Pablo Muñoz, Martin Scurrah</i> .....	163
VI.	Minería, migración y transformaciones en los medios de subsistencia en Cajamarca, Perú <i>Jeffrey Bury</i> .....	231
<b>SECCIÓN 4</b>		
<b>CONCLUSIONES</b> .....		279
VII.	Conclusiones: Minería, neoliberalización y reterritorialización en el desarrollo rural <i>Anthony Bebbington y Leonith Hinojosa Valencia</i> .....	281
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....		315
<b>NOTA SOBRE LOS AUTORES</b> .....		347

## LISTA DE CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS

### Cuadros

2.1:	El cambio económico neoliberal peruano (1994-2004) .....	55
2.2:	Producción y exportación minera del Perú .....	57
2.3:	Grandes operaciones mineras transnacionales en el Perú .....	63
2.4:	Impactos económicos seleccionados de MYSA en Cajamarca .....	68
5.1:	Índice de desarrollo humano en distritos de influencia directa de Yanacocha .....	196
6.1:	Muestras demográficas de las unidades domésticas del estudio de caso .....	243
6.2:	Creciente acceso de las unidades domésticas a los mercados .....	247
6.3:	Cambios educacionales en las comunidades del estudio de caso .....	248
6.4:	Evaluación comparativa de la prevalencia de enfermedades en las comunidades del estudio de caso .....	249
6.5:	Parámetros de estándares de agua .....	252
6.6:	Resultados de la calidad del agua para mediciones seleccionadas en Ladera .....	254
6.7:	Percepciones de las unidades domésticas acerca de las diferencias en las comunidades del estudio de caso .....	259
6.8:	Capital social de las unidades domésticas y la resistencia a MYSA .....	260
6.9:	Características demográficas de Cajamarca .....	261
6.10:	Características de la migración en las comunidades del estudio de caso .....	264
6.11:	Empleados de MYSA y migración - 2003 .....	271
6.12:	Origen de bienes y adquisiciones de MYSA 1993-1998 .....	273
6.13:	Origen de servicios y adquisiciones de MYSA 1993-1998 .....	273

### Gráficos

2.1:	Denuncias mineras nacionales - Distribución por departamento (2000) .....	62
2.2:	Denuncias mineras en la región de Cajamarca .....	73
3.1:	Préstamos del Banco Mundial a Guatemala .....	98
5.1:	Línea de tiempo Cajamarca-Yanacocha (Perú) .....	169

5.2:	Línea de tiempo, cantón Cotacachi (Ecuador) .....	172
6.1:	Ubicación de los estudios de caso .....	240
6.2:	Empleo de MYSA 1993-2002 .....	270

### **Mapas**

3.2:	Minería a cielo abierto en Guatemala .....	107
5.1:	Yanacocha y Cajamarca .....	181
5.2:	Junín y Cotacachi .....	201

## LISTA DE ABREVIATURAS

AACRI	Asociación Agro-artesanal de Caficultores del Río Intag
ADEA	Agrupación para la Defensa Ética de los Animales
AE	Acción Ecológica
AIM	Bolsa alternativa de inversión de Londres
AUC	Asamblea de Unidad Cantonal
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CAO	Compliance Advisor Ombudsman
CEDENMA	Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente
CEPA	Centro de Ecología y Pueblos Andinos
CFI	Corporación Financiera Internacional
CGA	Comité de Gestión Ambiental
CMA	Compañía Minera Antamina
CONACAMI	Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
CORECAMI	Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería
DTR	Desarrollo territorial rural
DECOIN	Defensa y Conservación de Intag
EAP	Estrategia de Asistencia al País
ECOVIDA	Asociación para la Defensa Ambiental de Cajamarca
EIA	Estudio de impacto ambiental
EMIRSA	Empresa Minera Inti Raymi
ET	Empresas trasnacionales
FEROCAFENOP	Federación de Rondas Campesinas Femeninas del Norte del Perú
FMI	Fondo Monetario Internacional
GG	Gobierno de Guatemala
GGF	Global Greengrants Fund
GRUFIDES	Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible
IDH	Índice de desarrollo humano
IED	Inversión extranjera directa

IFC	Corporación Financiera Internacional
IFI	Instituciones financieras internacionales
IIED	Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
IPEMIN	Instituto para el Desarrollo de la Pesca y la Minería
JICA	Agencia de Cooperación Internacional de Japón
MAS	Movimiento al Socialismo
MGT	Modelo de gestión territorial
MIGA	Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones
MIRNA	Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Altiplano
MMAJ	Metal Mining Agency de Japón
MRTA	Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
MS	Movimientos sociales
MYSA	Minera Yanacocha
NFR	Nueva Fuerza Republicana
OA	Oxfam América
ODI	Instituto de Desarrollo de Ultramar
OPIC	Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero
PAE	Programas de ajuste estructural
PBI	Producto bruto interno
PLASA	Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales
PPP	Plan Puebla Panamá
SEDACAJ	Empresa Municipal del agua
SMO	Organizaciones de los movimientos sociales
SNMPE	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
SPDA	Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas

## PRESENTACIÓN

LOS CONFLICTOS MINEROS en América Latina se han vuelto tema de elecciones presidenciales y de páginas principales de periódicos. Durante la semana en la cual estábamos completando este libro, el nuevo presidente del Ecuador, Rafael Correa, declaró que su país estaba al borde de una explosión social a raíz de los conflictos reales, o latentes, catalizados por la entrega poco planificada, o poco participativa, de concesiones mineras. El tema minero estuvo también muy presente en las elecciones presidenciales peruanas del 2006 y, en cierta medida, dominó la agenda de los primeros meses de gobierno de Alan García y de su primer ministro Jorge del Castillo.

Ambos hechos muestran que la relación entre minería, desarrollo y democracia es de suma relevancia contemporánea. Sin embargo, en un contexto político que se presta a discursos simplificadores —y hasta demagógicos— estos mismos hechos hacen que la construcción de una base analítica sobre la cual se podría tener debates algo más técnicos y menos ideológicos sea fundamental. En respuesta a tal necesidad, las contribuciones que se vienen dando desde la academia como desde otros sectores son un buen inicio, pero hay que reconocer que estamos todavía en una fase analítica muy preliminar. Es en este contexto que este libro intenta ser un aporte al proceso de ir construyendo una agenda analítica —y no solo política— en los debates sobre minería.

Este libro explora las relaciones entre la gran minería, las respuestas campesinas y el surgimiento de movimientos sociales que esta induce. Sobre la base de ello, discute cómo las acciones e interacciones de estos actores, junto a otros elementos, terminan construyendo nuevos territorios y nuevas sendas de desarrollo rural en las zonas altas de América Latina con un enfoque especial en la región andina. Conceptualmente, se ubica dentro de la tradición de la ecología política y su interés en entender el papel negociador de los movimientos sociales en la relación entre la economía política y el medio ambiente. También se nutre de una conceptualización del espacio, el lugar y el territorio, cada uno producto de las articulaciones entre distintos actores sociales operando a diferentes escalas. Se sugiere que estas pautas conceptuales ayudan a entender las dinámicas del desarrollo y del conflicto en zonas de influencia minera, así como las transformaciones socioeconómicas que se derivan. Con este enfoque, este volumen busca contribuir al entendimiento de los conflictos que se desencadenan a raíz de la cada vez mayor presencia minera en las zonas altas de América Latina; y, por consiguiente, adquiere relevancia frente a la necesidad de repensar el desarrollo rural de una manera que reconozca la gran influencia del uso del subsuelo, el suelo y el agua en la determinación de las dinámicas socioeconómicas rurales.

El libro reúne siete capítulos organizados en cuatro secciones. En la primera sección Anthony Bebbington presenta el marco conceptual en el cual el libro se ubica. Basado en la tradición de la ecología política el capítulo establece conceptos analíticos fundamentales para analizar las relaciones entre movimientos sociales, minería y desarrollo y esboza posibles elementos programáticos para la investigación sobre minería y transformaciones territoriales en América Latina. El mensaje fundamental de este esquema se resume de la siguiente manera: Primero, las dinámicas de la economía política del capitalismo moderno explican gran parte de las transformaciones ambientales y territoriales que se están viviendo en América Latina. Insistir en esta observación no implica ser *determinista* y menos aún *marxista*; es más bien un enfoque *realista* y

*pragmático*. Implica que, no obstante nuestro deseo de entender, visibilizar y fortalecer la capacidad de acción (o en inglés *human agency*) de poblaciones locales, no se pueden (ni se deben) ignorar los enormes efectos que las dinámicas político-económicas tienen y tendrán en los procesos locales. Segundo, no obstante lo dicho, la economía política no determina todo. Existen espacios para el ejercicio de tomar decisiones autónomas, tanto a nivel individual como colectivo. Si bien en muchos casos esta toma de decisiones parece orientarse más hacia estrategias de sobrevivencia, en ciertos casos tiene una orientación más política e intenta resistir y renegociar los procesos político-económicos que se imponen a poblaciones locales. Sea que la acción se da como estrategia de sobrevivencia o que se dirige a la protesta, esta capacidad de decidir y actuar de los individuos cambia los efectos de la economía política sobre la transformación territorial y ambiental. En este sentido, los territorios y los procesos de desarrollo locales son coproducidos. Finalmente, tanto los procesos político-económicos, como las respuestas sociales, pasan por niveles nacionales e internacionales. Los actores privados y estatales a nivel nacional juegan un rol importante en la expansión minera y los actores sociopolíticos —a veces del propio Estado— también cumplen un papel importante en las respuestas sociales a esta expansión económica. En estas diversas interacciones la participación de individuos y organizaciones internacionales que se ubican en, y actúan desde, espacios globales es fundamental, no solo porque algunos de ellos establecen y facilitan los esquemas financieros y reguladores bajo los cuales se da la gran inversión minera (por ejemplo en caso del Banco Mundial), sino también por que otros se alinean y/o influyen en el surgimiento y formas que adquieren los movimientos sociales (por ejemplo las ONG del Norte). De esta forma, lo que observamos no es solo una confrontación y coproducción entre lo global y lo local, sino un proceso de transformación que da como resultado lo que se puede denominar *glocal*.

Estos dos elementos —economía política y respuestas sociales— dan la estructura para las siguientes dos secciones. En los dos

capítulos de la segunda sección, Jeffrey Bury para el caso de Cajamarca en Perú y Eric Holt-Giménez para el de Guatemala, ayudan a profundizar una lectura político-económica de las transformaciones territoriales que se dan alrededor de la actividad minera. Ambos, en sus respectivas miradas regional y nacional, demuestran la importancia de analizar la economía política del desarrollo minero a varias escalas a la vez: Internacional, nacional y regional. También demuestran cómo esta economía política explica gran parte de la determinación de las reglas del juego dentro de los cuales los actores locales operan. Aun cuando algunos lectores concluirán que tales análisis resultan demasiado deterministas y hasta parecen influidos por alguna noción de conspiración capitalista globalizante, en el actual contexto global en que las localidades latinoamericanas evolucionan, sería imposible abordar su desarrollo territorial en términos analíticos y políticos sin entenderlas como espacios coproducidos por procesos globalizantes e historias locales.

La tercera sección incluye tres capítulos y se constituye en otro pilar del esquema conceptual, enfatizando la capacidad de acción humana en sus distintos niveles y la posibilidad de que esta pueda influir en las trayectorias de las transformaciones territoriales desencadenadas por la inversión minera. En el capítulo cuarto, Gerardo Damonte explora las formas de esta capacidad de actuar y la resistencia que surgen a nivel local y comunal y que se manifiestan tanto en acciones cotidianas como en acciones más concertadas a nivel comunal. Este capítulo ofrece una lectura de estas respuestas campesinas a través de un estudio etnográfico y etnohistórico de la resistencia comunal a dos minas, la mina Inti Raymi en Oruro (Bolivia) y Antamina en Huaraz (Perú). La profundidad de su análisis demuestra la importancia de entender las articulaciones entre resistencia social, minería y desarrollo local en su debido contexto sociohistórico; también deja claro que no se debería mantener imágenes preestablecidas o románticas ni de la naturaleza de esta resistencia, ni de sus alcances.

El quinto capítulo da continuidad al énfasis analítico puesto en la resistencia, pero a un nivel más coordinado y supracomunal.

Preparado por Anthony Bebbington, Jeffrey Bury, Denise Humphreys Bebbington, Jeannet Ligan, Juan Pablo Muñoz y Martin Scurrah, el capítulo explora el surgimiento de procesos de movilización social en contextos de influencia minera, con un énfasis especial en las relaciones entre actores locales, transnacionales y nacionales en estos incipientes movimientos sociales. Del mismo modo considera cómo estos movimientos sociales interactúan con las empresas mineras y entidades del Estado y, en el proceso, influyen en las trayectorias del desarrollo territorial. La comparación sobre la cual se elabora el argumento que presenta el capítulo es entre Cajamarca (Perú) y Cotacachi (Ecuador), dos zonas en las cuales en la década de 1980 se identificaron importantes yacimientos minerales, pero que, a la fecha en que este volumen se publica, reflejan situaciones muy distintas: Mientras Cajamarca es anfitriona de la mina de oro más grande de América Latina, en Cotacachi no se ha pasado de una primera fase de exploración. La pregunta inmediata que surge de esta comparación es si esta diferencia tiene algo que ver con las formas de movilización social en los dos sitios. Esta comparación es adicionalmente interesante porque cuando se conectan los capítulos cuarto y quinto, llama la atención de que el accionista principal de Minera Yanacocha en Cajamarca (la empresa estadounidense Newmont Mining Corporation) sea también el socio principal de Inti Raymi, uno de los casos discutidos en el capítulo de Damonte.

El sexto capítulo de Jeffrey Bury complementa el quinto capítulo en dos sentidos. Por un lado, explora otros tipos de respuesta local a la minería —respuestas que pasan no por la resistencia sino por la readecuación de los medios de vida de la población. Por otro lado, dado que el quinto capítulo discute sobre los efectos de la minería y la movilización en la economía regional, este capítulo ofrece evidencia empírica sobre la cual se puede responder a la pregunta formulada líneas arriba. Bury enfatiza el rol que juegan los activos a los cuales las poblaciones locales acceden en determinar las estrategias de vida que se construyen en respuesta a la expansión minera. Varias de estas estrategias involucran la migración y el ca-

pítulo también analiza los efectos de la minería en los patrones de movilidad demográfica entre campo y ciudad, Sierra y Costa, Perú y el mundo.

La última sección del libro ofrece conclusiones tanto conceptuales como comparativas. En ellas, Anthony Bebbington y Leonith Hinojosa sugieren que los temas discutidos en los diversos capítulos incluidos en el volumen se relacionan y aportan a la aún naciente literatura sobre minería en América Latina; basándose en ello, identifican temas emergentes en los debates sobre industrias extractivas, movimientos sociales y desarrollo territorial rural que requieren ser estudiados con mayor profundidad. Las conclusiones se orientan a conectar estos debates y el análisis empírico a reflexiones mayores sobre la reestructuración de las estrategias de vida rural y la economía rural en América Latina contemporánea. De hecho, se concluye que en vastos territorios de la región, particularmente zonas altas, no sería legítimo discutir el tema del desarrollo rural territorial sin relacionarlo a las nuevas formas de inversión en industrias extractivas que se vienen dando y a los reordenamientos territoriales, institucionales y estructurales que acompañan esta inversión.

Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de varias organizaciones y personas, a quienes expreso mi agradecimiento. A nivel institucional, agradezco al CIID Canadá y RIMISP-Chile a través de su programa "Movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural". Este programa financió la investigación presentada en el quinto capítulo, parte de la producción del libro y la traducción de uno de los capítulos de Jeffrey Bury. Gracias también a la dirección y el equipo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), por brindarme su apoyo y un hogar institucional durante todo el período en que se hizo este trabajo. Quiero además reconocer al Economic and Social Research Council del Reino Unido, quien apoyó en la preparación del libro vía un *Professorial Research Fellowship* (RES-051-27-0191) que financió tanto mi tiempo como el de Leonith Hinojosa y a la Escuela de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Manchester, quien

me apoyó con un año sabático durante el cual se desarrolló la investigación presentada en el capítulo quinto. Agradecimientos adicionales van para el Global Greengrants Fund quien ayudó en la investigación y financió ciertos componentes del trabajo que resultó en este libro; a las revistas científicas *Environment and Planning A* y *The Geographical Journal*, quienes permitieron la reproducción de los capítulos de J. Bury (ambos fueron traducidos y actualizados para ser incluidos en el libro); y, finalmente, al Instituto de Estudios Peruanos por adoptar esta publicación junto con CEPES. A nivel personal, quiero reconocer el apoyo de Juan Rheineck, Fernando Eguren, Julio Berdegué, Phil Woodhouse, Denise Humphreys Bebbington, Deysi Rios, Susan Johnson, Martin Scurrah, Carolina Trivelli, Mercedes Dioses, Marcos Cueto, Silvana Lizarbe y Víctor Vich. Leonith Hinojosa hizo un trabajo magnífico en la redacción del texto. Nuestras hijas, quienes toleraron este proyecto, no quieren escuchar ni una palabra más sobre la minería —ni de mi persona, ni de Denise. Finalmente dedico el libro a Denise. Sin ella, ni yo ni Jeff Bury nos hubiéramos metido en este tema —en muchos sentidos, el libro no existiría si no fuese por su insistencia en la importancia del tema, mucho antes de que los periódicos y políticos peruanos se dieran cuenta.

ANTHONY BEBBINGTON

*Universidad de Manchester y Centro Peruano de Estudios Sociales*

Lima, marzo 2007

## **Sección 1**

---

# **Una ecología política de la minería y la transformación territorial**



# 1

## *Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras*

ANTHONY BEBBINGTON

DESDE INICIOS de la década de 1990, una vez más, la minería empieza a transformar América Latina. La combinación de precios altos de minerales, nuevas tecnologías que permiten la explotación en sitios donde antes no era factible y las reformas institucionales para el sector y el conjunto de la economía han hecho que la minería en Latinoamérica constituya una de las fronteras más atractivas para la inversión tanto internacional como nacional.<sup>1</sup> Así, el Banco Mundial comenta que para el período 1990-1997, mientras la inversión en *exploración minera* a nivel mundial creció en 90%, en América Latina lo hizo en 400% y en Perú, el país más analizado en este libro, creció 2000% (Banco Mundial, 2005d). Mientras tanto, en lo que corresponde a *explotación minera* realizada entre 1990 y 2001 a nivel mundial, doce de las 25 mayores inversiones en proyectos mineros se hicieron en Latinoamérica: Nueve en Chile, dos en Perú y una en Argentina (Bridge, 2004: 412, 413). De los diez países que vieron la mayor inversión en minería, cuatro son de América Latina: Chile (en primer puesto), Perú (sexto), Argentina (novenno) y México (décimo).

---

1. Algo parecido se da para el sector hidrocarburos, sector no incluido en este libro.

Desde la década de 1990 esta expansión se concentró en Sudamérica, pero cada vez hay más indicios de que en años venideros Centroamérica también verá un marcado incremento de inversión minera, proceso que ya empieza a dejarse sentir en Guatemala y Honduras. Dadas las tasas de crecimiento económico en China e India, y el aumento en la demanda para materia prima (sobre todo minerales e hidrocarburos) que esto implica, no hay evidencia de que este proceso vaya a parar. De hecho, cuando terminábamos de escribir este libro se dio el primer intento de comprar una empresa minera británica por capitales chinos en la bolsa alternativa minera (AIM) de Londres. Casualmente, esta empresa opera solamente en el Perú. La prensa británica especula que la compra de Monterrico Metals (la empresa aludida, dueña de Minera Majaz en Perú) es simplemente el primer paso en lo que sería un fenómeno de mucha mayor envergadura donde se anticipa una serie de adquisiciones de empresas registradas en Gran Bretaña por parte de empresas chinas.

No obstante el mito de “tierras baldías” —concepto tan usado para justificar la expansión de varios tipos de frontera en América Latina y presente todavía en los discursos de las industrias extractivas— la expansión espacial de la minería que esta inversión implica no ocurre en tierras vacías. Por el contrario, se da en tierras ya ocupadas y que son propiedad de otros, tierras que tienen significados culturales e históricos para sus moradores y tierras que son la fuente de diversos activos naturales que sustentan las estrategias de vida de estos pobladores. En este sentido, la expansión minera en estas tierras constituye una suerte de competencia entre dos proyectos geográficos:<sup>2</sup> un proyecto que implica una gobernanza de territorios que permite su ocupación por múltiples actores y otro que implica una gobernanza que asegure la ocupación por un solo actor. El primero implica cambios territoriales sucesivos, cotidianos y marcados por continuidades con significados

---

2. Hablar de *dos* es obviamente una simplificación pues existen subproyectos dentro de la población local, cada uno con sus implicaciones espaciales.

históricos; el segundo implica cambios territoriales drásticos, no bien entendidos por la población local y que traen consigo una combinación de mayor riesgo e incertidumbre bajo la excusa de promover modernidad. Por tanto, la expansión minera lleva a nuevos encuentros entre distintas geografías, entre distintas territorialidades, entre actores sociales que antes no se conocían y entre distintos modelos de desarrollo y de vida.

No es de sorprenderse entonces que la inversión minera ha venido tantas veces acompañada por nuevos conflictos sociales. En muchos casos, y sobre todo en el peruano, estos conflictos se han vuelto tema de preocupación política para gobiernos y elites nacionales, mientras que para activistas y movimientos sociales han constituido espacios para pelear por democracia y derechos humanos. Son estas preocupaciones políticas y los pretendidos beneficios fiscales y macroeconómicos de la minería las que dominan gran parte de los debates públicos en los países estudiados en este libro. De la legitimidad y de la forma cómo se irán resolviendo tales conflictos dependerá que el auge minero termine consolidando la democracia o, por lo contrario, endureciendo prácticas autoritarias, clientelistas y centralistas. Los capítulos en esta colección ofrecen materia empírica y analítica que documentan estos conflictos y al mismo tiempo generan nuevos insumos para alimentar los debates contemporáneos sobre la minería y sus implicaciones para el desarrollo y la democracia.

Además del tema de conflictos, la segunda preocupación del libro gira alrededor de las siguientes preguntas: ¿Qué efectos tiene el encuentro entre una minería en expansión con los territorios ya existentes sobre la geografía humana de la región? ¿Cómo afecta la expansión de la minería y las respuestas que genera a la forma cómo se producen el espacio, los lugares y el territorio? Y, sobre todo, ¿cómo son afectadas las estrategias de vida de la población y los activos que las sustentan?

No obstante la presencia de estos temas y su carácter polémico en países como Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, aquí estudiados, son temas poco teorizados. Este libro es un esfuerzo

que ofrece una perspectiva más analítica de estos debates. Desde nuestras diferentes miradas en tanto geógrafos, antropólogos, historiadores, sociólogos y economistas, lo que nos une es un enfoque analítico centrado en la ecología política y cuyos elementos centrales esbozo a continuación en un recorrido que cubre una breve historia de cómo surge este enfoque y los conceptos más significativos para nuestros intereses en este libro. Sobre la base de este recorrido, identifico ciertas hipótesis que subyacen en los análisis presentados en los diversos capítulos y elaboro conceptos más específicos sobre los cuales estas hipótesis descansan. Este capítulo introductorio concluye sugiriendo algunos elementos de un campo de análisis que podríamos denominar *una ecología política de la transformación territorial en áreas afectadas por la minería* la cual, dada la importancia política y económica contemporánea de la minería, parece constituir una base importante a seguir profundizando en ámbitos académicos.

## **1. La ecología política: una reseña histórica de sus compromisos principales**

La “ecología política” puede entenderse como una suerte de paraguas (Blaikie, 1999) bajo la cual conviven varias tradiciones y líneas de investigación política y ecológica que comparten ciertas preocupaciones ético-políticas e intelectuales. Los límites y los contenidos de este campo de investigación han venido siendo paulatinamente definidos en contribuciones de autores como Robbins (2004), Peet y Watts (2004), Blaikie y Brookfield (1987), Blaikie (1999) y Bryant y Bailey (1997). Aunque con matices, todos ellos comparten más o menos una misma interpretación respecto de cómo el campo de la ecología política surgió y se fue construyendo bajo la noción de que no es una teoría sino un espacio común de reflexión y análisis, en gran medida definido por su propia historia y por los que la practican, quienes comparten una visión más o menos parecida de las ideas y las prácticas que la sostienen. En lo que sigue no pretendo explorar todos los puntos de convergencia

entre estas interpretaciones de ecología política,<sup>3</sup> más bien me concentro en tres puntos de convergencia que son de relevancia para este libro.

### *Economía política*

En sus inicios, la ecología política fue un reflejo del deseo de combinar el análisis crítico de la economía política con una preocupación por el medio ambiente, su gobernanza, uso y transformación. Los aportes que ahora son considerados como fundacionales buscaron analizar las relaciones entre el empobrecimiento de grupos vulnerables y su acceso a, y uso de, recursos ambientales. Estos utilizaron marcos conceptuales muy influidos por la teoría de la dependencia y por los múltiples debates alrededor de la economía marxista. En este sentido, desde su inicio, la ecología política ha sido un campo cuyos practicantes se definen por tener cierto compromiso normativo con el tema de sus investigaciones y en el cual el tema de la justicia socioambiental ha estado siempre presente, aun cuando no estuviera explícito en tales términos.

Una de las obras icónicas de esta clase de ecología política fue el libro “La economía política de la erosión de los suelos” del geógrafo (inicialmente geomorfólogo) Piers Blaikie, aparecido en 1985. En él, Blaikie, planteó que para entender la degradación ambiental en un sitio cualquiera había que considerar una “cadena explicativa”, esto es, había que entender a ese sitio dentro de un conjunto de relaciones y procesos escalonados que van desde los procesos de erosión en una parcela agrícola hasta las relaciones internacionales que influyen en los precios de productos agrícolas, pasando por las políticas nacionales y las estructuras sociales locales y microrregionales como escalas de análisis intermedio. Por lo vasto de la tarea analítica implicada, esta propuesta resultó difícil de operativizar; sin embargo, dejó como conclusión formal que ningún proceso ambiental local puede verse solo en términos

---

3. Para esto, consultar a Robbins, 2004.

locales, ni solo en términos ambientales. O, dicho de manera simple, no hay forma de entender la ecología sin entender primero la economía política; es decir, especificando las relaciones de poder y de desigualdad que determinan quiénes tienen acceso a los recursos naturales, quiénes no y quiénes pueden definir el uso de estos recursos. De alguna manera, esta forma de entender la ecología política subyace en el segundo y tercer capítulos de este libro, ambos con un fuerte énfasis en la economía política de la expansión minera.

Un problema en varias de las contribuciones tempranas de los años 70 y 80, si bien no tanto en el trabajo de Blaikie, fue que muchas veces llevaron a formas de análisis bastante deterministas —análisis en los cuales las estructuras de la economía política primaban y donde la degradación (por no decir destrucción) ambiental y social aparecía como una muerte ya anunciada. El espacio que estos trabajos dieron a la capacidad de actuar de los individuos (la “agencia humana”) fue muy limitado. Durante la década de 1980, se empezó a escuchar cada vez mayor disconformidad con esta tendencia determinista, la cual vino acompañada de intentos por crear un espacio para la agencia humana dentro de estos análisis. En este sentido hubo cierto eco de estas preocupaciones más parroquiales de los precursores ecólogos políticos y en debates mayores de la teoría social una de cuyas síntesis mayores se encuentra en el trabajo del sociólogo Anthony Giddens (1979, 1984) quien desarrolló todo un marco analítico basado en el argumento de que la teoría social nunca había podido resolver la relación entre estructura y agencia humana. Su *teoría de la estructuración* reflejó su propio intento de identificar una salida a este callejón sin salida y tuvo mucha influencia en la geografía humana, una de las cunas más importantes de la ecología política anglófona.

Con el tiempo, esta preocupación por valorizar la agencia humana dentro de la ecología política tomó más fuerza y en este sentido los debates conceptuales en la ecología política evolucionaron en paralelo a debates más amplios en los estudios del desarrollo, donde el tema de agencia humana cobró cada vez mayor visibilidad y fuerza durante la década de 1990 (ver, por ejemplo,

Long y Long, 1992 y Booth, 1994). En este giro hacia la agencia humana se dio un sesgo hacía la agencia desde la sociedad civil, con lo cual se empezó a analizar más a organizaciones como las ONG, organizaciones de productores, organizaciones de base y movimientos sociales; otros actores como las empresas, los gobiernos locales o los ministerios sectoriales recibieron mucha menor atención. Adicionalmente, dos factores parecen explicar este sesgo. El primero es de tipo logístico, esto es, hacer investigación sobre empresas o gobiernos (especialmente los de nivel central) es mucho más difícil que hacer trabajo sobre las organizaciones de la sociedad civil donde lograr acceso y aceptación siempre ha sido más factible. El segundo es más fundamental y tiene que ver con el compromiso normativo de los ecólogos políticos, lo cual llevó a muchos a pensar que el camino hacia una relación más justa y equitativa entre desarrollo y medio ambiente pasaba por un mayor protagonismo y participación de los actores de la sociedad civil.

### ***Resistencia y movimientos sociales***

Varias tradiciones teóricas influyeron en el giro hacia la agencia humana. Bajo la influencia de Giddens, Raymond Bryant y Sinead Bailey produjeron “Una ecología política del tercer mundo” (1997), centrando su análisis del papel de distintos tipos de actor social en las disputas ambientales. Ellos conceptualizaron a los actores sociales como los vehículos a través de los cuales las estructuras político-económicas se reproducen, pero que a la vez pueden cambiarse. Como resultado, y tal como propone Giddens, esto los llevó a un tipo de análisis que tendía a enfatizar los actores antes que las estructuras sociales. Frente a la tendencia determinista de la ecología política en los años anteriores y aunque el análisis de las dinámicas del capitalismo se diluyó un poco, este enfoque fue muy bien recibido, particularmente por estudiantes que iban buscando salidas más optimistas.

Otro aspecto que influyó el pensamiento en la ecología política fue el giro postestructural en las ciencias sociales. Aquí sobresale

la importancia de dos autores: James Scott y Arturo Escobar. Aun cuando Scott no se autodefiniría como postestructuralista, su trabajo marcó pauta para la comunidad de científicos sociales que se encuentran dentro de esta corriente al punto que, durante la década de 1990, fue el autor más citado en la revista *Cultural Anthropology* (no obstante Scott es politólogo).<sup>4</sup> La gran contribución de Scott en sus dos libros publicados en 1985 y 1990 fue explorar cómo los actores subalternos resisten las múltiples formas de dominación que sufren. Adoptando un método etnográfico para estudiar la modernización agraria en Malasia, en su primer libro demostró las sutilezas, ironías, detalles y el sentimiento (el *pathos*) de lo que él denominó “las armas de los débiles”, es decir, “las formas cotidianas de resistencia”. El capítulo de Gerardo Damonte en este libro es el que mejor se ubica en esta tradición y estilo de análisis, aunque el propio autor también nota ciertas limitaciones en el marco conceptual de Scott.

Scott quiso demostrar que aun los grupos sociales más desprovistos y reprimidos poseían instrumentos y realizaban prácticas para resistir y para proteger su dignidad (además de sus medios de subsistencia), además que eran conscientes de ello. Sin embargo y como el propio Scott reconoció, por darse a un nivel micro, aunque la resistencia cotidiana puede inducir ciertos cambios en las prácticas de grupos hegemónicos, no lleva a mayores cambios reales en las relaciones que subyacen en la economía política del desarrollo. A pesar de esta limitación, lo importante es notar que Scott insistió en que los propios actores subalternos reconocían los límites de su propia agencia. Damonte ilustra este punto de la manera siguiente:

Si los grupos campesinos e indígenas no se rebelan abiertamente no es porque no sean conscientes de la opresión que sufren, sino por-

---

4. Comunicación personal del entonces editor de *Cultural Anthropology*, Dan Segal, 1999.

que consideran que las posibilidades de confrontar directamente dicha dominación de manera exitosa son remotas y optan más bien por formas cotidianas, soterradas y muchas veces individuales de resistencia.

En lo que respecta a Escobar, si bien su objetivo mayor ha sido el de repensar las bases de la teoría y el concepto del desarrollo, esta ha estado muy cercana a la ecología política (Escobar, 1995; 1996; 2001). De hecho, Escobar ha generado buena parte de su análisis crítico del desarrollo sobre la base de las relaciones entre desarrollo, medio ambiente y dignidad humana. Tal como en el caso de Scott, Escobar también enfatiza el tema de la resistencia. Sin embargo, a diferencia de Scott, Escobar demuestra mayor interés en aquellas formas de resistencia que son articuladas como movimientos sociales y que, por lo tanto, ofrecen mayores posibilidades políticas que la microrresistencia cotidiana (Escobar y Álvarez, 1992; Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998; Escobar, 1995). Escobar parte de la noción de que ni la modernidad ni el desarrollo (sea como fuere que se definan) deberían verse como avances ni necesariamente como “mejoras” y que más bien, en la medida en que la sociedad los ve así, esto es un simple reflejo de las relaciones y las prácticas del poder. Es decir, en una sociedad dada, la definición dominante del “desarrollo” —y por lo tanto la relación deseada entre desarrollo y medio ambiente— no es otra cosa que un artefacto del poder. Si es así, en la medida en que las relaciones de poder pueden ser distintas, una sociedad valorizaría y buscaría otro tipo de desarrollo. Por esta razón los movimientos sociales se vuelven importantes, porque constituyen una forma de contrapoder desafiando a los poderes dominantes y abriendo la posibilidad de otro tipo de sociedad basada en valores distintos.

Escobar enfatiza sobre todo el papel de aquellos movimientos sociales que buscan defender sus territorios para poder seguir sus propios proyectos de vida en estos territorios (1995). En términos empíricos, su argumento se ha inspirado en el trabajo de un movimiento social específico (el Proceso de Comunidades Negras en

la Costa Atlántica de Colombia con quienes ha colaborado durante muchos años). Más adelante volveremos a este tema porque, si bien el trabajo de Escobar no implica que los movimientos con identidades territoriales son los únicos que ofrecen la posibilidad de imaginar otro tipo de desarrollo, el tema de la identidad territorial, basada en un sentido del lugar, influye mucho en su análisis (Escobar, 2001).

Junto a Escobar, otro libro influyente en la ecología política y también influido por el giro postestructural ha sido el de los geógrafos Richard Peet y Michael Watts, "Ecologías de la liberación: Medio ambiente, desarrollo, movimientos sociales" (2004). El libro explora la posibilidad de crear un contrapeso frente a la expansión del capitalismo moderno (que aunque sea moderno sigue siendo destructivo) y sugiere que al centro de tal contrapeso estarían los movimientos sociales. Tal como Escobar, ambos insisten en que el desarrollo no es un proceso preestablecido sino un campo de disputa en el cual las relaciones de poder determinan lo que finalmente se acepta como "desarrollo". Sin embargo, también demuestran mayor recelo frente a otros elementos de la corriente postestructural y rechazan ciertas tendencias relativistas. Más bien, influenciados por el pensamiento de Amartya Sen, insisten en la necesidad de reconocer y velar por ciertos valores universales, valores que tienen que ver con la justicia y la dignidad y que son lo que caracterizan muchos movimientos sociales (aunque no todos). De esta forma, plantean que en muchos movimientos lo que se ve no es un rechazo a la modernidad sino una demanda por mayor equidad social en el acceso a los beneficios de la modernidad. Como veremos más adelante (sobre todo en los capítulos 4 y 5) deseos similares parecen estar presentes en los procesos de resistencia frente a la minería. De todas maneras, y aunque son muy cuidadosos en no romantizar a los movimientos sociales, Peet y Watts comparten con Escobar la noción de que tales movimientos pueden constituir una forma de agencia humana que ofrece mayores posibilidades de volver a trabajar el desarrollo y promover una relación desarrollo-ambiente más justa.

### *Localidad, territorio y glocalización*

La ecología política ha estado en un proceso de conversación conceptual casi permanente con la geografía humana y la antropología cultural. De esta conversación es relevante rescatar para los propósitos de este libro el esfuerzo puesto para conceptualizar y entender la producción del espacio, del lugar y de los territorios. En esta corriente, se entiende las estructuras espaciales, las localidades y los territorios como procesos contingentes y socialmente producidos. Es decir, las localidades y territorios no existen por sí mismos, sino son productos de las dinámicas capitalistas, las historias locales y las formas en que distintos actores sociales (locales y no) trabajan, negocian y dan sentido a estos procesos. En este sentido muchos conflictos ambientales son también conflictos sobre la producción del territorio: sobre qué tipo de relación entre sociedad y ambiente debería predominar en un territorio; sobre cómo estos territorios deberían ser gobernados y por quiénes; sobre el *significado* que estos espacios deberían tener; y, sobre los tipos de lazo que estos territorios deberían tener con otros.

En cierto sentido esta observación nos lleva otra vez al trabajo fundacional de Blaikie (1985) y su concepto de la “cadena explicativa”. Esto implica que no se puede perder de vista el hecho de que un proceso que parece local en términos meramente físicos, no lo es en términos analíticos ni político-económicos. Más bien, en su mayor parte, es un proceso que es local, nacional y global a la vez. Intentando captar esta noción en términos lingüísticos, hace una década el geógrafo Eric Swyngedouw (1997) habló de procesos que no son “ni globales ni locales” sino “glocales”. Swyngedouw tenía interés especial en lo que esta observación implicaba para lo que él llamó “una política de escala” (*politics of scale*),<sup>5</sup> pero —como él bien sabía— también traía implicaciones analíticas. Implica que los procesos de construcción de territorios tienen que ser entendidos como globalizados y localizados a la vez.

---

5. Un concepto también elaborado por Neil Smith —ver el ensayo de discusión de Brenner (2007).

Por supuesto, tal observación no era nueva pues historiadores como Steven Stern y Florencia Mallon habían ya explorado la producción de las economías regionales y los discursos andinos en el interfaz entre sistemas mundiales e historias locales (Cooper et al., 1993); más aún, muestran cómo las economías mineras han mediado estos procesos desde el siglo XVI (ver el ensayo de Stern en el mismo libro). Es interesante entonces ver que en el presente esta articulación vuelve a ser un tema central para entender las economías y sociedades regionales de las zonas altas de América Latina y en este proceso de glocalización de las localidades andinas la minería es un factor determinante.

Dicho esto, parece importante señalar que en Latinoamérica entre los procesos de glocalización de hoy y los del pasado hay diferencias importantes. La más importante y que constituye el tema principal del capítulo 5, es que en la *glocalización andina contemporánea*, no son solamente los actores y circuitos económicos los que tienen existencia global, sino también muchos de los actores sociales que los resisten, además de muchos de los discursos que se movilizan para nutrir esta resistencia y darle coherencia ideológica. Al mismo tiempo, las instituciones del Estado y los instrumentos que posee el Estado para intervenir en estos procesos han pasado por reformas y cambios estructurales que tienen orígenes en instituciones globales y en discursos internacionales dentro de las disciplinas de la Economía y la Gestión Pública. O sea, la economía, la sociedad civil, los discursos y las instituciones políticas de las zonas de influencia minera son todos glocalizados y con ellos, aunque en diversos grados, cada una de las localidades donde se asientan los recursos mineros.

En un contexto producido por procesos que operan a tantas escalas distintas, existe la tentación de formular propuestas políticas que implican un retorno a un pasado algo más autóctono. De hecho, esta tentación parece presente tanto en algunos análisis postestructuralistas como en algunos movimientos sociales. Sin embargo, el mismo concepto de la glocalización implica que esta opción ya no tiene sentido. El tema no es un conflicto entre la

globalización y la localización, ni entre la modernidad y la tradición, sino más bien lo que está en debate es la forma que debería tomar esta glocalización del espacio. Dicho de otra manera, ¿cómo deben ser los espacios híbridos que se van a construir? Este es el tema presente en cada uno de los capítulos de esta colección. Captar este proceso de producción de territorios híbridos —o mejor dicho coproducción (Evans, 1996; Ostrom, 1996)— es la tarea de este libro. Se entiende que los territorios son coproducidos por las estrategias y los intereses de distintos actores (empresas, entidades estatales, gobierno, movimientos sociales y otras organizaciones sociales), por la interacción entre lo económico y lo político, por la articulación entre procesos operando a distintas escalas y por la interacción entre desarrollo y medio ambiente.

## **2. Hilos conductores e hipótesis compartidas: lo que el libro argumenta**

Hasta este punto he discutido el libro como un intento de “captar” procesos y describirlos bien, un aporte analítico a debates muchas veces no analíticos. Pero el libro —no obstante su calidad de colección editada— también mantiene ciertos postulados que tienen sus orígenes en las ideas subyacentes en la ecología política y que fueron esbozados arriba. Estos postulados tienen que ver con las relaciones entre tres campos principales: el campo de la resistencia y de la protesta; el campo de la gobernanza formal; y, el campo del desarrollo del capitalismo. Los cuales —y que aparecen con más fuerza en unos capítulos que en otros— pueden ser caracterizados de la siguiente manera:

Primero, la nueva minería constituye una forma de expansión capitalista que tiende a transformar las tendencias de desarrollo en los territorios rurales donde se da esta minería. Sobre todo, transforma los medios y las estrategias de vida de las poblaciones de estas zonas, las relaciones sociales dentro de estas poblaciones y las formas de gobernanza del medio ambiente en estos territorios.

Segundo, estas transformaciones generan resistencias que se dan a nivel individual, familiar, comunal, supracomunal hasta

internacional. Estas resistencias no siempre generan movimientos sociales, pero en la medida que tales movimientos surgen, es importante entenderlos en términos de las prácticas sociales cotidianas y las formas de resistencia menos articuladas que los antecedían.

Tercero, bajo ciertas circunstancias, estas resistencias —y sobre todo los movimientos sociales— pueden cambiar las formas de desarrollo territorial y las prácticas de gobernanza catalizadas por la minería. En este sentido, los movimientos sociales influyen en las formas de transformación territorial que se dan en zonas mineras; es decir, no son simplemente actores que hacen ruido sino más bien tienen efectos materiales en el desarrollo.

Estos postulados conllevan cuatro conceptos que los sostienen. Los siguientes párrafos elaboran estos conceptos.

### *Estrategias de vida y resistencias*

En los debates sobre conflictos mineros existe la tentación de enfocar el análisis en actores formales, visibles y organizados. Sin embargo, una lección de Scott es que es importante rescatar lo cotidiano en el análisis de la transformación capitalista de los territorios. No todo es gran inversión, protesta, movilización social o conflicto y negociación política. La población no vive de la acción política aunque la acción política influye en cómo viven, del mismo modo que el cómo viven influye mucho en sus formas de actuar políticamente (Smith, 1989). Es decir, lo cotidiano se caracteriza mucho más por las rutinas de la subsistencia que las de la resistencia y, en la medida en que los territorios son socialmente construidos (Schejtman y Berdegué, 2004), gran parte de esta construcción pasa por las estrategias de vida de la población. Esta cotidianidad de la sobrevivencia y la microacumulación es un fenómeno *glocalizado*, pues los precios, tasas de interés y formas de acceso a distintos activos mediados por procesos e instituciones también responden a procesos globales. Esto implica que para entender cómo es que día a día los actores van produciendo

territorios, con sus contenidos, significados y paisajes distintos, el análisis tiene que darse de manera detallada y siguiendo enfoques etnográficos. Este es el tema sobre el cual reflexiona Jeffrey Bury en el penúltimo capítulo de este libro, analizando múltiples estrategias de vida en Cajamarca y cómo estas han estado influenciadas por la presencia de la minería.<sup>6</sup>

Otra tentación cuando se habla de las estrategias de vida y de los activos que las sustentan es entenderlas en términos netamente materiales —como estrategias para generar ingreso, asegurar alimentación y satisfacer un bienestar básico. Aunque no equivocada, dicha mirada es incompleta. Las estrategias de vida son fenómenos tanto culturales y políticos como materiales (Smith, 1989). Es imposible separar el acto de asegurarse los medios de vida de los significados culturales que esta vida tiene. Por un lado estos significados culturales pueden influir en cómo los actores construyen sus estrategias de vida; por otro lado, ciertas estrategias de vida pueden terminar cambiando los valores de una familia o de una comunidad.

Del mismo modo, y aunque no toda práctica política se explica en términos de estrategias de vida, no cabe duda que existe una relación importante entre las dos. Esto es más evidente en aquellos casos donde formas de resistencia y eventualmente movilización surgen cuando los actores buscan defender sus activos, o ampliar la base de activos que ya controlan. Pero es también evidente en aquellos casos cuando los actores sociales deciden no participar en formas de resistencia o porque no quieren arriesgar sus medios de vida o porque sus estrategias de vida no les dejan el tiempo necesario para participar políticamente. Y —como última ilustración— la relación está también presente cuando ciertos liderazgos surgen aparentemente porque están comprometidos con procesos de resistencia, porque ven el liderazgo como vehículo para avanzar sus propios intereses económicos y sociopolíticos.

---

6. De alguna manera el mismo tema está también presente en el capítulo 4.

Entonces, la noción de que lo material, lo cultural y lo político son esferas profundamente relacionadas en la vida cotidiana es un punto de partida clave para analizar la relación entre resistencia y desarrollo territorial en zonas mineras.

### ***Movimientos sociales, redes sociales y organizaciones sociales***

Una distinción siempre en juego, aunque muchas veces incierta, en el análisis de los movimientos sociales (MS) es aquella entre red social, movimiento social y organización social. Para fines de este trabajo, entendemos a una red como una estructura de relaciones sociales entre actores visibles.<sup>7</sup> De esta forma, se puede trazar una red siguiendo la construcción y el mantenimiento de relaciones entre actores y los intercambios y flujos de recursos e ideas que circulan por estas redes.

Aunque las redes sociales —entre organizaciones y en muchos casos, entre individuos— juegan un papel clave en las protestas sobre el medio ambiente (Keck y Sikkink, 1998) y en el surgimiento de movimientos sociales (Crossley, 2002), para entender los fenómenos de movilización socioambiental, el concepto de red social tiene limitaciones. En el caso de las movilizaciones alrededor de la extracción minera, estos procesos abarcan relaciones y actores que van desde los campesinos, estudiantes, gente de la ciudad, activistas y organizaciones locales que protestan contra la minería, hasta las personas simpatizantes en los países del Norte y del Sur quienes escriben cartas reclamando por daños socioambientales y los oficiales de programa de las ONG y organizaciones de derechos humanos quienes cuestionan las formas actuales de desarrollo minero. Considerando ello, nos parece forzado el sugerir que el concepto de red social ofrece la mejor manera de entender fenó-

---

7. Vale notar que, en este sentido, no seguimos la conceptualización de la “teoría actor-red” (*actor network theory* o ANT), que permite que la red pueda incluir cosas, ideas, conceptos etc., y que estas “cosas” también puedan ser actores (cf. Braun y Castree, 2000).

menos tan complejos, no contiguos y dispersos. Si bien existen conexiones globales (Tsing, 2004) entre todos estos actores y que son parte de un fenómeno común, cuando se dan oleadas de movilizaciones como aquellas que se han visto en contra de la minería en Perú durante los últimos dos años, el fenómeno ni se capta ni se explica solamente con el concepto de red social.<sup>8</sup> Para una mejor interpretación de tal complejidad, sugiero que el concepto de movimiento social es más apropiado.

Los movimientos sociales pueden ser entendidos como procesos de acción colectiva, difusa en términos espaciales y temporales, pero que se sostienen en el tiempo a pesar de ser difusos y presentar altibajos. Aunque los actores involucrados no comparten exactamente las mismas visiones, hay un nivel de traslape importante entre sus visiones y es este traslape lo que sostiene al movimiento y le da cierta coherencia. En este sentido, un movimiento social es una forma de acción colectiva pero no es un actor en sí mismo. Es más bien un proceso, sostenido por un conjunto de acciones y actores, en donde lo que prima es la acción motivada por un sentir de justicia y, por lo tanto, por una visión —quizás no especificada— de la necesidad de encontrar otra manera de organizar la sociedad y pensar el desarrollo (Álvarez y Escobar, 1992; Escobar, 1995).

Es en el énfasis en las visiones alternativas<sup>9</sup> donde las reflexiones sobre los movimientos sociales constantemente se vuelven normativas. Muy frecuentemente se insiste en que necesariamente los movimientos velan por *algo mejor* o, por lo menos, *algo diferente*. Los MS visibilizan otras ideas y conceptos acerca de las formas que el desarrollo debería tomar. Es en este sentido que los análisis discursivos (postestructurales) de los movimientos sociales son

- 
8. Aunque posiblemente se puede hablar de “cadenas” para describir estas relaciones, tal como se habla de “cadenas de la cooperación” para caracterizar las relaciones entre actores en diferentes niveles/partes del sistema de la cooperación internacional.
  9. “Alternativas” a las visiones hegemónicas/ortodoxas (lo que en el momento histórico actual significa “neoliberal”).

útiles porque insisten en la noción de que la cultura es un campo de batalla de importancia política (Álvarez et al., 1998). De esta forma, la política (y por lo tanto la gobernanza) no pasa simplemente por las prácticas formales y organizadas sino también por los campos de batalla donde la pelea es sobre la legitimidad de diferentes ideas y diferentes formas de conocimiento (cf. Long y Long, 1992; Álvarez et al., 1998; Dagnino, 2005). En estas interpretaciones, los MS son vectores para ciertos discursos y cuestionamientos y, en la medida en que logran cambiar los discursos dominantes en una sociedad, son exitosos (en sus propios términos).<sup>10</sup>

Con estas precisiones en mente, me parece clave hacer las siguientes observaciones. Primero, esta definición de MS aún no ayuda a entender cómo surgen y cómo se mantienen los MS. Para esto los conceptos de red social y organización social vuelven a ser importantes. Crossley (2002: 93) nota que existe suficiente evidencia de que los MS —entendidos como fenómenos más amplios— surgen basados en redes sociales preexistentes y hace alusión tanto a las redes de la vida cotidiana como a las redes entre organizaciones. En cierta medida estas redes sirven para transmitir preocupaciones y descontentos a grupos mayores —cultivan al MS. Esta acción colectiva depende mucho de organizaciones sociales porque ciertos procesos y acciones que nacen de los MS (y cuyos frutos sirven para seguir manteniendo el “ánimo” del MS) requieren de recursos financieros, informáticos, humanos, sociales y otros en niveles que van más allá de los recursos disponibles en las redes sociales de la vida cotidiana (Crossley, 2002; McAdam et al., 1988). Estos recursos son proveídos en gran medida por las organizaciones sociales o, en el lenguaje de algunos analistas, “organizaciones de los movimientos sociales” (*social movement*

- 
10. De hecho, nos da la impresión de que en Perú y Ecuador hay un proceso de construcción de un discurso nuevo que combina elementos del discurso indigenista con elementos de los discursos de los derechos humanos universales y derechos ambientales y que, en su esencia, es “glocal”.
  11. En el texto dichas organizaciones se denominan SMOs para evitar confusión con las siglas de la Organización Mundial de Salud.

*organizations* o SMOs,<sup>11</sup> McCarthy y Zald, 1977): las ONG, grupos de la Iglesia, organizaciones estudiantiles, etc. Estas redes y organizaciones también juegan un papel importante en la permanencia del MS, manteniendo el debate vivo, actividades y vigor social durante periodos de menos movilización social.

Los MS se mantienen a través del tiempo en la medida en que existe un nivel importante de traslape entre las preocupaciones y convicciones de los diferentes actores involucrados. Mantener estos traslapes siempre requiere trabajo y negociación entre los mismos actores y organizaciones quienes sostienen a los movimientos. Sin embargo, estas organizaciones pueden tener visiones algo distintas sobre adónde debería ir el MS (cf. McCarthy y Zald, 1977) y lo jalan en diferentes direcciones. Por lo tanto, la fragilidad es inherente a los movimientos sociales.

Visto así, una tarea básica que se asume en el análisis de los MS —de cómo surgen, cómo se organizan, cómo se mantienen, y las estrategias que siguen— y que está particularmente presente en el capítulo 5 consiste en trazar el surgimiento de las redes entre actores y organizaciones locales, nacionales e internacionales que constituyen la infraestructura de estos MS y en documentar su papel en el desarrollo de muchas de las acciones de los MS. Tal tipo de análisis ayuda a explicar “la oferta” de los MS: *Cómo* se construyen (Melucci, 1985); pero no explica “la demanda” que nutre a los MS y que lleva a que ciertas preocupaciones surjan y tengan resonancia en una población mayor. Para esto se requiere otro tipo de análisis, uno que tiene implicaciones para la conceptualización del desarrollo (o transformación) territorial dentro del estudio.

### ***Desarrollo territorial***

El desarrollo territorial rural es otro concepto donde fácilmente se mezcla lo normativo y lo positivo. Esta mezcla refleja otra “confusión” en la literatura sobre el desarrollo en la cual se mezclan dos significados del término que son muy distintos: Uno en donde

“el desarrollo” refiere al proceso inherente de transformación capitalista que se da en un determinado espacio y/o sociedad y otro que refiere a proyectos de intervención implementados por actores con intenciones normativas (Cowen y Shenton, 1996; 1998). Esta mezcla de significados parece estar presente también en uno de los documentos marcos para las discusiones contemporáneas del desarrollo territorial rural (DTR), elaborado por Schejtman y Berdegué (2004). Ellos empiezan con una entrada positiva, definiendo el DTR como un proceso de transformación productiva e institucional, pero luego dan un giro normativo al agregar que el DTR tiene como fin reducir la pobreza rural (pp. 32-33). Al decir que el DTR tiene un ‘fin’, parece que los autores dejan de hablar de un “proceso” social y empiezan a referirse a un proyecto de intervención con objetivos explícitos. O sea, dentro de su definición del DTR, la palabra “desarrollo” se usa en dos sentidos: a veces para referirse a un proceso de transformación social y otras para referirse a un proyecto premeditado.

Si bien esta definición del DTR alcanza ciertas variables que pueden ser utilizadas para describir procesos de desarrollo rural y para discutir dimensiones de cambio en estos procesos,<sup>12</sup> por varias razones requiere ser complementada con una noción del DTR que explicita los procesos subyacentes de la economía política. Primero, visto como proceso el DTR ayuda a entender los orígenes de la “demanda” que nutre a los MS (Melucci, 1985). Aquí me refiero a las teorías de los nuevos movimientos sociales y sobre todo las interpretaciones de Habermas (1984, 1987) quien, si bien no explica *cómo* surgen los MS en países industrializados, ayuda a entender *por qué* surgen (y por lo tanto complementan el enfoque

---

12. Específicamente, un proceso de desarrollo rural se acerca a su definición en cuanto: (i) genere formas de concertación entre diversos actores las cuales también generen una identidad territorial; (ii) genere instituciones que promuevan la concertación entre diferentes niveles y agencias públicas, y entre el estado y la sociedad civil; (iii) genere posibilidades económicas no solo agropecuarias sino también no agrícolas; (iv) promueva lazos urbano-rurales; y (v) promueva una transformación productiva incluyente y que reduzca la pobreza y la desigualdad.

en redes y organizaciones sociales que ayuda a entender el *cómo*). Este aporte es además relevante para entender la relación entre neoliberalización y MS en América Latina, especialmente en el caso de MS que surge dentro de un contexto neoliberal que facilita las grandes inversiones mineras y que es motivo de este libro.

Según Habermas, una tendencia de la economía política del capitalismo tardío y globalizado es que empieza a “colonizar” lo que él denomina la “vida diaria” (*lifeworld*) de la población. En este proceso las instituciones centrales ejercen cada vez mayor control y vigilancia sobre las prácticas cotidianas de la población y el mercado coloniza dominios de vida y formas de interacción social que tradicionalmente han dado sentido a la vida. Para Habermas, el surgimiento de los MS debe entenderse como una respuesta a (y en términos de) estos contextos. Él sugiere que los MS surgen como intentos de defender y recuperar formas de vivir que se ven amenazadas por los procesos de colonización (1987; una interpretación no tan distinta a la de Escobar, 1995: 222-226). Además, dadas las relaciones entre las instituciones económicas y políticas en este período del capitalismo, hace hincapié en el hecho de que el sistema político tiene cada vez menos capacidad y menos canales para responder a las demandas de estos MS, una situación que alimenta aún más una tendencia hacia formas de protesta que privilegian la acción directa (Crossley, 2002: 162).

Este análisis parece lejano de conceptos del DTR, pero es posible encontrar varios elementos de estas tendencias en las áreas rurales afectadas por la “nueva minería”. Las nuevas economías políticas rurales promovidas por la minería transforman a las comunidades y sus paisajes mercantilizan terrenos ancestrales, amenazan recursos naturales y las formas de vida que dependen de aquellos y transforman un conjunto de prácticas culturales y productivas tradicionales. Además, tienden a cerrar ciertos canales políticos a través de los cuales se hubieran podido expresar protestas.<sup>13</sup> El análisis sugiere que habría que entender a los MS

---

13. A la vez que otros canales simplemente no funcionan.

como fenómenos “reactivos” antes que propositivos, o sea, como respuesta y producto de las tendencias de la economía política. Pero Habermas también sugiere que los MS pueden resistir el avance de las propias tendencias que los producen.

### **Gobernanza ambiental**

La gobernanza ambiental se plantea como el proceso a través del cual se definen, se regulan y se implementan las reglas que determinan el control de recursos naturales, el acceso a ellos y su uso (cf. Leach, Mearns y Scoones, 1999). Aunque muchas veces se define la gobernanza como un proceso donde tiene que haber una participación amplia de actores tradicionalmente excluidos (y en este sentido adquiere un carácter normativo), es preferible mantener una definición positiva del concepto. Vista así la gobernanza puede ser buena o mala como proceso, incluyente o excluyente, así como pueden darse formas de gobernanza más visibles y otras formas mucho menos visibles; es muy posible también que los movimientos sociales logren influir en aquellas formas de gobernanza que existen en el dominio público y que son más visibles a la población, mientras las formas de gobernanza “real” siguen funcionando sin mayor modificación.<sup>14</sup>

De hecho, aunque el concepto “gobernanza” hace pensar en “gobierno”, un tema importante en este libro es que —bajo las tendencias generales de la neoliberalización— buena parte de los procesos de gobernanza ambiental se da en espacios privados entre actores privados y busca crear reglas del juego (por ejemplo, en cuanto a la tenencia de la tierra) que favorezcan a actores privados y no públicos. En países como Perú, Bolivia, Ecuador y Guatemala esto respondería a que: la legislación nacional y el reparto de res-

---

14. Una indicación extrema de tal posibilidad se visibilizó en las decisiones legales sobre un conjunto de actividades económicas con implicaciones ambientales en Perú (*New York Times*, 2005), entre ellos el caso de la Minera Yanacocha, uno de los ejemplos analizados en el capítulo 5.

ponsabilidades transfiere mucho poder y liderazgo a las empresas mineras,<sup>15</sup> dejando al sector público un papel más facilitador y regulador;<sup>16</sup> las instituciones públicas sectoriales (los ministerios de Energía y Minas) se perciben y estarían alineadas con la empresa privada,<sup>17</sup> por tanto, los actores sociales tienen poca confianza en la honestidad y transparencia de las instituciones públicas. Por estas diferentes razones los espacios privilegiados de la gobernanza ambiental muchas veces se encuentran dentro de la empresa, en las relaciones entre la empresa y actores privados (actores sociales e inversionistas) y en las relaciones *privadas* entre la empresa y funcionarios del Estado. Una pregunta, entonces, es ¿hasta qué punto los procesos de resistencia logran que la gobernanza vuelva a ser más pública y menos privatizada?

Por otro lado, si un efecto de la neoliberalización de América Latina ha sido que buena parte de la gobernanza ambiental (tanto formal como no formal) se da dentro de las empresas y en estas esferas privadas, otro efecto ha sido que los procesos de gobernanza ambiental territorial no se dan solo en el país y mucho menos en el territorio en cuestión. Los mismos procesos de toma de decisiones sobre manejo ambiental que se dan dentro de la empresa ocurren tanto en Norteamérica como en Perú y Ecuador. Además, los procesos se dan no solo en las oficinas de la empresa sino también en los mercados y las instituciones financieras que son fuentes de los capitales de inversión para las empresas. Para los casos estudiados, estos espacios incluyen las bolsas de Nueva York y

- 
15. Esto es claro en el caso del Perú con el Decreto Supremo N° 042-2003-EM (diciembre 2003) sobre responsabilidad social para las empresas mineras y en el Ecuador en la nueva legislación minera de 1999.
  16. Aunque parece que esta situación podría cambiarse en Bolivia y Ecuador en los años venideros.
  17. Estar presente en oficinas de los ministerios en reuniones con presencia de las empresas y de oficiales de los ministerios hace evidente esta cercanía: se nota en la forma en que interactúan las personas, sus intercambios telefónicos, el movimiento de individuos entre puestos en las empresas y puestos en los ministerios, etc.

Toronto, y los entes que regulan la participación de las empresas en estos mercados. También incluyen la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial y los mercados en los cuales se venden los minerales provenientes de Cajamarca, Oruro y San Marcos. O sea, tal como en el caso de los MS, las relaciones que subyacen los procesos de gobernanza ambiental son transnacionales y estos procesos se dan en espacios que exceden —de lejos— las capacidades de participación (por no decir el entendimiento) de organizaciones sociales operando solas o en ámbitos locales.

De manera implícita o explícita, estos cuatro conceptos y tres postulados subyacen los cinco capítulos empíricos de este libro. Es a estos capítulos que ahora procedemos.

## **Sección 2**

---

# **Economía política y transformación territorial**



## 2

### *Neoliberalismo, minería y cambios rurales en Cajamarca*

JEFFREY BURY

#### 1. Introducción

La década pasada ha sido testigo de cambios significativos en las estructuras económicas y políticas de muchos países latinoamericanos. Además de aplicar nuevas y escasamente democráticas reformas, muchos países cambiaron también su curso económico adoptando reformas neoliberales de libre mercado. En el Perú, las reformas neoliberales económicas y políticas han integrado rápidamente al país a los mercados globales y a los flujos extranjeros de inversión directa. Estas políticas neoliberales han reconfigurado la actividad económica dentro del país, lo mismo que el contexto político en el que se dan los debates sobre el desarrollo peruano. Una consecuencia de estas reformas es que las actividades minero-extractivas se han convertido en el sector clave del futuro crecimiento económico, de los ingresos liderados por las exportaciones y de la inversión extranjera directa.

Puesto que el sector minero se ha convertido en una fuerza de cambio tan decisiva en el Perú, es importante comprender las maneras en las que es posible que este sector afecte las futuras trayectorias de desarrollo del país. Una forma de explorar estos

temas es mediante la evaluación de la manera en que las empresas minero-extractivas claves están alterando los contextos locales institucionales y económicos en los que ellas operan. Este capítulo (junto con el capítulo 6) intenta cumplir esta tarea a través de la evaluación de cómo una de las más importantes empresas mineras transnacionales —las operaciones auríferas de la Minera Yanacocha en la región Cajamarca— está afectando los patrones locales de tenencia de tierras y de medios de subsistencia. Al analizar los efectos locales de la reestructuración neoliberal peruana, esta investigación busca contribuir a los debates concernientes a la globalización y el neoliberalismo mediante una mayor comprensión de cómo es que estas fuerzas de cambio están siendo experimentadas en los contextos locales y cómo es que están afectando al porvenir de las economías regionales y a la población en la región andina.

## **2. La reestructuración neoliberal del Perú**

La historia del Perú entre los años 1960 e inicios de los años 1990 está marcada por la convulsión política y el caos económico. En 1968, el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado tomó el control del país mediante un golpe de Estado y empezó una serie de amplias reformas políticas y económicas. De acuerdo con lo que Lowenthal (1975) ha denominado el “experimento peruano” del general Velasco, tras un golpe militar fue establecido un sistema determinado a eliminar la dependencia del Perú de la influencia externa y a crear un nuevo orden social. Esta amplia agenda política y económica dio lugar a sucesivas nacionalizaciones de empresas claves, a una reconfiguración de los patrones de tenencia de tierras y al establecimiento de un sinnúmero de programas sociales.

A inicios de los años 1980, el experimento peruano empezó a resquebrajarse a consecuencia de sucesivos *shocks* petroleros relacionados con la crisis internacional del petróleo, los desastres naturales de origen climático, la fuerte caída de las exportaciones, la condena internacional y el desenfrenado endeudamiento externo que amenazaron a la estabilidad económica del país. En 1985,

enfrentado a un inminente colapso económico, el presidente Alan García Pérez implementó reformas macroeconómicas estructurales —conocidas como “ajuste heterodoxo”— con el fin de salvar el nuevo orden social del país. Su plan económico incluyó la nacionalización del sistema bancario y la moratoria del pago de la deuda externa peruana. La estrategia económica de García demostró ser económica y políticamente desastrosa. Hacia 1990, las tasas de inflación anual superaban el 7,500%, el PBI había caído en más del 30% en tres años y la violencia guerrillera escalaba en todo el país (Skidmore y Smith, 2001).

Las geografías económicas y políticas peruanas se vieron nuevamente reconfiguradas cuando el presidente Alberto Fujimori fue elegido en 1990. Fujimori, un profesor de Matemática de la Universidad Nacional Agraria y un personaje relativamente desconocido en la política peruana, se encontró con lo que ha sido descrito como una de las crisis económicas y políticas latinoamericanas más críticas (Kuczynski, 2000). Con el fin de encarar los problemas percibidos del país, Fujimori se embarcó en una serie de reformas políticas y económicas no menos ambiciosas que aquellas del “experimento peruano” que tuvo lugar bajo los anteriores gobiernos militares y civiles. Sin embargo, las reformas de Fujimori implicaban la reestructuración económica y política inspirada en principios neoliberales ortodoxos.

La adopción peruana de un nuevo marco neoliberal se paragonaba con desarrollos similares que tenían lugar a través de toda Latinoamérica y otras regiones del mundo, incluidos la ex Unión Soviética y el este asiático. Las políticas neoliberales a raíz de la crisis de la deuda de los años 1980 en Latinoamérica fueron fuertemente respaldadas por las instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial, el FMI y el “Consenso de Washington”. Adicionalmente, redes de asesores políticos y económicos a través de toda Latinoamérica impulsaron activamente las reformas neoliberales como una forma de “modernizar” las economías y brindar nuevas oportunidades para el crecimiento económico y el desarrollo (Gwynne y Kay, 1999). Así, al igual que gran parte de Latino-

américa, el giro de Fujimori hacia principios neoliberales implicó la transformación significativa de las estructuras políticas y económicas del Perú.

Las reformas políticas y económicas neoliberales de Fujimori incluyeron una reconfiguración de la economía y del gobierno que empezó en 1990, mediante la adopción de una nueva Constitución en 1992. Esta agenda política y económica fue apoyada por la cercana asesoría de sucesivos reputados ministros de Economía, asesores del FMI y efectivas campañas militares y policiales. Estas reformas buscaban integrar al país en la rápidamente globalizadora economía internacional, poner fin a las décadas de guerra civil del Perú, reducir la presencia del Estado en los asuntos económicos y sociales nacionales y establecer un sistema de mecanismos autorregulados y más eficientes de oferta, demanda y determinación de precios.

A inicios de 1991, el gobierno de Fujimori aprobó la Ley de Promoción de la Inversión Extranjera (Decreto Legislativo N° 662), la cual abrió todos los sectores de la economía peruana a la inversión extranjera directa (IED). Bajo esta ley, a los inversionistas extranjeros se les garantizó igual trato y se eliminaron todas las restricciones para las remesas de ganancias, dividendos, regalías, acceso al crédito doméstico, y la adquisición de suministros y tecnologías en el exterior. Además, con el fin de atraer la inversión extranjera, el gobierno ofreció paquetes de estabilidad tributaria a los inversionistas extranjeros (Decreto Legislativo N° 757) por plazos de diez a quince años. Se adoptaron también medidas adicionales, incluida la implementación de amplios programas de privatización (Decretos Legislativos N° 674 y 708) que ofrecieron a los inversionistas extranjeros oportunidades atractivas y que eliminaban la competencia de las empresas públicas y las firmas locales que disfrutaban de ventajas clientelistas o significativas.

Con el fin de ofrecer incluso garantías más sustanciales a los inversionistas extranjeros, y para calmar sus temores de una nacionalización, el gobierno de Fujimori ratificó prestamente tratados bilaterales y multilaterales de garantías de inversión. En 1991, el Congreso peruano ratificó la convención de la Agencia Multilateral

de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), que brinda salvaguardas a los inversionistas extranjeros. Adicionalmente, en 1992, el gobierno de Fujimori renegoció los acuerdos bilaterales con los gobiernos extranjeros, incluidos los acuerdos con la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), que garantizan las inversiones de los Estados Unidos en el Perú. Hasta el año 2000, el Perú había concluido 28 acuerdos bilaterales con estados extranjeros para garantizar las inversiones en el Perú (CONITE, 2001a).

En 1992, Fujimori reaccionó ante la creciente oposición política y civil a su agenda neoliberal de reformas cerrando el Congreso a través de un “autogolpe”, reelaborando la Constitución del país y estableciendo efectivamente un régimen casi autoritario. La nueva Constitución puso énfasis en la importancia de los inversionistas extranjeros para el permanente progreso económico del país, y definió el escenario para la revisión de los derechos de tenencia de tierras con el fin de facilitar la nueva propiedad privada e individual de tierras. Por ejemplo, en 1996, la nueva Ley del Catastro Minero Nacional (Ley N° 26615) modificó los derechos de tenencia de tierras a lo largo de todo el país. Antes de 1996, las concesiones mineras estaban sujetas a demandas contenciosas bajo una diversidad de históricos decretos de gobierno —con frecuencia contrapuestos. Esto condujo a muchas concesiones superpuestas y a disputas legales acerca del control sobre los recursos de tierras. La nueva Ley del Catastro Minero Nacional eliminó muchos procedimientos previos de denuncios mineros, y centralizó y unificó las concesiones de acuerdo con un nuevo sistema georeferencial. Esto garantizó a las firmas nacionales y transnacionales el control exclusivo de los recursos de tierras necesarios para implementar sus operaciones (Ministerio de Energía y Minas, 2000; *Perú Monitor Monthly*, 2000).

Junto con la creación de la nueva economía neoliberal peruana, las fuerzas armadas peruanas eliminaron virtualmente las actividades guerrilleras en la sierra al capturar y encarcelar a los líderes de los movimientos insurgentes. Durante los años 1980 e inicios

de los años 1990, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) habían escogido específicamente a las empresas extranjeras así como a las grandes empresas nacionales como blancos de ataque. Al reducirse las amenazas de descontento civil y conflicto aumentó notablemente la confianza del inversionista en el país.

Los resultados de las reformas de Fujimori han sido significativos. La economía peruana está actualmente dominada por el sector privado, regulada por fuerzas de mercado e intrincadamente vinculada con la economía mundial. En términos comparativos, si bien las reformas neoliberales han predominado por completo a través de Latinoamérica durante la década pasada (Gwynne y Kay, 1999; Klak, 1998), el Perú se ha convertido en una de las economías más liberales y abiertas no solo en Latinoamérica sino, tal como sostiene el FMI en un reciente estudio por países, en el mundo (FMI, 2001).

En el país, las fases iniciales de “terapia de *shock*” condujeron a crecimiento económico; al incremento de los ingresos del gobierno, las exportaciones y las reservas internacionales y los flujos de inversión extranjera directa (IED); y, a un rápido descenso de las tasas de inflación (véase el cuadro 2.1).

Las consecuencias de las reformas de Fujimori han sido también importantes para el pueblo peruano. Desde comienzos de los años 1990, los programas de salud, educación y servicios sociales del gobierno fueron reducidos radicalmente o eliminados en conformidad a las directivas de “terapia de *shock*”. En consecuencia, el desempleo se incrementó drásticamente y los precios al consumidor se dispararon. Por ejemplo, a comienzos de los años 1990, los precios de la gasolina crecieron un 3,000%; el servicio eléctrico, un 5,300%; y los servicios de agua y teléfono, un 1,300%, al mismo tiempo que los subsidios del gobierno eran eliminados y la moneda era rápidamente devaluada (Kuczynski, 2000; Webb y Fernández-Baca, 1993).

En general, a pesar de algunos avances en el crecimiento económico y de mediciones cada vez más positivas de las tasas de

**Cuadro 2.1**  
**EL CAMBIO ECONÓMICO NEOLIBERAL PERUANO (1994-2004)**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Crecimiento del PBI (% variación anual)	12.8	8.6	2.5	6.7	-0.5	0.9	3.1	0.2	4.9	4.0	4.8
Inflación (% variación anual)	10.6	10.2	11.8	6.5	6.0	3.7	3.7	-0.1	1.5	2.5	3.4
Ingresos tributarios del gobierno (millones de soles)	12.9	16.5	19.3	22.3	23.1	22.0	22.8	23.5	24.1	27.4	30.8
Exportaciones totales (miles de millones US\$)	4.2	5.5	5.9	6.8	5.8	6.1	6.9	7.0	7.7	8.9	11.4
Reservas internacionales netas (miles de millones US\$)	5.7	6.6	8.5	10.2	9.2	8.4	8.2	8.6	9.6	12.4	12.4
IED Total (miles de millones US\$)	4.5	5.1	6.2	7.3	8.1	9.5	10.9	11.6	12.3	12.5	12.6

*Fuente:* CONITE, 2001a; PROINVERSIÓN, 2005

crecimiento macroeconómico del país, las tasas de pobreza han bajado muy poco, o en realidad han aumentado, durante la década pasada (PROINVERSIÓN, 2002). A escala nacional, más del 37% de la población carece de los servicios básicos y más del 15% de la población se halla en extrema pobreza (INEI, 2000). Sin embargo, estas cifras son mucho más altas en la sierra rural dado que el crecimiento económico ha estado altamente concentrado a lo largo de la costa, donde se ubican los principales centros urbanos que tradicionalmente dan cuenta de la mayor parte de la actividad económica. Por ejemplo, se estima que el 83% de la población en la sierra rural vive en situación de pobreza (World Bank, 1996). Por tanto, la transformación neoliberal del Perú a lo largo de la década pasada ha estado también espacialmente distribuida de un modo bastante desigual.

Las reformas han continuado durante los últimos tiempos, si bien más lentamente. Bajo el liderazgo político de Alejandro Toledo, se han aprobado nuevas leyes que limitan el alcance de los acuerdos de estabilidad tributaria para las empresas extranjeras y que reducen algunos beneficios tributarios y de inversión. Asimismo, el proceso de privatización ha sido rediseñado para incluir una nueva agencia de privatización (PROINVERSIÓN), y la composición de la agencia estatal encargada de las privatizaciones ha sido modificada para encarar los cargos de corrupción y para aumentar la transparencia. En general, sin embargo, parece que la transformación neoliberal que se dio durante el mandato de Fujimori continuará bajo los subsiguientes gobiernos.

### **3. Montañas de minas en el Perú**

Junto a la inmensa diversidad física y biológica, el Perú tiene uno de los yacimientos mineros más ricos del mundo. Un cúmulo de recursos polimetálicos y no metálicos que han abastecido siglos de explotación minera, se encuentran dispersos geológicamente tanto en vetas como en yacimientos y en estratos de sedimentación cuaternaria. Hoy en día, en el Perú se hallan en explotación más

**Cuadro 2.2**  
**PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MINERA DEL PERÚ**

	UNIDAD	PRODUCCIÓN 2004	CLASIFICACIÓN MUNDIAL (PRODUCCIÓN)	CLASIFICACIÓN EN LATINO- AMÉRICA (PRODUCCIÓN)	PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 2004	Porcentaje de incremento (1990-2004)	VALOR DE LAS EXPORTACIONES (US\$ MILLONES) 2004
Cobre	Miles de TMF	1036	3	2	8.9	138	2446
Oro	Miles de onzas finas	5569	6	1	7.0	565	2383
Plomo	Miles de TMF	306	4	1	11.3	42	389
Plata	Miles de onzas finas	98,375	2	2	15.6	48	260
Estaño	Miles de TMF	42	3	1	18.0	564	351
Zinc	Miles de TMF	1209	3	1	13.3	100	577

*Fuente:* Ministerio de Energía y Minas, 2005, 2001, 2000

[1990-2004]

de 40 recursos metálicos y no metálicos, que aportan significativamente a la producción mundial de minerales (véase el cuadro 2.2).

En términos históricos, la economía peruana ha experimentado varios ciclos de crecimiento liderados por las exportaciones y en los que la minería ha jugado un rol crítico (Thorp y Bertram, 1978; Thorp et al., 2000). Luego de un período inicial de desorganización y decadencia tras la independencia, el sector minero reestableció su supremacía en la economía peruana a fines del siglo XIX a medida que la nueva demanda internacional por metales industriales contribuyó a un auge de la producción de cobre, plata y oro. A comienzos del siglo XX, nuevas operaciones lideradas por la IED —como las de Cerro de Pasco y Southern Perú Copper— iniciaron la producción a gran escala. Las operaciones mineras extranjeras disfrutaron de un tratamiento generoso bajo el nuevo código de minería de 1950 que fue establecido con el propósito de facilitar el crecimiento económico y estimular la IED en el sector minero. No obstante, la influencia de la que gozaron las grandes operaciones lideradas por inversiones extranjeras llegó a un abrupto cese cuando sucesivos gobiernos militares nacionalizaron o expropiaron varias explotaciones mineras (Becker, 1983; Dore, 1988).

Durante los años 1990, las reformas de Fujimori tuvieron impactos significativos en el sector minero. La explotación de las reservas minerales del país aumentó con el descubrimiento de nuevos yacimientos y la expansión de las operaciones existentes. Por ejemplo, entre los años 1990 y 2000, los productos mineros dieron cuenta en promedio del 48.6% de las exportaciones nacionales, y se espera que aumenten aún más en los años subsiguientes (CONITE, 2001b; IMF, 2001; Ministerio de Energía y Minas, 2001).

El sector minero ha sido también uno de los grandes receptores de flujos de IED en el país durante la década pasada. Entre 1976 e inicios de los años 1990, la expropiación y nacionalización de muchas operaciones mineras, así como la significativa incertidumbre económica, inhibieron los flujos de IED, aunque varias de las más grandes empresas mineras —como Southern Perú Copper— continuaron operando. Sin embargo, a inicios de los

años 1990, en respuesta a las reformas neoliberales de Fujimori y las nuevas garantías para los inversionistas, los flujos de IED crecieron significativamente. Entre los años 1993 y 2004, el sector minero fue uno de los más grandes receptores de IED, alcanzando un total de US\$ 16,400 millones. Se proyecta que la IED crecerá durante los próximos años a medida que nuevas operaciones mineras empiecen sus explotaciones a lo largo de todo el país (CONITE, 2001a).

Si bien el sector minero es una fuente importante de IED para la economía peruana, no da cuenta de un gran porcentaje de la actividad económica general dentro del país. De manera similar a la desigual distribución espacial de los cambios macroeconómicos que tienen lugar a través de todo el país, la conversión del sector minero en el motor del crecimiento económico peruano es también altamente desigual en términos de productividad económica y empleo. Por ejemplo, entre los años 1995 y 2004, tanto el sector minero como el petrolero dieron cuenta en promedio de tan solo el 8.6% de todo el PBI (Ministerio de Energía y Minas, 2005). Además, el sector minero sólo dio cuenta del 0.4% del empleo en el 2000 (IMF, 2001). Por tanto, si bien el sector minero puede dar cuenta de la mayor parte de las exportaciones nacionales y es una fuente importante de divisas extranjeras, no se encuentra profundamente integrado dentro de la más amplia economía peruana.

#### **4. La privatización y transnacionalización del sector minero peruano en el siglo XXI**

La importancia relativa del sector minero en la economía nacional peruana es en gran medida la consecuencia de dos cambios claves en la organización espacial y el control de las actividades de extracción minera a través de todo el país. Primero, muchas operaciones mineras existentes han sido transferidas a empresas privadas mediante la venta de las empresas de propiedad del Estado, lo que ha alterado significativamente la propiedad y la distribución de las actividades de extracción minera a lo largo del país. Por ejemplo,

en 1990, las operaciones privadas daban cuenta del 55% de la producción mineral de todo el país, mientras que, en 1999, las operaciones privadas daban cuenta del 95% de dicha producción (Ministerio de Energía y Minas, 2001).

Los aumentos en el tamaño de las operaciones y la concentración espacial de los denuncios mineros privados en áreas ricas en minerales, han hecho posible también que las grandes operaciones mineras privadas dominen la producción de recursos minerales claves. Por ejemplo, las empresas mineras privadas producen en la actualidad el 94% del cobre del país y el 100% del hierro (Ministerio de Energía y Minas, 2001). La producción de zinc, plomo y plata está todavía controlada en gran medida por empresas mineras medianas, pero actualmente la mayor parte de estas operaciones son privadas y están expandiendo su tamaño y escala tras los nuevos flujos de IED hacia el país.

Los argumentos para la privatización fueron la creación de la competencia en el sector minero, la promoción de la imagen del país como un objetivo de inversión y la generación de recursos para garantizar los gastos del gobierno (Ministerio de Energía y Minas, 2000; PROINVERSIÓN, 2002). Entre los años 1992 y 2000, fueron privatizadas más de 200 operaciones mineras, lo que generó US\$ 1,200 millones en ingresos directos. Se proyecta que el proceso de privatización generará US\$ 3,700 millones adicionales hasta el año 2009. En términos comparativos, estas cifras representan el 17 y el 22%, respectivamente, del PBI del país en el 2000.

El proceso de privatización, en conjunción con las nuevas garantías de inversión y la reorganización del catastro minero, ha estimulado también la presentación de nuevos denuncios mineros por todo el país. Esto ha alterado de manera significativa la distribución espacial de las actividades mineras a través del territorio nacional. A comienzos de los años 1990, la explotación de minerales en el país se encontraba estancada y bloqueada por la convulsión social en la sierra. Sin embargo, una vez que empezó el proceso de privatización, y una vez que las Fuerzas Armadas peruanas empezaron a eliminar a los grupos insurgentes, los denuncios mineros

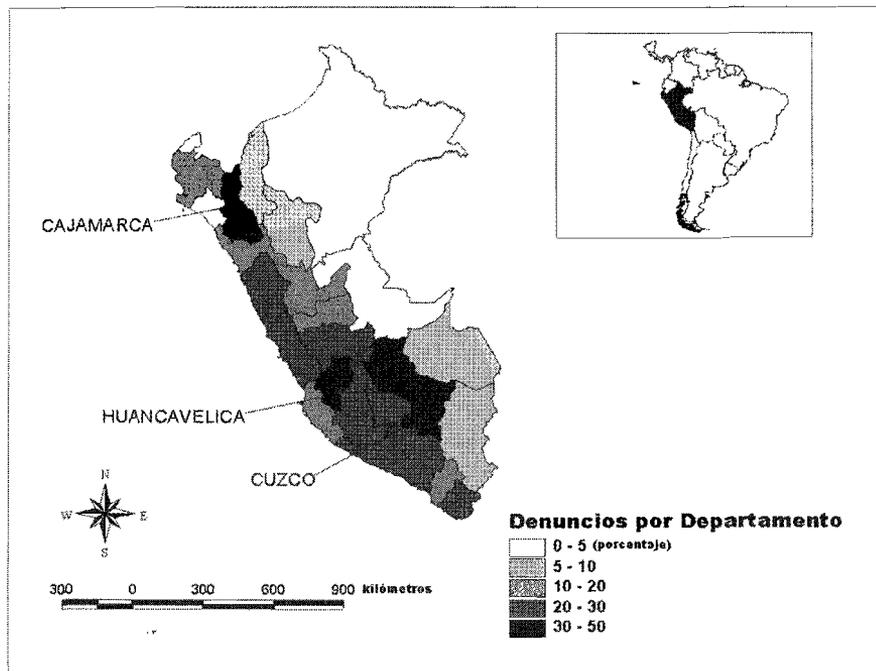
aumentaron notablemente a través de toda la sierra. Por ejemplo, se presentaron más denuncias mineras el año 1992 que durante todos los 15 años previos (*Perú Monitor Monthly*, 2000).

Desde el año 1992, los denuncias mineras han aumentado de 4 millones a 22 millones de hectáreas (CONACAMI, 2000). En la actualidad, aproximadamente el 10% de todo el territorio del país se halla cubierto de denuncias mineras subterráneas. Estos denuncias han aumentado en la sierra, donde se han privatizado operaciones mineras a gran escala o donde es probable que nuevos recursos minerales sean explotados en un futuro cercano (véase gráfico 2.1). Por ejemplo, en el 2000 a nivel subnacional, los denuncias mineras en los departamentos costeros y amazónicos dan cuenta de menos del 1% del total de los recursos territoriales, mientras que los denuncias mineras dan cuenta del 49% de estos recursos en el departamento de Cajamarca, 32% en el departamento del Cusco y el 31% en el departamento de Huancavelica (Ministerio de Energía y Minas, 2000).

El segundo cambio espacial clave en el sector minero ha sido la transnacionalización de la propiedad en el sector. Las empresas transnacionales (ET) han estado a la vanguardia del crecimiento y expansión económicos del Perú desde el año 1992. En el sector minero, 11 de las 20 principales empresas mineras transnacionales del mundo (véase cuadro 2.3) desarrollan en la actualidad operaciones en el Perú (*Perú Monitor Monthly*, 2000). Asimismo, 10 empresas mineras se hallan entre las 100 principales empresas del Perú en términos de ventas, y 16 de estas se hallan entre las 100 principales empresas que tienen las ganancias netas más altas (*Perú Report*, 1999).

La transnacionalización del sector minero peruano en gran medida se ha logrado a través de la inversión extranjera directa en el país, la cual ha sido repartida en inversiones en empresas mineras peruanas ya existentes a través de empresas consorciadas o nuevas operaciones, adquisiciones de operaciones mineras a través del proceso de privatización, y la explotación de nuevos yacimientos de mineral. La producción minera ahora está concentrada en unas

**Gráfico 2.1**  
**DENUNCIOS MINEROS NACIONALES - DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO (2000)**



Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2000

**Cuadro 2.3**  
**GRANDES OPERACIONES MINERAS TRANSNACIONALES EN EL PERÚ**

	PAÍS	PROYECTO	MINERAL	INVERSIÓN PROYECTADA (US\$ MILLONES)
Broken Hill Proprietary-BHP	Australia	Tintaya	Cobre	597
Noranda/Rio Algom/Teck	Canadá	Antamina	Cobre, plomo, zinc	2,300
Cambior	Canadá	La Granja	Cobre	1,100
Barrick	Canadá	Pierina	Oro	316
Manhattan	Canadá	Tambogrande	Cobre, zinc	170
Cominco/Marubeni	Canadá/Japón	Cajamarquilla	Refinería de zinc	344
Shougang	China	Marcota	Hierro	172
Mitsui	Japón	Palca	Varios	30
Grupo México	México	Varios	Cobre	2,282
Anglo American	Sudáfrica	Quellaveco	Cobre, molibdeno	800
Glencore	Suiza	Varios	Zinc, plomo	49
Phelps-Dodge	USA	Varios	Cobre, varios	612
Newmont (Mysa)	USA	Cajamarca	Oro	226
Doe Run	USA	Varios	Polimetálica	193
ECS Mining Consultants	USA	Cerro Corona	Cobre, oro	150

*Fuentes:* Directorio Minero del Perú, 2000; GTMA-Novib, 2000; Ministerio de Energía y Minas, 2005.

cuantas operaciones a gran escala que están crecientemente integradas en redes mineras trasnacionales en la medida que intereses mineros extranjeros han provisto de capital fresco, tecnología y profesionales altamente capacitados. Por lo tanto, no solo la propiedad y la producción en el sector minero se han concentrado en grandes empresas privadas de gran escala, sino que el sector se ha integrado en redes trasnacionales de capital y producción.

Un breve repaso de la producción aurífera peruana ilustra cómo la privatización y la transnacionalización han transformado

significativamente la distribución espacial y la organización del sector minero. Antes de 1990, la producción aurífera estaba dominada por operaciones mineras informales que operaban a pequeña escala y que estaban ubicadas principalmente en Madre de Dios y otras áreas de la Amazonía peruana. Las empresas de tamaño mediano explotaban vetas subterráneas y también pequeños yacimientos; esta producción era generalmente a pequeña escala. Luego de las reformas de Fujimori, nuevas empresas transnacionales, de gran escala, empezaron sus operaciones a través de toda la sierra. Hacia 1996, las grandes operaciones auríferas transnacionales superaron la producción total de las operaciones de pequeña y mediana escala, y para el 2004 daban cuenta del 91% de toda la producción de oro (Ministerio de Energía y Minas, 2005). Este rápido crecimiento en la producción aurífera se debe, en gran parte, a la inauguración de varias “mega” operaciones mineras transnacionales en la sierra que dependen de yacimientos auríferos subterráneos masivos y difusos, a la minería a tajo abierto y a los nuevos avances tecnológicos —como la extracción por lixiviación con cianuro. La producción aurífera de estas grandes operaciones mineras seguirá creciendo rápidamente en la medida que varios nuevos proyectos empiecen sus operaciones en la sierra, y en tanto sean privatizadas, divididas y subastadas más operaciones mineras de oro de propiedad del Estado en los próximos años.

## **5. Desarrollo y montañas de minas**

La rápida transformación de la propiedad del sector minero ha introducido un nuevo imaginario del desarrollo para el futuro político, económico y social del Perú en áreas donde el nuevo sector minero está afirmando su influencia. Comprender cómo es que esa transformación está afectando las trayectorias de desarrollo en lugares locales y regionales, es importante tanto por razones teóricas como empíricas.

En términos teóricos, es importante comprender las relaciones existentes entre las transiciones neoliberales que están teniendo

lugar a escala nacional y los cambios locales y regionales. El análisis de estas relaciones a diferentes escalas puede brindar una mejor comprensión sobre cómo los patrones de esfuerzos previos de desarrollo a lo largo de la región —especialmente la industrialización orientada hacia adentro— están siendo modificados y de qué manera. Varios geógrafos han demandado mayores estudios que encaren estas relaciones de escala como una forma de comprender como los modos en los que los procesos de desarrollo están cambiando a través de toda la región (*e.g.*, Bebbington, 2002; Gwynne y Kay, 1999; Klak, 1999).

Otra razón por la que es teóricamente importante explorar la relación existente entre la reestructuración neoliberal a escala nacional y el cambio y el desarrollo a escala local, es que los efectos combinados y desiguales de tales políticas están incitando nuevos tipos de relaciones entre los procesos políticos, económicos y sociales. Estas nuevas dinámicas son importantes para comprender en qué medida están afectando el comportamiento de los actores locales como también al futuro de los medioambientes locales. El análisis de estas relaciones podría permitir el desarrollo de nuevos lentes teóricos y marcos conceptuales a través de los cuales podríamos comprender el comportamiento de los actores locales así como identificar qué esfuerzos futuros de desarrollo podrían ser más efectivos.

En términos empíricos, es importante evaluar estas relaciones de escala puesto que mientras las versiones populares y demasiado simplificadas ya sea alaban o critican el modelo neoliberal, dichas versiones con frecuencia han dejado de lado la naturaleza desigual de las geografías naturales y humanas a diferentes escalas de análisis. Los investigadores dedicados a los estudios geográficos han demandado más investigaciones que examinen la naturaleza compleja de las geografías del cambio neoliberal en lugares y espacios locales (*e.g.* Bebbington, 2000; Hays-Mitchell, 2002). Esto puede permitir una comprensión más fina de cómo es que el cambio neoliberal es experimentado a escala local y cómo es que podría variar a través de diferentes contextos.

El análisis de cómo han sido transformados los lugares locales por el modelo de desarrollo neoliberal es también importante por razones empíricas, puesto que el debate en torno a los cambios políticos y económicos contemporáneos en Latinoamérica sigue siendo una pregunta urgente y, tal como sostienen Gwynne y Kay (2000), los “porvenires” del neoliberalismo en Latinoamérica son todavía inciertos. Mientras que el debate acerca de la reforma neoliberal en Latinoamérica se ha ido polarizando cada vez más, y con frecuencia ha degenerado en posiciones polémicas y retóricas, la investigación geográfica rigurosa a escala local puede todavía enriquecer este debate y, lo que es más importante, contribuir a futuras discusiones mediante el análisis permanente de las dinámicas espaciales de las transformaciones del desarrollo.

Con el fin de adentrarnos en los debates teóricos y empíricos en torno a la economía minero-extractiva neoliberal peruana, las secciones finales de este capítulo se basan en un estudio de caso realizado en el Perú acerca de los impactos de las operaciones en Yanacocha de la Newmont Mining Corporation (MUSA) sobre los patrones de tenencia de tierra y los medios de subsistencia de las unidades familiares en la región de Cajamarca. Enfocar así el análisis, provee útiles lentes teóricos y empíricos a través de los cuales podremos comprender cómo es que las geografías neoliberales del desarrollo están relacionadas con complejos e imbricados cambios que están teniendo lugar a través de las escalas de análisis y dentro de los contextos locales y regionales.

### **La Minera Yanacocha y Cajamarca**

La Minera Yanacocha es una de las nuevas operaciones mineras transnacionales más influyentes en el Perú. En 1992, Newmont Mining Corporation, la más grande compañía de oro del mundo y basada en Denver, empezó la construcción de la operación minero-aurífera de Yanacocha en la región de Cajamarca del Perú, en cooperación con su socia peruana, la Compañía de Minas Buenaventura S.A., y la Corporación Financiera Internacional (conocida

como Minera Yanacocha o MYSA). El proyecto Yanacocha fue la primera nueva inversión extranjera en el sector minero peruano desde 1976.

MYSA opera en la región norteña del país a altitudes que oscilan entre los 3,500 y 4,000 metros aproximadamente, a 35 kilómetros de la ciudad de Cajamarca.

Desde 1992, MYSA se ha convertido en la mina de oro más grande de Latinoamérica y en una de las operaciones auríferas de más bajo costo en el mundo. Con frecuencia, a MYSA se la denomina la “joya de la corona” de las operaciones de Newmont, debido a sus significativas reservas, alta producción y bajos costos monetarios. En el 2001, por ejemplo, la mina tenía un estimado de 36.6 millones de onzas de oro y produjo 1.9 millones de onzas a un costo en metálico de US\$ 115 por onza. Entre los años 1993 y 2003, MYSA produjo más de 14 millones de onzas de oro (Newmont, 2004). En términos de la producción aurífera peruana, MYSA dio cuenta del 52% de toda la producción de oro en el 2004 (Ministerio de Energía y Minas, 2005).

Las operaciones de MYSA son ilustrativas de la transformación neoliberal que ha tenido lugar dentro del sector minero peruano, dado que empezó a operar, a inicios de los años 1990 durante el gobierno de Fujimori. Sus actividades son controladas por la más grande empresa minera mundial dedicada a la explotación aurífera y forman parte del nuevo “mega” sector minero del país en tanto dan cuenta de una mayoría sustancial de los ingresos por exportaciones del mismo.

Estas operaciones han tenido también impactos significativos tanto en los ambientes naturales como humanos de la región de Cajamarca. Desde que se iniciaron sus operaciones ha introducido un cúmulo de nuevos recursos económicos y humanos en la región. El cuadro 2.4 muestra que entre 1992 y 2000, MYSA ha introducido más de US\$ 2,000 millones en la región. Adicionalmente, durante el año 2000, la mina empleó a más de 7,000 personas, el 57% de las cuales provenía de la región de Cajamarca; adquirió bienes y servicios de más de 413 abastecedores en la

**Cuadro 2.4**  
**IMPACTOS ECONÓMICOS SELECCIONADOS DE MYSA EN CAJAMARCA**

ACTIVIDADES DE LA MINA	SUBTOTALES (EN MILES DE US\$ DÓLARES)	INVERSIONES TOTALES (EN MILES DE US\$ DÓLARES)
Inversiones en las instalaciones de la mina (1992-2000)		85,542
Exploración (1992-2000)		770,158
Empleo		153,573
Adquisición de bienes y servicios		1,720,497
Bs. y Ss. de Cajamarca (1993-2000)	127,248	
Bs. y Ss. nacionales y extranjeros (1992-2000)	1,593,249	
Programas de desarrollo rural (1993-2000)		11,898
<b>Total</b>		<b>2,741,668</b>

*Fuente:* MYSa, 2002.

región; y se había convertido en la más grande propietaria de tierras en la región (MYSa, 2002).

Los efectos de estos nuevos recursos económicos en la región han sido significativos. Los mercados de construcción e inmobiliario se han expandido a medida que ha aumentado la demanda por nuevos materiales y viviendas. Dentro de la ciudad de Cajamarca, los impactos de la mina han sido extraordinarios, pero también ardientemente debatidos. Los críticos de la mina denuncian que las actividades de MYSa han creado una atmósfera de una ciudad de “fiebre del oro” que está conduciendo a serios problemas políticos y sociales, mientras que trae tan solo un crecimiento económico limitado y aislado a la región, lo que refleja los tradicionales patrones de minería de enclave (*e.g.*, GRADE, 2000; Kuramoto, 1999). Por otro lado, los defensores de la mina sostienen que MYSa está

dinamizando la economía en la región, lo cual está conduciendo a un conjunto de efectos económicos y sociales complementarios (e.g., Indacochea, 1998; Schwalb, 2000). Si bien estos debates continúan en una diversidad de foros, tanto en el Perú como internacionalmente, lo que queda claro es que se está dando un cúmulo de cambios sociales y económicos transformadores, si bien desiguales, que están afectando la región de diversas maneras.

Las operaciones de MYSA han tenido también impactos importantes en los medioambientes naturales de la región de Cajamarca, principalmente debido a los tipos de tecnologías mineras que están siendo empleadas para extraer los concentrados de oro. Con el fin de explotar los ricos yacimientos mineros del cinturón de Cajamarca, y para minimizar los costos, MYSA ha desplegado tecnologías de minería a tajo abierto y de extracción por lixiviación con cianuro. Una vez que la mena ha sido sacada de los grandes tajos abiertos y colocada en forma de cúmulos aterrazados en las pozas de lixiviación revestidas, se la rocía a través de aspersores con una solución que sirve para la lixiviación y que contiene cianuro. La solución impregnada de oro fluye luego a grandes embalses de almacenamiento de solución, donde el oro es separado. Las operaciones de MYSA fueron el primer proyecto de extracción por lixiviación a gran escala en el Perú y, en el 2001, pasó a ser la más grande operación de extracción por lixiviación en el mundo (Newmont, 2002).

Las operaciones de extracción por lixiviación con cianuro de MYSA han conducido a un cambio drástico en los patrones de la cubierta vegetal y a una amplia alteración de los procesos medioambientales en la región. A través de más de 10,000 hectáreas, la mina ha alterado los cursos de agua y removido millones de toneladas de tierra. Para el año 2000, la extensión física del asiento minero era más grande que la aldea ciudad de Cajamarca, la cual tiene más de 80,000 habitantes. El año 2000, más de 130,000 toneladas de tierra fueron removidas, lo cual es comparable con el volumen de tierra que ha sido removido en las grandes operaciones cupríferas a través de todo el mundo (ibíd).

Con el fin de evaluar cómo han estado afectando las operaciones de MYSA a las unidades familiares en la región de Cajamarca, se realizó un trabajo de campo entre los años 1999 y el 2003, el mismo que se centró en los impactos de la mina sobre los patrones de tenencia de tierras y los recursos a los que acceden las unidades familiares para producir sus medios de subsistencia. El diseño de la investigación para el componente de recolección de los datos primarios del proyecto, se basó en cuestionarios formales aplicados a unidades domésticas elegidas al azar en tres comunidades de la región afectadas por las operaciones de la mina. Durante el proceso de selección de comunidades, se prestó atención a la diversidad de zonas climáticas de la región y a los impactos geográficos diversos de las operaciones de MYSA. En total, se entrevistó a 59 unidades domésticas a lo largo del estudio, lo que significó una población total de 349 personas. Además del cuestionario formal, para complementar los hallazgos del estudio de caso, durante el curso del estudio y en los siguientes periodos de trabajo de campo, se realizó una amplia investigación de archivos, se recolectaron datos secundarios y se sostuvieron entrevistas con informantes claves y grupos focales.

### ***Patrones cambiantes de tenencia de tierras***

A medida que la reestructuración neoliberal ha transformado al sector minero peruano, se ha dado una transformación concomitante con respecto a los derechos de uso de tierras, o de tenencia de tierras, a través de todo el Perú. Antes de la transformación neoliberal de los años 1990, la investigación relativa a los patrones de tenencia de tierras se centró principalmente en los impactos de la regulación estatal y la redistribución de los recursos agrarios a través de todo el país bajo el “experimento peruano” (e.g., Deere, 1990; Lowenthal, 1975; Slater, 1989). No obstante, bajo la nueva agenda neoliberal, los actores privados, tales como las empresas transnacionales, se han convertido en nuevas e importantes fuerzas que afectan a los patrones de tenencia de tierras. La investigación

reciente ha empezado a reconocer cómo es que la agenda neoliberal latinoamericana está conduciendo a un reordenamiento espacial de los patrones de tenencia de tierras (*e.g.*, Deere y León, 2001; Mayer, 2002), particularmente en el ámbito del sector minero transnacional (Bridge, 2002).

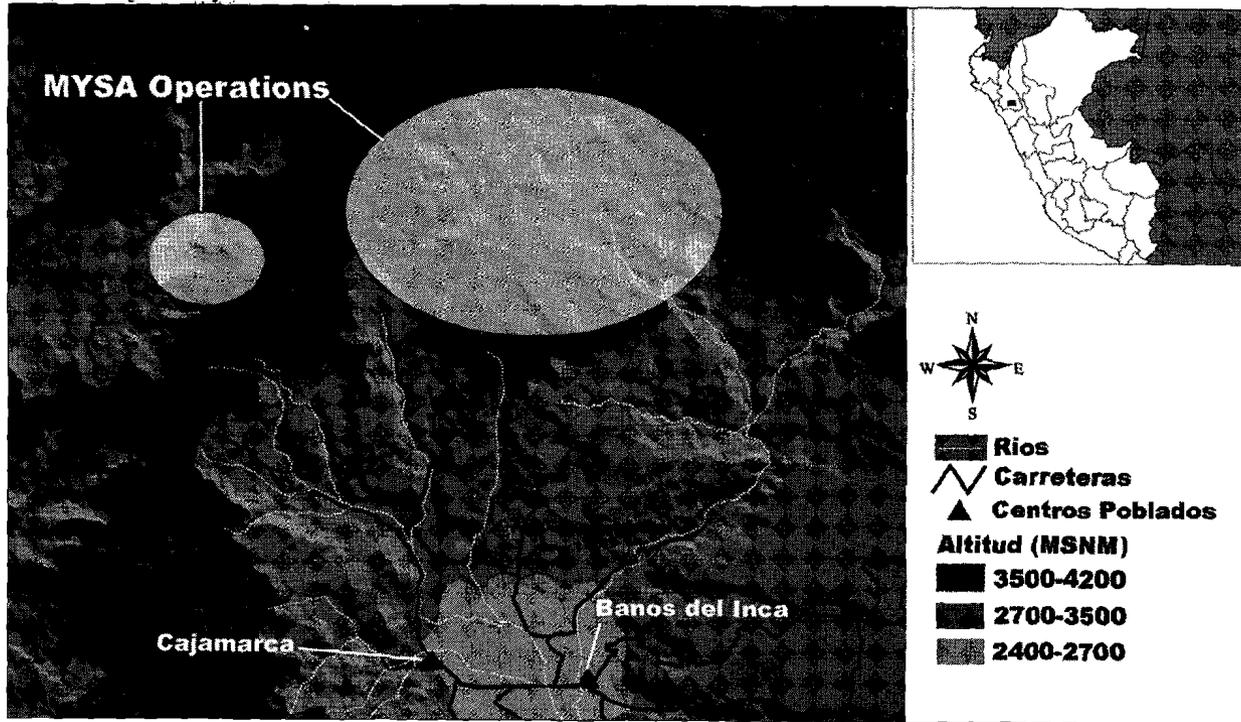
Desde inicios de los años 1990, el recurso tierra en el Perú ha sido redistribuido, reclasificado y parcelado para facilitar la transferencia de los derechos mineros a las operaciones mineras de gran escala. Este reordenamiento espacial de los patrones de tenencia de tierras, relacionado con el nuevo sector minero transnacional del Perú, ilustra tres importantes procesos que contribuyen a los debates teóricos y empíricos en torno a la tenencia de tierras en la región. Primero, las operaciones mineras transnacionales están acelerando la transformación de las leyes y normas que rigen la tenencia de tierras —desde el manejo comunal o la negociación informal hacia la propiedad privada. Segundo, la magnitud de los denuncios mineros transnacionales está transformando los valores de la tierra y conduciendo, tal como Bridge (*ibíd.*) arguye, a una “revalorización” de los recursos y prioridades del uso de tierras. Tercero, las operaciones mineras transnacionales están también afectando significativamente la distribución vertical de los patrones de uso de tierras. Esto está conduciendo a una “rezonificación” de las actividades de uso de tierras de las unidades familiares a lo largo de las históricamente importantes zonas de producción ecológicas verticales de la región (Murra, 1985; Pulgar Vidal, 1981).

Los impactos de las actividades mineras de MYSa sobre los patrones de tenencia de tierras en la región de Cajamarca ilustran cada uno de estos tres procesos. Antes de las reformas de Fujimori, las operaciones mineras en la región de Cajamarca estuvieron concentradas en gran medida en el distrito argentífero de Hualgayoc y en unas cuantas grandes operaciones paraestatales. Sin embargo, cuando comenzaron las operaciones de MYSa en la región, los denuncios mineros aumentaron drásticamente. El gráfico 2.3 ilustra la magnitud de los cambios en los denuncios mineros durante los periodos previos a 1991 (el comienzo de las reformas de Fujimori),

y entre los años 1991 y 2003; entre estos años fueron presentados más denuncios mineros, que cubren un inmenso territorio, que durante todo el período de denuncios mineros registrados nacionalmente para la región desde fines del siglo XIX. El gráfico 2.2 muestra también la magnitud de los denuncios mineros de MYSA y el potencial que tienen para producir incluso efectos mayores en el futuro. Si bien en la actualidad las operaciones de MYSA abarcan aproximadamente 10,000 hectáreas, ha asegurado 1,386 kilómetros cuadrados de derechos mineros (los lotes están identificados en el gráfico 2.2) a través de toda la región.

El primer proceso que las actividades mineras y los denuncios de minerales de MYSA han afectado, es la transformación de las instituciones de tenencia de tierras. Antes de las reformas de Fujimori, muchas propiedades rurales en Cajamarca fueron conducidas en términos comunales o negociadas de manera informal. Hacia mediados de los años 1980, Deere (1990) estima que el 40% de la tierra considerada como propiedad privada en el departamento había sido redistribuida por el Estado. Mientras que se les otorgó el 46% de estas tierras a las unidades domésticas individuales, la mayor parte le fue otorgada a instituciones de manejo colectivo, incluidas cooperativas agrarias (24%), sociedades agrarias (15.5%) y comunidades indígenas (5.3%). Una vez que Fujimori empezó a dar una serie de medidas de reforma de tenencia de la tierra para reconocer las propiedades rurales privadas de tierras —incluidas la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (Decreto N° 653) de 1991, las disposiciones constitucionales que legalizaron la parcelación y la venta de tierras en 1993 y la Ley de Tierras de 1995 (Ley N° 26505), que permitían que grupos colectivos parcelasen y vendiesen la tierra que poseían en común— empezaron a cambiar las normas colectivas informales de tenencia de tierras a través de todo el país. Sin embargo, de manera similar a las reformas que se dieron bajo el “experimento peruano”, el reconocimiento estatal de las propiedades rurales privadas ha sido muy lento. Tan solo el 60% de las propiedades privadas en las comunidades rurales de todo el país han sido formalmente reco-

Gráfico 2.2  
DENUNCIOS MINEROS EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA



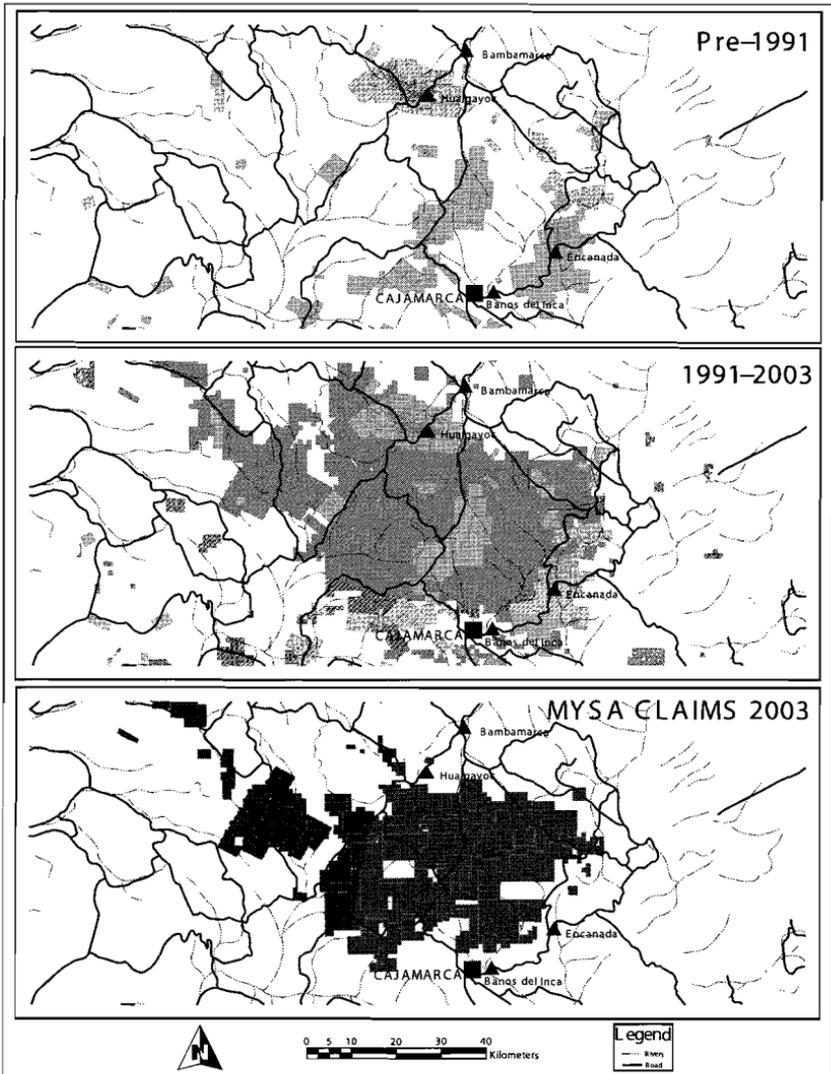
Fuente: INACC, 2003.

nocidas por el Estado peruano (CONACAMI, 2000). En consecuencia, con frecuencia los nuevos denuncios mineros de las grandes operaciones transnacionales, si bien se encuentran formalmente reconocidos por el Estado, están siendo superpuestos sobre los territorios comunales o tierras de propiedad privada que no son reconocidos por el Estado.

Ante la ausencia de mecanismos estatales efectivos que faciliten la transferencia de estas tierras, las empresas mineras han asumido frecuentemente este rol. Por ejemplo, en la Cajamarca rural, donde las iniciativas estatales de titulación neoliberal de tierras fueron prácticamente inexistentes a inicios de los años 1990, MYSA se convirtió en el agente de facto de la transformación de la tenencia de tierras debido a que la mina necesitaba esclarecer la propiedad legal de las tierras donde planificaba iniciar operaciones. Esto ha sido particularmente importante debido al tamaño de las operaciones y denuncios mineros de MYSA, los cuales han acelerado enormemente la escala del cambio institucional de tenencia de tierras en la región de Cajamarca. Por tanto, MYSA pasó a ser el actor principal encargado de facilitar la transformación de las instituciones comunales de manejo de tierras.

Cuando MYSA inició sus operaciones, muchas de las comunidades ubicadas en el área planificada de operaciones de extracción del mineral manejaban sus recursos territoriales en términos colectivos y a través de instituciones comunales o familiares. Para poder iniciar sus operaciones, MYSA estaba obligada a negociar la compra de estas tierras. No obstante, antes de que la tierra necesaria pudiera ser adquirida legalmente bajo las nuevas leyes peruanas de tierras, tenían que ser parceladas en términos de propiedades privadas. Para facilitar la parcelación de la tierra, MYSA lanzó una serie de rápidas iniciativas de titulación de tierras en las comunidades. Según expresan los entrevistados de las comunidades que participaron en el estudio de caso, los empleados de MYSA organizaron asambleas comunales, transportaron a la gente a la ciudad en vehículos de la mina y los guiaron a través del proceso de titulación de tierras de modo que la mina pudiese adquirir las tierras. Durante

**Gráfico 2.3**  
**DENUNCIOS MINEROS EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA**



Fuente: INACC, 2003.

este proceso, puesto que el acceso de las unidades familiares a las tierras comunales estaba regulado por instituciones informales que tomaban en cuenta la variabilidad estacional y altitudinal de largo plazo, y dado que muchas unidades familiares no estuvieron presentes en las comunidades cuando llegaron los empleados de la mina para iniciar el proceso de titulación de tierras, a muchos usuarios de tierras se les negó la compensación por, y el acceso a, las tierras que ellos habían utilizado tradicionalmente. Como consecuencia, la iniciativa de titulación de tierras de MYSA creó una serie de disputas legales y tensiones dentro de las comunidades, las cuales todavía no están resueltas.

Los esfuerzos de titulación de tierras llevados a cabo por MYSA en la región han sido significativos. Entre los años 1992 y 2000, MYSA adquirió más de 11,000 hectáreas en la región por aproximadamente US\$ 5 millones (MYSA, 2002). Esto incluye 259 adquisiciones de tierras en 44 comunidades, con parcelas que medían desde menos de 1 hectárea hasta más de 1,000 hectáreas (Martínez y Oblitas, 2002). Al margen de estas cifras, es también importante notar que las operaciones de MYSA han incitado también un cúmulo de nuevos esfuerzos de parcelación y privatización en las comunidades a través de toda la región, los cuales anuncian posibles adquisiciones futuras de tierras. Por lo tanto, al mismo tiempo que las operaciones de MYSA se han incrementado y se han consolidado sus denuncios mineros en un área mucho mayor que la de sus actuales operaciones, así también lo han hecho el ritmo y la escala de la transformación institucional de tenencia de tierras.

El segundo proceso de tenencia de tierras que MYSA ha afectado en la región está relacionado con el valor de la tierra. Uno de los impactos usuales de los *booms* mineros sobre los recursos territoriales es que los valores aumentan vertiginosamente a medida que las minas adquieren tierras para sus operaciones. Este también ha sido el caso en la región de Cajamarca. Cuando MYSA empezó su programa de adquisición de tierras estaba obligada a pagar valores razonables de mercado a los propietarios de las tierras. En varias de las comunidades del estudio de caso, MYSA encontró

resistencia por parte de los propietarios y recurrió a procedimientos de expropiación amparados por el Estado, forzando el desalojo de las tierras, al mismo tiempo que compensaba a los propietarios con lo que MYSa determinaba ser el valor estimado de mercado. A inicios de 1992, MYSa empezó a comprar tierras por menos de US\$ 80 la hectárea (GRADE, 2000). Sin embargo, desde el año 1992 los precios de la tierra han aumentado considerablemente. Entre los años 1992 y 1996, los precios de las tierras ubicadas alrededor de la mina aumentaron en más de 600 por ciento (ibíd.). En el 2000, varios entrevistados para este estudio de caso indicaron que los propietarios estaban exigiendo varios miles de dólares por hectárea. En una denuncia presentada ante la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), una organización campesina demandó que MYSa les pagase US\$ 500 por metro cuadrado, o US\$ 500,000 por hectárea, a los propietarios de las tierras (*Project Underground*, 2001). Si bien los precios de las tierras no llegarán a alcanzar niveles tan extraordinarios, es seguro que los precios de la tierra en la región seguirán aumentando a medida que se expandan las operaciones de MYSa.

Una consecuencia de estos drásticos incrementos en los precios de la tierra en la región es que ellos están alterando el valor asignado al uso del recurso tierra. Tal como señala Bridge, las actividades mineras con frecuencia contribuyen a un “desorden en la distribución socioespacial de los derechos de uso de tierra” y a una “revalorización” del uso de la tierra (2002: 382). Puesto que las operaciones de MYSa son tan grandes, y dado que se han convertido en el mayor determinante de tenencia de tierras en la región, su uso de tierras ha redefinido rápidamente los derechos de uso de tierras y modificado el valor percibido de la tierra en términos de las actividades mineras. Se ha dado también una ruptura significativa con las actividades de uso no minero de las tierras, particularmente debido a que los ex propietarios de tierras no han podido obtener nuevos recursos agrícolas en la región y a que los crecientes precios del valor minero de las tierras en la región han disminuido la disponibilidad de tierras para otras actividades.

El tercer proceso de tenencia de tierras que ha sido afectado por las actividades de MYSA está relacionado con la distribución espacial de las actividades de uso de tierras a través de toda la región. Las unidades domésticas en la región de Cajamarca han utilizado tradicionalmente el recurso tierra controlando diferentes zonas de producción ecológicas distribuidas verticalmente, las cuales varían según criterios climatológicos de flora y paisaje (Mayer, 2002). Si bien los investigadores han discutido los criterios conceptuales y de definición relativos a la amplitud y clasificación de las zonas ecológicas de producción en la región andina (e.g., Zimmerer, 1999), las unidades domésticas producen cultivos y participan de otras actividades de sustento a través, tal como Mayer (2002) señala, de zonas de producción “reales” en la región de maneras específicas. Según el estudio de caso, las familias se involucran en una diversidad de actividades de subsistencia por medio de tres diferentes zonas ecológicas que van desde los 2,400 msnm hasta los 4,200 msnm en las áreas afectadas por las operaciones mineras de MYSA. Esta zonificación vertical de las actividades productivas ha posibilitado que las unidades familiares manejen un portafolio diversificado de técnicas de producción para satisfacer sus necesidades de sustento.

Desde que MYSA comenzó sus operaciones en la región, las estrategias de producción vertical de las familias se han visto significativamente afectadas. Esto se debe tanto a la magnitud de las operaciones de MYSA así como a su emplazamiento vertical. Las operaciones de MYSA se ubican principalmente a altitudes muy elevadas en la región (variando entre 3,500 y 4,000 metros, principalmente la zona jalca). Esto ha afectado de manera significativa las estrategias familiares de producción en muchas comunidades debido a que la mina ha llegado a ocupar la mayor parte de la zona jalca de producción, lo que ha truncado las posibilidades de uso de tierras por parte de las familias. Esta “rezonificación” de las zonas de producción ha obligado a muchas familias a modificar sus actividades de uso de tierras. En general, la zona jalca de producción que rodea a MYSA ha sido utilizada por las familias para actividades

estacionales de pastoreo. No obstante, desde que MYSa obtuvo derechos de uso de territorios mineros en gran parte de la zona, las familias que vendieron tierra a la mina, o que dependían de arreglos de pastoreo comunales o informales, han tenido que trasladar sus actividades de sustento hacia zonas más bajas. Esta re zonificación de las zonas de producción en la región ha contribuido a la intensificación de estrategias de producción agrícola y pecuaria en zonas ecológicas de producción más bajas.

## **F. Conclusión**

La nueva economía política minera neoliberal del Perú está transformando las geografías de la tenencia de tierras y los medios de subsistencia en Cajamarca. Durante la década pasada las actividades mineras transnacionales de MYSa han contribuido a cambios significativos en los patrones de tenencia de tierras, en las instituciones de tenencia de tierras y en el valor de uso de la tierra a través de la región. Adicionalmente, los medios de subsistencia están siendo transformados en la medida que el acceso de las unidades familiares a los recursos económicos, humanos, naturales y sociales está cambiando rápidamente en las zonas circundantes a las operaciones mineras de MYSa (sobre este tema ver el capítulo 6). Si bien los cambios que están teniendo lugar en la región de Cajamarca son ilustrativos de la nueva economía minera neoliberal del Perú, también están teniendo lugar transformaciones en otras áreas del país donde nuevas operaciones mineras transnacionales están en marcha. Comprender la naturaleza de estos cambios es importante tanto en términos teóricos, como empíricos, puesto que dichos cambios definirán en gran medida las trayectorias de desarrollo futuras del país a lo largo de la próxima década. Comprender cómo y de qué manera estos procesos de transformación continúan dándose es importante para los geógrafos preocupados con los cambiantes imaginarios de desarrollo del país. Si bien este documento es tan solo el inicio del análisis de estos temas en una región del Perú, los futuros esfuerzos de investigación podrían

analizar en más detalle y mayor amplitud la manera en que la economía latinoamericana basada en la extracción de recursos naturales, y crecientemente privatizada y transnacionalizada, está afectando las geografías locales a través de toda la región. Esto es particularmente importante puesto que el experimento neoliberal latinoamericano se encuentra bajo un creciente escrutinio por parte de los investigadores y los diseñadores de política dado que sus beneficios políticos y económicos inmediatos ahora están dando paso a análisis más medidos. La investigación preocupada por investigar las maneras en las que las reformas neoliberales están transformando las geografías locales de los países, estaría en condiciones de contribuir de manera más efectiva a este debate en la medida que se tomen en cuenta nuevas orientaciones de cambio y se formulen nuevas agendas de investigación.

## 3

*La reestructuración territorial y las bases  
de la reforma agraria: comunidades indígenas,  
minería aurífera y el Banco Mundial*

ERIC HOLT-GIMÉNEZ

## 1. Introducción

Muchas de las actuales críticas a los programas de reforma agraria “asistida por el mercado” del Banco Mundial se centran en las contradicciones entre el discurso agrario neoliberal del Banco y los pobres resultados distributivos de sus proyectos en el propio terreno (Sauer, Schwartzman y Barrios, 2003; Dias Martins, 2005). Criticar al Banco por la inconsistencia entre su misión de aliviar la pobreza rural y la naturaleza regresiva de sus programas de reforma agraria, es algo importante no solo porque esto puede ayudar a amplificar las voces de los sin tierra, sino también porque ayuda a exponer las hipocresías inherentes presentes en la aproximación no distributiva del Banco al crecimiento económico y al desarrollo rural en general.

Sin embargo, estas críticas no necesariamente dan luces sobre por qué el Banco implementa con tanta insistencia y permanentemente estos programas fallidos. Señalar simplemente el “Consenso de Washington” no explica específicamente el rol de la reforma agraria basada en el mercado dentro de las estrategias nacionales de desarrollo promovidas por el Banco. Sin un análisis estructural

de la agenda del Banco, resulta difícil comprender el alcance político de sus programas de reforma agraria. Más aún, es importante tomar en cuenta la gama de políticas y proyectos del Banco en un país específico con el fin de conocer cuál es el rol que podría jugar la reforma agraria (o su ausencia) en la estrategia general del Banco. Un proyecto de reforma agraria basado en el mercado podría ser un fracaso agrario para el campesinado, no obstante ser bastante exitoso, por ejemplo, en términos de contribuir a reestructurar las instituciones sociales y económicas en los territorios remotos de un país en favor de la agroindustria, el turismo o las empresas extractivas.

Este capítulo argumenta que, para construir estrategias de resistencia viables de amplia base, que involucren al Banco en cuestiones rurales y agrarias, se tiene que comprender qué es lo que el Banco realmente está haciendo en el propio terreno, antes que aquello que parece estar haciendo. En el caso de Guatemala, como en otras partes de Latinoamérica, el programa del Banco Mundial para la reforma agraria dirigida por el mercado es complementario a la estrategia de abrir el Altiplano Occidental a las explotaciones extractivas. Si bien, los movimientos indígenas y agrarios llevan adelante una batalla discursiva con los programas de reforma agraria dirigidos por el mercado y auspiciados por el Banco Mundial, los proyectos impulsados por el Banco que favorecen los intereses mineros extranjeros han desencadenado una transformación mucho más completa, la cual es social y ambientalmente destructiva de las tierras indígenas. Para comprender este proceso introduciré el término “reestructuración territorial”, como un concepto de desarrollo crítico, junto con dos conceptos complementarios: el “hiperespacio del desarrollo” y la “vertiente minera” (*mineshed* en inglés).

En cualquier país, el conjunto de proyectos de desarrollo del Banco es un reflejo de sus operaciones para apoyar al capital en su tarea de captura de mercados y rentas particulares para firmas y actores políticos privilegiados a escala nacional y subnacional —o *territorial*. Muchos de los proyectos del Banco deben ser compren-

dados en términos de la reestructuración de espacios y lugares territoriales para favorecer a formas seleccionadas de capital, firmas particulares y/o actores políticos claves. En este análisis, *lugares* se refiere a las áreas físicas donde ocurre la producción y la reestructuración (por ejemplo, el Altiplano indígena de Guatemala, rico en minerales). *Espacios* son los escenarios sociopolíticos en los que diferentes actores luchan por el poder sobre tales espacios, por ejemplo, las estructuras de mercado, las políticas y la gobernanza.

La *reestructuración territorial* busca el control sobre los lugares y los espacios donde es producido el excedente, mediante el diseño y control de las instituciones y las relaciones sociales que rigen la producción, la extracción y la acumulación. Este control incluye, pero no se circunscribe, a las diferentes formas de gobernanza nacional y subnacional. Al igual que en el caso de las reformas neoliberales, el control también puede ser ejercido mediante la *limitación* de la gobernanza formal con el fin de permitir que las firmas extranjeras tengan un acceso irrestricto a los recursos. Para el Banco, las firmas privadas o los gobiernos nacionales no necesitan alcanzar un consenso sobre el proceso de reestructuración territorial. Las maneras en las que estas instituciones emplean el desarrollo para redefinir y controlar el territorio dependen, en gran medida, de sus intereses independientes con frecuencia complementarios. El resultado agregado de las actividades, tensiones y alianzas entre estos diferentes actores produce la reestructuración de los espacios y lugares nacionales —ej. los mercados y los municipios, las chacras, los bosques y los caminos que constituyen las instituciones y paisajes locales. En el proceso, la reestructuración territorial se topa con la fricción, el deterioro y la resistencia, todo lo cual puede llevar a resultados inesperados para el Banco, el gobierno o la compañía. La resistencia efectiva a la reestructuración territorial y en favor de los medios de vida indígenas, o la reforma agraria redistributiva, no solo requieren desenmascarar los intereses primarios del capital que se encuentran detrás de las estrategias de desarrollo rural impulsadas por el Banco, sino también necesitan identificar las inherentes fisuras en estas alianzas.

Dejando de lado, por el momento, el discurso del Banco sobre el desarrollo,<sup>1</sup> la estructura de gobierno del Banco Mundial asegura que sus operaciones privilegien el “desarrollo” del capital del Norte. Con el fin de facilitar los intereses de los negocios de las corporaciones que apoyan a sus gobiernos prestamistas, miembros del G-8, el Banco debe crear condiciones estables para la producción y extracción de la riqueza de los Estados-nación en el Sur global, donde las condiciones son social, política o económicamente inestables. Esta tarea —que no es lo mismo que trabajar para estabilizar estos Estados-nación per se— es cumplida mediante la reestructuración de condiciones no solo a escala nacional, sino a escala territorial, donde en rigor se da la inversión extranjera directa (IED).

Los créditos del Banco Mundial en Guatemala son un ejemplo a través del cual se puede percibir cómo la reforma agraria, los proyectos medioambientales y los proyectos de infraestructura forman todos parte de un paquete de intervenciones institucionales y financieras que favorecen el desarrollo de las industrias extractivas extranjeras que operan en el Altiplano Occidental del país. Mientras que los proyectos del Banco destinados a la reforma agraria y los servicios medioambientales fracasan en sus propios y declarados términos, el paquete general de proyectos y políticas del Banco tiene éxito en establecer un puerto de entrada para las industrias extractivas en el Altiplano. Al mismo tiempo que los préstamos públicos del Banco promovían la reforma agraria asistida por el mercado, su brazo de préstamos al sector privado estaba ayudando a *Glamis Gold Ltd.*,<sup>2</sup> una corporación canadiense-estadounidense, a reabrir la mina Marlin en el Departamento de San Marcos. Reac-

- 
1. Este se puede resumir en: “Nuestra misión: Combatir la pobreza con pasión y profesionalidad para obtener resultados duraderos, y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores público y privado”. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:20889264~menuPK:2450052~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html>
  2. La empresa Goldcorp Inc. compró Glamis Gold en noviembre, 2006.

tivada a pesar de las protestas locales de las comunidades indígenas, la mina abrirá el Altiplano a las operaciones de oro, níquel y, pronto, uranio.<sup>3</sup>

Los proyectos de reforma agraria del Banco Mundial tienen que ser considerados como parte de una tendencia más comprensiva a favor de la *reestructuración territorial*. Ocuparse del Banco a partir de sus programas de reforma agraria asistidos por el mercado —cuando la fuerza impulsora de la reestructuración territorial es la expansión del sector minero— podría no ser la forma más efectiva de conservar el medioambiente, proteger los intereses de las comunidades indígenas, o siquiera promover una reforma agraria redistributiva. Sin embargo, una comprensión de la naturaleza de la reestructuración territorial es importante para analizar la importancia de los programas de reforma agraria del Banco Mundial, para identificar las amenazas estructurales a los medios de vida de los campesinos y para plantear estrategias territoriales efectivas para la negociación o la resistencia.

## 2. La reforma agraria y el control territorial

Las denuncias privadas, legalizadas por el Estado, sobre la propiedad [...] pueden lograr que las economías rurales sean “seguras” para las inversiones; a su vez, [estas inversiones conducirán] al crecimiento económico, y [...] a la erradicación de la pobreza. (World Bank, 2003: xix, en Borras Jr. 2006).

Hoy en día, en Latinoamérica los esquemas de reforma agraria impulsados por el mercado tienen el propósito de establecer derechos formales de propiedad. En términos históricos, estos han estado sesgados hacia tenencias individuales antes que comunales o colectivas. Pero en el propio terreno, la preocupación no es tan solo por la forma social de titulación, sino también por cómo es

---

3. “El proyecto es visto por la industria minera como una prueba del ambiente de inversión minera de Guatemala. Su éxito comercial deberá alentar nuevas inversiones en el país y el sector” (IFC, 2004:4).

asignado el poder sobre la producción y por cómo es distribuido el excedente. Según Borrás (2006:125), la reforma agraria redistributiva significa “el control real y efectivo de la ‘naturaleza, ritmo, magnitud y dirección de la producción y extracción del excedente de la tierra y la distribución de tal excedente’”, desde la elite terrateniente hacia el campesinado.

Pero tener tierra y controlar el flujo y acumulación del excedente, significa controlar el territorio. Las condiciones estructurales determinan las formas e influyen en los tipos de producción, y canalizan el flujo y la acumulación de excedente dentro de los territorios. Las políticas (y proyectos) regresivas pueden ocasionar cambios estructurales que disminuyen o transfieren el control territorial sobre recursos desde los pobres que poseen tierras y desde las comunidades indígenas a poderosas elites o a intereses extranjeros.

La reestructuración territorial implica la negociación, ajuste y reubicación de los costos y beneficios del excedente de la producción, siguiendo una “lógica del territorio” y una “lógica del capital” (Harvey, 2003). La primera lógica incluye actividades tales como la privatización, las reservas medioambientales y reformas agrarias, mientras que la segunda podría utilizar los instrumentos de inversión, liberalización del mercado, despojo, etc. La lógica del territorio está preocupada por el lugar, mientras que la del capital lo está por el espacio. La reforma agraria, por supuesto, es solo un medio de apropiarse o reestructurar el territorio. Debido a la débil capacidad de planificación y regulación de muchas Estados-nación del sur, la infraestructura —caminos, electricidad, o generación de energía eléctrica— son también medios principales para la organización y el control.

Puesto que la apropiación del excedente con frecuencia está en disputa —nacional e internacionalmente— los intentos de reforma agraria deben ser comprendidos dentro del contexto de proyectos que compiten por el control territorial. La reforma agraria llevada a cabo dentro del contexto de una reestructuración territorial regresiva podría, o no, lograr los resultados distributivos

que se propone; pero también podría ser del todo abandonada. Los movimientos por la reforma agraria redistributiva y sostenible, y por el uso equitativo de la tierra, deben de tener en cuenta la interacción entre los programas oficiales de reforma agraria y el conjunto de proyectos y políticas que influyen en las condiciones estructurales y determinan el control sobre el territorio. Por supuesto, el Banco Mundial es la principal institución global responsable de establecer las condiciones estructurales tanto a escala nacional como subnacional.

### **3. El contexto internacional y el rol de las instituciones financieras internacionales**

La “condición de sobreproducción” del capitalismo moldea directamente el contexto estructural a escalas globales. Se caracteriza por una excesiva extracción de excedentes y crisis cíclicas de acumulación de capital, en las que la formación y concentración de capital se encuentran sin oportunidades disponibles para reinvertir y/o la correspondiente capacidad del mercado de consumir los bienes producidos. Siguiendo una tendencia de veinte años de masiva acumulación de capital, las instituciones financieras globales enfrentan actualmente el problema de tener que pagar grandes cantidades de intereses por sus activos líquidos. Estas instituciones deben otorgar créditos extensivamente para transferir la carga del “exceso de liquidez” a los prestatarios.

Estos préstamos abren oportunidades, particularmente en las actividades con retornos rápidos, altos, pero riesgosos, tales como las industrias extractivas.<sup>4</sup> Las oportunidades para invertir y extraer son facilitadas y limitadas por los actuales ambientes de inversión en el Sur Global. Por un lado, a lo largo de las últimas dos décadas el desvalijamiento de los estados del sur a través de los programas

---

4. En el caso de la mina Marlin, por ejemplo, los costos totales de operación de Glamis son solo de \$ 121/onza (IFC, 2004). Empleando los actuales precios mundiales promedio del oro (aproximadamente \$ 650/oz.), esto le da a la empresa un retorno de su inversión del orden del 437 %.

de ajuste estructural (PAE) del FMI-Banco Mundial han dejado debilitados a los gobiernos y con incapacidad de brindar garantías políticas, sociales y financieras a los inversionistas extranjeros. Por otro lado, esto también los ha vuelto dependientes de la inversión extranjera para su sobrevivencia como estados y, por tanto, vulnerables a los acuerdos sesgados a favor de las empresas extranjeras. Debido a los riesgos políticos y económicos involucrados en la explotación de estas oportunidades, las empresas y las instituciones financieras se vuelcan a las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo (por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID), para ofrecer las garantías financieras, políticas y sociales esenciales para sus inversiones.<sup>5</sup>

Gracias a su poderosa naturaleza multilateral, las IFI están en condiciones de forzar a los débiles gobiernos prestatarios a que modifiquen sus marcos reguladores y de inversión en favor de los inversionistas extranjeros. Y lo que es más importante, a diferencia de los bancos privados, las IFI están también en condiciones de moldear directamente las condiciones estructurales a nivel nacional y subnacional. Las principales IFI tienen dos ramas de crédito separados —privado y público— para realizar su trabajo. A nivel del Grupo del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ofrece préstamos al sector privado, mientras que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) ofrece préstamos a los gobiernos. La misma gente del Directorio del Banco que aprueba los proyectos para la reforma gubernamental, infraestructura, medioambiente y salud, aprueba también los préstamos de la CFI a los proyectos del sector privado en los que la

- 
5. Dada la misión del Banco Mundial, uno podría esperar que el Banco ayudara a los gobiernos débiles a negociar sólidos contratos redistributivos que contribuyan a la reconstrucción del Estado y al alivio a la pobreza. El hecho de que esto sucede rara vez se debe a que *la misión* de desarrollo y lucha contra la pobreza del Banco es secundaria frente a su práctica, la cual históricamente ha reflejado una estrategia de acumulación para países como los del G8 (basada en inversiones de alto riesgo y alto retorno como aquella en infraestructura y las de rápido retorno como las industrias extractivas) y de despojo para el resto.

CFI, no pocas veces, tiene una participación como accionista. Comparando el BIRF y la CFI con una mano y una guadaña, un líder campesino comentó una vez, “Lo que el Banco cultiva con una mano, lo cosecha con la otra”.

### *El caso de Guatemala*

En Guatemala, el desarrollo de las industrias extractivas está influido por un débil Estado-nación de posguerra (estrictamente controlado por una elite poderosa y victoriosa), y por los extraordinarios altos precios del oro en el mercado internacional.

En el primer caso, el gobierno de la coalición de partidos GANA de Óscar Berger realizó una campaña exitosa sobre la base de una plataforma de crecimiento económico a través de la “integración regional”, *i.e.*, el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el TLCC-RD.<sup>6</sup> El languidecimiento de esta última iniciativa y la incapacidad del plan para producir beneficios sociales en el corto o mediano plazo ha obligado a Berger (al igual que a los dos presidentes que le precedieron) a pasar a los recursos minerales del país como una fuente de ingresos y poder político. Pero en Guatemala, treinta y seis años de guerra civil han sacado a la mayoría de empresas de la zona rural. La revitalización del sector era una posibilidad remota hasta que durante el período 2001-2004 los precios internacionales del oro saltaron desde US\$ 277 a más de US\$ 400 la onza (Solano, 2005).

Según la CFI, el alza en los precios del oro se debe en gran medida a la “debilidad del dólar, las bajas tasas de interés real, el bajo crecimiento económico, el creciente riesgo geopolítico, la caída en la producción minera, la reducida capacidad de equilibrar los riesgos de parte de la mayoría de productores y la incertidumbre

---

6. El PPP —Plan Puebla Panamá— es una iniciativa de integración regional entre los países de América Central y los siete estados del sudeste mexicano. El PPP fue lanzado en México el año 2001. El TLCC-RD —el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana— fue firmado en los Estados Unidos el 5 de agosto del 2004.

en el mercado de valores patrimoniales” (IFC, 2004:13). Se añade a esto la explosiva demanda de las rápidamente crecientes clases altas y medias de la India y la China. De pronto, las minas alrededor del mundo —antiguas, de baja producción, abandonadas o de difícil acceso— han pasado a ser potencialmente rentables. En Guatemala, estos depósitos se encuentran en el Altiplano Occidental, el hogar de la mayor parte de la población indígena empobrecida del país.

Durante décadas, el Altiplano fue el escenario de los episodios de las violaciones más generalizadas y horrendas contra los derechos humanos las cuales fueron perpetradas por el gobierno y los paramilitares. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz del país en 1996, el Banco Mundial rápidamente le aconsejó al gobierno guatemalteco de Arzú la modernización del sector minero. Esto condujo a uno de los códigos de minería más draconianos desde la conquista española. De acuerdo con la nueva legislación minera, las empresas no solo son propiedad extranjera en un 100%, sino que las anteriores regalías obligatorias del orden del 6% fueron sustituidas por una de tan solo 1%, y el impuesto a la renta fue reducido del 58% al 31%. En un país donde los consumidores pagan hasta US\$ 140 mensuales por agua, las cantidades sustantivas de agua requeridas para procesar la mina de oro son gratis para las empresas mineras.<sup>7</sup> El otorgamiento de licencias fue agilizado, y si bien algunas regulaciones medioambientales fueron endurecidas, no se establecieron provisiones para aumentar la capacidad reguladora de los ministerios de minería o medio ambiente, convirtiendo así estos avances en meramente simbólicos.

El Banco y el actual gobierno de Berger racionalizaron este proceso de desregulación insistiendo en que estas concesiones atraerían nuevas inversiones hacia un sector políticamente riesgoso. En esta perspectiva, en algún momento futuro, los beneficios de la minería conducirían al desarrollo económico y social. Pero este argumento se basa en el supuesto de que el alto precio del oro y

---

7. La mina Marlin de Glamis utilizará anualmente 577,000 m<sup>3</sup> de agua (IFC, 2004).

las reservas auríferas del país durarán lo suficiente como para construir realmente una industria nacional luego de que expiren las concesiones mineras extranjeras, en 20 años a partir de la fecha. Si bien el oro actualmente se ha elevado a más de US\$ 650/oz., el *boom* del oro no durará para siempre. Las monedas se estabilizarán, la demanda llegará a su tope, y el Fondo Monetario Internacional —que actualmente posee más de US\$ 40,000 millones en reservas de oro— podría vender sus lingotes de oro en el mercado internacional con el fin de enfrentar su propia crisis financiera, haciendo que caiga el precio internacional y volviendo nuevamente no rentables las minas de baja producción. Para entonces, la empresa extranjera habrá conseguido sus ganancias y probablemente se retirará, dejando lo que sobra para las empresas nacionales y la limpieza del medio ambiente para los contribuyentes guatemaltecos, o peor aún, a los comuneros locales. Sin duda, el respaldo del Banco Mundial a la minería aurífera en Guatemala es una estrategia de corto plazo para una extracción intensiva, una que requiere no solo la manipulación directa del marco legal del país, sino también un amplio control sobre las estructuras territoriales en el Altiplano Occidental con el fin de garantizar la eficiente —si bien depredadora— extracción de excedente.

#### **4. La reforma agraria en la vertiente minera: la gente, el campo, los proyectos**

El control sobre la tierra y la mano de obra, así como la mitigación de los conflictos sociales, políticos y medioambientales, es una condición esencial para las industrias extractivas y, por lo tanto, un objetivo principal de la reestructuración territorial del Banco. La influencia territorial de la industria minera en el Altiplano se extiende sobre las *áreas de extracción* (minerales y agua), así como sobre el *área de influencia* (tierra y mercados laborales, caminos, árboles/madera, etc.). En efecto, la manipulación del espacio y del lugar a través de la reestructuración territorial prepara y es moldeada por las actividades que tienen lugar dentro de una *vertiente minera* que

constituye tanto el *punto de apoyo* socioeconómico y político de la industria como su *huella de ocupación* medioambiental. En la *vertiente minera*, la tierra, el trabajo, el capital y los servicios ambientales fluyen hacia, y son afectados por, las actividades mineras. La vertiente minera no es redistributiva; los recursos que fluyen hacia la mina no son devueltos con una riqueza que fluya de regreso al Altiplano. El privilegiar los intereses mineros “estructura hacia adentro” el acceso del sector a los recursos y “estructura hacia afuera” cualquier repatriación o distribución significativa de ganancias. También estructura hacia afuera cualquier alternativa seria o estrategia de desarrollo sostenible que pudiera mejorar los medios de vida de las poblaciones rurales, exacerbando de este modo el deterioro de las condiciones socioeconómicas en la zona rural del Altiplano. Por lo tanto, mientras que algunos recursos en la vertiente minera (como la tierra, el agua y la electricidad) fluyen hacia la mina, otros (como la mano de obra rural) fluyen totalmente hacia fuera del campo. Sin medidas de mitigación efectivas, la minería drenará directa e indirectamente al Altiplano de sus recursos naturales y humanos.<sup>8</sup>

Por lo tanto, no es una coincidencia que la vertiente minera en el Altiplano Occidental coincida con las áreas de influencia de los proyectos del Banco para infraestructura, desarrollo económico, servicios medioambientales y reforma agraria. Se orienta también a la mayoría de las poblaciones indígenas, pobres, principalmente agricultoras del país —las mismas comunidades que fueron devastadas por la guerra civil.

## **5. Desde la estrategia de asistencia al país hasta la reestructuración territorial**

Si bien Guatemala tiene la economía más grande de Centroamérica, tiene también uno de los grados más altos de desigualdad en toda Latinoamérica, con el segundo peor coeficiente Gini (0.57)

---

8. La mina Marlin hace uso de 7 km<sup>2</sup> de tierra, 15.3 MW de electricidad más los 577,000 m<sup>3</sup>/año de agua ya mencionados (IFC, 2004).

en el continente. La pobreza está concentrada en las áreas rurales del país y en las comunidades indígenas, que dan cuenta de más de la mitad de la población rural.<sup>9</sup> En el densamente poblado Altiplano Occidental, los pueblos indígenas de varios grupos Maya (Kiché, Kaq'chikel, Mam y Q'eqchi) representan entre el 57% y el 90% de la población. Cerca del 70% de los habitantes del Altiplano son rurales, pobres o extremadamente pobres. Más de la mitad de la población logra su sustento mediante la agricultura de subsistencia (World Bank, 2005).

El actual portafolio de US\$ 255 millones que tiene el Banco en Guatemala es desembolsado a través de su brazo de inversión “social” en el sector público (BIRF), en áreas de educación; nutrición y salud materno-infantil; desarrollo local y rural (incluido el medio ambiente); administración de tierras; y gestión del sector público. Los brazos del sector privado del Banco (CFI y MIGA), “complementan los créditos del BIRF para cambios institucionales y de políticas [...] mediante inversiones y asistencia técnica en los sectores de banca y seguros, infraestructura, industrias extractivas, manufactura [...] y los sectores de valor exportadores con valor agregado” (Ibíd., 2005: 25). La CFI tiene US\$ 139 millones en su portafolio guatemalteco.

Según el Banco Mundial, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el gobierno de Guatemala (GG) ha cambiado su foco de atención en los programas rurales. El Banco apoya el plan de reactivación económica del presidente guatemalteco Óscar Berger, *¡Vamos Guatemala!*, cuyos tres componentes (*Guate Solidaria Rural*, *Guate-Invierte*, *Registro de Información Catastral*) son vistos por el Banco como capaces de lograr un impacto sobre la pobreza y fortalecer la Secretaría de Asuntos Agrarios (Ibíd.).

*¡Vamos Guatemala!* y el portafolio del Banco Mundial tienen la intención de abrir el campo al recientemente aprobado TLCC-RD para “brindar oportunidades para acelerar el desarrollo y el

---

9. Población rural-61%; indígena-39%; pobre-74%; extremadamente pobre-24%; analfabeta-43%; población indígena en áreas rurales-80% (52% de la población).

crecimiento en Guatemala —incluso a través de la atracción de nuevas inversiones al país [...]”. En un pasaje cándido de su Estrategia de Asistencia al País (EAP),<sup>10</sup> el Banco señala que los campesinos indígenas dependientes de “mercancías agrícolas sensibles” (*i.e.*, esos granos básicos cultivados para su subsistencia) requerirán un apoyo en:

Actualización tecnológica, sustitución de cultivos o apoyo para dejar la agricultura, complementado con acciones para estimular el desarrollo de mercados financieros más profundos [...]. Las deficiencias en la infraestructura guatemalteca tales como las redes viales [...] requieren ser atendidas para cosechar las potenciales ganancias del TLCC-RD. (World Bank, 2005: 26).

Para contribuir a la penetración del TLCC-RD, el Banco propone un creciente acceso a los activos productivos y a la infraestructura rural, junto con actividades de “generación de demanda” concentradas en el Altiplano Occidental. De manera ostensible, el Altiplano es considerado un objetivo debido a que su situación de altas tasas de pobreza y altas densidades de población ofrecen la mejor oportunidad para lograr impactos de desarrollo positivos. No obstante, el Altiplano es territorialmente estratégico en términos de los mercados laborales, la agroindustria, los servicios medioambientales y los minerales. Entre otros objetivos, la estrategia del Banco identifica específicamente la descentralización de la “gestión con un *énfasis territorial*” (cursivas agregadas).

El Banco recomienda vincular los programas de infraestructura con la provisión de financiamiento (microcrédito) y asistencia téc-

---

10. La EAP (o Country Assistance Strategy en inglés) es la guía general para las operaciones del Banco a escala nacional. En ocasiones la EAP es discutida en el Parlamento o Congreso del país prestatario. Ocasionalmente, las organizaciones de la sociedad civil son invitadas a comentar la EAP. Pero, y de manera importante, la EAP es generalmente formulada *después* de que los “préstamos condicionados” (los préstamos condicionados a medidas de ajuste estructural) ya han sido acordados entre el Banco y el gobierno a nivel del Gabinete, exonerando así a las intervenciones estructurales primarias del Banco del escrutinio del Congreso o del debate público.

nica con el fin de desarrollar industrias locales y microempresas, mediante el “empaquetamiento” a nivel territorial y también a través de intervenciones políticas identificadas, tales como la aprobación de la ley de aguas.

Entre muchos documentos de estrategia nacional, la EAP da el marco al contexto de políticas en el que los proyectos específicos del Banco serán implementados mediante el establecimiento de los términos y objetivos generales del desarrollo financiado por el Banco. Pero en sí y por sí misma, la EAP no es suficiente para determinar qué es lo que realmente se hace sobre el propio terreno. A pesar de la retórica orientada por el mercado del Banco Mundial, los proyectos auspiciados por el gobierno y financiados por el Banco son necesarios para promover los intereses del capital privado internacional. Puesto que implican un endeudamiento nacional, frecuentemente estos proyectos requieren ser aprobados en los congresos o parlamentos. Los impactos o consecuencias potenciales de estos proyectos usualmente entran en conflicto con influyentes intereses sectoriales privado y estatal en los gobiernos de los países prestatarios. Mientras que los proyectos del Banco para la reforma tributaria, la reforma agraria o los servicios medioambientales contribuyen todos al “cambio rápido” del capital financiero internacional desde las alturas desreguladas del TLCC-RD hasta las oportunidades de inversión específicas a nivel subnacional, estos proyectos en ocasiones van en contra de los intereses de las elites nacionales, quienes no están dispuestas a asumir una deuda pública por proyectos que reducen sus rentas (tales como la reforma tributaria), o que socavan su control sobre los recursos (tales como la reforma agraria) y que podrían favorecer a ciertos enclaves en desmedro de otros, o simplemente podrían no brindar oportunidades lo suficientemente interesantes para sus comportamientos rentistas. Por lo tanto, las negociaciones sobre los proyectos frecuentemente reflejan disputas nacionales-internacionales e intranacionales con respecto a las rentas y recursos a escalas territoriales.

La geografía del enfoque territorial del Banco está vagamente definida por un área física estratificada por proyectos que se super-

ponen y está circunscrita por acuerdos de comercio y por un marco de políticas nacionales. La convergencia de políticas nacionales, los proyectos del Banco y los acuerdos regionales producen un campo de desarrollo o “hiperespacio” a escala subnacional en el que poderosos capitales dejan al margen a los capitales más débiles o no consolidados para acceder a recursos y a la extracción de riqueza. La creación institucional o *espacial* de este hiperespacio, a su vez, define el lugar del área geográfica en el que se realiza la reestructuración territorial, no tanto por el diseño inteligente del Banco, sino en conformidad con las lógicas del capital y del territorio articuladas por la principal institución mundial para el desarrollo del capitalismo internacional.

Por cierto, cualquier reestructuración dentro de un territorio pobre, densamente poblado y primordialmente agrícola, necesariamente encarará problemas agrarios, aunque no necesariamente con el objetivo de redistribuir activos, aliviar la pobreza o incluso la intensificación de la producción agrícola minifundista. Una lectura del conjunto específico de proyectos —exitosos y fallidos— ayuda a determinar (más allá de la retórica de desarrollo del Banco, y a espaldas del marco de trabajo de la EAP), el significado de los programas de reforma agraria del Banco Mundial.

## **6. Los caminos al oro son pavimentados de buenas intenciones: el paquete Altiplánico del Banco Mundial**

Una revisión de la historia de los 1,800 millones de dólares estadounidenses invertidos por el Banco en Guatemala revela una tendencia gradualmente creciente de los desembolsos, gracias a un salto repentino en los préstamos luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. En 1997 el Banco presentó un proyecto de \$ 13 millones destinado a preparar las condiciones para la privatización de la empresa telefónica, los caminos y los puertos propiedad del estado.<sup>11</sup> Esto fue rápidamente seguido por tres proyectos que

---

11. “[...] para preparar a los sectores de infraestructura seleccionados —puertos, energía, telecomunicaciones, autopistas, servicio postal— para ser concesionados

sumaron un total de más de \$ 133 millones, desembolsados todos durante el mismo año. En total, durante el período 1997-2005, el BIRF introdujo 24 proyectos distintos que totalizaron 859 millones de dólares, con lo que en nueve años le prestaban a Guatemala más de lo que le habían prestado en los últimos 40 años. El paquete de proyectos del Banco postacuerdos incluyó siete proyectos de inversión de la CFI por 139 millones, el más grande de los cuales estuvo destinado a la Mina Marlin de la Glamis Gold Corporation- \$ 45 millones, otorgado en el 2004 (véase gráfico 3.1).

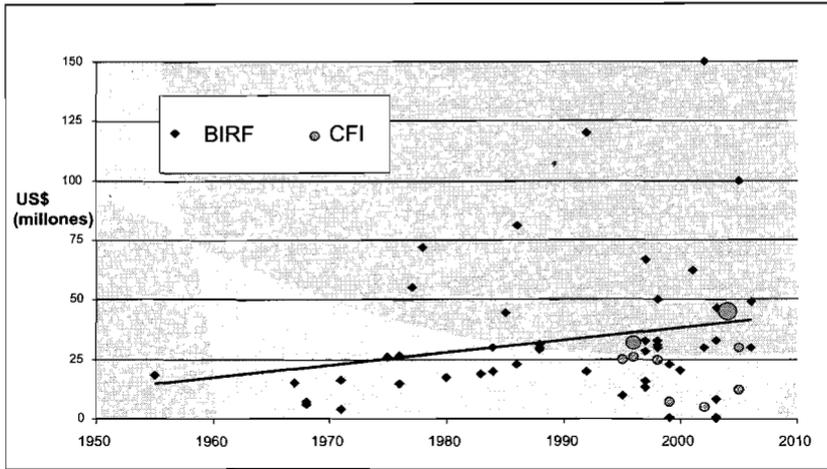
La última década de préstamos del Banco Mundial en Guatemala ha estado marcada por un renovado énfasis en el sector privado y un esfuerzo sostenido por llevar a la zona rural las “oportunidades” de la desregulación y la privatización.<sup>12</sup> El Altiplano Occidental recibe una atención especial. Desde los Acuerdos de Paz, cerca de una tercera parte de los proyectos de préstamos del Banco (del BIRF o la CFI) han estado destinados directa o indirectamente al Altiplano Occidental:<sup>13</sup>

---

y privatizados”. Documento de Evaluación de Proyecto, Participación Privada en el Préstamo de Asistencia Técnica para Infraestructura, 2 de abril, 1997.

12. Si bien los documentos de la EAP y de Evaluación de Proyecto del Banco son ampulosos cuando se refieren a los beneficios potenciales para los pobres en este aspecto, el Banco rara vez mide los impactos reales de las intervenciones de sus proyectos sobre la pobreza y, de esta manera, evita tener que informar sobre si han alcanzado o no los resultados esperados. Los funcionarios del Banco intentan mitigar la crítica sobre este punto mencionando la imposibilidad de un “control fáctico”. En otras palabras, dado que no existe un “caso de control” del desarrollo en la cual todas las variables puedan mantenerse constantes, es imposible saber si el progreso económico (o el retroceso) de un país dado se debe a los proyectos del Banco o a factores ajenos. A menos que masivas protestas públicas o eventos incontrovertibles sugieran lo contrario, el Banco simplemente asume que sus proyectos concluidos han sido exitosos.
13. Incluso el *Proyecto de Reforma Judicial* informó acerca de sus primeras actividades en el Altiplano “El trabajo sobre el proyecto piloto de justicia móvil de los juzgados de Paz está en ejecución en la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango [...] El Centro de Justicia de Quetzaltenango fue inaugurado en octubre del 2004” (WB-SOPE, p. 1182). El *Proyecto de Competitividad* también informó de su apoyo a “la Corporación Financiera Internacional CFI en el sector minero [...]”, una referencia eufemística a la mina Marlin en San Marcos.

**Gráfico 3.1**  
**PRÉSTAMOS DEL BANCO MUNDIAL A GUATEMALA**



- El *Proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Local* —US\$ 33.5 millones— orientado a San Marcos y Huehuetenango para proyectos de desarrollo comunitario a nivel de poblados.
- El *Proyecto de Fondo de Tierras* —US\$ 23 millones— iniciado en enero de 1999.
- El *Proyecto Carreteras principales y secundarias II* —US\$ 46.7 millones— destinado específicamente a San Marcos y Huehuetenango en el Altiplano Occidental, continuó en el 2003.
- El *Proyecto de Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Altiplano de Guatemala*, que comprende un proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) por US\$ 8 millones y un proyecto del BIRF por US\$ 32.8 millones, aprobado en mayo del 2003.
- El *Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Economía Rural* —US\$ 30 millones— cofinanciado con el Banco Interamericano de Desarrollo y aprobado en marzo del 2006.

- El *Proyecto de Administración de Tierras II* —US\$ 50 millones— un esfuerzo para aplicar las “lecciones aprendidas” del primer proyecto de administración de tierras realizado en El Petén del Altiplano Occidental (en trámite al momento de escribir este texto).
- La *Mina Marlin* —US\$ 45 millones— a Glamis Gold Ltd. de parte de la Corporación Financiera Internacional para reabrir la mina aurífera Marlin en San Marcos.

En primer lugar, como respuesta a las condiciones semif feudales que desencadenaron la Guerra Civil de 36 años, luego de los Acuerdos de Paz, el Banco Mundial introdujo la reforma agraria basada en el mercado con el *Proyecto de Administración de Tierras* (1998).<sup>14</sup> Según el Documento de Evaluación del Proyecto, sus objetivos (todavía en ejecución) son:

- a) Incrementar la seguridad legal de la tenencia de tierra en Guatemala; y
- b) Fortalecer el marco legal e institucional para los servicios de registro y catastro de tierras a nivel nacional.<sup>15</sup>

---

14. Según el Ministerio de Agricultura, en Guatemala, de 10.6 millones de hectáreas, solo 2.8 millones están cultivadas y más de 2.4 millones están subutilizadas; 0.15% de los productores ocupan el 70% de la tierra arable; 96% de los productores ocupan el 20% de la tierra arable; 90% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza; 500,000 familias viven por debajo de los niveles de subsistencia (véase Saldívar y Wittman, 2005).

15. “El proyecto incluye dos componentes. En primer lugar, el catastro y la regularización de la tierra apoyará el mapeo del catastro de El Petén, la adjudicación en campo cuando sea solicitada y el procesamiento de información de áreas sujetas a regularización. El resultado final es el establecimiento de un catastro en base a parcelas que pueda estar integrado al sistema de registro. En segundo lugar, el componente de registro de tierras apoyará el establecimiento de una oficina de registro en El Petén y la modernización del manejo del registro de tierras”. Banco Mundial, Resumen del Proyecto, <http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64312881&piPK=64302848&theSitePK=40941&Projectid=P049616>

Sin embargo, en contra de los deseos del Banco, el gobierno guatemalteco no implementó el proyecto en el Altiplano Occidental, señalando que:

El Altiplano es el área más densamente poblada y se considera que tiene los mayores conflictos de tierras [...] representa un área de alto riesgo, de alta rentabilidad. [Pero] debido a la falta de experiencia en la regularización de la tierra en el país, el GG solicitó que esta opción fuera descartada, debido al alto efecto demostrativo de un primer proyecto piloto, a favor de un área [El Petén] de bajo riesgo. (World Bank, 1998: 8).

El Proyecto de Fondo de Tierras, a escala nacional, siguió adelante sin una protesta inicial del gobierno. Con este proyecto el Banco intentó apoyar a FONTIERRAS para:

- a) Establecer un programa que facilite a los beneficiarios el acceso a la tierra;
- b) Apoyar a los beneficiarios para que accedan al financiamiento del subproyecto de asistencia técnica y productiva; y
- c) Mejorar el marco legal e institucional para que los mercados de tierras funcionen de manera más eficiente.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, durante el período 1994-2000, con el financiamiento público, INTA/FONTIERRAS solo benefició a unas 4,000 familias para la adquisición de tierras y para subsidios y asistencia técnica (Saldívar, 2005). El gobierno fue incapaz de establecer un mercado de tierras funcional y privatizó principalmente las tierras públicas en desuso. Eventualmente, este simplemente canceló el proyecto, no dispuesto a seguir adquiriendo deuda por un proyecto que tenía poco respaldo entre los políticos (Garoz, 2005).<sup>16</sup>

---

16. Según el Banco Mundial, los esfuerzos tempranos de reforma agraria orientada por el mercado realizados por INTA/FONTIERRAS (1994-1996) fueron relativamente infructuosos debido a la reticencia de parte de los grandes terratenientes, la especulación de tierras, la falta de ahorros de parte del campesinado y la ambigüedad de los derechos de propiedad.

### **Reservas medioambientales**

El 2003, el Banco Mundial intentó introducir un proyecto medioambiental gigantesco de US\$ 50 millones en el Altiplano Occidental. El Proyecto *Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Altiplano* (MIRNA) fue un sueño medioambientalista norteño. Según el Banco, MIRNA conservaría el medioambiente y combatiría la pobreza en el Altiplano mediante:

- a) El incremento del capital social en torno al manejo de los recursos naturales a través del apoyo a comunidades, organizaciones y autoridades locales (tradicionales y municipales) para que en forma conjunta definan e implementen una visión local del desarrollo que tome en cuenta el manejo de los recursos naturales y los objetivos de sostenibilidad;
- b) Mayores oportunidades para mejorar de manera sostenible la productividad y diversificar la agricultura y otros sistemas de medios de sustento (fuera de la tierra);
- c) Ampliar y fortalecer los esfuerzos en curso de las comunidades indígenas para establecer áreas permanentes de conservación en medio de amplias zonas de biodiversidad de importancia mundial, y para mantener los hábitat que sostienen esta diversidad; y
- d) Establecer y monitorear un marco legal para un mercado de servicios medioambientales que sostengan las iniciativas locales de conservación.<sup>17</sup>

El Banco concibió MIRNA como un “proyecto de desarrollo de los pueblos mayas”, diseñado para garantizar medios de vida sostenibles y para conservar la biodiversidad. Por supuesto, el establecimiento de reservas de biodiversidad en bosques altamente

---

17. Resumen del Proyecto, 7 de mayo 2003. <http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P064883>

poblados e intensamente manejados excluyó necesariamente estos recursos de las estrategias de sustento de las comunidades indígenas circundantes. El proyecto propuso medidas para mitigar una “desaparición” de los recursos disponibles centrándose en la conservación del bosque, suelo y agua en parcelas privadas, y mediante la intensificación de la producción tanto agrícola como fuera de la tierra. Muchos aspectos de la propuesta buscaron consolidar el control de las comunidades indígenas sobre los recursos naturales involucrando a los indígenas tradicionales en la regulación de la tierra y los recursos, y en las decisiones concernientes a la conservación.

Dejando de lado la viabilidad política y económica de una propuesta que no encaró específicamente las causas de la pobreza en el Altiplano —e intencionadamente evitó cualquier referencia al oro, el recurso natural más “vendible” de la región— debido a que cerca del 15% de los bosques y praderas del Altiplano son manejados comunalmente (World Bank, 2003),<sup>18</sup> MIRNA también era equivalente a una reserva medioambiental de tierras indígenas. De manera consistente con la estrategia de asistencia al país, el proyecto asumió que crear mercados para la conservación era la clave para alcanzar los medios de vida sostenibles en el Altiplano Occidental. Esto requirió privatizar los servicios ambientales, los recursos ubicados sobre la superficie, y la tierra. Para poder crear las reservas

---

18. EIA MIRNA: Los datos del INAB indican que para el Altiplano Occidental existen al menos 1047.2 km<sup>2</sup> de bosques comunales o municipales, los cuales representan un 50.9% del total nacional de bosques comunales. Al mismo tiempo, estos bosques, que constituyen más de 90, representan un 14.6% del total de la cobertura forestal reportada por el INAB (1999) para el Altiplano Occidental. La distribución porcentual por departamento del Altiplano Occidental es la siguiente: Totonicapán 7.3%; Sololá 9.6%; Quiché 29.9%; Chimaltenango 3.0%; Huehuetenango 32.2%; Quetzaltenango 17.0% y San Marcos 1.0%. Leiva (2,000) analizó algunas características silviculturales de 115 bosques del Altiplano Occidental y encontró que 56 de ellos tienen extensiones que superan las 100 ha. Elías (1995) realizó un inventario de más de 95 bosques comunales y municipales y encontró que al menos 17 de ellos superan las 500 ha.

de biodiversidad y garantizar rentas para la serie de servicios medioambientales del Altiplano, tenían que garantizarse los derechos de propiedad, y las tierras comunales y privadas debían ser tituladas, haciendo que fuera una prioridad la regularización de la tierra. De este modo, MIRNA intentó lograr mediante la planificación ambiental lo que el proyecto de Administración de Tierras no había sido capaz de hacer a través de los mercados de tierras: titular y privatizar la tierra en el Altiplano Occidental.

Pero debido a su potencial para la redistribución, el desmantelamiento de las “tierras públicas” mediante la titulación privada desmantelaba las relaciones sociales existentes, tal como lo hace la “creación” de tierras públicas para los servicios ambientales. Esto generó la resistencia de las elites terratenientes de Guatemala. No sorprende que MIRNA fuera rechazado por el Congreso de Guatemala en el 2004. Lamentando que lo que determinó el Banco era inoportuno, la Nota de Finalización del Proyecto (World Bank, 2005) establece,

Los factores principales que condujeron a la cancelación del proyecto Manejo Integrado de Recursos Naturales del Altiplano fueron:

- (i) El fracaso del gobierno para lograr el consenso y conseguir las aprobaciones legislativas requeridas para la eficacia del proyecto antes de las elecciones nacionales y el cambio de gobierno; y
- (ii) La muy difícil situación fiscal que heredó el nuevo gobierno, lo que exigió establecer medidas de austeridad que obligaron a los ministros sectoriales a reevaluar sus prioridades.

En esencia, el Banco Mundial se fue en contra del rechazo de las elites guatemaltecas a pagar impuestos, el desinterés de la burguesía rural en la reforma agraria, y la incapacidad de las clases dirigentes de ver cualquier ventaja en darles a las comunidades indígenas cualquier control sustantivo (si bien limitado) sobre los recursos naturales en el Altiplano. La lección aprendida de FONTIERRAS y MIRNA es que los intereses de ciertas elites nacionales no son siempre consonantes con aquellos de las instituciones financieras internacionales. En el 2005, el Banco señaló:

[El] programa EAP tuvo [...] dificultad para alcanzar sus objetivos. Esto provino, en parte, de la falta de un compromiso del gobierno durante el período 2000–2003 con aspectos de la agenda de reforma establecida en 1998. Se debió también a los desacuerdos en la sociedad guatemalteca acerca de cómo seguir adelante. Por ejemplo, el proyecto *Fontierras* se vio afectado por la incongruencia del modelo adoptado por el gobierno; los componentes de financiación rural y de recursos naturales del programa EAP virtualmente se evaporaron. (World Bank 2005:37).

### ***“Cambios rápidos” para la reestructuración territorial***

Sin inmutarse por su incapacidad de alcanzar un acuerdo con la clase política guatemalteca sobre los términos ambientales de la producción y extracción en el Altiplano Occidental, el Banco viró hacia el comercio internacional, introduciendo el Primer Financiamiento para Políticas de Desarrollo de Amplia Base —US\$ 100 millones en junio del 2005. El préstamo se centra en promover el comercio y la inversión orientados al TLCC-RD. El Banco reconoció que el proyecto no sería fácilmente implementado. Entre los riesgos encontraban la “parálisis política” del Congreso guatemalteco, y las “tensiones societales” relacionadas con la situación de posconflicto del país, especialmente en torno a áreas controvertidas como la permanente liberalización del comercio, la promoción de una mayor participación privada en la infraestructura y temas en torno a la tierra y los derechos de propiedad. Para hacer frente a los resultados “más lentos de lo esperado” en el crecimiento económico de Guatemala, entre otras cosas, el Banco sugirió fortalecer el clima tanto para la inversión local como extranjera, la modernización de los derechos de propiedad y resolver los cuellos de botella en infraestructura para el crecimiento (World Bank, 2005: 8).

No sorprende que el Banco haya visto que “es fundamental para la agenda de crecimiento de Guatemala —así como para el logro de una mayor solidaridad social y un mejor clima de negocios— la cuestión de la seguridad de los derechos garantizados a la tierra” (Ibíd.: 11). Pero los derechos garantizados a la tierra

son fundamentalmente importantes en áreas con potencial para la extracción privada para los mercados globales y el TLCC-RD. Como un complemento territorial al préstamo focalizado a escala nacional, en marzo del 2006 el Banco introdujo también el *Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Economía Rural* (US\$ 60 millones), cofinanciado con el Banco Interamericano de Desarrollo.

El proyecto se centra en la infraestructura rural, instalaciones de banda ancha para Internet, planes de gestión territorial e inversiones estratégicas en el Altiplano Occidental.<sup>19</sup> Introduce específicamente el modelo de gestión territorial (MGT). Se espera que el MGT “influya en las políticas nacionales y sectoriales así como en las prioridades de inversión pública [...]”, mediante un sistema de información territorial estratégica integrado y descentralizado [...]” y se

[Espera] lograr un impacto positivo en el incremento de la competitividad de las actividades productivas basadas en el medio rural, lo que a su vez impactará en la expansión de las empresas y el crecimiento de las exportaciones y, por lo tanto, contribuirá a explotar los potenciales beneficios para Guatemala del recientemente ratificado Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (TLCC). (World Bank, 2006:4).

El Documento de Evaluación del Proyecto del Banco Mundial luce en parte como una operación militar con “objetivos territoriales”, caminos, y la producción de información estratégica en medio de la campaña estructural del TLCC-RD. El Banco no tuvo ningún problema para conseguir la aprobación del GG para un préstamo en el que las oportunidades del mercado no implicaban una redistribución de los activos. No es difícil imaginar qué sectores dentro de la sociedad guatemalteca están mejor posicionados para sacar ventaja del plan para la capitalización del proyecto.

---

19. San Marcos, Huehuetenango, Solalá, Quetzaltenango, Totonicapán, Chimaltenango, Sacatepequez y Alta Verapaz.

### *Encontrando oro en el hiperespacio*

Mientras tanto, tras las agendas (des)reguladoras, sociales y ambientales del BIRF, a espaldas de la mirada de los profesionales del desarrollo y los defensores de la reforma agraria, la única cosa sobre la que el Banco y el gobierno de Berger pudieron acordar completamente fue la apertura del Altiplano a la explotación minera. Según Solano (2005), para el 2005 el GG otorgó más de 115 nuevas licencias a empresas mineras extranjeras, alcanzando un total de más de 200 operaciones potenciales, de las cuales nueve de cada diez se hallaban en territorios indígenas del Altiplano (véase mapa 3.1).

En junio del 2004, la Corporación Financiera Internacional amplió un crédito sin garantía hipotecaria de US\$ 45 millones a la empresa canadiense Glamis Gold Ltd. —la cuarta empresa canadiense productora de oro— para que inicie operaciones en el departamento de San Marcos en la *Mina Marlin*. El proyecto no implicaba ninguna deuda para el gobierno, y la CFI le otorgó a Glamis y al GG garantías sobre el financiamiento y asesoría al proyecto de parte del Banco, *Marlin* evitaría el conflicto social y la degradación ambiental usualmente asociados con la minería. La CFI y la familia Berger estaban particularmente interesados en abrir la industria minera de Guatemala a nuevas inversiones.<sup>20</sup>

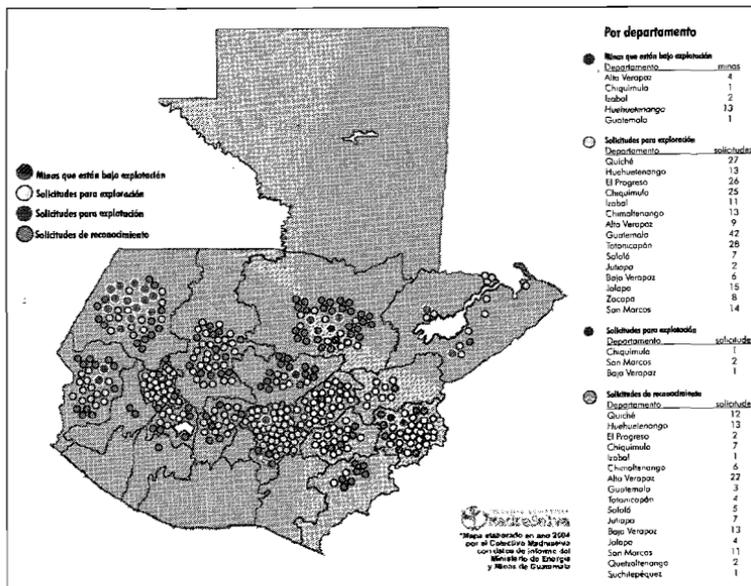
El Banco fue públicamente optimista acerca de las virtudes de su “sector minero, ambiental y socialmente responsable”:

El sector presenta un gran potencial para beneficiar a Guatemala si el desarrollo es respaldado e implementado de manera adecuada. En este contexto, la CFI ha estado apoyando al proyecto en varios frentes, incluidos los aspectos ambientales y sociales y el desarrollo de las comunidades circundantes (sic). Por ejemplo, el *Corporate Citizenship Facility* de la CFI financió una iniciativa de asistencia técnica para brindar capacitación a las comunidades indígenas que se encuentran en torno a

---

20. Sobre los vínculos de la familia Berger con los intereses mineros en Guatemala, véase Solano (2005).

Mapa 3.1  
MINERÍA A CIELO ABIERTO EN GUATEMALA



la mina para el desarrollo y gestión de viveros forestales para la reforestación, así como ayudándoles a identificar otros mercados a los que estos viveros podrían abastecer (World Bank, 2005:38).

El Banco reconoció que la reactivación de la minería en el Altiplano Occidental no era un tema simple. Percibió también un claro vínculo entre los problemas agrarios y el desarrollo minero:

El desarrollo [minero] ha sido también un tema altamente polarizado que ha dado lugar a grandes demostraciones de grupos indígenas y de ONG locales y extranjeras en contra de la minería en particular y del gobierno en general. La minería, en algún sentido, se ha convertido en un punto crítico de reivindicaciones en contra del Estado y el sector privado con respecto a los pasados abusos a los derechos humanos, la discriminación y la explotación económica. Esto también se manifiesta en una serie de conflictos por la tierra entre los campesinos y los grupos terratenientes, los cuales, en unos cuantos casos, se volvieron violentos. (World Bank, 2005: 57).

Abrazando fervorosamente la sugerencia del Banco Mundial para que el país “modernice” su sector minero a través de la inversión extranjera, el GG ya antes había reducido las obligaciones de regalías del 6% al 1%, y los impuestos sobre las ganancias desde 58% al 31%. Solo para Glamis Gold, el gobierno de Berger ofreció una exoneración tributaria temporal de cuatro años coincidente con el período de máxima producción de la mina (Solano, 2005).<sup>21</sup>

Un caso emblemático del sector minero en Guatemala, la mina *Marlin* rápidamente se convirtió en la operación más lucrativa de Glamis. Se estima que la mina producirá de 2.1 a 2.5 millones de onzas de oro y 29.2 millones de onzas de plata a lo largo de un período de once años.<sup>22</sup> En respuesta a la controversia internacional con relación a la mina, la CFI insiste en que

[Este] proyecto [...] puede ser operado de un modo responsable para ayudar a reducir la pobreza en la región y mejorar las vidas de las gentes. Nosotros les pediríamos a quien esté preocupado por la difícil situación del pueblo guatemalteco en esta empobrecida región que consideren objetivamente los hechos y la realidad de la situación.<sup>23</sup>

En una oportunidad estuve en una reunión con la CFI y varios representantes del pueblo de San Marcos quienes habían llegado a Washington, D.C. a exigir que el Banco le retirase su apoyo a la Mina Marlin. El gerente principal de la división de inversiones mineras de la CFI desafió directamente a los pobladores: “¿Ustedes quieren una mina, o quieren seguir siendo pobres para el resto de sus vidas?”.

- 
21. Cediendo ante la presión internacional, en julio del 2006, Glamis Gold anunció que renunciaría a la exoneración tributaria y empezaría a pagar impuestos inmediatamente sobre sus “súper” ganancias.
  22. “Los recursos auríferos totales incluidas las reservas proyectadas de la mina son de 5.6 millones de onzas. [Glamis] ha descubierto recientemente otro depósito de alta producción en el área circundante a Marlin” (IFC, 2004: 8).
  23. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20421886~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336930,00.html>

Su asombrosa pregunta no solo ponía de manifiesto la forma tan limitada en que la CFI concibe su misión de desarrollo,<sup>24</sup> sino que revela también, sin darse cuenta, la conveniente ficción territorial empleada por el Banco Mundial cuando apela al desarrollo local para justificar la extracción masiva de riqueza de los países pobres [...] Calculando a partir de las propias proyecciones de la empresa, durante los próximos 11 años, Glamis Gold probablemente habrá sobrepasado los US\$ 1000 millones en ganancias netas, *solamente a partir de una mina*. El gobierno guatemalteco está autorizado a quedarse con cerca de US\$ 273 millones, de los cuales US\$ 6.6 millones serán invertidos en las comunidades del ámbito de influencia de la mina.<sup>25</sup> El Banco Mundial ha invertido hasta el momento cerca de US\$ 228.2 millones en fondos públicos en la reestructuración territorial del Altiplano Occidental. Si tan solo la *mitad* de las ganancias de la Mina Marlin se hubieran utilizado en programas de desarrollo en la misma área geográfica, esto todavía representaría más del doble de la inversión pública del Banco Mundial. Cuando uno tiene presente que las inversiones del Banco Mundial son en realidad créditos al GG a tasas de mercado, la terrible ironía del cálculo de desarrollo del Banco es que los ciudadanos de

- 
24. “Nuestra misión es promover la inversión sostenible del sector privado en los países en desarrollo, contribuyendo a reducir la pobreza y a mejorar la vida de la gente”. <http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/Mission>
25. Glamis sostiene que ya ha invertido 1.3 millones en obras sociales en San Miguel Ixtahuacán, la comunidad más cercana a la mina. También ha ofrecido pagar a los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa cerca de US\$ 350,000 anuales en regalías. Paralelamente, Glamis y la CFI contrataron a Citizen’s Development Corps, con sede en Washington, para que creara la Fundación Sierra Madre que llevará a cabo proyectos de desarrollo comunitario. Los residentes de Sipacapa ya cuentan con un plan municipal de desarrollo integral que no fue tomado en cuenta. En reuniones sostenidas en Washington D.C. con representantes de las comunidades, la CFI presentó a los comuneros un escenario del tipo “y/o”: o ellos aceptaban la mina, o continuarán viviendo en la pobreza. Ni la CFI ni Glamis Gold han presentado a los comuneros las cuentas de los costos sociales, económicos o medioambientales de la mina. [http://www.bicusa.org/bicusa/issues/latin\\_america/2019.php](http://www.bicusa.org/bicusa/issues/latin_america/2019.php)

Guatemala le están pagando al Banco Mundial por el privilegio de enriquecer a empresas extranjeras como Glamis Gold.

Estos asombrosos niveles de extracción de riqueza serían imposibles sin la complicidad de las elites nacionales y las condiciones estructuralmente permisibles facilitadas por el Banco Mundial. Cuando el patrón de extracción de la vertiente minera de Glamis es extrapolado a la escala territorial de las más de 200 concesiones mineras en el Altiplano Occidental, la función del hiperespacio de desarrollo del Banco Mundial se hace obvia: el saqueo de los restantes recursos presentes en los territorios indígenas en Guatemala.

## **7. Conclusión: reforma agraria y la lucha por un territorio**

El futuro de los pueblos indígenas —y del campesinado— de Guatemala está inextricablemente unido al Altiplano Occidental. La titulación de tierras y el desarrollo del mercado de tierras es tan solo una parte de una gama de proyectos desarrollados por el Banco Mundial para una reestructuración territorial regresiva que favorece la inversión extranjera y las industrias extractivas por encima de los medios de subsistencia de los indígenas rurales.

Las actuales demandas de una reforma redistributiva de la tierra se centran acertadamente en la importancia de la tierra como factor de producción, un recurso social y una necesidad cultural para las comunidades campesinas indígenas. Este enfoque reconoce que la tenencia de la tierra siempre ha sido parte de un debate agrario más amplio que aborda la distribución de los activos y el control sobre la producción y la acumulación/distribución de riqueza.

Por lo tanto, el debate acerca de la importancia de la redistribución de la tierra como un factor de producción no puede ignorar las amenazas que enfrenta la condición de la tierra en tanto activo. La falta de suficiente tierra agrícola y forestal es, de hecho, un serio problema para los medios de subsistencia de los pueblos

indígenas. Pero la colonización de la tierra indígena *existente* por las industrias extractivas, amenaza por igual a los medios de subsistencia tanto de los campesinos con tierras como de los sin tierras. En este sentido, en Guatemala, la minería debe ser vista como una *amenaza agraria de ancha base*, no solo para los medios de subsistencia de los campesinos sino también para la propia existencia de los indígenas en el Altiplano. Esta amenaza surge no solo desde la vertiente minera —la huella digital de las externalidades sociales y ambientales asociadas con el acto físico de la minería— sino que es inherente a la transformación política y económica del territorio rural asociado con el hiperespacio de desarrollo reestructurado y creado por el Banco Mundial, el mismo hiperespacio que posibilita que actividades como la depredadora minería aurífera comience a echar raíces.

A pesar de su discurso de desarrollo humano, el Banco Mundial trata la relación entre la tierra y los recursos no desde el punto de vista de los medios de vida indígena, sino desde la lógica del capital y la lógica del territorio. Al denunciar la reforma agraria del Banco basada en el mercado, los movimientos campesinos reconocen correctamente la lógica del capital enclavada en los proyectos del Banco. Sin embargo, al enfocarse solamente en la reforma agraria y en la agricultura, estos argumentos omiten la lógica del territorio a través de la cual el Banco fundamenta sus proyectos para el capital. Esto le permite al Banco Mundial reestructurar agresivamente el territorio, por un lado, aun cuando haga pocos progresos en los proyectos de reforma agraria, gestión ambiental o desarrollo agrícola. La realidad política de la reestructuración territorial sugiere la necesidad de fundamentar tanto las luchas por los medios de subsistencia como los movimientos por una reforma agraria redistributiva en las estrategias de *resistencia territorial*. Esto implica no solo oponerse a las formas mediante las cuales el capital, a través del Banco Mundial, altera, rediseña y acomoda a las comunidades indígenas y los medios de subsistencia en función de sus propias lógicas, sino que requiere que las comunidades indígenas implementen sus propias acciones directas y

planteen sus propias propuestas para una reestructuración territorial “desde abajo”.

Las luchas por los medios de subsistencia que implementan estrategias sostenibles encabezadas por campesinos serán de poca utilidad si es que la tierra, el agua, y los agricultores se pierden en manos de los intereses mineros. Las luchas por la reforma agraria podrían tener éxito en congregar a los campesinos sin tierra contra la reforma agraria orientada al mercado, pero sin la participación de los pequeños propietarios ni de las comunidades indígenas, es probable que esto no incline la balanza a favor de reformas redistributivas. Fundamentar la reforma agraria en la resistencia territorial les permite tanto a los campesinos sin tierra y a aquellos con tierra converger en plataformas comunes que luchan por medios de subsistencia y sobrevivencia. También brinda una oportunidad para vincular las luchas concretas por la tierra y los medios de subsistencia a luchas abstractas —tales como la oposición al TLCC-RD.<sup>26</sup> Como en muchas áreas de Latinoamérica, fundamentar las luchas por la tierra dentro de las luchas territoriales también vincula la tierra, los medios de subsistencia y la reestructuración política-económica al lugar. Para la mayor parte de pueblos indígenas, el lugar es tan básico como el lenguaje. Dado que la defensa del lugar es por excelencia una cuestión de territorio, el lugar nunca está lejos de la superficie de las demandas de los campesinos indígenas por la tierra. Inversamente, por lo tanto, las demandas por la tierra nunca deben estar lejos de la defensa del lugar.

A lo largo de la próxima década, las luchas agrarias por la tierra en el Altiplano Occidental podrían verse eclipsadas por los movimientos indígenas en contra de la extracción de minerales. Ambas

---

26. “La mayoría de campesinos no pelea por derechos de agua, o derechos de tierra, o por nociones abstractas de sostenibilidad, justicia o ‘participación’ y desarrollo [...] ellos luchan por comida, por agua, por tierra, por bosques, por un precio justo para sus productos. Luchan por un buen cuidado de la salud, por lugares de residencia decentes, y por una educación para sus hijos. En pocas palabras, ellos luchan por sus medios de sustento, no por causas”. (Holt-Giménez, 2006: 182).

son esencialmente luchas por los medios de vida y supervivencia cultural. La resistencia indígena a la reestructuración territorial no solo es crucial para enfrentar las amenazas del capital a la supervivencia indígena, es necesaria también para embarcarse en una acción intencional para la “reestructuración desde abajo” que reafirme el espacio y el lugar indígena ante la reestructuración territorial “desde arriba”.

De la misma forma que una comprensión de la reestructuración territorial da forma a la resistencia territorial, los actos de resistencia territorial abren espacios y lugares para la soberanía territorial, la base para la supervivencia indígena y el mejoramiento de los medios de vida de los campesinos.



### Sección 3

---

## **Resistencias, movimientos sociales y desarrollo territorial en zonas mineras**



## 4

### *Minería y política: la recreación de luchas campesinas en dos comunidades andinas*

GERARDO DAMONTE VALENCIA

#### 1. Introducción

Los grandes proyectos mineros desarrollados en las últimas décadas en los Andes han traído consigo nuevas tecnologías de extracción, sistemas de empleo, normativas socioambientales y políticas corporativas que han generado nuevas condiciones sociales en las actuales localidades mineras. Por un lado, los nuevos modos de extracción ya no se sustentan en una mano de obra local extensiva, la cual ha sido reemplazada por una fuerza de trabajo especializada y reducida generalmente externa a la localidad (Huallachain y Matthews, 1996; Crowson, 2000), sino en producción a gran escala y con nuevas tecnologías que requieren grandes cantidades de recursos naturales como tierra y agua. Por ello, las políticas y los discursos alrededor de los desarrollos mineros ya no se centran en la generación de empleo sino en políticas de responsabilidad corporativa socioambiental que se traducen en mecanismos de compensación para los dueños y usufructuarios de los recursos naturales locales, quienes frecuentemente se encuentran representados por comunidades campesinas y/o indígenas (McMahon y Remy, 2001; Damonte, 2000). Por otro lado, el desarrollo de

movimientos ambientalistas de alcance global, alimentados por estudios que demuestran la convergencia entre economías campesinas indígenas orientadas a la autosubsistencia y formas sustentables de manejo ambiental (Martínez-Alier, 2002; Guha y Martínez-Alier, 1997), han impulsado el paulatino reconocimiento de derechos indígenas sobre el control de recursos (Ali y Behrendt, 2001) y la adopción de políticas de participación y consulta local en emprendimientos mineros (Vanclay y Bronstein 1995), facilitando la comunicación entre comunidades locales y audiencias globales ávidas de respaldar agendas políticas “verdes” en contra de proyectos ambientalmente destructivos (*cf.* Baviskar, 1995). Uno de los resultados más notables de estos cambios en la gran minería andina ha sido que las comunidades campesinas, dueñas y/o usufructuarias de recursos locales, se han convertido en actores políticos claves para la viabilidad social de los proyectos mineros.

Tomando en cuenta estos antecedentes, este capítulo presenta, analiza y compara tanto los impactos sufridos como las respuestas políticas socialmente articuladas por los miembros de las comunidades andinas de Angoraju Carhuayoc y Chuquiña a partir del desarrollo de los grandes proyectos mineros de Antamina e Inti Raymi en sus tierras. Angoraju es una comunidad campesina localizada en el departamento de Ancash, en los Andes peruanos del Norte, que agrupa alrededor de 160 familias dedicadas tradicionalmente a labores agropecuarias. Por su parte, Chuquiña es una comunidad campesina e indígena de origen aymara que agrupa aproximadamente 200 familias tradicionalmente ganaderas, asentadas en el Altiplano boliviano. En las últimas décadas, las operaciones extractivas de cobre en Antamina, Perú, y de oro en Inti Raymi, Bolivia, han generado visibles impactos socioeconómicos así como diversas respuestas políticas en las comunidades mencionadas.

En este sentido, el presente análisis se enmarca teóricamente dentro los estudios sociales sobre las prácticas y respuestas políticas de las poblaciones indígenas y campesinas, enfocándose en los conceptos relacionados de: a) formas de resistencia campesina e indígena; b) formas de reproducción social comunal; c) articulación política

local, regional y global; y, d) la politización del medio ambiente en contextos de globalización.

En relación con el primer tema, el trabajo de Scott (1985, 1990) reactivó el debate académico en torno de las formas políticas de resistencia campesinas e indígenas. En su estudio sobre prácticas políticas comunales, Scott argumenta en contra de la tesis de “falsa” conciencia social, comúnmente esgrimida por la ortodoxia marxista para explicar la relativa abstención de las clases dominadas en actos revolucionarios, señalando que si los grupos campesinos e indígenas no se rebelan abiertamente no es porque no sean conscientes de la opresión que sufren sino porque consideran que las posibilidades de confrontar directamente dicha dominación de manera exitosa son remotas y optan más bien por formas cotidianas, soterradas y muchas veces individuales de resistencia.

Desde otra perspectiva, los llamados estudios “subalternos” (Beverley, 1999; Chatterjee, 1993), basados en teorías poscoloniales (Asad, 1973; Said, 1978) y en relevantes estudios sobre resistencia colonial en la India (Guha, 1983; Guha y Spivak, 1988), sostienen no solo que los actores sociales dominados son conscientes de su situación sino también que esta situación “subalterna” únicamente puede ser entendida desde las visiones y categorías de los propios actores sociales. En consecuencia, esta corriente considera que múltiples formas de resistencia han sido ignoradas o negadas en estudios que, al utilizar categorías dominantes de análisis, han “orientalizado”, es decir estigmatizado, a los grupos “subalternos” por medio de construcciones ideológicas que reproducen las bases discursivas mismas de la dominación existente; la tarea sería, entonces, descolonizar el estudio social reconociéndole una voz propia a los grupos subalternos.

Es importante notar que tanto el análisis de Scott como los estudios “subalternos” proponen un enfoque dicotómico de los procesos de dominación y resistencia en el cual las prácticas sociales de los grupos/clases dominantes y dominados pertenecerían a esferas distintas y autónomas. Los grupos dominados o subalternos poseerían, desde estas perspectivas, “transcripciones escondidas”

(Scott, 1990) o voces que, aunque influidas por los propios procesos de dominación como bien señala Mignolo (2005), serían finalmente de naturaleza “autónoma”.

Sin embargo, esta idea de una resistencia basada en una pretendida autonomía “subalterna” ha sido criticada por autores que sostienen que las luchas campesinas pueden ser singulares mas no autónomas porque, por un lado, los grupos campesinos han mantenido conexiones históricas con otros estratos de la sociedad, creando continuidades parciales de representación (Starn, 1999), y porque, por otro lado, no es imposible hacer una separación tajante entre grupos dominantes y subalternos ya que, como señala Ortner (1995: 179), las relaciones de dominación/resistencia pueden involucrar a grupos considerados subalternos o presentarse al interior de estos.

Con respecto a las formas de reproducción social en ámbitos comunales campesinos, Smith (1989) aplica de manera interesante el concepto marxista de praxis —es decir, de práctica social que en forma simultánea busca y permite la liberación objetiva y subjetiva de una clase social (Avineri, 1968: 143)— al análisis de las luchas políticas de las comunidades campesinas en los Andes centrales del Perú. Para el autor, los campesinos comuneros desarrollan una conciencia social propia por medio de luchas y resistencias históricas llenas de significado en contextos de penetración capitalista. Vale decir que los campesinos comuneros generan un tipo de conciencia colectiva comunal visible en la reedificación de la “comunidad” como institución económica y política, por medio de prácticas y experiencias políticas en procesos de resistencia organizada.

Siguiendo una línea teórica similar de pensamiento crítico, estudios posteriores han resaltado el papel de la memoria colectiva como vehículo de recreación y reinterpretación de prácticas político-sociales que permitirían la reproducción de grupos campesinos y/o indígenas (Gordillo, 2002; Abercrombie, 1998). Este uso o trabajo de la memoria estaría ligado no solo a la reinterpretación de una “memoria colectiva”, sino también a procesos diacrónicos de reconstrucción o relecturas colectivas de varias formas de memoria

que se encontrarían tanto en experiencias personales compartidas como en discursos transmitidos generacionalmente (Sarlo, 2005; Olick, 1998; Jelin, 2002). Así, la consciente y constante recreación colectiva y “dialogal” del pasado contribuiría a crear las condiciones para la reproducción social del grupo.

En relación con lo anterior y con el tema de la articulación política desde el ámbito comunal, Mallon (1995) enfatiza, en un interesante trabajo histórico sobre la conformación de nacionalidades desde una perspectiva campesina en México y el Perú, la importancia de los intelectuales (profesores, líderes campesinos, etc.) como guías de los procesos políticos, es decir, como agentes que “recogen” y “resumen” experiencias históricas colectivas desde una perspectiva que sirve a los intereses actuales de su grupo de pertenencia. A partir de los conceptos de hegemonía e intelectual orgánico propuestos por Gramsci (2000), Mallon sugiere que los intelectuales comunales juegan el papel de articuladores y sintetizadores de experiencias y procesos políticos locales, los cuales permiten la consecución de un consenso comunal hegemónico al interior de la comunidad. Por consiguiente, sería la labor de los intelectuales el facilitar la recreación de una “hegemonía comunal” y, si las condiciones lo permiten, el articular dicho discurso hegemónico con discursos y visiones regionales y/o nacionales (cf. también Albo, 2003).

Los procesos contemporáneos de globalización han vuelto más complejas las formas históricas de articulación campesina al incorporar nuevos actores nacionales y transnacionales como organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias internacionales y redes globales de activistas (Keck y Sikkink, 1998). En este sentido, la conformación de hegemonías comunales se realiza en el contexto de múltiples conexiones y “fricciones” entre grupos e intelectuales campesinos y/o indígenas y diversos actores externos. En muchos casos las alianzas entre los actores locales y globales han sido claves para el fortalecimiento de causas indígenas o campesinas (Princen y Finger 1994); sin embargo, como demuestra Bebbington et al. (1993, 1996), dicha alianzas tienen límites dado que las partes

no siempre comparten las mismas agendas políticas o preocupaciones materiales.

Por último, los procesos de globalización han traído consigo no solo nuevos actores sociales sino también nuevos discursos políticos y controversias entre los que destaca el tema del medio ambiente. Como bien señala Gledhill (2000: 199), hoy en día las comunidades campesinas e indígenas tienen un especial interés en mantener el control sobre sus recursos al momento de negociar con el Estado, lo que es particularmente cierto en los desarrollos extractivos donde dichas negociaciones incluyen no solo al Estado y a la comunidad local sino también a corporaciones multinacionales urgidas de recursos locales, a instituciones conservacionistas y a la sociedad civil en general, desatando lo que Ballars y Banks (2003) llaman la “guerra por los recursos”.

En estas “guerras”, tanto el acceso a los recursos naturales como las percepciones sobre las transformaciones del medio ambiente adquieren un valor económico y político especial. En contextos mineros, las corporaciones desarrollan elaborados discursos de responsabilidad ambiental con el fin de respaldar el uso de los recursos para labores extractivas, mientras las comunidades campesinas buscan respuestas y alianzas que les permitan mantener el control sobre los recursos locales pues advierten que la pérdida de este control puede amenazar su forma de vida (cf. Peluso y Watts, 2004). Por lo tanto, las guerras por los recursos no solo se desenvuelven en el ámbito de las acciones políticas, sino también en el terreno de las ideas donde las concepciones dominantes tratan de imponerse sobre las visiones locales del ambiente (cf. Schimink y Wood, 1988; Bryant, 1996). En el caso minero, son los discursos ambientales técnicos/científicos los que intentan imponerse sobre las concepciones locales/campesinas de la naturaleza, con el fin de legitimar el uso de los recursos para la explotación de minerales.

A la luz de los cuatro temas planteados, el presente capítulo analiza las experiencias de Angoraju en Perú y Chuquiña en Bolivia buscando responder los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los principales impactos socioeconómicos experimentados por las

comunidades de Angoraju Carhuayoc y Chuquiña a partir del desarrollo de grandes proyectos mineros en sus tierras? ¿En qué medida las respuestas políticas de las comunidades se desarrollan en ámbitos sociales históricamente autónomos? ¿Cuál es el papel de la comunidad y la memoria colectiva en la constitución de las prácticas políticas actuales? ¿Cuál ha sido el papel de los dirigentes campesinos y actores globales en la articulación de las respuestas políticas campesinas? ¿Cuál es el significado político del ambiente y los recursos naturales en las luchas campesinas?

En términos generales, el presente texto busca contribuir a la discusión analítica de la problemática política comunal andina en contextos mineros desde una perspectiva local. Varias son las razones para privilegiar este enfoque. En primer lugar, existe la necesidad de seguir de cerca procesos internos comunales como diferenciación y conflicto que muchas veces se pierden de vista en análisis más generales. En segundo lugar, una mirada cercana a los mecanismos comunales de transformación y reproducción social puede darnos importantes pautas para entender procesos políticos en ámbitos regionales y globales. Por último, el carácter comparativo del presente trabajo implica la necesidad de establecer límites analíticos, aun cuando no se pretende estandarizar sino profundizar en cada una de las experiencias particulares.

La información etnográfica que sustenta el presente capítulo fue recogida como parte de un proyecto de investigación mayor en sucesivos trabajos de campo realizados tanto en las comunidades de Angoraju Carhuayoc y Chuquiña como en las localidades y ciudades vecinas entre 1996 y 2005. Los testimonios consignados fueron recogidos en largas conversaciones con dirigentes, profesores y miembros de la comunidad, mientras que las descripciones presentadas son el fruto de observaciones participantes y no participantes de asambleas, reuniones políticas y marchas de protesta.<sup>1</sup>

---

1. Debo un especial agradecimiento a todos los comuneros de Angoraju Carhuayoc y Chuquiña, dirigentes y profesionales que me brindaron generosamente su tiempo y testimonios. Asimismo, quiero agradecer a Billie Jean Isbel, Manuel

El presente capítulo está dividido en tres secciones. En la primera sección se hace un análisis de los principales impactos socioeconómicos en las comunidades de Angoraju y Chuquiña como consecuencia del desarrollo de las operaciones mineras de Antamina e Inti Raymi, respectivamente. Las secciones dos y tres están dedicadas a la presentación y análisis de las respuestas políticas articuladas por cada una de las comunidades andinas antes mencionadas. En el caso de Angoraju se hace una revisión histórica de las luchas comunales por lo que el texto incluye saltos temporales cuando los actores sociales recuerdan experiencias pasadas desde el presente. Por último, a manera de conclusión, las discusiones teóricas y preguntas expuestas en esta introducción son retomadas a la luz de las experiencias estudiadas.

## **2. Los impactos de los proyectos mineros de Antamina e Inti Raymi en las comunidades rurales de Angoraju Carhuayoc y Chuquiña**

La implantación de modalidades actuales de extracción y de políticas corporativas de responsabilidad social en los grandes proyectos mineros ha transformado las relaciones tradicionales entre las minas y la comunidad en los Andes. En los párrafos que siguen analizaré los impactos económicos, políticos y simbólicos más importantes en las comunidades andinas de Chuquiña y Angoraju Carhuayoc.

### ***Impactos económicos***

El desarrollo de los grandes proyectos mineros ha perturbado profundamente los fundamentos agrarios de los modos comunales

---

Glave, Barbara Lynch, Hans Moeller, Felipe Coronado, Anthony Bebbington, Florencia Zapata y Martin Oyata por sus ideas, comentarios y apoyo. Por último, mi agradecimiento a las instituciones que apoyaron mis investigaciones en los últimos años: Cornell University (SAGE FELLOWSHIP); Fulbright Commission (summer research grant 2002); EINAUDI (travel grants 2002/03/04); Cornell-LASP (Tinker travel grant 2004); GRADE; CISEP.

de producción y de las economías domésticas. Dado que las compañías compraron la tierra para fines mineros, Chuquiña y Angoraju perdieron, en forma parcial o total, uno o más sectores productivos que podrían ser considerados “zonas de producción”. De acuerdo con Mayer (2002), una zona de producción es un sector de la comunidad dotado de características ecológicas, productivas y significativas específicas. Una economía comunal comprende diversas zonas de producción articuladas. En Angoraju Carhuayoc la comunidad está dividida en sectores o fundos mientras en Chuquiña se divide en ranchos. En Angoraju Carhuayoc los fundos de pastoreo vendidos a la compañía eran los únicos administrados comunally, ya que los fundos para el cultivo se utilizan familiarmente. En Chuquiña, los ranchos son en su totalidad manejados por familias extendidas. Por consiguiente, aun cuando no pueden ser considerados zonas comunales (*i.e.* colectivas) de producción en “sentido estricto”, ranchos y fundos continúan siendo espacios comunales ecológicos y culturalmente significativos para los miembros de las comunidades. En cualquier caso, la pérdida de sectores productivos en ambas comunidades ha restringido el acceso de las familias campesinas a ciertos recursos y mermado su actividad económica agropecuaria.

La Empresa Minera Inti Raymi (EMIRSA) adquirió una gran cantidad de pastos y afectó así la crianza tradicional de ovino en Chuquiña. Por su parte, la Compañía Minera Antamina (CMA) afectó seriamente la crianza de reses y ovejas al comprar casi todos los pastos de Angoraju. En vista de ello, la producción de las comunidades ha disminuido, en particular los productos de antaño obtenidos en las zonas o sectores comunales perdidos, esto es, lana y carne.

Semejante reducción en la producción doméstica ha afectado a su vez las actividades del intercambio entre las familias comuneras y comercio en general, actividades que han coexistido largo tiempo en Chuquiña y Angoraju Carhuayoc. El intercambio de productos entre las familias comuneras, sectores comunales o comunidades vecinas, siguiendo reglas culturales de reciprocidad, es una práctica

tradicional para satisfacer la mayor parte de necesidades cotidianas. Asimismo, las familias comuneras también venden algunos productos en los mercados locales y regionales para obtener el efectivo que les permita adquirir productos no locales y pagar servicios o trabajo. La carne de res y oveja y la lana de oveja han sido los productos comerciales tradicionales en Chuquiña y Angoraju Carhuayoc. Ahora bien, dado que estos productos procedían de los pastos comunales vendidos, se desprende que el desarrollo minero no solo ha recortado el abastecimiento de los bienes de intercambio sino que también ha reducido drásticamente las fuentes tradicionales de efectivo.

Al mismo tiempo, la política corporativa que contempla pagos en efectivo para la compra de tierra, así como posibles compensaciones también en efectivo por concepto de contaminación o reubicación, ha perturbado las economías locales domésticas al aumentar dramática y temporalmente la circulación de dinero. Dichos pagos y compensaciones representaron un alivio temporal dado que las familias comuneras habían perdido sus fuentes tradicionales de efectivo, esto es, la capacidad de producir para el mercado de lana y carne. Sin embargo, la mayoría de familias comuneras y/o comunidades no disponía de los conocimientos técnicos necesarios para administrar las grandes sumas recibidas. A falta de información financiera adecuada, el dinero no duró mucho en las manos de estas familias o comunidades. Por ejemplo, el año 2000 CMA pagó a cada familia desalojada una compensación de alrededor de US\$ 30.000 por concepto de reubicación. En un estudio realizado un año después de la reubicación se demuestra que la mayoría de las familias perdió este dinero (Glave y Damonte, 2002). Según cuenta un comunero desalojado:

[...] ya no queda nada de la plata que nos dio Antamina [a su familia] por reubicación [...] [con ese dinero] organizamos una fiesta para toda la familia [...] pagamos la educación de nuestro hijo segundo en Lima [...] nuestro hijo mayor compró una “combi” [minivan] usada para dar servicio de transporte pero la “combi” se malogró y ya no nos queda

plata para arreglarla; no nos queda nada... ni plata... ni tierra... (San Marcos, 3/2001).

Algunas familias, sobre todo de Chuquiña, pudieron mantener algún capital comprando inmuebles en aldeas o ciudades, pero esta tendencia no se generalizó.

En el caso de Angoraju Carhuayoc, además de las compensaciones familiares antes mencionadas la comunidad percibió alrededor de US\$ 500 mil, suma que fue invertida en mejoras de infraestructura y en una empresa comunal. En otra parte he sostenido que la inversión en infraestructura es una estrategia que permite aumentar la importancia urbana relativa de las comunidades respecto de otros centros poblados en el mismo distrito, con lo cual se incrementaría su participación en servicios y rentas locales proporcionadas por las agencias del Estado (Damonte, 2000). Sin embargo, esta lógica económica no asegura el retorno de las inversiones, al menos no en el corto plazo. Con respecto a la empresa comunal, Angoraju conformó una empresa de transporte que presta servicios a CMA con modestos resultados económicos. Ella ha asegurado un módico suministro de efectivo que, sin embargo, depende de los contratos con CMA. Tanto la mejora en infraestructura como la constitución de una empresa comunal son prácticas usuales para asegurar algún flujo futuro de efectivo pero difícilmente estas estrategias satisfacen las necesidades cotidianas de liquidez.

Así, pues, la reducción de la producción comunal y del flujo tradicional de efectivo ha ocasionado un proceso de descapitalización de las economías domésticas. Ni los pagos en efectivo ni las compensaciones han podido revertir este proceso porque la mayoría de las familias y las comunidades campesinas no han logrado administrar el dinero ni tampoco invertirlo de manera exitosa. Según recuerda una autoridad de Chuquiña:

[...] yo acostumbraba vender una o dos ovejas para mandar a mi hijo a la escuela, ahora no tengo suficientes ovejas para pagar la escuela [...] el

dinero de la mina desapareció muy rápido, mis ovejas duraban mucho más [...] (Chuquiña 3/3/2005).

Además, la disminución en la producción de bienes de autoconsumo unida a la abundancia temporal de dinero ha modificado los patrones locales de consumo, aumentando la dependencia respecto del mercado. Los pagos en efectivo y las compensaciones permitieron que las familias comuneras incrementaran temporalmente su consumo en el mercado. Compraron entonces nuevos productos así como mercancías que habían dejado de producir, por ejemplo, lana y carne. Solo que, cuando se acabó el dinero procedente de los pagos y las compensaciones, descubrieron que necesitaban nuevas fuentes sostenibles de efectivo.

En este contexto, las familias afectadas adoptaron distintas estrategias como constituir empresas comunales, invertir en propiedades, emprender migraciones estacionarias o ejercer presión política sobre las compañías por nuevas compensaciones o puestos de trabajo con el fin de afrontar las nuevas necesidades económicas. Es importante notar que ninguna de estas estrategias tiene una base agraria: ni las comunidades ni las familias comuneras han invertido en el sector agrario. Así, los fundamentos materiales de Angoraju y Chuquiña, como organizaciones productivas básicamente agropecuarias, han sido remecidos por el cambio económico.

### ***Impactos políticos***

Dado que ni Chuquiña ni Angoraju son comunidades homogéneas y que en ambos casos existen diferencias y rivalidades entre las familias comuneras y los sectores o ranchos de la comunidad, la política corporativa de pagos y compensaciones ha multiplicado los conflictos internos de las comunidades.

Por un lado, los procesos de adquisición de tierras desataron una competencia por pagos en efectivo entre las familias comuneras. Determinar la distribución de pagos y compensaciones no fue tarea fácil, puesto que las organizaciones productivas campesinas

combinan derechos colectivos y privados de uso de los recursos. Así, por ejemplo, en el caso de Angoraju, la mina compró los pastos comunales cuyos principales usuarios eran los pastores que la comunidad asignaba para la crianza de reses y ovejas, tanto comunales como domésticas. Por esta razón, los pastores de la comunidad afirmaron que tenían más derecho a recibir una compensación que el resto de la comunidad e iniciaron una confrontación contra la directiva comunal. En Chuquiña, la compañía favoreció los contratos privados porque la tierra no era de propiedad colectiva, de modo que entre los beneficiados y los no beneficiados se iniciaron amargas discusiones que dividieron a la comunidad. Años después, un miembro del último grupo recuerda:

Ellos [los que sí recibieron compensación] vendieron a la comunidad. Yo los culpo por nuestros problemas; ellos son ricos y nosotros pobres; no dieron ni un centavo a sus familiares o paisanos [...] ellos vendieron la comunidad [...] (Chuquiña 4/3/2005).

Por otro lado, la constante negociación entre las autoridades comunales y los ejecutivos de la compañía despertó suspicacias entre las familias comuneras, minando la legitimidad de las autoridades. Ocurre que, dado que las comunidades afectadas se han convertido en actores políticos centrales de los proyectos mineros en ejecución, sus autoridades comunales son constantemente llamadas por las compañías, las instituciones de desarrollo y las agencias del Estado. Se las llama para negociar nuevos permisos, compensaciones en efectivo o intervenciones de desarrollo, y también para contribuir a resolver conflictos de conformidad con nuevos procedimientos y marcos legales que apenas conocen. Sin duda este nuevo contexto, que plantea nuevas obligaciones, ha puesto a prueba las capacidades políticas de las autoridades creando un espacio propicio para las suspicacias. Por este motivo varias autoridades comunales y locales han sido acusadas de corrupción, y estas a su vez han acusado a los ejecutivos de compañía de los mismos cargos. Como indica una ex autoridad de Chuquiña:

[...] seguro que ellos [comunarios de Chuquiña] le han dicho que yo les engaé, que recibí plata de Inti Raymi por lo bajo, pero no es verdad. Ellos piensan que hice un trato escondido con la compañía, pero no es verdad. La compañía me invitó a ver las operaciones y luego dijeron que habíamos hecho acuerdo, ellos [los funcionarios de la mina] me engañaron [...] (Oruro, 6/3/2005).

En conclusión, las políticas corporativas implantadas para afrontar las expectativas locales han generado, por su propia naturaleza, nuevos desafíos institucionales para las colectividades campesinas. Las compañías son poderosos agentes económicos y políticos que imponen sus condiciones de negociación a las comunidades locales. Este nuevo tipo de negociación genera tensiones entre las familias comuneras y erosiona la cohesión y la autoridad al interior de la comunidad.

### ***Impactos en las relaciones de la comunidad con la naturaleza***

Los nuevos proyectos mineros en los Andes han transformado los patrones de objetivación de la naturaleza de las familias comuneras. Las transformaciones producidas tienen una doble faceta.

Por un lado, las nuevas técnicas y la magnitud de la extracción minera han enajenado el paisaje local respecto de sus habitantes. Las familias y las comunidades campesinas ven transformada su tierra por fuerzas que apenas comprenden. Por ejemplo, CMA ha secado un lago, ha creado un nuevo lecho de lago para evacuar sus desechos y ha excavado una montaña entera. A su vez, EMIRSA ha removido hectáreas de tierra de pastos y ha creado una nueva “colina” de desechos. Estas rápidas transformaciones en el paisaje local han afectado el significado del medio ambiente para la comunidad. Así, la *cocha* Antamina ya no significa vida y protección para las familias comuneras de Angoraju. Esta *cocha* era la principal de cinco lagunas interconectadas en la región y una fuente importante de agua en la quebrada de Carash donde está situada la comunidad.

Más aún, las familias comuneras perciben que estas transformaciones se han producido de manera violenta y no recíproca. Ni los ingenieros ni los mineros de la compañía han observado las reglas culturales de la explotación minera tradicional. No han cumplido los rituales necesarios para mantener relaciones recíprocas con las fuerzas naturales y atenuar así los rasgos destructivos de la actividad minera.<sup>2</sup> Como afirma un comunero, “no se ha pedido ningún permiso a la *pachamama* [madre tierra] por toda esa tierra que los camiones sacan todos los días” (Chuquiña, 3/2006). Para algunos campesinos, la mina está “violando” la tierra en un proceso que puede ser entendido como una relación de dominación o reciprocidad negativa del hombre con la naturaleza (Palsson, 1996: 67).

Por otro lado, las compañías han tratado de imponer sobre el conocimiento local una verdad tecnológica respecto de las cuestiones ambientales. De este hecho dan cuenta los conflictos surgidos a raíz de las acusaciones de contaminación: mientras los campesinos sostienen que hay signos evidentes de contaminación en la naturaleza, la compañía contrata expertos que la niegan por falta de pruebas científicas. Conviene notar que a esta verdad tecnológica se le opone muchas veces una “verdad política”, vale decir, la afirmación de los campesinos de que los científicos contratados por la compañía “no quieren ver” la contaminación evidente. Por esta razón solicitan más estudios independientes o desacreditan sin más los estudios de la compañía debido a su sesgo.

En conclusión, el desarrollo de los grandes proyectos mineros transnacionales ha tenido importantes impactos de orden económico, político y cultural en las comunidades rurales andinas, creando problemas internos y sacudiendo sus bases sociales. Dichos impactos también han dado lugar a respuestas comunales que deben entenderse en relación con el nuevo contexto social producido por el propio desarrollo minero. A continuación exa-

---

2. Para un análisis comprensivo de los ritos en la minería tradicional, cf. Nash (1993). También Godoy (1990) y Taussig (1980).

minaré los casos de Angoraju Carhuayoc y Chuquiña con la finalidad de esclarecer esta cuestión.

### C. El caso de Angoraju Carhuayoc

Cuando la mina llegó y ofreció comprar los pastos que habían sido adjudicados a la comunidad años antes, se desató una discusión en la comunidad. Habían tres opiniones diferentes: algunos decían que debíamos vender; otros decían que no debíamos vender lo que habíamos recuperado con tanto esfuerzo [durante la reforma agraria]; una tercera opinión era la de los comuneros que vivían en la puna [pastos a vender], que decían que los afectados [es decir, ellos] debían decidir. La discusión duró mucho tiempo y no se llegaba a acuerdo. Los ingenieros [funcionarios de la mina] comenzaron a amedrentar a la gente [...] Yo sabía que eso iba a pasar, pero no tenía miedo porque yo sé como son los ingenieros. Ellos les dijeron a los comuneros que debían vender la tierra porque la compañía podía pedirle al Estado que la expropiara si no aceptaban y, si eso pasaba, el Estado iba a pagar centavos por los pastos; ellos decían que los comuneros debían aceptar la oferta de la mina o iban a perder todo. La gente se asustó con eso y se acordó vender [...] Después que los pastos se vendieron apareció otro problema, la gente no podía ponerse de acuerdo sobre qué hacer con la plata de las tierras. La mayoría pensaba que lo mejor era repartir todo entre las familias comuneras, a cada uno su parte, y solo veintiséis de nosotros [de 150 comuneros] creíamos que la plata debía quedarse en la comunidad. *¡Si no hubiéramos resistido ese día, no habría comunidad ahora!* Había mucha pelea en la comunidad y hasta dos directivas se formaron, pero nosotros, los veintiséis, queríamos que la comunidad controlara la plata así que nos quedamos allí y resistimos hasta que el resto aceptó [...] los que querían “a cada uno su parte” perdieron y con esa plata la comunidad compró dos Volvos [camiones] que alquilamos a la mina. Poco tiempo después formamos la empresa comunal y ahora tenemos siete Volvos, dos excavadoras y dos “combis” que alquilamos a la mina. [...] *Si no quieren alquilar bloqueamos la carretera y paramos la mina* [...] Las ganancias [de la empresa] se reparten entre todos los comuneros activos, no es mucho pero ayuda ahora que *ya no tenemos ganado como antes y las cosechas no son buenas por falta de agua y contaminación* [...] *porque ellos no cuidan la tierra* [...] Siempre hay problemas en la comunidad pero algunos líderes no tienen carácter;

*ellos no entienden que todo se debe hacer por la comunidad y se debe escribir en actas para que nuestros hijos sepan qué hicimos.*<sup>3</sup> (Carhuayoc, 5/6/2005).

Quien da este testimonio es un viejo dirigente comunal. Yo estuve presente en el segundo evento que él describe, cuando veintiséis comuneros —la mayoría ex dirigentes comunales— ejercieron presión para que los pagos por la tierra fueran mantenidos bajo control comunal. Se trató de una larga asamblea comunal que duró varios días y, por lo que entiendo, representó un momento crítico para la política de la comunidad. Los impactos sociales y políticos analizados en la primera sección de este capítulo habían afectado profundamente la organización y la legitimidad comunal cuando se celebró la asamblea, es más, muchos comuneros consideraban la posibilidad de disolver la comunidad. De hecho, la mayoría de los pastores que vivían en las tierras de pasto vendidas apoyaba la disolución de la comunidad si ello significaba más dinero para sus familias.

En este contexto, los veintiséis partidarios de la solución comunal cumplieron una asombrosa labor política que venció la oposición interna. Controlaban los tiempos de la asamblea, solicitando recesos cuando la oposición estaba a punto de pedir confiada el voto final. Hablaban con suavidad mientras sus opositores vociferaban para captar la atención de la asamblea y alzaban la voz mientras la asamblea se mantenía en silencio. Pero aún más importante es el hecho de que se desplazaran hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y rememorasen eventos del pasado a medida que exponían sus argumentos presentes. Una y otra vez gesticulaban y repetían las mismas frases: “sin nuestra comunidad no tendríamos tierra que vender”; “nuestra comunidad nos hace más fuertes”; “peleamos contra los gamonales (antiguos hacendados) ahora peleamos con la empresa... juntos”; “¿cómo le vamos a explicar lo que hicimos con el dinero si ya no tenemos actas comunales?”. Al

---

3. Énfasis mío.

final, la asamblea estaba agotada y los 26 comuneros pidieron un voto final; hubo algunas abstenciones pero finalmente triunfaron. Ninguna institución externa participó en la asamblea.

Considero que el testimonio de este viejo dirigente así como la experiencia de la asamblea comunal revelan los elementos claves de la identidad política de Angoraju Carhuayoc. Ante todo, el testimonio pone de manifiesto una clara conciencia del poder colectivo de la comunidad y de sus limitaciones frente a la compañía. El viejo dirigente sabía que los ingenieros amenazarían a las familias comuneras y finalmente conseguirían que la tierra fuera vendida, porque “así son los ingenieros”, y sabía igualmente que la comunidad conseguiría que la compañía alquilara los camiones comunales porque “si no paramos la mina”. En segundo lugar, y de acuerdo con la misma lógica, el viejo dirigente comprendía que dividir el dinero señalaría el principio del fin de la organización comunal y de la fuerza política, porque “juntos... son más fuertes”. Por último, los veintiséis comuneros que ejercieron oposición interna supieron invocar la legitimidad histórica de la comunidad para vencer el separatismo. Recrearon por medio de gestos y discursos significativos la historia de la comunidad: una historia de luchas colectivas contra poderosas fuerzas externas.

En vista de lo anterior sugiero, a partir de Smith (1989: 15), que esta identidad colectiva puede entenderse mejor por medio del análisis de los acontecimientos clave en la historia política de la comunidad. Examinaré, pues, algunos de estos acontecimientos: la lucha contra un terrateniente durante el proceso de reforma de la tierra; la lucha contra la comunidad vecina de Huaripampa por una frontera en litigio; y la experiencia de la comunidad durante la guerra civil. Finalmente, relacionaré estos acontecimientos con la situación actual.

### ***La lucha contra un gamonal***

Después del golpe de Estado de 1968, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado decretó una ley de reforma agraria que expropia-

ba las grandes propiedades denominadas “latifundios” en favor de las comunidades campesinas reconocidas y de otras organizaciones colectivas rurales. Muchas comunidades campesinas indígenas y muchos grupos campesinos buscaron entonces reconocimiento legal. Tal fue el caso de un grupo de familias campesinas de Carhuayoc quienes decidieron formar una comunidad campesina llamada Angoraju Carhuayoc a efectos de que se les adjudicaran tierras. Al cabo de años de procesos administrativos, consiguieron el reconocimiento legal y la adjudicación de cuatro fundos en 1976. La comunidad tomó posesión de tres fundos en pocos días, pero la ocupación del último, el fundo Neguip, tardó mucho más tiempo, debido a la resistencia del terrateniente ex propietario para ceder la propiedad de la tierra. Ello se convirtió en un problema y una prueba política para la recién formada comunidad campesina y sus dirigentes. Esta historia me fue narrada por un ex dirigente de la comunidad:

Cuando la reforma agraria afectó los pastos de Neguip [fundo adjudicado a la comunidad] los ex propietarios no querían irse así que la comunidad tomó posesión [...]. El ex propietario nos expulsó a la fuerza y acusó a dieciocho comuneros diciendo que habían robado con el testimonio de su pastor como prueba. Metieron a los comuneros a la cárcel pero la comunidad no dejó de usar los pastos de Neguip [...]. Después la comunidad decidió mandarme, porque era presidente [de la comunidad], a la oficina de la reforma agraria en Huaraz [capital regional]. Allí, yo me di cuenta que el ex propietario de Neguip le había pagado a los de la reforma agraria en Huaraz porque ellos hicieron como que no me conocían o mi comunidad, a pesar que yo había ido muchas veces a la oficina, así que no me hicieron caso. Entonces, decidí irme a Lima. Fui a la oficina central de reforma agraria en Lima con cuatro comuneros y le dijimos al ingeniero encargado que íbamos a hacer juicio contra los funcionarios de Huaraz por corrupción. Entonces el ingeniero llamó a Huaraz y dijo que el presidente de la comunidad de Angoraju quería hacer juicio contra ellos porque no procedían con la adjudicación [de los fundos afectados por reforma agraria]. Los de Huaraz le dijeron al ingeniero que yo nunca había estado en su oficina, pero yo tenía los documentos con firma y sello como prueba que había

estado muchas veces en [la oficina de] Huaraz siguiendo la adjudicación y se los di al ingeniero allí mismo. Entonces, el ingeniero habló otra vez con Huaraz y les dijo que atendieran mi caso. Entonces me volví otra vez a [la oficina de] Huaraz pero los funcionarios me dijeron: “¿Quién eres tú? Nosotros no conocemos tu caso”, como si no me conocieran [...] yo me molesté y les dije que ya iban a ver, que les iba a meter juicio. Cuando regresé a la comunidad pedí un poco de plata y puse denuncia contra los funcionarios. Mandé todos los papeles a la oficina [de reforma agraria] de Lima certificado, ime costó mucha plata! [...] Después de dos semanas, yo y toda la comunidad estábamos esperando, nerviosos estábamos. Veinte días después [de mandar los papeles] los funcionarios de la oficina de Huaraz vinieron aquí; Ahora sí me reconocían y hasta amables, sonriendo estaban. Ellos querían terminar rápido con la adjudicación pero yo les hice esperar porque primero tenía que llamar a asamblea, primero tenía que informar [a la comunidad]. Ellos tuvieron que esperar por dos días hasta que toda la comunidad se reunió para ver la adjudicación, la adjudicación de la tierra que fue de nuestros abuelos [...]. Pero el juicio contra los dieciocho comuneros continuó; entonces yo y otros comuneros fuimos a hablar con el pastor [del ex propietario] que había hablado contra nuestros compañeros en el juicio. Le dijimos que el ex propietario tenía otro pastor y lo iba a botar a él, le dijimos que al ex propietario no le importaba [él], pero si ayudaba a la comunidad nosotros lo íbamos a proteger. Le enseñé que los comuneros se protegen y que él podía convertirse en comunero; le dije que podía quedarse en Neguip y ser comunero y que todos íbamos a estar en paz y felices. El pastor aceptó y dijo en el juicio que el ex propietario lo había obligado a acusar a los comuneros. Entonces el juez liberó a nuestros compañeros y el pastor entró a la comunidad [...] El ex propietario terco era, pero la comunidad era poderosa; se fue a Lima para una cirugía y murió, gracias a Dios. (Carhuayoc, 6/2005).

### ***La lucha por una frontera con Huaripampa***

Las familias campesinas de Carhuayoc y de Huaripampa llevaban décadas de litigio por una franja de tierra en un límite común cuando se decretó la reforma agraria. El conflicto llegó a ser violento pero finalmente se resolvió tras la reforma. La historia me fue relatada por un ex presidente de la comunidad:

Hace años había un largo litigio con Huaripampa por los pastos de Callash. Después de como veinte años sin solución, la gente de Carhuayoc decide posesionarse de los pastos en 1970. Tomamos posesión de la tierra con nuestro ganado y pedimos garantías al Ministro de Agricultura. Huaripampa respondió y comenzó una batalla entre nosotros. La batalla duró dos días y dos noches y dejó muchos heridos. Al final Huaripampa nos expulsó de Callash [los pastos]. Después de esto, Huaripampa apuró su reconocimiento [como comunidad bajo la ley de reforma agraria] y fue reconocida antes de nosotros [Angoraju Carhuayoc] [...], entonces, cuando Huaripampa llamó al “acto de colindancia” [procedimiento oficial para formalizar los límites de las comunidades] ellos ya tenían un mapa y todos los documentos y nosotros no habíamos preparado nada, entonces ellos ganaron otra vez. Este caso con Huaripampa fue una desgracia para nosotros porque Huaripampa era una comunidad unida y organizada; en ese tiempo ellos eran más fuertes que nosotros. (Carhuayoc, 6/2005).

Una vez formalizada la propiedad de la tierra, el problema entre las dos comunidades desapareció. Angoraju Carhuayoc reconoció su derrota y nunca más intentó recuperar el control de los pastos. Según los dirigentes comunales, esta experiencia era parte necesaria del proceso de aprendizaje de una comunidad joven. Cabe añadir que la comunidad de Huaripampa perdió mucha de su fuerza interna y liderazgo regional durante la guerra civil, puesto que varios de sus dirigentes fueron asesinados.

### *Angoraju Carhuayoc durante la guerra civil*

Durante la guerra civil iniciada por Sendero Luminoso (1980-1995) el Estado declaró “zona roja” al distrito de San Marcos, donde está localizada Angoraju Carhuayoc. Las fuerzas de Sendero Luminoso pasaban con frecuencia por la región en busca de apoyo económico y político, mientras que el ejército ingresaba intermitentemente en las ciudades buscando “senderistas”. A menudo estas intervenciones traían como saldo la muerte o el arresto de los “sospechosos” de apoyar al bando contrario, si bien cabe indicar

que ni el Estado ni Sendero Luminoso lograron nunca el control político de la zona. En este contexto, mientras las autoridades estatales abandonaban el distrito, algunas “personalidades” locales, principalmente ex terratenientes, formaban minúsculos ejércitos privados para defenderse. Ambos, los grupos subversivos y las fuerzas represivas, diezmaron el patrimonio comunal como por ejemplo el ganado ovino y destruyeron la infraestructura del distrito como los canales de irrigación.

En vista de este vacío de poder, muchos dirigentes comunales resistieron los embates de Sendero Luminoso organizando “rondas campesinas”, es decir, patrullas civiles de campesinos. Concluida la guerra, los comuneros de Angoraju Carhuayoc recuerdan con orgullo su resistencia política. Afirman que todo esto fue posible gracias a la unidad comunal: “Como comunidad somos más fuertes, somos más gente y nadie nos puede vencer”. Un comunero me refirió esta historia que ilustra la unidad comunal durante los años de la guerra:

Estaba en la escuela de San Marcos y un día cuando regresaba a mi casa en Carhuayoc un compañero de la escuela me dijo que los militares estaban buscando senderistas [simpatizante o militante de Sendero Luminoso] y que estaba en su lista. Yo no era senderista, al contrario estaba en la ronda [campesina] para proteger nuestro ganado de las punas de los senderistas [...] Después supe que varios ronderos estaban en la lista [...], bueno, estaba muy asustado y le dije a mi hermano mayor, él le dijo a otros comuneros, y me escondí en las punas [...], me escondí por como dos semanas con los pastores en las punas cerca a Antamina [la laguna]; los pastores me dieron comida y otros comuneros llevaron más comida para ellos. Cuando los militares me buscaron en la comunidad, nadie conocía a mi familia o a mí, les dijeron a los militares que seguro era un error en mi nombre o que creían que mi familia vivía en la otra banda [del río]. Los militares estaban más preocupados por los dirigentes así que no preguntaron mucho por mí, yo me quedé en la puna y recé mucho por las noches [...] Le di las gracias a mucha gente cuando regresé a la comunidad y los mayores me dijeron que fue la tierra y los gentiles en la puna los que me protegieron. (Carhuayoc, 6/2005).

### *La llegada de la explotación minera transnacional*

Además de las nuevas técnicas y políticas de extracción, los proyectos transnacionales han traído a la localidad nuevos marcos legales de extracción minera y nuevos actores globales que han brindado más herramientas políticas a las comunidades campesinas.

Por un lado, las comunidades campesinas locales que poseían los recursos necesarios para los proyectos mineros, tales como Angoraju Carhuayoc, han obtenido prominencia regional. Por ejemplo, CMA ha llevado a cabo procesos de consulta y negociación para la adquisición de tierras y el uso de recursos en Angoraju Carhuayoc, de conformidad con nuevos estándares ambientales y sociales de alcance nacional e internacional. Así también la mínima participación del Estado en los asuntos mineros locales ha incentivado las relaciones bilaterales compañía-comunidad, con lo cual han perdido importancia los “mediadores” locales tradicionales, es decir, los miembros de la clase media urbana o *mistis*. A lo largo de la historia, los *mistis* han ocupado cargos públicos y políticos y se han considerado a sí mismos “representantes naturales” de los comuneros indígenas en las negociaciones políticas con el gobierno central y/o otros agentes externos. Al favorecer las relaciones bilaterales con los propios dueños de los recursos, la compañía ha desactivado esta mediación. Ello es de especial importancia en el distrito de San Marcos, donde todavía puede apreciarse la división social jerárquica previa a la reforma agraria entre campesinos indígenas y *mistis* de clase media urbana. La situación es planteada de la siguiente manera por un viejo ex terrateniente:

[...] ellos [los comuneros] ya no nos escuchan, se han vuelto egoístas, piensan que pueden negociar solos con la mina pero no es verdad; son ignorantes, mi familia siempre los ha protegido inclusive luego que tomaron nuestras tierras [...] Escuchaban nuestro consejo, pero ahora ya no quieren escucharnos [...], ellos se están volviendo ricos con nuestros antiguos pastos y ahora inclusive quieren ser alcalde del pueblo [...] Sí, hay un comunero que fue candidato en las últimas elecciones en

San Marcos, ¡es increíble [...]! Ahora todo está cambiando y no hay más respeto. (San Marcos, 7/2005).

Por otro lado, el desarrollo de los grandes proyectos extractivos ha concitado la atención de algunas organizaciones ambientales y de apoyo indígena tales como la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y varias ONG. El hecho ha permitido que las comunidades involucradas en el proyecto de Antamina, como es el caso de Angoraju Carhuayoc, obtengan reconocimiento político regional, contactos internacionales y la atención ocasional de la prensa nacional. Sin embargo, aún más importante es el crecimiento político de las comunidades, que han descubierto y asumido su nueva importancia política, aprendiendo a emplear discursos globales de derechos ambientales e indígenas. Angoraju Carhuayoc ha empleado hábilmente el argumento del avance de la contaminación y los derechos indígenas para ejercer presión política sobre la compañía. Hoy en día, los comuneros incorporan “discursos ambientales” para tratar con la compañía y acentuar sus demandas, siendo conscientes de que las actividades mineras en alguna medida producen contaminación y daño ambiental. Sin embargo, la relación política entre los agentes externos ambientalistas o indigenistas y Angoraju Carhuayoc es complicada.

En primer lugar, los comuneros no necesariamente comparten la agenda política y ambiental de las organizaciones activistas. Mientras varias redes ambientales de apoyo son adversas a las actividades mineras, los comuneros muchas veces desean desarrollos mineros, solo que bajo mejores condiciones. Si bien el tema ambiental no les es indiferente, que la comunidad se comprometa a hacer frente a este problema de manera radical depende de los beneficios materiales que puedan obtener sus familias y su comunidad.<sup>4</sup> De manera semejante, el discurso de CONACAMI de apoyo a los derechos indígenas es antes percibido como herramienta política que como

---

4. Entiendo que esta lógica se remonta al tiempo en que las minas eran propiedad del Estado y la contaminación era intercambiada por empleos estables para los miembros de la comunidad.

demanda histórica, sencillamente porque los comuneros no se refieren a sí mismos como indígenas aun cuando reconocen sus raíces autóctonas.

En segundo lugar, los agentes externos partidarios de la comunidad, sean nacionales o internacionales, no tienen presencia constante en la zona. CONACAMI, por ejemplo, organizó un congreso en San Marcos en el 2000 y distribuyó alguna propaganda después, mas no participó en las manifestaciones decisivas de la comunidad contra la compañía. Por último, la mayor parte de las ONG ha recibido ayuda de la compañía, de manera que su legitimidad se ha visto cuestionada. De hecho, Angoraju Carhuayoc es hoy en día muy renuente a aceptar la intervención de cualesquiera ONG en la comunidad.

Retornando al tema central, Angoraju Carhuayoc ha hecho frente a un proceso contradictorio en el cual el advenimiento de la explotación minera transnacional ha desencadenado una crisis interna y un verdadero, aunque complicado, proceso de crecimiento político de la comunidad frente a los agentes externos. En este sentido, pienso que la comunidad ha recurrido a la historia de su tradición política en busca de significado y de respuestas a esta nueva situación. Como revela el testimonio del viejo dirigente que abre esta sección, la comunidad ha tornado hacia su propia memoria política colectiva a través de la actuación de sus dirigentes. De este modo, la comunidad ha comenzado a ver en el desarrollo de Antamina un mero acontecimiento añadido a su larga historia política. En este sentido, la respuesta inicial de los dirigentes comunales ha consistido en acentuar la unidad comunal para mantener la fuerza política, al tiempo que aprenden a usar nuevas herramientas para enfrentar a la compañía. Aunque dinámico y en marcha, el proceso ya muestra algunos rasgos interesantes: un reemplazo simbólico aparente del Estado por la compañía y una reafirmación política de la comunidad como el único y el último recurso de poder local eficaz.

El Estado siempre ha sido parte de la vida política comunal. Fue de conformidad con las leyes del Estado como un grupo de

familias campesinas de Carhuayoc consiguió el reconocimiento legal de comunidad campesina y la adjudicación de tierras. Fue la autoridad del Estado la que resolvió definitivamente un largo conflicto de límites entre Angoraju y Huaripampa. Dicho de otra manera, el Estado ha sido en última instancia la fuente de autoridad para la comunidad. Pero ello no significa que el Estado haya sido su representante o aliado político. Al contrario, los dirigentes comunales recuerdan con orgullo cómo consiguieron derechos comunales sobre la tierra y servicios del Estado a pesar de la corrupción, la discriminación y la burocracia estatales. No obstante, lo cierto es que las familias campesinas de Carhuayoc siempre han aceptado la autoridad del Estado y, de este modo, han establecido una relación simbólica con él. Prueba de ello es la comunicación formal que las familias campesinas y la comunidad han mantenido con el gobierno central a través centenares de documentos oficiales enviados a los representantes del Estado. Estos documentos, algunos de los cuales se remontan a la década de 1920, pueden encontrarse en los archivos agrarios regionales; se trata de actas, peticiones y quejas de la comunidad contra otras familias, comunidades o autoridades locales.

La identificación de los destinatarios y el examen de la retórica de los documentos no solo arrojan luz sobre el tiempo de su redacción, sino también sobre la asombrosa conciencia de los remitentes de su contexto político. Así, por ejemplo, un documento fechado en 1965 denuncia ante el “Ministro de Asuntos Indígenas” los abusos cometidos por las autoridades locales contra el remitente, quien se describe a sí mismo como “indígena pobre de solemnidad”. Ahora bien, en 1970, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el hermano de este campesino eleva un reclamo semejante al “Presidente de la Revolución Peruana” por “los abusos cometidos por la burguesía reaccionaria y las autoridades locales” y se presenta como “miembro revolucionario de la clase campesina” (Archivo de PETT). A partir de estos documentos y experiencias previamente relatadas, es de destacar cómo el Estado continúa siendo considerado la autoridad simbólica que

algún día habría de satisfacer las expectativas comunales de justicia y de una vida mejor sin importar el tinte político del gobierno de turno y aun cuando la mayor parte de estas cartas nunca recibiría contestación.

Los dirigentes comunales no se enfrentan abiertamente al Estado sino que negocian con él. Observan todas las regulaciones estatales y conservan con orgullo los expedientes de todos los procesos por los que han pasado. Como recuerda un dirigente:

[...] tomó años para conseguir la tierra, la escuela y la posta médica y la carretera [...], primero teníamos que ser reconocidos como comunidad, luego conseguimos la tierra y la escuela; en mi período (como presidente de la comunidad), yo traje la carretera [...] Tuve que ir a las oficinas del ministerio [de transportes en Lima] cientos de veces, pidiendo y pidiendo por la promesa de la carretera; guardo todos los papeles con firmas y sellos [...] (Carhuayoc 7/2005).

Sin duda, a veces los comuneros se rebelan contra la autoridad del Estado. Por ejemplo, en 1989, con ocasión de una manifestación por un recorte en la distribución estatal de fertilizantes, bloquearon junto con otras comunidades la vía regional más importante y tomaron el pueblo. Pero esta manifestación tenía por finalidad negociar con el Estado, no destruir su autoridad. Aun durante los días de la guerra civil, los campesinos de Carhuayoc responsabilizaban de la represión a los malos militares, no al aparato del Estado. Y acaso tal sea la razón por la que ninguno de ellos se unió a Sendero Luminoso. Sin embargo, la relación con la autoridad estatal se plantea en términos simbólicos antes que en términos cotidianos y recíprocos. Aun cuando no apoyan a las autoridades políticas locales, que son la rama visible del Estado en la zona, los comuneros esperan obtener justicia de una imagen simbólica que representa el poder del gobierno central.

Cuando la compañía llegó, las quejas iniciales fueron dirigidas, no a las autoridades locales, sino a las dependencias estatales en Huaraz. Pero esta vez los comuneros no tardaron en advertir que el Estado había perdido terreno político frente a las compañías

transnacionales como CMA. Un dirigente comunal de aquella época plantea la situación de esta manera:

[...] cuando la compañía comenzó a mover la tierra en nuestras punas, malograrón los pastos y bloquearon nuestro camino (de herradura) a Ayash. Entonces, yo fui a la oficina del Estado en Huaraz y mandé una carta a Lima protestando por eso [...] Los ingenieros (funcionarios en Huaraz) me dijeron que teníamos que hablar directamente con la mina, que la mina tiene plata y maquinaria para compensarnos y hacernos otro camino si quieren, que estas cosas ya no eran problema del Estado [...] (Carhuayoc, 6/2005).

Al inicio del proyecto, la compañía no solo tenía a su favor el dinero y la maquinaria, sino también a la mayor parte de las autoridades y la población. Por aquel tiempo, los discursos de la compañía sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible parecían satisfacer las expectativas de larga data que tradicionalmente eran asociadas con la responsabilidad del Estado. Angoraju Carhuayoc dio entonces la bienvenida a la compañía y reprodujo con ella la misma pauta de comunicación que había mantenido con el Estado, es decir, enviar documentos formales pidiendo beneficios materiales. Estos documentos se hicieron más elaborados a medida que los dirigentes aprendían nuevos y eficaces argumentos de los activistas y las ONG. Por ejemplo, en una carta enviada al “Presidente de la Compañía Minera Antamina” se lee:

[...] nosotros [la comunidad] pedimos más compensación por la tierra que hemos cuidado por siglos y que la mina está contaminando, así rápido nomás [...] La compañía le dice al mundo que ellos son responsables, que no malogran el ambiente pero son mentiras. Podemos demostrar cómo nuestra tierra está contaminada. (San Marcos, 13/8/2003).

De igual manera, la directiva comunal ha firmado y enviado junto con otras autoridades locales reclamos oficiales al directorio corporativo de la compañía, a la prensa regional e incluso al Banco Mundial. Sin embargo, la comunidad ha favorecido la relación bilateral con la compañía. La comunidad es renuente a aceptar

liderazgos externos y es escéptica respecto de alianzas o articulaciones políticas con instituciones o participantes externos. Aun cuando los dirigentes comunales comprenden la importancia política de los discursos ambientales e indígenas, no entienden totalmente la ventaja de plegarse a luchas globales. Para las familias y los dirigentes comuneros, la comunidad es la única que en la práctica puede representar sus intereses. Por ello prefieren enfrentar a la compañía utilizando las mismas formas de lucha colectiva que han aprendido a lo largo de décadas de trato con el poder del Estado, esto es, sirviéndose de la negociación constante.

En conclusión, planteo que en el caso de Angoraju Carhuayoc los eventos históricos son recordados de manera consciente creando una narrativa comunal de luchas, que a su vez moldea una identidad política colectiva particular. Esta narrativa crea un sujeto político colectivo, la comunidad campesina, y oculta las diferencias internas. En tal sentido, la comunidad genera su fuerza interna mediante la interacción de los fundamentos materiales (i.e. los recursos comunes) y el desempeño político históricamente construido en relación con agentes externos, particularmente el Estado. Sin embargo, esta no es una interacción estática o determinativa, pues los procesos de rememoración colectiva permiten reconstruir tanto la narrativa de la comunidad como la identidad política. La reedificación de la identidad comunal es empleada como herramienta para superar los conflictos internos y las amenazas externas toda vez que las bases institucionales y materiales de la comunidad han sido dañadas. En tal medida, el símbolo de la “comunidad” en su sentido político deviene lo suficientemente potente para trascender su contenido material.

#### 4. El caso de Chuquiña

El 16 de agosto de 2005 dos grandes grupos de comunarios<sup>5</sup> de Chuquiña y otras comunidades campesinas aledañas viajaron a La

---

5. “Comunario” es el miembro de una comunidad en Bolivia, como lo es el “comunero” en el Perú.

Paz; uno a participar y el otro a protestar en contra de una reunión organizada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible de Bolivia. Esta reunión había sido programada para anunciar los resultados de una licitación que formaba parte de las auditorías ambientales destinadas a evaluar el desempeño ambiental de la Empresa Minera Inti Raymi (EMIRSA). Los grupos provenientes de Chuquiña estaban compuestos en conjunto por alrededor de un centenar de familias campesinas que por cerca de tres años habían exigido una auditoría ambiental en su tierra. Mientras algunos dirigentes comunales participaban en la reunión, otros se manifestaban en las calles adyacentes haciendo explotar cartuchos de dinamita en el aire. Al final de la reunión un funcionario estatal comunicó a la audiencia que, tras el anuncio de los resultados de la licitación, el proceso de auditorías ambientales sería suspendido temporalmente, debido a una demanda legal presentada más temprano por uno de los grupos que se manifestaban en las calles. En ese momento, los comunarios se detuvieron y exigieron hablar con el ministro de inmediato. Estaban enojados. Los dirigentes comunales comenzaron a hacer declaraciones contra EMIRSA en varias estaciones de radio y televisión. Uno de ellos me dijo: “Estamos cansados [...], toda la comunidad está cansada de todo este largo proceso. No nos vamos a mover hasta que el mismo ministro venga a ofrecernos una solución”. Alrededor de veinte minutos después, el funcionario estatal pidió a los asistentes que se retiraran de la habitación, pero los comunarios no se movieron del pasillo. Afuera, otros grupos de comunarios proseguían con la manifestación, mientras daban a las emisoras de televisión su versión de los hechos. El ministro nunca se presentó, pero la demanda fue retirada un mes más tarde y el proceso de auditorías ambientales se reanudó.

Ciertamente este acontecimiento nos hace pensar en una comunidad consolidada que puede movilizarse y hacer prevalecer sus demandas contra una compañía minera transnacional. De hecho, los dirigentes comunales de Chuquiña parecían estar bien informados sobre los procedimientos legales y acostumbrados a la cobertura de los medios nacionales. No obstante, un viaje a la

comunidad de Chuquiña nos muestra un cuadro bastante distinto. Una vez ahí, Chuquiña se revela como un pueblo fantasma. Aparentemente nadie, salvo algunos mineros extranjeros, vive en este pueblo compuesto por manzanas idénticas de casas prefabricadas. Estas casas y el pueblo entero fueron construidos por la compañía cuando la antigua sede fue removida para efectos mineros. Solo un tercio de los antiguos residentes ha permanecido en Chuquiña, como reconoce el dirigente que hábilmente dialogó con los medios en la reunión de La Paz. En sus propias palabras:

[...] el resto [de los comunarios] vive en las ciudades y solo viene al pueblo para la fiesta principal y de vez en cuando para mirar su tierra y animales. Ellos vendieron la mayor parte de sus tierras y alquilaron sus casas a los mineros. Varios tienen un pastor que cuida sus ovejas, pero ya no participan en las cosas de la comunidad, a no ser buscar nuevas compensaciones de la compañía [...] [ellos] no se preocupan por nosotros, sus hermanos campesinos, y nosotros ya tampoco nos preocupamos por ellos. (Chuquiña, 9/2004).

El desarrollo minero tuvo consecuencias devastadoras para la fuerza interna comunal en el caso de Chuquiña. Hoy en día, es una comunidad marcadamente dividida en la cual muchas familias desconfían unas de otras y ya no participan en asuntos comunales. Dada esta situación, cabe preguntar por el modo como Chuquiña, con todos sus problemas internos, ha sido capaz de emprender una campaña política masiva y de gran duración. Considero que la historia íntegra del proceso de auditorías ambientales arrojará alguna luz sobre el particular.

### *Historia de las auditorías ambientales*

La Ley del Medio Ambiente N° 1333 decretada el 27 de abril de 1992 estipula que las auditorías ambientales son un procedimiento metodológico que consta de análisis, pruebas y prácticas de confirmación conducentes a determinar la situación ambiental de un proyecto y a evaluar su conformidad con las normas ambientales.

El organismo competente para solicitar y realizar las auditorías ambientales es la autoridad regional ambiental. Por petición o solicitud oficial comunal, esta autoridad debe organizar una asamblea pública para decidir la pertinencia de una auditoría ambiental. Ya puesta en ejecución, la auditoría debe producir un informe que evalúe el desempeño ambiental del proyecto bajo escrutinio. Adicionalmente, el Decreto Supremo N° 26705 del 10 de julio de 2002 modifica la Ley del Medio Ambiente N° 1333, en tanto contempla la participación de las comunidades afectadas en la elaboración de los términos de referencia y en el proceso de auditoría ambiental. Este Decreto Supremo también establece las sanciones para la compañía examinada, según la magnitud del daño ambiental. Finalmente, el proceso de auditoría ambiental involucra estudios técnicos ambientales independientes, que deben ser realizados por una institución seleccionada en licitación pública.

El caso de las auditorías ambientales de las operaciones de EMIRSA se remonta a 2002, cuando algunas autoridades comunales empezaron a recibir una cantidad inusual de reclamos por contaminación de agua y tierra. Como me refirió un corregidor:<sup>6</sup>

Recibí varias quejas de personas de mi comunidad por la creciente contaminación de los pastos y el río, por eso me fui a la compañía y le pregunté a los encargados. [Ellos] me citaron en la mina para que presente mis quejas y eso hice. Me respondieron [a las quejas] en una semana, diciendo que eran una compañía modelo que no contaminaba. También me invitaron a conocer la operación [...] yo acepté la invitación y fui a conocer. Cuando terminó el paseo por la mina [los funcionarios de la mina] me dijeron: “Viste, nosotros no contaminamos nada”, pero yo le respondí “nosotros sentimos la contaminación y ustedes son la única mina aquí” [...] [entonces ellos] nos preguntaron: “¿Bueno, qué quieres? ¿Quieres un apoyo [financiero]?” y yo respondí “No, estamos aquí por la contaminación”, entonces me dijeron: “¿Nos estás acusando [...]? Bueno tienes que probarlo” [...] Entonces, buscamos la

---

6. “Corregidor” es la autoridad política electa de un cantón.

ayuda del Foro de Medio Ambiente en Oruro [capital departamental] para iniciar los estudios correspondientes. Allí, el “licenciado” nos dijo que era posible [probar la contaminación] pero que teníamos que saber que la compañía era muy poderosa y que tendríamos que tener los pantalones bien amarrados para enfrentarla. Dijimos que sí, que sí podíamos hacerlo y así comenzó todo. Después el licenciado nos presentó al profesor [universitario] [...] (Oruro, 4/7/05).

Los dirigentes comunales conocieron a un catedrático interesado en problemática y política ambiental. Este aceptó realizar estudios de contaminación ambiental a fin de promover la causa de las auditorías, pero precisó que necesitaba el respaldo técnico de la universidad de Oruro. Los dirigentes comunales solicitaron entonces a la universidad que confiara en el profesor el encargo de completar los estudios ambientales. A través del profesor entraron en contacto con el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) que brindó su apoyo profesional y recaudó fondos para los estudios. Así, el profesor y el CEPA realizaron una medición de impacto ambiental con el apoyo entusiasta de los comunarios en la localidad de Santo Tomás. Este estudio fue publicado y sirvió de base para la puesta en práctica de las auditorías ambientales. Asistidos por este libro, los dirigentes comunales denunciaron a la compañía por contaminación ante las autoridades departamentales y los congresistas, pidiendo una urgente auditoría ambiental.

Dado que los reclamos por contaminación se esparcieron en toda la región, particularmente en las márgenes del río Desaguadero, otras muchas comunidades se plegaron a la causa de las auditorías ambientales. Formaron grupos de trabajo y eligieron delegados en cuatro provincias cuya jurisdicción comprende más de 80 comunidades. Los delegados electos organizaron una marcha al Congreso boliviano en La Paz. En el edificio del Congreso fueron recibidos por una congresista del partido Nueva Fuerza Republicana (NFR) que prometió ayudarlos a hacer avanzar su propuesta de auditoría ambiental. Sin embargo, la promesa nunca fue cumplida de manera que los dirigentes comunales siguieron

presentando sus cargos contra la compañía pero con resultados adversos. En vista de ello, decidieron ejercer más presión política. Según recuerda un dirigente:

Tuvimos que caminar mucho, que viajar a La Paz muchas veces; ellos siempre pedían más cosas; eran solo pretextos para demorar la resolución [para la auditoría] [...] Luego, en enero 26 (2003), decidimos tomar la prefectura y comenzar una huelga de hambre que duró dos semanas. El mismo ministro vino a decirnos que apoyaba la auditoría, si dejábamos la huelga. Nosotros no levantamos la huelga sino que marchamos a La Paz otra vez y conseguimos una carta oficial firmada por el ministro apoyando la auditoría [...]. De regreso en nuestros pueblos nos recibieron como héroes, con música, comida, trago; la gente estaba feliz y tenía mucha esperanza que con la auditoría le iban a compensar por su tierra contaminada [...] pero era solo el comienzo [...] (Oruro, 2/2005).

Durante la huelga de hambre, los dirigentes comunales recibieron ayuda de un congresista del Movimiento al Socialismo (MAS) con quien nuevamente adaptaron y dieron forma legal a su propuesta de auditorías ambientales. Esta vez, la petición fue aceptada. Los procedimientos de auditoría ambiental contemplan un proceso de licitación para la realización de estudios ambientales, ello conforme a términos de referencia específicos cuya preparación es responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Sostenible y los representantes de la comunidad. Así, los dirigentes comunales pasaron seis meses preparando los términos de referencia en las oficinas del ministerio. Con alegría un dirigente recuerda: “Después de seis meses yendo al ministerio todos los días, nos hicimos amigos de los ingenieros y la gente creía que trabajábamos para el Estado, que éramos ingenieros [...]”. Según los términos de referencia acordados, la auditoría ambiental habría de ser llevada a cabo en las provincias de Saucari y Cercado, de donde procedía la mayor parte de los reclamos.

Una vez que los términos de referencia fueron divulgados, el proceso comenzó y la oficina pública dio inicio a la licitación de estudios ambientales técnicos para la auditoría ambiental. Cuatro

instituciones participaron en la licitación. ARCADIS y LINCOPI fueron preseleccionadas y, finalmente, la buena pro le fue concedida a ARCADIS. Mientras tanto, los dirigentes comunales y sus asesores investigaban en el internet a las instituciones preseleccionadas. Y entonces descubrieron vínculos sospechosos entre ARCADIS y la compañía minera, de modo que protestaron la concesión final. De acuerdo con un dirigente, quien resume estos hallazgos y la reacción política de sus compañeros:

[...] encontramos que LINCOPI era una universidad de investigación de Suecia, entonces confiamos en ellos. En cambio, ARCADIS era una empresa que tenía contactos con Newmont [la corporación dueña de EMIRSA], entonces la vetamos [...] esto produjo agitación y la compañía [EMIRSA] y el Ministerio nos pidió que probáramos la acusación [...] nosotros solo teníamos documentos de internet, que ellos consideraban no válidos porque no eran oficiales [...]. Después de días de discusión comenzamos una nueva huelga de hambre para hacer valer los documentos de internet. Al final, aceptaron estos documentos y se invalidó todo el proceso [de auditoría]. (Oruro, 4/7/2005).

Tras la anulación de los resultados, los dirigentes contaban con que pronto comenzaría una segunda licitación según lo estipulado en los procedimientos legales de auditoría ambiental, pero nada sucedió por semanas. Decidieron entonces ir a La Paz a descubrir las razones del retraso. En la capital les dijeron que los términos de referencia se encontraban bajo revisión técnica. Por consejo de CEPA enviaron entonces dos peticiones: (i) que se incluyera en la auditoría ambiental a las provincias adyacentes de Popoo y Dalence junto con las ya consideradas de Saucari y de Cercado, y (ii) que en el proceso participaran no solo los delegados sino también todas las autoridades locales. Según los dirigentes comunales, estas dos peticiones fueron aceptadas verbalmente por los funcionarios. Luego de semanas sin novedades, los dirigentes comunales decidieron marchar nuevamente a La Paz. Ahora les dijeron que los términos de la referencia seguían bajo revisión, esta vez por un experto francés.

El 3 de diciembre de 2003 los nuevos términos de referencia fueron dados a conocer, y la licitación volvió a comenzar. Sin embargo, para el dirigente comunal “lo habían cambiado completamente a favor de la empresa, no eran los que habíamos acordado después de seis meses de trabajo”. A grandes rasgos, los términos de referencia limitaban la auditoría ambiental al área circundante a la operación principal de EMIRSA, vale decir que la circunscribían a dos comunidades, Chuquiña y La Joya. En vista de ello, los dirigentes comunales vetaron estos términos de referencia y dieron inicio a un nuevo período de agitación política.

Este momento fue crítico porque la compañía y numerosas instituciones regionales iniciaron una campaña contra las auditorías ambientales en cuya mira estaban los dirigentes comunales y sus asesores, a quienes calificaron de grupos adversos a la minería, la inversión y el desarrollo. Entretanto, EMIRSA incrementó su propaganda en la región. Aún más, los mineros de EMIRSA marcharon hacia CEPA e hicieron explotar un cartucho de dinamita ante su puerta principal, acusando al centro de estar amenazando sus puestos de trabajo; el catedrático fue víctima de acoso anónimo. La reacción inicial de los dirigentes comunales consistió en organizar un bloqueo de la carretera en sus respectivas localidades, a fin de hacer avanzar sus demandas de una nueva licitación con nuevos términos de referencia, pero esta medida no surtió efecto. Los partidarios de las auditorías ambientales estaban desorientados. Pese a que algunas instituciones como las cooperativas mineras, las ONG y el MAS hicieron manifiesto su apoyo a la causa de las comunidades campesinas, los dirigentes comunales no conseguían ponerse de acuerdo en el siguiente paso político. Tras algunas semanas de discusión interna, el movimiento se dividió en dos grupos.

Un grupo, encabezado por un dirigente del cantón Chuquiña, decidió negociar con el Estado para modificar nuevamente los términos de referencia y reanudar cuanto antes el proceso de auditorías ambientales. Sus partidarios sostenían que los estudios ambientales debían empezar de una vez, pues de lo contrario la

mina podría retrasar la gestión indefinidamente. En palabras del dirigente de este grupo:

[...] nosotros no queremos pelear con el gobierno o la compañía solo por pelear, nosotros queremos saber la verdad [...] la verdad de la contaminación [...] [la compañía] dice que no hay contaminación; bueno, yo he visto ovejas con dos cabezas y cuatro patas [...] yo solo quiero la verdad. Ahora, si nosotros solo nos oponemos la compañía va a demorar el proceso para siempre y nunca vamos a conocer la verdad [...] (Oruro, 4/2005).

Este grupo recibió el decidido respaldo político de un congresista del MAS y rompió relaciones con CEPA. Si bien era reconocido el apoyo de CEPA durante el proceso, cundía la sospecha de que, en este caso, CEPA estaba dando prioridad a su propia agenda y no a las necesidades comunales. Para los miembros de este grupo, “los comunarios estaban económicamente y políticamente cansados y no recibieron fondos internacionales, como CEPA, para seguir peleando”.

El otro grupo, encabezado por un dirigente de la provincia de Cercado, contaba con el respaldo de CEPA. Sus partidarios consideraban que el proceso estaba por completo viciado y que la única solución era volver a fojas cero. Creían que la compañía había sobornado a algunos dirigentes para quebrar la unidad del movimiento y que este proceso de auditorías ambientales se había convertido en un fraude. Con esta orientación, el dirigente de Cercado afirma:

[...] lo que necesitamos es volver a empezar con las marchas y bloqueos hasta que el gobierno nos escuche y no a la compañía. Si seguimos su juego [el de la compañía] con la auditoría nos van a engañar y los comunarios se van a dar cuenta que todo fue inútil [...] queremos una auditoría justa (Oruro, 4/2005).

El 17 de febrero de 2005 el primer grupo acordó nuevos términos de referencia con los funcionarios del ministerio, de modo que el proceso de licitación se reanudó. Los nuevos términos de referencia estipulaban que las auditorías ambientales debían

realizarse en las provincias de Cercado, Saucari, Dalence y Popoo, siguiendo las sugerencias de los dirigentes comunales, y que no solo abarcarían los reclamos contra EMIRSA sino también contra otras posibles fuentes de contaminación. Además, las partes acordaban recolectar todos los reclamos ambientales antes de proceder a realizar los estudios técnicos. La tarea fue asignada a un comité cívico bajo supervisión comunal.

Entre marzo y abril de 2005, se llevó a cabo una recolección de reclamos ambientales en las citadas provincias de Cercado, Dalence, Popoo y Saucari. Una "oficina ambulante" acopió las quejas de una capital provincial a otra. Cada queja fue recogida, registrada en audio y archivada en formato oficial. En algunos lugares, los comunarios formaron colas enormes esperando a que la oficina abriera. Se recabaron 794 quejas individuales y comunales. La mayoría de reclamos trataba sobre la contaminación de la tierra, el agua y el aire que, a su vez, iba en perjuicio del ganado y los cultivos de los campesinos. Se recogieron 547 quejas en Saucari, donde está localizada la mina de EMIRSA, incluyendo 109 en el cantón Chuquiña. Las provincias de Cercado, Popoo y Dalence registraron 223, 15 y 9 casos respectivamente. En Saucari, el 63% de las quejas no identificaba la fuente de la contaminación y el 34% responsabilizaba a EMIRSA. En Cercado se dio una figura semejante con el 58% que desconocía la fuente de contaminación y el 31% que culpaba a EMIRSA. Finalmente, en las provincias de Popoo y Dalence EMIRSA no fue señalada como la principal fuente de contaminación, pero fue culpada por el 23% y el 33% de las quejas respectivamente.

Mientras tanto, el grupo que no apoyaba este proceso de auditorías ambientales se mantuvo activo. Organizó bloqueos de la carretera en las localidades afectadas así como manifestaciones en la ciudad de Oruro con relativo éxito. A medida que proseguía la recolección de quejas abandonaron su oposición frontal, comenzando a afirmar, más bien, que esta recolección podía ser el primer paso de un proceso más comprensivo posterior hacia la consecución de una auditoría ambiental de mayor alcance. Aun así, no apoyaron el proceso de licitación paralelo para los estudios técnicos, obje-

tando sus resultados. De hecho, iniciaron una demanda el día en que los resultados finales eran anunciados en una reunión formal en La Paz.

Como referí al inicio de esta sección, la reunión atrajo centenares de comunarios a La Paz y culminó con disturbios políticos. Sin embargo, la demanda sólo pudo suspender el proceso por corto tiempo; poco después, el proceso de auditoría ambiental se reanudó.

Entiendo que este proceso de cuatro años de duración es un ejemplo asombroso de los diversos mecanismos y articulaciones que las comunidades locales emplean para hacer frente a los nuevos desarrollos mineros y ejercer presión política sobre una compañía transnacional. No obstante, el significado social de un acontecimiento de tal magnitud solo puede ser cabalmente entendido mediante un examen detallado del contexto social en el cual se produjo.

### *Contexto social y actores en el proceso de auditorías ambientales*

Las auditorías ambientales no han sido la primera experiencia comunal de conflicto ambiental con los grandes proyectos extractivos. Desde la promulgación de las nuevas leyes del medio ambiente, las comunidades se han venido sirviendo con mayor frecuencia e intensidad de las nuevas disposiciones a fin de obtener mejores compensaciones por los daños ambientales a sus recursos naturales. Por ejemplo, han ido en aumento las luchas por la realización de mediciones de impacto ambiental y social más completas en sus respectivas comunidades. Gradualmente, las comunidades y los dirigentes comunales incorporan nuevos marcos legales a medida que desarrollan el conocimiento político necesario para hacer frente a las compañías extractivas. A su vez, organizaciones urbanas como las ONG y la Iglesia desarrollan mejores capacidades institucionales a la hora de afrontar problemas ambientales. Un ejemplo importante de este último proceso es la constitución del Foro Ambiental

en 1992, el cual abarcó un número significativo de instituciones civiles regionales del departamento de Oruro. Este foro cumplió un papel relevante en la identificación de un derrame de petróleo en el río Desaguadero en 2000.

En 2000 se agrietó el oleoducto que transporta el petróleo de la refinería boliviana de Villarroel al puerto de mar chileno de Arica, produciendo un derrame en el río Desaguadero. El derrame ocasionó una contaminación importante en las márgenes del río, que a su vez dañó la tierra y los cultivos de alrededor de 80 comunidades indígenas campesinas. La compañía transnacional de petróleo Transredes<sup>7</sup> asumió la responsabilidad del derrame, llevó a cabo estudios de impacto ambiental para evaluar los daños e implementó iniciativas de limpieza con la participación comunal. Sin embargo, las comunidades afectadas consideraron que los montos de compensación asignados no eran suficientes ante la magnitud del daño ambiental que afrontaban y, por lo tanto, iniciaron una lucha política contra la compañía para incrementar el monto de las compensaciones. Gradualmente, todas las comunidades afectadas constituyeron una fuerza política unificada y se articularon con las instituciones urbanas, en particular con el Foro Ambiental. Al cabo de un par de años de lucha, las comunidades lograron su objetivo político. Como explica un dirigente del Foro Ambiental:

[...] la estrategia de las comunidades tuvo dos elementos. Un elemento fue interferir con el proceso de limpieza [ambiental] llevado a cabo por la compañía mientras se demandaba más compensación por el agua y los pastos contaminados [...] Un segundo elemento consistió en establecer relaciones con la población e instituciones urbanas, en particular con el Foro Ambiental, para crear consensos por compensaciones más justas. Así, el Foro se convirtió en el mediador entre las comunidades e instituciones civiles y estatales urbanas. De esta manera, las comunidades comenzaron a articular demandas concretas [...] (Oruro, 2/2005).

---

7. Transredes es una compañía boliviana de la cual son propietarias las corporaciones Exxon/Shell y Mobil.

Conviene destacar que EMIRSA apoyó a los dirigentes comunales en su lucha contra la compañía petrolera Transredes, intentando alimentar una imagen diferenciada entre su desempeño ambiental y el de Transredes. Los ejecutivos de EMIRSA prestaron atención y aprendieron de este proceso político, reconociendo el importante papel cumplido por el Foro Ambiental a efectos de conseguir respaldo público para la causa de las comunidades. No sorprende entonces que la reacción política inicial de la compañía contra las auditorías ambientales en sus propias operaciones haya sido desacreditar eficazmente al Foro Ambiental.

Ahora bien, los dirigentes comunales involucrados en el proceso de las auditorías ambientales cuentan, en su mayoría, con una significativa experiencia política. El dirigente del grupo que finalmente negoció y apoyó las auditorías ambientales que ya se habían iniciado constituye un caso interesante. Cuando era muy joven fue elegido presidente de su "rancho". Desde este cargo aprendió a tratar con otras autoridades campesinas, dirigentes regionales y funcionarios estatales. Más adelante, emigró a Cochabamba en busca de una vida mejor. Allí se unió a un gremio campesino local. Hace dos años volvió a su comunidad de origen y fue elegido presidente del comité ambiental comunal, manteniendo desde entonces una doble residencia en su comunidad y en Cochabamba. Cuando se inició el proceso de auditorías ambientales fue elegido presidente del comité ambiental departamental. Otro ejemplo lo ofrece un dirigente de Chuquiña que participó en las luchas comunales contra Transredes y EMIRSA. Durante los últimos veinte años ha ocupado diversos cargos comunales. Dos veces ha sido corregidor de su cantón, dos veces presidente de su subcentral sindical y varias veces presidente sindical de su rancho. Dadas sus obligaciones políticas, muy a menudo viaja a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro, manteniendo también una doble residencia, en Chuquiña y Oruro. El último ejemplo corresponde al dirigente del grupo que se opuso a las auditorías ambientales. Esta persona ha desempeñado numerosos cargos en su comunidad durante los últimos diez años. Ha sido

presidente sindical de su rancho en varias ocasiones y *jilacata* (autoridad indígena) una vez. Recientemente fue elegido presidente del comité ambiental de su provincia. Aunque no mantiene una doble residencia, la mayor parte de su familia vive en Oruro, ciudad donde él permanece uno o dos días a la semana. En todos estos casos, los dirigentes comunales reconocen que su experiencia como dirigentes sindicales ha sido fundamental para “entender políticamente el mundo y sus circunstancias”, como me refirió uno de ellos.

La revisión del perfil político e institucional de los agentes externos en el proceso de las auditorías ambientales también brinda pistas importantes. En primer lugar, el “licenciado” que puso a los dirigentes comunales en contacto con el catedrático y el propio catedrático son viejos militantes de izquierda y colaboran con instituciones ecologistas respaldadas por los sectores progresistas de la Iglesia Católica. Ambos han participado activamente en el Foro Ambiental y han llevado a cabo estudios ambientales. En segundo lugar, CEPA es un instituto que recauda fondos internacionales para la investigación social y ambiental, cuyo director es un antropólogo y sacerdote católico de la orden de los Oblatos. Tanto la orden de los Oblatos como la Compañía de Jesús despliegan una gran actividad en la región; ambas son los principales soportes de los institutos de investigación y de las estaciones de radio regionales. En tercer lugar, el MAS es un importante partido político no tradicional con apoyo, discurso y raíces indígenas que se hizo del poder en las elecciones generales de diciembre de 2005. El congresista que apoyó las auditorías ambientales fue reelecto.

En conclusión, la experiencia de las auditorías ambientales prueba que la fuerza política de Chuquiña para enfrentar a las grandes compañías extractivas debe ser hallada no en su fortaleza interna, que ha sido minada, sino en su capacidad de articulación política con agentes externos y el Estado. Las comunidades y sus dirigentes han logrado adquirir poder utilizando nuevas disposiciones legales y forjando alianzas políticas con instituciones regionales y nacionales como ONG y partidos políticos. Estas insti-

tuciones, por su parte, han reforzado su posición política frente a las tendencias internacionales asumiendo como suyas las preocupaciones ambientales comunales. Finalmente, como en Angoraju Carhuayoc, la naturaleza de las respuestas políticas de la comunidad ha sido el resultado de procesos sociales históricos que han modelado la conciencia política comunal y el desempeño político de sus dirigentes. Es de destacar en este caso en particular que las décadas de experiencia en política sindical han facilitado la actuación política comunal y su capacidad para establecer alianzas con los agentes externos.

## 5. Conclusiones

Los nuevos modos de producción y las nuevas políticas implantadas por los proyectos mineros multinacionales han afectado a las comunidades locales de maneras contradictorias. Por un lado, se aprecia que el desarrollo de los proyectos en el marco de relaciones bilaterales y asimétricas entre las compañías y las comunidades ha afectado profundamente los fundamentos materiales, políticos y simbólicos de la comunidad. Los proyectos mineros han transformado las economías domésticas de las familias campesinas, las formas culturalmente significativas de aprehender el paisaje y los liderazgos políticos comunales. Así, Angoraju Carhuayoc y Chuquiña tuvieron que hacer frente a una aguda crisis interna que amenazaba su existencia colectiva como comunidad. Por otro lado, los proyectos mineros han traído consigo nuevos actores, discursos ambientales, disposiciones legales y espacios sociales que facilitan el crecimiento del poder político de las comunidades, y de este modo ellas han adquirido prominencia regional.

Este contradictorio nuevo contexto social ha originado diversas respuestas políticas comunales. Angoraju Carhuayoc ha respondido reedificando a la "comunidad" como sujeto político eficaz. A lo largo de interminables asambleas y discursos, los dirigentes comunales y las familias comuneras han elaborado una narrativa significativa que ha facilitado la reconstitución de una identidad política

comunal. Dicho de otra manera, la comunidad ha podido superar fracturas internas y reproducirse políticamente a sí misma mediante la rememoración de décadas de luchas, recreadas en la actuación de los dirigentes comunales. Según lo que plantea Abercrombie (1998: 23), creo que esta constante reconstrucción del pasado en diálogo con el presente constituye un trabajo de la memoria colectiva en el cual los recuerdos "escritos" en discursos y actas comunales interactúan con los recuerdos ritualizados que son recreados en ritos colectivos como, en este caso, las asambleas comunales, posibilitando la reproducción social.

Chuquiña ha respondido de manera distinta. Esta comunidad ha ganado fuerza política por medio de alianzas con agentes externos. Los dirigentes comunales y las familias de la comunidad han establecido alianzas con las ONG y partidos políticos embarcándose en una larga lucha por las auditorías ambientales. Sin embargo, ello no significa que Chuquiña haya colocado las preocupaciones ambientales por encima de otros intereses. Como sugieren Conklin y Graham (1995), la protesta de las comunidades ante la destrucción ambiental es, en cierto sentido, respuesta a y acerca de la destrucción ambiental, pero las luchas ambientales se han convertido además en mecanismos para ganar control sobre aspectos fundamentales de la soberanía comunal. En otras palabras, las familias comuneras han llegado a entender el medio ambiente no solo como parte fundamental de su propia vida social, sino también, en sí mismo, como herramienta política eficaz para enfrentar a la compañía y conseguir el respaldo de agentes externos y de un auditorio global. En vista de ello, las familias comuneras han sido capaces de adquirir poder por sí mismas creando redes políticas a pesar de las aparentes limitaciones y conflictos al interior de la comunidad.

Considero que las distintas respuestas políticas de Angoraju Carhuayoc y de Chuquiña han sido el fruto de sus experiencias políticas históricas específicas, en especial las relacionadas con el Estado. En el caso de Angoraju Carhuayoc, la posición del Estado se ha localizado histórica y simbólicamente fuera de la localidad y

desvinculándolo, en cierta medida, de la dominación de la elite local. A semejanza de lo estudiado por Nugent en los Andes del Norte del Perú (2002), las familias comuneras de Angoraju Carhuayoc siempre han apoyado la autoridad del Estado y han visto en ella un medio para superar la opresión de las elites locales, aun cuando el débil Estado peruano haya estado por lo común ausente de la localidad. Para las familias comuneras, el poder del Estado es algo que reside fuera de la comunidad y que puede ayudarlos o reprimirlos. Por ello, las habilidades políticas de los dirigentes comunales están relacionadas con el grado en que “conocen” y “tratan” con el Estado. A través de su historia han aprendido que la unidad comunal interna es el activo político más importante llegado el momento de tratar con el Estado y, en alguna medida, con cualquier otra fuerza externa. Así, la comunidad ha dado prioridad al establecimiento de relaciones bilaterales con el Estado frente a la creación de alianzas con elites o actores locales. En el nuevo contexto, la comunidad reproduce la misma vieja estrategia “bilateral” al tratar con la compañía en un proceso dinámico que incorpora (sin privilegiar) eventos circunstanciales y herramientas políticas eficaces, como los actores globales y los discursos ambientales. Esta estrategia ha ido en detrimento de la formación de un movimiento social más amplio articulado en torno del desarrollo minero, pero ha asegurado la integridad de la comunidad como actor político soberano.

En el caso de Chuquiña, la comunidad y sus dirigentes cuentan una larga tradición de relación rutinaria con el Estado. En el centro de esta tradición se encuentra el sindicato campesino. Los sindicatos no solo han sido los vehículos principales de comunicación entre los comuneros y el Estado, sino también escuelas políticas para los dirigentes comunales. Tras décadas de predominio político del sindicato campesino, los dirigentes campesinos han aprendido a establecer alianzas regionales, e incluso nacionales, y a tratar con el aparato del Estado (Rivera 1987: 103-149). El Estado no es una entidad ajena a la localidad, sino una presencia cotidiana con la cual es posible convenir o disentir. De hecho, los mecanismos típicos

de presión política como las huelgas de hambre son, antes que luchas, medios para generar consenso. En este sentido, el proceso de las auditorías ambientales muestra cómo las familias y los dirigentes comuneros se sirven de habilidades políticas históricamente aprendidas en su confrontación con la compañía.

Finalmente, las comunidades son conscientes de las formas en que operan la dominación y la explotación, mas ello no equivale a afirmar que sus estrategias actuales implican una aceptación total de las estructuras de poder. Ciertamente no son prácticas subalternas de resistencia en contra y “desde fuera” de un sistema de dominación, sino formas dinámicas de lucha contra la subordinación que operan dentro de estructuras de poder y que siguen las “lecturas” hegemónicas comunales alcanzadas en procesos de cuestionamiento, legitimación y redefinición del poder y el significado (Mallon 1995: 6). En suma, las estrategias políticas campesinas actualmente empleadas para hacer frente a los poderes transnacionales y a los nuevos contextos sociales constituyen formas de resistencia históricamente forjadas, que no son ni “ecologistas” ni “autónomas”, sino respuestas políticas conscientes afirmadas a lo largo de décadas de luchas y negociaciones con y contra el Estado.

## 5

### *Movimientos sociales, lazos transnacionales y desarrollo territorial rural en zonas de influencia minera: Cajamarca-Perú y Cotacachi-Ecuador*<sup>1</sup>

A. BEBBINGTON, J. BURY, D. HUMPHREYS BEBBINGTON,  
J. LINGAN, J. P. MUÑOZ Y M. SCURRAH

#### 1. Introducción

En sus “Siete tesis sobre los movimientos sociales y el cambio político en América Latina”, un tributo al recién fallecido Andre Gunder Frank, Biekart (2005) sugiere que una parte importante de la fuerza contemporánea de estos movimientos se debe a sus relaciones transnacionales. De forma similar, en su análisis de las redes transnacionales de incidencia Keck y Sikkink (1998) sugieren que las campañas de activistas locales y nacionales se ven fortalecidas por las acciones de incidencia de sus aliados en el Norte. Otros estudios de incidencia dirigida a modificar la acción de agencias

- 
1. Este documento fue preparado basado en el trabajo de un equipo compuesto por Anthony Bebbington, Denise Humphreys Bebbington, Juan Pablo Muñoz, Jeannet Lingan, Martin Scurrah, Javier Alvarado, David Gonzales, Jeffrey Bury, Cristina Cevallos, Christian Paz, Jorge Camacho, Sofia Vargas y Fanny Briceño. El estudio fue financiado por RUMISP y su Programa Movimientos Sociales, Gobernanza Ambiental y Desarrollo Territorial Rural gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá. Agradecemos mucho la lectura cuidadosa y los comentarios de Cristina Echevarría.

multilaterales nos llevan a interpretaciones parecidas (ej. Clark et al., 2003; Fox y Brown, 1998).

Son este tipo de interpretaciones las que han nutrido las apuestas de muchos activistas, fundaciones y filántropos por apoyar y promover nexos transnacionales entre organizaciones y activistas del Norte y del Sur y han incrementado el entusiasmo intelectual por “lo transnacional”. Sin embargo, y como contraste a estas interpretaciones, el recuento de discusiones “difíciles”, en reuniones globales de redes extensas como Amigos de la Tierra Internacional o grupos más pequeños como Global Greengrants Fund y las ya conocidas tensiones en las relaciones entre las ONG de desarrollo de América Latina y Europa (Bebbington, 2005; Valderrama, 1999) dan cuenta de la “fricción” (Tsing, 2004) que se origina en la simultaneidad de cooperación y tensión en estas relaciones. En su estudio etnográfico de activistas ambientalistas en Indonesia, Tsing sugiere que las relaciones entre Indonesia y los circuitos transnacionales de capital como de activistas están caracterizados por la existencia de “fricción”, es decir, la presencia simultánea de movimiento y resistencia, de solidaridad y rechazo, de autonomía y absorción. Esta fricción se da a diferentes niveles. Por un lado, existen fricciones dentro de los propios movimientos ambientalistas cuando los actores involucrados influyen de alguna manera en las acciones de los otros y las relaciones son tanto de solidaridad como de tensión y se dan juegos de poder.<sup>2</sup> Por otro lado, influenciados significativamente por las relaciones transnacionales, los movimientos ambientalistas al presentar algún nivel (variable, por supuesto) de resistencia a las industrias extractivas producen cierta fricción en los flujos de capital y en el comportamiento de los inversionistas.

Tal como ha sucedido en el archipiélago de Indonesia, América Latina en el periodo posneoliberal ha sido un destino importante para las industrias extractivas, particularmente en el sector minero. El proceso de neoliberalización ha generado nuevas geografías de la inversión minera y de los diez países del mundo que han recibido

---

2. Ver también Eguren (2004) en *Debate Agrario*.

el mayor flujo de inversión entre 1990 y 2001 cuatro son latinoamericanos (Bridge, 2005).<sup>3</sup> Chile, Indonesia y Perú (donde la inversión se quintuplicó durante los 1990) son según Bridge (*op. cit.*: 418) los países donde la neoliberalización ha tenido mayor impacto en atraer nuevas inversiones mineras. Mientras tales datos no parecen sugerir que la inversión minera esté encontrando mayor fricción —y más bien sugieren una relativa ausencia, o por lo menos debilidad crónica, de los movimientos socioambientales que se oponen a ellos— el apoyo a los movimientos y activistas socioambientales para vincularlos y fortalecer lazos con activistas de Norteamérica, Europa y Australia sigue siendo una de las apuestas principales de redes transnacionales y de organizaciones del Norte quienes trabajan el tema de las industrias extractivas. Estas formas de resistencia van desde un rechazo abierto y completo de la minería hasta un intento de presionar para que se den formas de actividad minera que permitan no solo acumulación de capital sino también un desarrollo local y nacional que genere beneficios para un espectro amplio de la sociedad, que asegure que las funciones básicas del medio ambiente se mantengan íntegras, y que —en el largo plazo— ayuden a construir instituciones a través de las cuales las diferencias de opinión y los conflictos puedan ser manejados.

El estudio que sustenta este capítulo se propuso indagar sobre los efectos que tienen estas apuestas en las relaciones que se dan entre la inversión minera, la gobernanza ambiental y el desarrollo de territorios rurales. Partiendo de la hipótesis de que las relaciones transnacionales son un recurso clave para los activistas locales, pero que estas se caracterizan, de forma casi inevitable, por la existencia de las fricciones que Tsing intuye, nuestro trabajo se centró en el estudio de las relaciones transnacionales dentro de los movimientos sociales que cuestionan y resisten las prácticas actuales de las empresas mineras operando en las zonas altoandinas de Perú y Ecuador. Específicamente, buscamos conocer los efectos que estas

---

3. Chile, Perú, Argentina y México, en este orden (Bridge, 2005).

relaciones de escala han tenido tanto en las formas tomadas por estos movimientos (su estructura, sus discursos etc.) como en el nivel de ingerencia que estos han tenido en las prácticas de las empresas mineras y, por lo tanto, en sus efectos en el desarrollo de las regiones donde operan. Buscando enfocar el rol e influencia jugados por las relaciones transnacionales dentro de los movimientos socioambientales, en el estudio nos preguntamos: (i) Cómo surgen los movimientos sociales que se interesan en temas ambientales en áreas de influencia minera y en este proceso cómo surgen las relaciones entre actores locales, actores internacionales y redes transfronterizas; (ii) si, y hasta que punto, estos movimientos sociales han podido participar e influir en el establecimiento de normas, reglas y prácticas (tanto formales como no formales) que gobiernan la extracción minera en un determinado espacio; y (iii) si, y hasta qué punto, estos movimientos sociales han influido en los procesos de desarrollo territorial rural en las áreas afectadas por la minería. Una cuarta preocupación fue (iv) ¿cómo influyen las interacciones entre organizaciones y activistas locales e internacionales en la consolidación de los movimientos sociales ecologistas en la zona andina y cómo contribuyen dichas interacciones en construir capacidades para una “buena” gobernanza ambiental-territorial más favorable a las poblaciones excluidas en las áreas afectadas por la industria extractiva? Dicho esto, es importante aclarar que el énfasis en las relaciones transnacionales no debe interpretarse como un argumento para la mayor influencia de actores internacionales relativa a actores nacionales o locales —fue simplemente el enfoque asumido para el estudio.

El análisis que se presenta en este capítulo se fundamenta en los conceptos esbozados en el capítulo de Introducción sobre movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo rural territorial. Por lo tanto, tales conceptos no se repiten aquí y pedimos al lector volver al primer capítulo para mayores detalles sobre el marco conceptual utilizado. En lo que sigue de este capítulo primero explicamós la metodología empleada en el trabajo y en la selección de los casos; luego se describen en mayor detalle los dos

casos estudiados y se presentan y discuten los hallazgos principales. El capítulo cierra con una discusión de temas conceptuales para entender en qué medida los hallazgos ayudan a reformular los debates sobre movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural.

## 2. Metodología, casos estudiados y contextos nacionales

### *Selección de casos*

A la vez de ser un intento de responder a estas preguntas de investigación, este estudio también nació a raíz de preocupaciones estratégicas y discusiones internas de una organización “transnacional” concreta —Global Greengrants Fund (GGF),<sup>4</sup> con sede en los EEUU.<sup>5</sup> Se buscaron casos donde existían no solo nexos generales entre activistas locales e internacionales, pero además donde existían nexos específicos con GGF (además de otros actores). De esta forma seleccionamos Yanacocha en Cajamarca e Intag en Cotacachi pues ambos recibieron apoyo de GGF tanto a través de su Consejo Andino como de su Consejo Global.

Al mismo tiempo buscamos casos cuya comparación tenía sentido analítico. El valor analítico radica en el hecho de que los dos casos comparten una línea historial parecida, pero muestran situaciones actuales muy distintas. En ambos sitios, la exploración geológica básica ocurrió durante los años de 1980, y los primeros

- 
4. GGF entrega pequeños fondos a grupos de activistas en temas de justicia ambiental y sostenibilidad local. Estos grupos son identificados por “consejos subregionales” cuyos miembros son seleccionados basados en sus contactos existentes con organizaciones y actores quienes trabajan temas de justicia social, medio ambiente y desarrollo sostenible. Actualmente existen cinco consejos en Latinoamérica, incluyendo el de la zona andina. Al mismo tiempo hay consejos en otras partes del mundo y un “consejo global” compuesto por entidades amigas de GGF. Para mayor información ver: [www.greengrants.org](http://www.greengrants.org).
  5. Son cinco instituciones las que forman parte del Consejo Global de esta fundación: Amigos de la Tierra Internacional, Pesticide Action Network, Rainforest Action Network, International Rivers Network y Earth Island Institute.

intentos para consolidar la exploración y establecer las minas ocurrieron a finales de los 80 / inicios de los 90. En la actualidad, Yanacocha es la mina de oro más grande de América Latina y la segunda más grande del mundo. En cambio, en Intag donde habría significativos depósitos de cobre, aún no existe una mina. Dada la diferencia entre las dos experiencias, se pensó que compararlas ayudaría a identificar los factores que explican por qué los movimientos sociales habrían podido influir tan fuertemente en Cotacachi y tan poco en Cajamarca. Las líneas de tiempo para los dos casos se presentan en los gráficos 5.1 y 5.2.

### *Enfoques metodológicos*

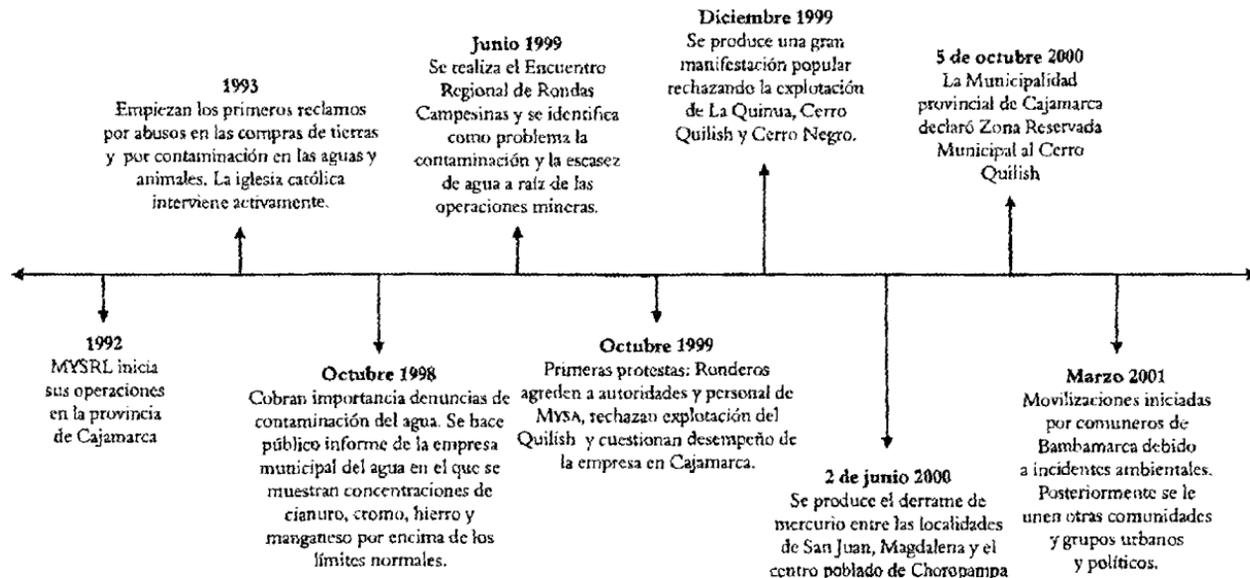
La naturaleza de las preguntas de investigación llevó a que este estudio tuviera un carácter mayormente cualitativo. Además, el enfoque de ecología política —en lo cual se intenta, explícitamente, trabajar a diferentes puntos a la larga de las cadenas transnacionales y dentro de los procesos locales— implicó un trabajo multilocal y con distintos tipos de actores.

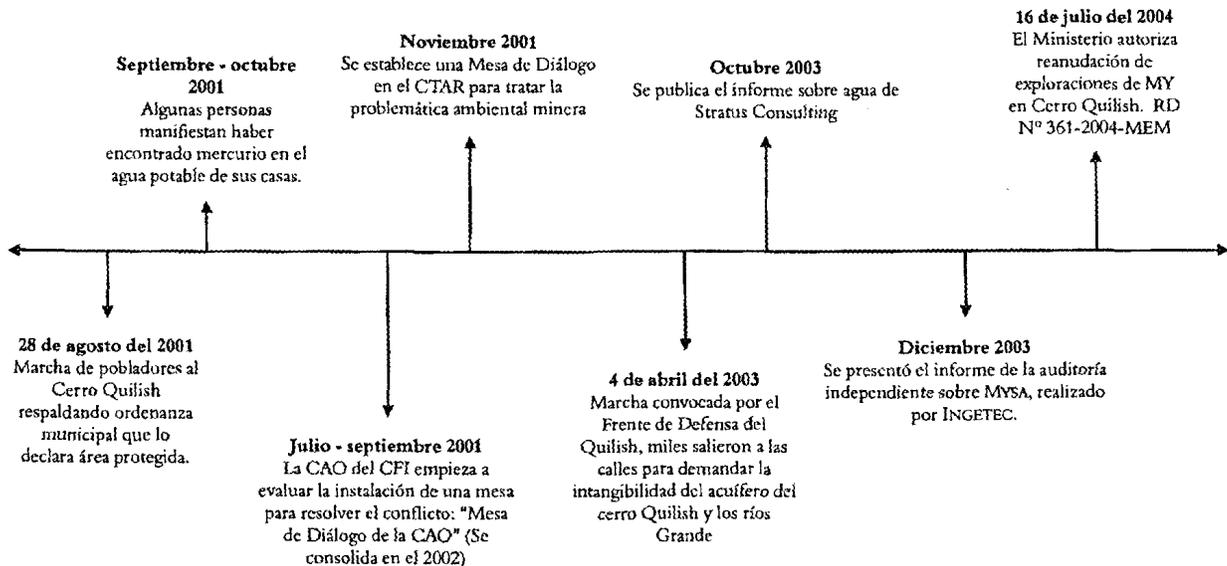
La reconstrucción de los procesos a través de los cuales los MS fueron surgiendo, interactuaron con actores estatales y empresariales y participaron en formas de debate público, requirió además entrevistas a profundidad con una gama de actores. Del mismo modo, entender cómo los actores estatales y mineros interpretaron y respondieron a los MS también implicó entrevistas tanto a profundidad como abiertas.<sup>6</sup> Esta información se combinó con materiales escritos y/o electrónicos para reconstruir las historias de ambas regiones, y permitió interpretar y matizar estos materiales. Gran parte de este material fue recolectado en Cajamarca y Cotacachi, tanto en sus centros urbanos, como en una selección de comunidades y centros poblados más locales. A nivel de comunidades rurales el trabajo estuvo basado en entrevistas a

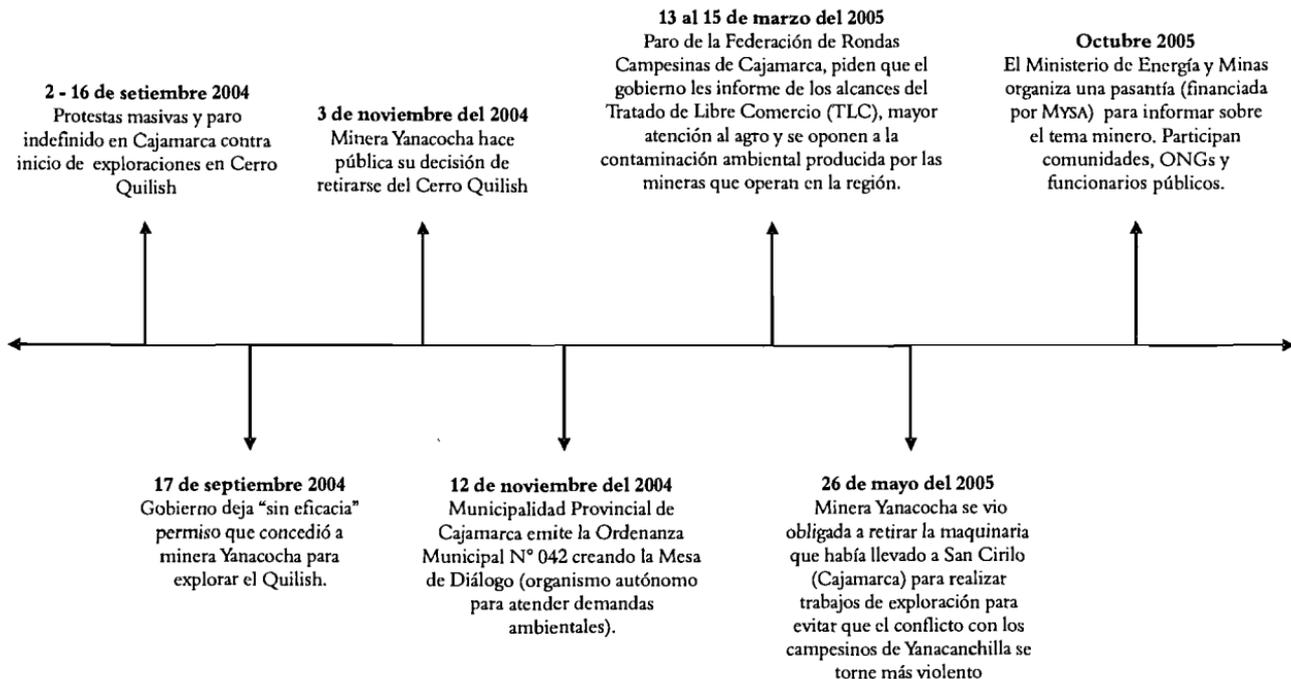
---

6. Conseguir algunas de estas entrevistas tomó tiempo, pero al final logramos entrevistar no solo a activistas quienes habían quemado campamentos mineros sino también a propietarios y oficiales de alto nivel de empresas mineras.

**Gráfico 5.1**  
**LÍNEA DE TIEMPO, CAJAMARCA-YANACOCHA (PERÚ)**



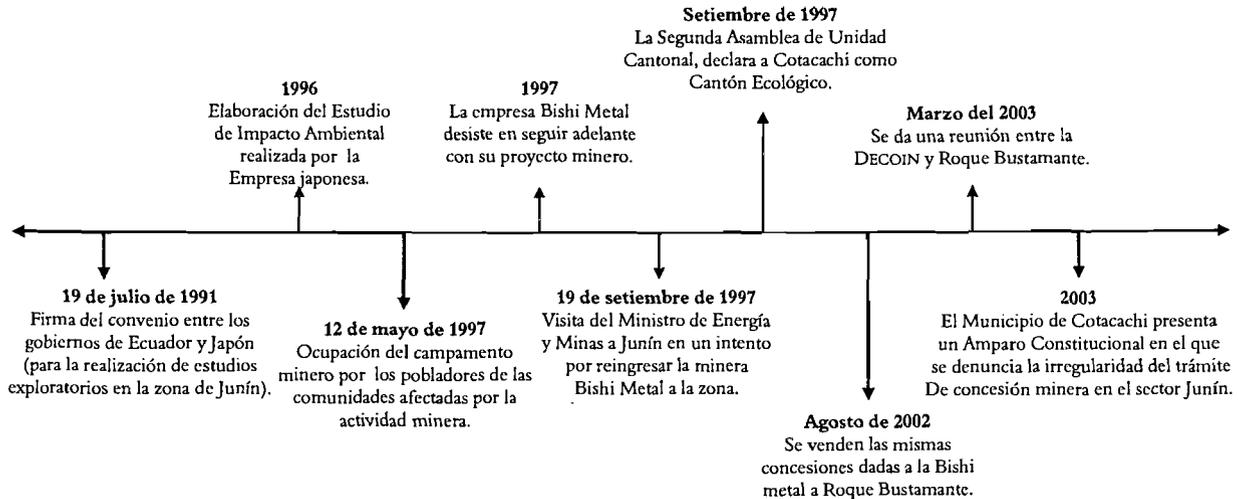


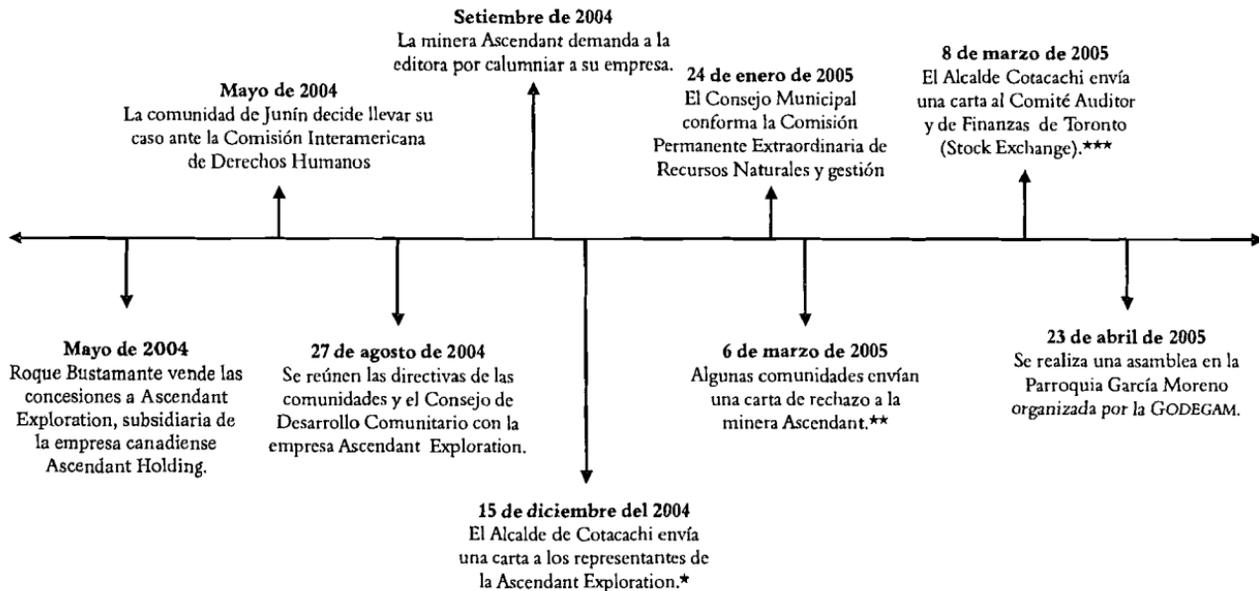


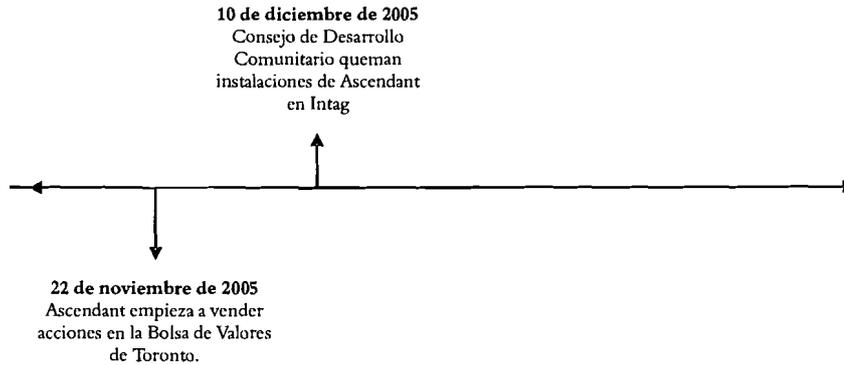
*Fuente:* Elaboración propia.

## Gráfico 5.2

### LÍNEA DE TIEMPO, CANTÓN COTACACHI (ECUADOR)







\* [www.decoin.org/Mayor\\_Rejects\\_Mining2.html](http://www.decoin.org/Mayor_Rejects_Mining2.html)

\*\* [http://www.miningwatch.ca/issues/Ecuador/Cerro\\_Pelado\\_sp.pdf](http://www.miningwatch.ca/issues/Ecuador/Cerro_Pelado_sp.pdf)

\*\*\* [www.miningwatch.ca/issues/Ecuador/Cotacachi\\_TSX\\_sp.html](http://www.miningwatch.ca/issues/Ecuador/Cotacachi_TSX_sp.html)

Fuente: Elaboración propia.

informantes clave y grupos focales. También se llevó a cabo rondas de entrevistas en Lima y Quito y participamos en ciertos eventos relacionados con el tema de estudio. En algunos casos se mantuvo una interacción electrónica con las personas entrevistadas para complementar la información conversada y, aprovechando de visitas a Amsterdam, Boulder y Londres se hicieron entrevistas en persona. Restricciones presupuestales no permitieron entrevistas en Canadá ni otros lugares en los Estados Unidos.

### ***Contextos nacionales***

Un riesgo con el enfoque “glocal” es que se enfatiza lo global y lo local a costo de lo nacional. Sin embargo, para el análisis comparativo de este estudio, el contexto nacional es de mucha importancia pues influye en las dinámicas de cada caso y en las diferencias entre los casos. El contexto nacional permite además apreciar el peso de la minería en cada economía<sup>7</sup> y, por tanto, ayuda a explicar las diferenciadas formas de movilización social alrededor de la minería; los distintos tipos de actores que surgen; en las relaciones de poder entre estos actores y, por lo tanto, en la naturaleza (y quizás la direccionalidad) de las relaciones que se dan entre movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo rural.

Los movimientos socioambientales critican la aseveración de que “Perú es un país minero” y enfatizan en cambio su megadiversidad y pluriculturalidad. Con cierta razón, insisten en que identificar al país como “minero” fortalece la posición de los intereses mineros y sugiere que los movimientos socioambientales están actuando en contra de lo natural y lo históricamente inevitable. De todas maneras, la historia minera del Perú es larga y explica el

---

7. En Perú, en 2003 la minería contribuyó algo menos del 6% del PBI, 3% del empleo nacional, 40% del total de exportaciones y los impuestos que paga cobre alrededor de 50% del presupuesto público (hay distintas estimaciones) (Barrantes et al., 2005: 22). En Ecuador los montos son mucho menos: en el 2002 el sector minero contribuyó menos de 1% del PBI y solo US\$ 12 m en exportaciones (EIU).

surgimiento de ciertos actores y poderes en el sector. Por ejemplo, una de las empresas propietarias de la minera Yanacocha (la Compañía de Minas Buenaventura) empezó a operar en 1953; hoy la empresa es dirigida por los hijos del fundador, varios miembros de la familia han jugado papeles claves en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE, el gremio de las industrias extractivas en Perú) y hoy son personajes de cierta importancia en el mundo político peruano.

La historia económico-política de la minería también ayuda a explicar el surgimiento y los altibajos de distintos actores sociales quienes han cuestionado esta minería en el Perú. Entre estos actores incluimos a las organizaciones de movimientos sociales (SMO) identificados por McCarthy y Zald (1977) las cuales también surgen como respuesta a (y parte de) la economía política nacional del sector minero. Por ejemplo, en 1981 en Ilo, uno de los centros históricos de la minería, nace la Asociación Civil Labor, una ONG que en sus inicios trabajó con los sindicatos mineros (hoy en día debilitados) y poco después en temas de deterioro ambiental causado por la minería. Mientras Labor nunca ha tenido el mismo poder político a nivel nacional que han tenido los intereses mineros, su éxito en influir en algunas de las prácticas de la empresa Southern Perú Copper Co. y del gobierno local le ha dado cierto prestigio nacional e internacional, lo cual le ha permitido pasar a ser el socio peruano de Amigos de la Tierra Internacional y tener presencia en distintas partes del país. Otros ejemplos incluyen Cooperación (que nació de otro grupo, IPEMIN) y el Grupo Andes (que nació de ECO), quienes, a diferencia de Labor, surgen a consecuencia de la expansión de la inversión minera en los años 90. En el mismo período, otras organizaciones, como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), fundada en 1986 con intereses más genéricos, también empezaron a interesarse en el tema minero.

Estas SMO cumplieron roles importantes en otros dos fenómenos que son claves para entender el caso peruano: la formación de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la

Minería (CONACAMI) y la creación del Grupo de Diálogo sobre Minería y Desarrollo Sostenible. Después de un proceso que empieza en 1998, CONACAMI se funda en 1999, como una organización social que busca representar a nivel nacional, las comunidades afectadas por la minería. A diferencia de las organizaciones sindicales (que eran de obreros), CONACAMI era una organización que representaba más bien territorios (comunidades campesinas en las áreas de influencia minera), y en cierto sentido nació de un conflicto particular entre un territorio campesino (Vicco) y una empresa —conflicto que fue formando ciertos liderazgos quienes, varios años después, y a través de interrelaciones con SPDA, Cooperación, ECO, Oxfam América y otros, terminaron liderando el proceso que culminó en la creación de la coordinadora. Desde 1999, CONACAMI ha cobrado cada vez mayor visibilidad en los conflictos mineros en el país. En cierto sentido, su posición también se ha radicalizado, lo cual en el 2005, por presión de la oficina del Presidente, la SNMPE y ciertas empresas, le ha significado su retiro de la lista oficial de las ONG en el país. Pero sobre todo, CONACAMI ha ido incorporando discursos cada vez más indigenistas (Paredes, 2005). Esta “indigenización” de la apuesta política de una organización que inicialmente era “campesina” se explica según Paredes por el papel jugado por ciertos actores internacionales y organizaciones indígenas ecuatorianas (Paredes, 2005). Más allá de debates sobre su legitimidad, el sello “indígena” tiene el efecto de crear ciertos lazos con otras organizaciones indígenas nacionales, de “territorializar” el argumento en contra de la minería y de relacionarlo con otros procesos transnacionales, sobre todo aquellos alrededor del convenio OIT 169.

No se puede entender la creciente visibilidad de CONACAMI independientemente de la multiplicación y agudización de los conflictos que se han dado entre comunidades y empresas mineras desde 2000<sup>8</sup> a lo largo del país, una multiplicación que de igual

8. Sobre todo a raíz de la experiencia en Tambogrande donde una campaña local (con apoyo nacional) tuvo el efecto de que la empresa Manhattan Metals decida no seguir con sus planes de desarrollo minero en la región.

manera hay que entender en términos de los crecientes flujos de empresas e inversiones extranjeras hacia el sector minero en Perú. Este mismo proceso de inversión externa también indujo otro fenómeno que —reflejado en su nombre— intentó buscar espacios de negociación entre empresas y un conjunto de actores sociales: el Grupo de Diálogo Minero. Inicialmente promovido por la cooperación canadiense (país cuya inversión en el sector va en aumento), el Grupo fue inicialmente un espacio dominado por las ONG y SMO. Sin embargo, bajo el liderazgo de un profesional de Labor, con el tiempo el Grupo logró incorporar mayor participación del sector empresarial y del Estado (aunque ni CONACAMI ni la SNMPE participaron) y cuando se dio un ataque contra el campamento de otra inversión de Buenaventura en el Departamento de Cajamarca, un directivo de Buenaventura también se incorporó y asumió cada vez mayor presencia e influencia en el Grupo. Este proceso culminó en una declaración del Grupo que describía las bases para un futuro minero sostenible en Perú. Durante 2005 el Grupo también organizó reuniones en Cajamarca para promover el diálogo.

Comparado con este nivel de actividad, debate y conflicto nacional, el contexto ecuatoriano es muy distinto. Dado el aún muy limitado desarrollo del sector minero no hay ni grandes poderes económicos nacionales relacionados al sector, ni muchas organizaciones sociales o SMO especializados en el tema. De hecho, es solo en 2005 y en gran medida a raíz del caso Cotacachi, que CEDENMA (el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente) y la Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales (PLASA) plantearon crear grupos de trabajo sobre el tema minero. Anteriormente el tema había sido asumido por la ONG Acción Ecológica, con sede en Quito, la cual abrió un programa de minería en los años noventa.

Tal como en el caso de Labor, Acción Ecológica (AE) fue explícita en buscar nexos con organizaciones sociales y, en este sentido, también ha operado como una suerte de SMO dentro de un muy incipiente movimiento socioambiental nacional. También

como Labor, fue hasta hace poco, la organización social de Amigos de la Tierra en el Ecuador. Acción Ecológica optó por salir de la red ATI por diferencias ideológicas. Esta postura más radical marca una diferencia clave entre Acción Ecológica y Labor, donde AE tampoco mantiene relaciones de diálogo ni con empresas ni con el gobierno. Sus lazos principales son con organizaciones sociales y, en los últimos años, sobre todo con CONAIE. En este sentido, su papel a nivel nacional es mucho más comparable con aquel de CONACAMI que de Labor y realmente Ecuador no tiene un grupo de ONG/SMO parecidos a Labor, Cooperación, el Grupo Andes o la Red Muquí.<sup>9</sup> AE es comparable a CONACAMI también por su visibilidad en conflictos socioambientales en Ecuador. En este sentido, aunque los conflictos mineros en Ecuador tienen muchísima menos visibilidad que en el Perú, la propia participación de Acción Ecológica les dan mayor resonancia. De hecho, la campaña minera en Cotacachi ha sido la acción minera de mayor importancia para el programa de minería de AE. Además activistas de Cotacachi participan como invitados por AE en las campañas latinoamericanas que lideran: La Red de Minería y La Red Latinoamericana de Mujeres en Resistencia a la Minería. En estas y otras acciones supranacionales, AE ha coordinado con CONACAMI e inclusive facilitó el contacto directo entre Cotacachi y Cajamarca.

Estos contextos nacionales son relevantes para los casos estudiados en varios sentidos. Primero, ayudan a entender la conexión entre los casos locales y los debates nacionales. Tanto actores nacionales como el tono de los debates nacionales han sido influidos por las dinámicas de los conflictos locales. Asimismo, los casos locales, en distintos momentos, vuelven a ser no solo emblemáticos sino también constitutivos de los debates nacionales. Primero, el resultado final en Cotacachi (la decisión de si entra la mina, o no) podría tener un efecto determinante en la trayectoria subsiguiente de la minería a nivel del país. Segundo, el contexto político-económico

---

9. Una red de organizaciones de la sociedad civil preocupadas con el tema minero, incluye estas y otras organizaciones.

nacional pesa mucho en el poder relativo de los intereses mineros en los conflictos locales y, por lo tanto, en los espacios disponibles a los actores sociales. Tercero, la historia provee distintas memorias y puntos de referencia en estos debates. En Perú, el problema crónico de los pasivos ambientales probablemente crea cierta resistencia hacia la minería, aunque la misma historia hace que la minería sea más aceptada por la población; en Ecuador faltan tales referentes. Esto crea incertidumbre en las poblaciones locales, quienes tendrían dificultad en imaginar un mundo posminero para así formar una opinión política frente a la minería. Como veremos, es justamente por esto —y dada la existencia de ciertos pasivos ambientales en Perú— que una estrategia de las SMO ha sido llevar gente de Ecuador para que conozcan los casos más desastrosos de la minería en el Perú.

### **3. Cajamarca y Cotacachi “glocales”: relaciones transnacionales, movimientos socioambientales y empresas mineras**

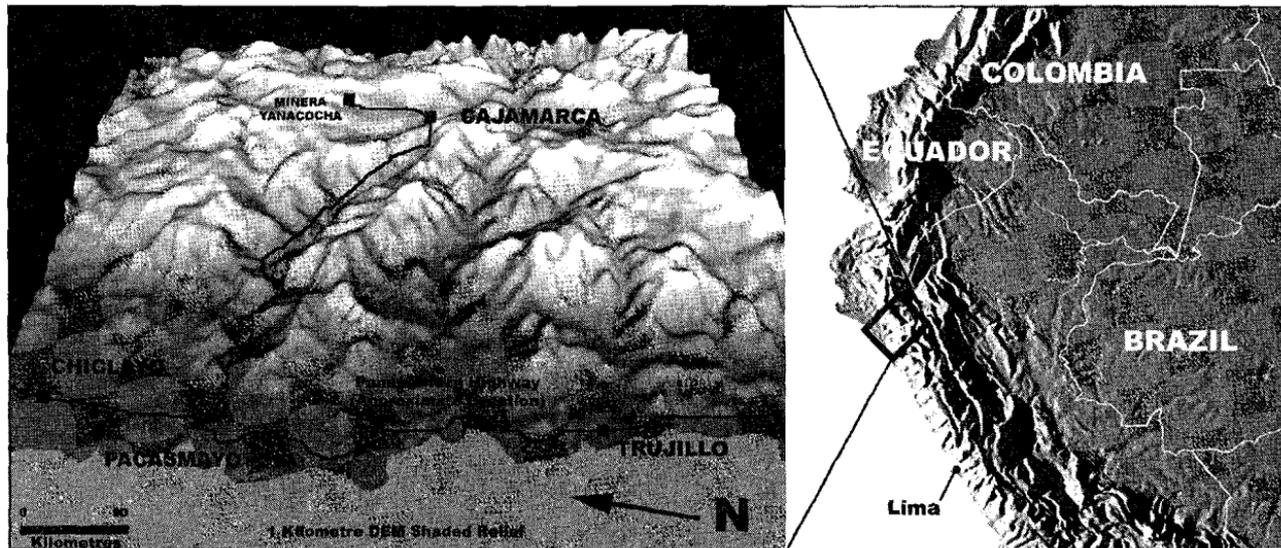
#### ***Yanacocha-Cajamarca: donde la economía política del DTR prima***

La mina Yanacocha, ubicada a 35 km al norte de la ciudad de Cajamarca en los Andes del norte del Perú (ver mapa 5.1), es la mina de oro más grande de América Latina. El accionariado de Yanacocha está repartido entre Newmont Mining Corporation (empresa minera multinacional con sede en Denver, Colorado) con 51.35%, Compañía de Minas Buenaventura (empresa peruana, con 43.65%) y la Corporación Financiera Internacional (brazo financiero del Banco Mundial, con 5%). Cuenta con alrededor de 8,000 trabajadores (2,243 de ellos en planilla) y cubre una superficie que excede las 10,000 ha (una superficie mayor a la de la ciudad de Cajamarca), aunque la empresa es dueña de 1,386 km<sup>2</sup> de derechos minerales.<sup>10</sup>

---

10. Los datos vienen de Bury (2005); Yanacocha (2005) y [www.yanacocha.com.pe](http://www.yanacocha.com.pe).

Mapa 5.1  
YANACOAHA Y CAJAMARCA



Fuente: Bury, 2004

### *En búsqueda de un movimiento social*

Los primeros indicios de respuestas sociales a la mina se dieron a poco tiempo del arranque de actividades, no por razones ambientales sino por las condiciones bajo las cuales la mina accedía a la tierra. Por ser una mina a cielo abierto tuvo que comprar grandes extensiones de tierra para poder operar (Bury, 2004; Bury, 2002). Entre el año 1992 y 1996 compró la tierra de 41 familias (una extensión de 4,068.95 hectáreas).

Empezaron a aparecer quejas sobre precios pagados, el ejercicio de presiones para que la gente venda su tierra y, en otros casos, de manejos poco transparentes en el proceso de titulación y luego compra de la tierra. En la medida en que la mina fue descubriendo nuevos yacimientos y expandiendo (en términos espaciales y temporales) sus planes de extracción, estos conflictos también se ampliaron.

Las quejas iniciales se dieron en la zona de Porcón. La iglesia local jugó un papel importante en estas primeras respuestas sociales a la mina, facilitando contactos con congregaciones en Alemania pero también con la Vicaría de la Solidaridad del Obispado de Cajamarca y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos quienes empezaron a apoyar y asesorar a las familias afectadas y transmitir sus demandas ante la minera Yanacocha y ante Newmont en Denver. En diciembre apelaron a la Fiscalía Superior Decana de Cajamarca y, después de algunos meses de investigaciones y de presionar a los directivos a través de cartas de solidaridad desde Alemania,<sup>11</sup> a las oficinas del Banco Mundial, al presidente del Perú, a la Gerencia de Newmont en EEUU, al embajador alemán y otros, la empresa accedió a negociar e indemnizar a los denunciantes.

Las redes cotidianas y locales de tipo religioso se combinaron con las redes mayores de la Iglesia para tejer la primera infraestructura de apoyo a las respuestas sociales de la población afectada por la minería. Sin embargo, estas redes no eran estables; la Iglesia

---

11. La parroquia de Porcón tenía un pacto de solidaridad con la Parroquia Saint Gallus de Tettwang, Alemania.

a nivel de diócesis empezó a distanciarse del párroco de Porcón y el sacerdote fue mandado a Roma. (Como veremos más adelante, los paralelos con el caso de Cotacachi son llamativos). Mientras las redes de la Iglesia se fueron debilitando, otras empezaron a formarse basándose en las rondas campesinas (formas locales de vigilancia para controlar el abigeato en las comunidades campesinas que también jugaron roles importantes en controlar la entrada de Sendero Luminoso a la zona, Starn, 1996).<sup>12</sup> Entre las personas afectadas por la expansión de la mina habían personas activas dentro de las rondas cuyas tierras se ubicaban en estas zonas mineras (Bury, 2002). Años más tarde, la organización de segundo grado de estas rondas (la Federación de las Provincias del Sur de Cajamarca) y posteriormente la Federación de Rondas Femeninas del Norte del Perú (FEROCAFENOP) empezaron a perfilarse como las organizaciones líderes de la resistencia a la mina (Project Underground, 1999).

Pronto FEROCAFENOP tomó contacto con la ONG activista Project Underground, cuya sede estaba en Berkeley, California. Project Underground volvió a ser el contacto internacional principal de la Federación de rondas. La ONG también empezó a mandar cooperantes para asesorar a la Federación, facilitó viajes de la presidenta de la federación a la reunión de accionistas de Newmont en Denver así como a la CFI. Project Underground también influyó en el pensamiento de las rondas de una manera importante, sobre todo cuando la actitud de las rondas empezó a radicalizarse y surgió un plan de tomar las instalaciones de la mina por fuerza y destruirlas. Project Underground las disuadió de este plan, la Federación no tomó la mina y a partir de ese momento las rondas empezaron a privilegiar una estrategia cada vez más “no violenta”.<sup>13</sup> A partir de ese momento —y aquí es útil hacer la comparación con

---

12. Con el tiempo las rondas han asumido un rol más general en el ejercicio de justicia y, en ciertos casos, (como las Rondas Femeninas) el manejo de pequeños proyectos sociales y productivos.

13. Este hecho también desmiente aquel análisis (promovido por ciertos intereses mineros hoy en día) que los actores externos promueven la violencia.

Cotacachi, donde se atacó al campamento minero en una fecha parecida— era inevitable que Cajamarca pasara a ser una zona transformada por la minería. Esta misma transformación influiría en las dinámicas y estrategias de los MS en Cajamarca.

*De la tierra al medio ambiente: un movimiento rural se urbaniza*

Aunque desde 1993 existían indicios de impactos ambientales (Arana, 2002), durante la década de 1990 las quejas principales de los campesinos tenían que ver con cuestiones de sus tierras, sus derechos humanos y la soberbia y agresión de la mina. Sin embargo, hacia finales de dicha década dos procesos (relacionados) llevaron el conflicto hacia la ciudad. Por un lado, se fue acumulando y socializando evidencia de la existencia de los problemas ambientales en la ciudad. La empresa municipal del agua SEDACAJ concluyó que el agua potable municipal tenía concentraciones de cianuro, cromo, hierro y manganeso muy por encima de los niveles normales. Luego Project Underground consiguió y difundió un documento del MEM mostrando que Yanacocha había estado arrojando aguas ácidas y metales pesados desde 1993. Finalmente, el 2 de junio del 2000 un camión contratado por Yanacocha se accidentó y derramó mercurio cuando pasaba por el pueblo de Choropampa. Dentro de unos días aparecieron problemas de salud en la población y, aunque con demoras, noticias del accidente finalmente empezaron a circular en la ciudad.<sup>14</sup>

Por otro lado, se fue creando un grupo de SMO urbanas quienes producían y diseminaban información crítica de la mina. Primero surgió un grupo de las ONG ambientalistas (ADEA, ECOVIDA y GRUFIDES), todas con una participación importante de jóvenes. GRUFIDES fue creada por el propio párroco de Porcón quien,

---

14. El accidente, sus efectos y los subsiguientes conflictos y negociaciones entre Choropampa y Yanacocha son analizados y documentados en el video *Choropampa: The Price of Gold*, cuya producción fue apoyada por Oxfam América, Global Greengrants y un conjunto de organizaciones nacionales e internacionales. Ver <http://www.guarango.org>.

cuando volvió de Roma, empezó un trabajo con estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca (varios de ellos con experiencia anterior de la teología de la liberación). Con el tiempo el grupo fue incorporando temas ambientales en sus discusiones y dio lugar a un grupo juvenil que intentaba combinar un trabajo de formación y apoyo sociolegal en las comunidades con un enfoque de desarrollo sostenible. Otra SMO emergió más bien como un núcleo (o red) de activistas locales con una trayectoria más sociopolítica y con ciertos antecedentes en el desarrollo. Miembros de este grupo llegaron a ser conocidos por su producción analítica y dedicaron un esfuerzo importante a publicar en forma impresa y electrónica documentos sobre el caso Yanacocha (Seifert, 2003; Salas, varios; 2004; 2006).

Esta lenta “urbanización” del naciente movimiento social no fue acompañada por una consolidación de nexos con las rondas campesinas. La mayor visibilidad de dirigentes urbanos empezó a crear tensiones con FEROCAFENOP. Además, los partidos políticos que tenían alguna presencia en estas organizaciones urbanas eran distintos de los partidos que tenían mayor presencia en la FEROCAFENOP.<sup>15</sup> Entre 1999 y 2001 las tensiones se acentuaron y terminaron en una ruptura total, la deslegitimización del liderazgo de la federación y un debilitamiento casi total de esta. Esta ruptura final —compleja y oscurecida por chismes y acusaciones mutuas— se dio a raíz de las interacciones entre estos actores y el proceso de movilización social sobre temas mineros a nivel nacional. Un dirigente de FEROCAFENOP fue miembro de la comisión coordinadora que organizó el Congreso Nacional de Poblaciones Rurales Afectadas por la Actividad Minera en el cual se formó la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) en octubre 1999.<sup>16</sup> La presidenta de FEROCAFENOP, Segunda Castrejón, fue elegida secretaria de Desarrollo

---

15. Ver Chacón (2002, 2004) para mayor información sobre las relaciones entre partidos políticos y rondas campesinas en Cajamarca.

16. Un proceso apoyado sobre todo por las ONG nacionales y Oxfam América.

Institucional de la CONACAMI en este primer Congreso y también lideró su Consejo Directivo de Medio Ambiente.

Cuando CONACAMI quiso formar un brazo regional (CORECAMI) en Cajamarca invitó a dos dirigentes con distintas orientaciones partidarias, Castrejón (de origen campesino) y Seifert (de origen urbano y miembro de la microrred de activistas). Esta última terminó renunciando por conflictos con Castrejón (Chacón, 2002). En el mismo año FEROCAFENOP decidió aceptar US\$ 10,000 de la Minera Yanacocha para un programa de microfinanzas —no mucho después de que Castrejón había viajado a los EEUU (apoyado por Project Underground) y protestado de una manera muy visible en la reunión anual de accionistas de Newmont, como en Washington.<sup>17</sup> Al aceptar fondos de Yanacocha, FEROCAFENOP fue duramente criticada por otros actores, Castrejón fue expulsado de CONACAMI y el proceso de formar una CORECAMI con fuertes vínculos con CONACAMI abortó.

### *La diversificación de los lazos transnacionales*

Al mismo tiempo que el MS —o por lo menos el conjunto de SMO que servían de su infraestructura— se urbanizó, los lazos entre el MS y los distintos actores internacionales se ampliaron, se volvieron más complejos y, de alguna manera, también se urbanizaron.

Esta ampliación reflejaba la creciente actividad a nivel mundial alrededor de la minería, dicho de otra manera, muchos actores transnacionales vinieron a Cajamarca atraídos por el fenómeno de Yanacocha, la mina de oro más grande del continente. Dada la mayor visibilidad del caso, facilitada por Project Underground, tanto ATI como Oxfam América empezaron a involucrarse más en el proceso del MS. De hecho, aunque OA ya trabajaba temas mineros en Perú apoyando a Labor y CONACAMI, entre otros, su involucramiento en Cajamarca nació no tanto desde su oficina en Lima

17. Nos resulta imposible entender *por qué* la dirigencia aceptó este dinero, aunque sí podemos intuir por qué la empresa lo quiso dar.

sino más bien desde su oficina de incidencia en Washington DC, contratando en 1999 a una persona quien tendría la responsabilidad del tema de incidencia y de industrias extractivas. Junto con CONACAMI (con quien OA empezaba a trabajar en 1999) identificaron a Yanacocha como un caso sobre el cual se debería incidir, en parte porque se pensaba que la presencia de la CFI como codueño de Yanacocha daba mayor posibilidad de incidencia. Como el responsable de OA tenía base en Washington DC, además de un conocimiento previo del Banco Mundial y del proceso a través del cual se creó la oficina de la CAO,<sup>18</sup> Yanacocha parecía un caso interesante. Al año siguiente se dio el accidente de Choropampa y, desde aquel momento, Yanacocha ha sido un caso al cual OA ha dado mucha atención tanto en el Perú como en los EEUU. En los años subsiguientes OA empezó a ser una contraparte importante para varias de las SMO de Cajamarca y también apoyó la producción de un documental sobre el caso de Choropampa, video que terminó siendo un instrumento muy poderoso en las campañas internacionales no solo sobre Yanacocha sino también sobre otras minas.<sup>19, 20</sup> La incorporación del representante de OA en el Consejo Andino de GGF también “jaló” la atención de GGF a Cajamarca.

Además de los nexos con OA, las SMO han tenido otros lazos transnacionales. A raíz de los conflictos dentro de CORECAMI y su aceptación de fondos de la Minera Yanacocha, FEROCAFENOP perdió

- 
18. La CAO se creó como una suerte de defensoría del pueblo frente a la CFI.
  19. Entre otros los activistas en Cotacachi tienen una copia del video y activistas en las Filipinas lo usan también.
  20. El apoyo de OA a este video también tiene una historia interesante. OA-Perú había apoyado videos sobre otros temas, pero siempre a muy bajo costo. Cuando Guarango pidió fondos para hacer el video, pidieron mucha más plata de la que OA había dado a los otros videos —porque en este caso, la idea fue producir un video profesional, no artesanal. El caso catalizó un debate dentro de OA-Perú— la conclusión fue que los videos artesanales habían tenido muy poco efecto, y que si se buscaba tal fin era importante que se hubiera hecho bien. El proyecto fue financiado como prueba. El video terminó teniendo repercusiones en Perú, los EEUU y muchos otros países y ha sido una de las acciones de incidencia más importantes en todo el conflicto en Cajamarca.

sus lazos y su visibilidad transnacionales, los cuales en cierto sentido pasaron a las SMO urbanas. Project Underground —para quienes Yanacocha y Newmont fue LA campaña de 2001— cortó relaciones y empezó a trabajar con otros actores y las organizaciones urbanas; lo mismo sucedió con Amigos de la Tierra Internacional. Al mismo tiempo estos actores lograban movilizar otros lazos como los ya existentes lazos de hermandad entre Cajamarca y varios pueblos en Alemania, los cuales han servido para canalizar fondos y organizar visitas de activistas a Alemania (llevando consigo el video sobre Choropampa). Aunque estas visitas no han tenido efectos directos o de incidencia en Yanacocha (dado que la empresa no tiene vínculos con Alemania), sí han servido para seguir generando recursos para las SMO cajamarquinas.

#### *Mesas de concertación, acción directa y prácticas mineras*

La creciente urbanización tanto del MS como del conflicto, junto con desastres específicos como lo de Choropampa, vinieron acompañados por otro fenómeno del conflicto en el período post 1999: la conformación de mesas de concertación como respuestas a movilizaciones sociales masivas.<sup>21</sup> La conformación de mesas se ha vuelto un estilo de respuesta a conflictos, con el resultado de que siempre han coexistido varias mesas sin tener una sola mesa para tratar del tema minero. Este fenómeno parece ser no solo un artefacto de la manera en que las entidades públicas responden a conflictos, pero también de una cierta tendencia entre actores de la sociedad civil de no ponerse de acuerdo en la existencia de *una* sola mesa. De hecho, aunque las mesas se han creado a consecuencia del protagonismo del MS y las SMO, estos actores no han tenido mayor influencia en su evolución.

---

21. Es de notar que la figura de mesa de concertación tenía una trayectoria previa en Cajamarca a raíz de experimentos con mecanismos de planificación participativa y concertada liderados por el alcalde Luis Guerrero durante la primera mitad de los años noventa.

Una de las mesas se creó como respuesta a dos reclamos presentados a la CAO (uno por FEROCAFENOP) a comienzos de 2001.<sup>22</sup> Por sus lazos con la CFI y sus orígenes en la ya desacreditada FEROCAFENOP, esta mesa nunca logró legitimidad. Se vio como pro mina, pro empresa y resistente a tratar temas de fondo (Project Underground, 2003). Su logro principal fue contratar un sistema de monitoreo de la calidad del agua en la región. Sin embargo, una evaluación externa de la mesa concluyó que la nula participación de las ONG ambientalistas, los gobiernos locales y las rondas campesinas más representativas le restaron efectividad (CAO-IFC-MIGA, 2005). Asimismo, recomendó que la CFI se retire de la mesa.

De forma paralela a la mesa de la CAO, se creó otra mesa impulsada por la CTAR (el ente estatal que iba anteceder la formación del gobierno regional) después de una serie de protestas urbanas sobre la calidad del agua que terminaron con un ataque contra las oficinas de Yanacocha y SEDACAJ. La Mesa CTAR gozaba de mayor participación. Sin embargo, los actores involucrados en esta mesa y la Mesa CAO se negaron a unir los dos procesos; adicionalmente, todo parece indicar que Yanacocha se sintió más segura en la mesa de la CAO. De hecho cuando la mesa de la CTAR empezó a tocar temas muy sensibles, la empresa y el MEM se retiraron de la Mesa CTAR. Tal como con la mesa de la CAO, el logro principal de esta mesa fue contratar otro estudio que terminó criticando a Yanacocha por una serie de errores y debilidades en sus trabajos de gestión y protección ambiental. Aunque Yanacocha cuestionó el estudio, es quizás el único producto de estas mesas que ha influido en las prácticas ambientales de la operación minera.

De los varios indicadores de la debilidad de las mesas de concertación como instrumentos de una buena gobernanza ambiental, lo más notable fue la imposibilidad de discutir el tema que volvió a ser el más conflictivo entre la población y la empresa: la expansión

---

22. En por lo menos uno de estos casos, la presentación fue también sugerida por OA-Washington.

de la mina en la zona llamada Cerro Quilish.<sup>23</sup> Para Yanacocha, Cerro Quilish contiene depósitos de oro muy importantes;<sup>24</sup> para la ciudad de Cajamarca, Cerro Quilish es la fuente del agua potable para la ciudad. Cuando el tema de la expansión de la operación minera hacia Cerro Quilish se tocó en la Mesa CTAR, tanto el Ministerio como la empresa se retiraron.

El 5 de octubre de 2000, en respuesta a las movilizaciones sociales, la Municipalidad Provincial de Cajamarca declaró Zona Reservada Municipal al Cerro Quilish, implicando que la mina no podía explotarlo. En respuesta, Yanacocha abrió un proceso legal en contra de la decisión y, aunque perdió en las primeras dos instancias legales, ganó el caso en Lima y el 16 de julio de 2004 el MEM autorizó la reanudación de exploraciones de Yanacocha en el Cerro Quilish (RD N° 361-2004-MEM). Paralelamente a este proceso legal, los conflictos físicos habían continuado pero la decisión del MEM desató otro tipo de movilización. Entre el 2 y el 16 de septiembre de 2004 se dieron movilizaciones masivas, tanto rurales como urbanas, en contra de la expansión en el Cerro Quilish. También hubo una activa participación del alcalde Emilio Horna, quien convocó a un paro indefinido. Finalmente, ante la paralización masiva de la región, el 16 de septiembre el Concejo Provincial de Cajamarca levantó el paro luego de conocerse el compromiso del ministro de Energía y Minas de publicar el 17 de septiembre en el diario oficial *El Peruano* la Resolución Directoral N° 427 que “deja sin eficacia” la norma anterior. Al final, el 3 de noviembre de 2004, la Minera Yanacocha sacó un comunicado de una página en los principales diarios del país manifestando su decisión de no iniciar sus exploraciones en el Cerro Quilish y reconociendo haber cometido errores en su manera de relacionarse con la población de Cajamarca y reconociendo —por lo menos implícitamente— que no había tenido la licencia social para poder

---

23. Hicimos trabajo de campo en una de las comunidades de Quilish.

24. El cerro Quilish contendría un prospecto minero de oro, cuyas reservas declaradas a este momento llegan a 3.7 millones de onzas de oro, cerca del 10% de las reservas de Yanacocha (Diario *Gestión* 13/09/2002).

seguir con su operación en Quilish. Hizo un pedido formal al ministerio para que revoque su permiso, lo cual se realizó el 5 de noviembre.

En respuesta al pedido de Iván Salas, Coordinador del Comité Cívico Unitario de Lucha por la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente de Cajamarca, quien asumió liderazgo de las movilizaciones,<sup>25</sup> se creó otra mesa de concertación. Sin embargo, demoró meses en reunirse. Los actores no podían ponerse de acuerdo sobre quienes deberían conformar la mesa y liderarla. Otra vez, las SMO y el MS perdieron la iniciativa.

El caso de Cerro Quilish es ilustrativo en otro sentido, porque sugiere que la acción directa tiene mayor influencia que la negociación en las prácticas ambientales y sociales —la *GA real*— de Yanacocha. Existen otros indicios de esta relación. Unos se reflejan en los niveles de gasto ambiental y social de la mina, los cuales empiezan a subir a partir de 1999/2000 (Morel, 2005). Esta alza parece estar relacionada con el viaje de la dirigente de FEROCAFENOP a la reunión de accionistas de Newmont Mining Company y el accidente de Choropampa. Otros se ven en el manejo de información por Yanacocha. Aunque sigue siendo difícil de penetrar, Yanacocha provee mayor información sobre sus actividades que antes. Instaló un centro de información en la ciudad de Cajamarca y empezó a producir un “Balance Social” anual, publicación que intenta documentar gastos y temas socioambientales relacionados con sus operaciones (Yanacocha, 2005). Finalmente, la movilización alrededor de Cerro Quilish influyó en la estructura interna de la operación minera Yanacocha. Se cambió la organización y personal de la gerencia de relaciones externas y se abrió (por primera vez) líneas de comunicación entre el programa social y las otras gerencias (de medio ambiente, exploración etc.) para que estas consideren factores sociales antes de empezar actividades de producción.

Dicho esto, la calidad de cambio puede ser superficial todavía. A pocos días de la declaración del 3 de noviembre del 2004, Alberto

---

25. Ver su libro sobre estas movilizaciones (Salas, 2006).

Benavides, Director de Minería Buenaventura, señaló, en una entrevista, que en algún momento en el futuro era probable que Yanacocha reinicie exploraciones en el Cerro Quilish (ver también Salas, 2006).

### *Minería y desarrollo territorial rural en Cajamarca*

Durante la última década Cajamarca ha sido escenario de un notable incremento en inversión y exploración minera, de niveles de movilización y organización social alrededor del tema minero y de creación de espacios de concertación para discutir el papel de la minería. En cierto sentido, tanto la movilización social como la creación de nuevos espacios para discutir y negociar la gobernanza de la minería se puede ver como *efectos* del desarrollo regional, el desarrollo entendido como el proceso subyacente de transformación política-económica que resulta de la expansión del capitalismo. Sin embargo, en esta sección nos planteamos la pregunta: ¿cuáles han sido los efectos de las interacciones entre estos tres procesos a nivel de los territorios rurales?

No cabe duda que la inversión minera ha generado crecimiento económico en Cajamarca. En los últimos 10 años, el producto bruto interno (PBI) de Cajamarca ha aumentado sostenidamente a una tasa de 9.3%, casi el triple del promedio nacional (3.5%). Este incremento está empujado por el sector minero, que ha crecido a una tasa de 18.9% anual (la tasa nacional para el sector fue 7.5%), lo que convierte a la minería en la principal actividad del departamento, con 38.7% del PBI total para el 2004 (de una cifra de 18.1% en 1995). Sin embargo —por ser una economía de enclave, el crecimiento per se no se traduce en cambios en la calidad de vida para la población. Este es un problema general para la minería (Barrantes et al., 2005; Dirven, 2006) y sobre todo en el caso de Yanacocha donde otros investigadores de la CEPAL concluyen que este carácter de enclave es particularmente pronunciado (Dirven, 2006).

Son varios los canales que podrían transformar esta inversión minera en DTR: la contratación directa de mano de obra; la compra local de materiales y servicios; la inversión en programas

de responsabilidad por parte de la empresa para llevar a cabo programas de desarrollo en la región; el pago de impuestos al Estado peruano, con mecanismos que aseguran que un porcentaje significativo de estos impuestos vuelven a las áreas afectadas por la minería (este mecanismo es el llamado canon minero)<sup>26</sup> y el pago de regalías, como un pago adicional de reconocimiento que la minería extrae recursos finitos/no renovables de una región. Salvo en el último caso de regalías, existen evidencia de que los movimientos sociales en Cajamarca (y los nacionales) han influido en cada uno de estos canales. Sin embargo, existe mucho menos evidencia de que los esfuerzos se hayan traducido en DTR (entendido en el sentido normativo de Schejtman y Berdegúé, 2004 - ver capítulo 1); de hecho, en varios sentidos (relacionados al capital social) el efecto ha sido perverso. Esto también parece ser la conclusión de las SMO y activistas (ver Salas, varios) quienes pretenden que el crecimiento económico y extracción de minerales no se ha traducido en formas de DTR que reduzcan la pobreza y la exclusión. Las percepciones populares en Cajamarca son parecidas (Zárate y Durand, 2005; notas de campo).

La Minera Yanacocha ha sido muy criticada por no haber creado mayores oportunidades de empleo para la población local. Es evidente que la empresa ha respondido a estas críticas, aunque los puestos mejor pagados tienden a ser llenados por personas de fuera de Cajamarca, por razones de destreza técnica y preparación profesional. Con ello, el mismo proceso de contratar a personas locales parece tener cierto sesgo urbano y, además, cuando se contrata a personas en las comunidades se crean envidias, chismes y tensiones dentro de la población local. Algo parecido pasa con la compra de servicios locales. También en respuesta a las críticas de los ciudadanos, Yanacocha aumentó su nivel de compras y contrataciones locales

---

26. El canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) y los gobiernos regionales de los ingresos obtenidos por el Estado por la explotación de los recursos mineros (metálicos y no metálicos). (Ley de Canon N° 27506 de 2001).

(Yanacocha, 2005; Morel, 2005). Aquí también hay un sesgo urbano, por el simple hecho de que las capacidades para proveer tales servicios se encuentran en la ciudad. En los pocos casos donde se encuentran en las comunidades, surge de nuevo el problema de divisionismo en las comunidades, porque son pocos quienes se benefician. De hecho, los efectos pueden ser aún peores; por ejemplo, en una comunidad estudiada, el dirigente de la ronda campesina tenía una empresa que trabajaba con la mina y uno de los efectos fue que la legitimidad de su liderazgo y de la ronda se encontró cuestionada. “Con el actual presidente no se puede conversar desde que tiene un empresa para la mina” manifestaron algunos entrevistados (GV, HB). Este caso refleja otro efecto de la compra de servicios: una cierta desmovilización de la protesta. Los contratos crean incentivos por no criticar la mina y —más allá de si es cierto o no— existe la percepción de que los contratos se usan con esta finalidad. “A los hombres que son más habladores la mina los compra, ahora ya están callados” (grupo de mujeres HB).

Otra respuesta de la mina a la movilización social ha sido la creación y ampliación de programas de responsabilidad social e inversión ambiental tanto para sectores rurales como urbanos. Sin embargo, aunque el presupuesto de estos programas ha crecido, los MS y las SMO no han logrado conseguir un rol en la gobernanza directa y formal de los programas. Hasta el 2005, el programa urbano, que tiene alguna existencia independiente de la mina, seguía con una junta directiva compuesta solamente por personal de la Minera Yanacocha y el programa rural sigue dentro de la estructura de la empresa.

Finalmente, la protesta —en este caso a nivel nacional— ha influido en el tamaño del canon minero. En este caso, la influencia no es en la empresa minera, sino en el Estado que ha aceptado cambiar el sistema del canon para que un porcentaje mucho mayor vaya a las áreas influidas por la minería. Sin embargo, fue solo a partir de julio del 2004 que cambios en la legislación permitieron que el canon minero se dirija a los municipios afectados directamente por la minería.

En estos diferentes sentidos, la movilización social, local y nacional, ha influido en la relación entre la minería y el DTR. Sin embargo, los efectos finales en el DTR a nivel de la población siguen siendo limitados y no siempre positivos. A nivel general la economía política de la minería ha generado sesgos urbanos y desigualdades. Los niveles de desigualdad son ligeramente superiores que los del país. El último decil de la población acumula casi el 40% de los ingresos y cuenta con un ingreso promedio de casi 25 veces más que el primer decil.<sup>27</sup> La desigualdad se acompaña con una pobreza crónica. El índice de desarrollo humano de Cajamarca se mantiene entre los más bajos del país, ubicándose en el puesto 22 de 25 y su variación ha sido mínima después de la puesta en funcionamiento de la mina. En educación, Cajamarca tiene el logro educativo más bajo a nivel nacional.

En las zonas donde interviene la Minera Yanacocha, las desigualdades son más marcadas. Si bien en el distrito de Cajamarca, los valores asociados al índice de desarrollo humano son altos, en los distritos vecinales, Baños del Inca y La Encañada, la situación es más precaria (Instituto Cuánto, 2005) (ver cuadro 5.1). También, mientras el logro educativo del distrito de Cajamarca es el 8° de 116 en el departamento, en Baños del Inca es el 84° y en La Encañada el 89°. Esta diferencia es más acentuada en el caso del ingreso per cápita: en el distrito de Cajamarca los ingresos son de 19% a 29% mayores que en sus distritos vecinos. El distrito de La Encañada ocupa el puesto 1696 de 1828 distritos del país. La explicación es que el distrito urbano puede haber sacado provecho de la presencia de la mina, pero los distritos rurales, donde se ubica la mina, siguen con los IDH muy bajos. Entonces, aunque Barrantes (2005) concluye que —a nivel nacional— las familias que viven cerca de las minas son ligeramente menos pobres en términos de ingresos, los efectos siguen siendo limitados y, por lo menos en Cajamarca, no parecen traducirse en avances significativos en otras dimensiones del desarrollo.

---

27. Cálculos de David González de CEPES basados en el INEI, 2005.

**Cuadro 5.1**  
**ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN DISTRITOS**  
**DE INFLUENCIA DIRECTA DE YANACOCHA**

DEPARTAMENTO	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO		ESPERANZA DE VIDA AL NACER		ALFABETISMO (%)		MATRÍCULA SECUNDARIA (%)		LOGRO EDUCATIVO (%)		INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA	
	IDH	RANK*	AÑOS	RANK*	RANK*	RANK*	RANK*	RANK*	RANK*	RANK*	N.S. MES	RANK*
Cajamarca	0.569	5	71.6	9	86.8	100	81.1	7	83.0	8	239.9	4
Baños del Inca	0.446	77	69.6	38	69.0	16	42.6	77	51.4	84	201.2	42
Encañada	0.415	97	65.2	102	62.8	6	44.1	74	50.3	89	185.4	97

*Fuente:* Instituto Cuánto; análisis hecho por David González y Javier Alvarado de CEPES.

\*Ranking sobre 116 distritos del departamento.

En su estudio de tres comunidades en la zona de influencia de la mina, Bury (capítulo 6 en este volumen) concluye que si bien se veían mejoras en el capital tangible y el capital humano de los comuneros, su capital social y natural se había deteriorado. Este deterioro en capital natural se reflejaba sobre todo en el reducido acceso a la tierra y la disminución en la calidad y cantidad de agua. Como se ha visto, el tema de agua sigue siendo muy controversial y mientras los MS insisten en este problema, por lo general la Minera Yanacocha y las autoridades no lo aceptan: “Los ingenieros vienen informando que todo está bien que hay agua en cantidad y calidad, pero eso no lo vemos, más bien se está menorando” (grupo HB). Las comunidades estudiadas para este trabajo insisten en que la calidad y disponibilidad del agua se ha deteriorado —un problema sobre todo reconocido por las mujeres. Los indicadores de estos cambios serían la desaparición de sapos, peces (truchas) y otra vida acuática, el color del agua y su turbidez. Esto tendría efectos en la producción: “[...] ahora ya no da nada, porque menos agua hay y la contaminación lo ha fregado la tierra”. (Grupo de mujeres HB).

Además del debilitamiento del capital social que Bury en el capítulo 6 identifica a nivel comunal, se percibe igual debilitamiento a nivel supracomunal. Hoy, la alguna vez fuerte FEROCAFENOP se encuentra muy debilitada: “Las rondas femeninas ya no hacen nada” (grupo de mujeres HB). El origen de este debilitamiento fue un pago del programa de responsabilidad social de la mina a la misma federación, pago que vino después de que la dirigente protestó tan visiblemente en la reunión de accionistas de Newmont y en la CFI. Junto a eso las tendencias a nivel comunal identificadas por Bury continúan en las comunidades estudiadas por nosotros. En cada una se cuestionaba la legitimidad de personas y dirigentes quienes habían tenido contacto con Yanacocha; se comentó que la práctica de la minga (trabajo colectivo) estaba desapareciendo y que, con la excepción de momentos de protesta abierta como en el caso Quilish,<sup>28</sup> la acción colectiva cotidiana y las formas de capital social que lo subyacen se estaban debilitando. “Ahora ya no se

junta la gente porque los directivos trabajan para la mina”. (Grupo de mujeres).

El debilitamiento de capital social también se da en la relación entre ciudadano y municipio, como efecto perverso del canon minero (Barrantes et al., 2005). Dado que la empresa hace tanto énfasis en el canon como su contribución al desarrollo local, las poblaciones esperan grandes obras de sus municipios; sin embargo, las reglas burocráticas que determinan el uso del canon hacen difícil que se puedan traducir en proyectos. Entonces, los municipios encuentran grandes dificultades en usar el canon y, como consecuencia, se crea desconfianza y tensión entre comunidades y gobiernos locales (Zárate y Durand, 2005; Barrantes, 2005).

Aunque es un indicador mucho menos intangible, las entrevistas comunales también dan el sentido que la misma experiencia de ser ocupantes del territorio rural ha cambiado desde la llegada de la mina y que esto en sí refleja una tendencia negativa en la calidad de vida y el DTR: “[...] éramos pobres, pero vivíamos tranquilos” (mujeres, MB). De hecho, para unos la mina se ve como abigeo, invadiendo y robando: “[...] la mina es peor que un abigeo” (UCV, AB). Adicionalmente, a raíz de todos los cambios que se ven, la relación entre persona, estrategia de vida, ambiente y espacio resulta ser mucho menos segura cuando los comuneros miran hacia el futuro. De hecho el tema de incertidumbre estuvo muy presente tanto en las entrevistas como en los grupos focales:

Los que no vendieron [su tierra a la mina] y se quedaron en la comunidad se quedan fregados, después nos haremos más pobres porque la mayoría somos agricultores, tenemos nuestros animalitos, vendemos leche con eso no nos falta pero después cuando todo este contaminado y ya no de nada qué nos haremos (MYS, AB).

En cierto sentido, es esta misma preocupación e incertidumbre frente a un futuro minero que subyace en la movilización social que se ha dado en Cotacachi.

---

28. “En el 2000 la gente ya no se reunía salvo la ronda, cuando nos enteramos que querían sacar el cerro que nos daba agua nos levantamos” (grupo HB).

Frente a esta incertidumbre, tampoco existe mayor evidencia de que los MS hayan elaborado nuevos discursos sobre el DTR que cambien la visión de la población respecto al desarrollo de la región. Aunque existen ideas generales —por ejemplo algunos proponen la nacionalización de la mina, mientras que otros hablan de un desarrollo sostenible con base agropecuaria— son todavía poco desarrolladas y no logran inducir otro imaginario social generalizado. En este sentido parece cierto que tanto el sector como las empresas siguen determinando gran parte de los debates sobre el desarrollo.<sup>29</sup> De hecho, es posible defender la hipótesis de que las movilizaciones sociales en Cajamarca no reflejan una convicción popular de que esta ciudad requiere otro tipo de desarrollo no minero, sino un enojo con el comportamiento social de la mina como actor social (cf. Gorriti, 2004). Sin embargo, no hay que perder de vista que dentro del movimiento social hay distintas visiones de lo que es el desarrollo. Implícito dentro de las propuestas de Salas y otros es la noción de que un desarrollo minero junto con ciertos costos ambientales es justificable siempre y cuando se cambie la distribución de beneficios y la gobernanza del sector: una visión que acepta reducciones en el capital natural si se compensan con otras formas de capital social que llevarían a otra manera de manejar el capital económico-tangible. En las propuestas de otras SMO (ej. GRUFIDES, ECOVIDA) parece estar presente la noción de que un desarrollo que genera ciertas reducciones en el capital natural simplemente no es aceptable porque no cuenta como desarrollo sostenible.<sup>30</sup>

- 
29. Por ejemplo, la Asociación Los Andes (ONG de Yanacocha) y el Grupo Norte (de empresas lideradas por Buenaventura) tienen mayor influencia en debates sobre el desarrollo que tienen las SMO.
30. Estas distinciones no son insignificantes: al margen te llevan hacia distintas apuestas políticas y distintas estrategias de negociación —y en este sentido reflejan otra debilidad interna al MS. Reflejan versiones locales de otros debates más globales sobre la naturaleza de la sostenibilidad y los tipos de *trade-off* que son, y no son, aceptables en un DTR sostenible. Ver Serageldin y Steer (1994) sobre los tipos de sostenibilidad.

### ***Cotacachi-Intag: cómo resistir la minería***

El cantón Cotacachi, ubicado a una hora y media al norte de Quito, cubre áreas tanto altoandinas como de bosque húmedo de las laderas noroccidentales de los Andes, este incluye un sector conocido como Intag. En Intag, específicamente el sector Junín, se encuentra un depósito de cobre que fue identificado durante los años 1980 bajo un convenio de exploración geológica entre los gobiernos de Ecuador y Bélgica (ver mapa 5.2). A partir de 1990, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) financió una exploración a mayor escala, hecha por el Metal Mining Agency de Japón (MMAJ) quienes concluyeron que el yacimiento es grande e importante. En 1993 la exploración pasó a Bishi Metals (subsidiaria de la empresa japonesa, Mitsubishi), inversionista que salió de la zona en 1997 a raíz de conflictos con la población (ver más adelante). En 2002 el Estado ecuatoriano vendió la concesión a un individuo, Roque Bustamante, quien luego en 2004 vendió la concesión a la empresa canadiense Ascendant Copper Corporation, cuya base principal de negocios está en Lakewood, Colorado.<sup>31</sup> En 2005 Ascendant transfirió esta propiedad a su subsidiaria Ascendant Ecuador.<sup>32</sup> Aunque todavía falta entrar a la etapa de exploración en Junín, se supone que la mina será a tajo abierto, tal como en Cajamarca. Además, dado que Ascendant es una empresa junior, lo más probable es que después de preparar las bases para la mina, se procederá a vender la concesión (en su totalidad o en un porcentaje significativo) a otra empresa con capacidad de desarrollarla.

#### *Los inicios: organizaciones sociales en movimiento*

“Se me abrieron los ojos”.

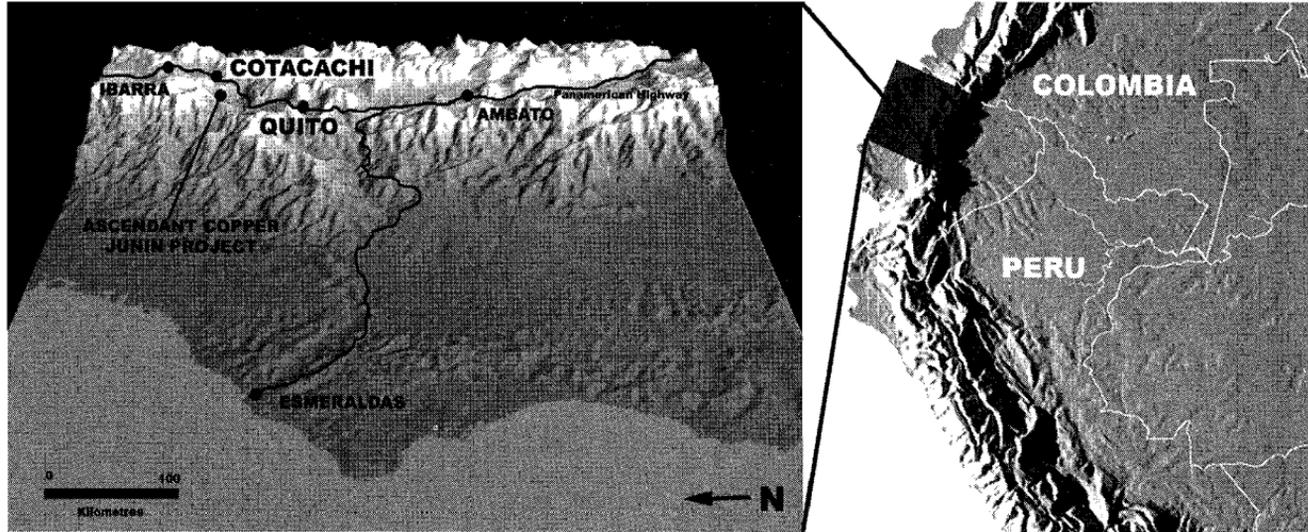
(Una mujer campesina, hablando del efecto de los talleres de Acción Ecológica).

---

31. O sea, a poca distancia de la sede principal de Newmont.

32. Los datos vienen de Ascendant Copper Corporation, 2005.

Mapa 5.2  
JUNÍN Y COTACACHI



Fuente: Elaboración propia.

En 1991, un miembro de la ONG Rainforest Action Network<sup>33</sup> visitó a la ONG antiminera Acción Ecológica (AE) y entre otras cosas preguntó qué conocimiento tenía AE de una empresa japonesa operando en Junín. Como AE no tenía ningún conocimiento visitó la zona y empezó una serie de talleres con las comunidades sobre minería, los cuales sin duda influyeron en el pensamiento y los discursos de los actores locales, especialmente de las mujeres. En el transcurso del proceso, nace un contacto con un sacerdote quien empieza a preocuparse por los efectos que la minería podría tener en la zona. AE también organizó visitas a otros sitios en Ecuador (zonas mineras en Cuenca y Salinas) para que los comuneros de Intag pudieran escuchar cómo se logró que una empresa minera transnacional saliera. El sacerdote habló de las amenazas de la minería mientras daba misas y también empezó a formar un grupo de jóvenes de la parroquia vecina de Peñaherrera. Al mismo tiempo, se iniciaron proyectos productivos con cierto enfoque agroecológico, reflejando la formación universitaria de algunos de los jóvenes.

Paralelo a (pero independiente de) este proceso, en la parroquia vecina radicaba un cubano-norteamericano quien tenía un pequeño negocio ecoturístico. Este empezó a tener problemas con cazadores quienes mataron un par de osos de anteojos en su bosque y, frente a la falta de respuesta de las autoridades estatales, decidió organizar la protección de su bosque por cuenta propia. Se acercó a un grupo deportivo de jóvenes en la parroquia y llegaron al acuerdo de que ellos harían patrullaje como guardabosques y él les capacitaría en temas ambientales.

A finales de 1994, los diferentes procesos se juntaron. El párroco llevó a su grupo de jóvenes para que conozcan la experiencia de los guardabosques y, al mismo tiempo, habló del problema minero en Junín (de lo cual el empresario ecoturístico no tenía conocimiento previo). Fue ahí donde surgió la idea de juntar los dos grupos y

---

33. Rainforest Action Network es un miembro del Consejo Global de Global Greengrants Fund, aunque en este momento GGF aún no existía.



son producto directo del comportamiento de la empresa culminaron en la decisión de atacar el campamento. Esta decisión fue tomada durante una reunión de un comité conformado en Junín por representantes de siete comunidades (reunión en la cual también estuvieron presentes algunas personas de DECOIN y Acción Ecológica, aunque como minoría). El ataque acordado luego ocurrió el 12 de mayo de 1997. Las motivaciones eran dos: el resentimiento frente al trato de la empresa y una determinación por proteger *un modo de vida*; en las palabras de un comunero: “No me importa si me mandan a la cárcel por diez años si esto protege el futuro de mis hijos”, o en las de uno de los geólogos que trabajaba en el campamento,<sup>36</sup> “la influencia principal no fue ecológica sino política ecológica”. El ataque indujo la salida de Bishi del Ecuador y la concesión volvió al Estado ecuatoriano hasta que este la vendió de nuevo en 2002.

### *Al gobierno local: un movimiento rural se regionaliza*

El ataque al campamento en Junín ocurrió poco después del inicio de una gestión municipal en Cotacachi, el cual creó un ambiente favorable para la consolidación y ampliación del MS. Auki Tituaña, alcalde de Cotacachi, inició su período en 1996 con una agenda de promover la participación popular en la gestión local y la interculturalidad. Esta agenda se tradujo en la creación de una Asamblea de Unidad Cantonal (AUC) como un instrumento para promover la movilización social local y la participación de la población en el diseño de los planes y presupuestos del municipio. También sirvió para auspiciar varios comités intersectoriales para tratar temas de importancia en el desarrollo local, entre ellos el Comité de Gestión Ambiental.

Los campesinos colonos de la zona subtropical de Intag, particularmente los sectores organizados alrededor de la DECOIN, asumieron parte del protagonismo en este proceso, al mismo tiem-

---

36. Ahora oficial en el MEM.

po que lograban colocar el tema ambiental en la agenda municipal. DECOIN gestionó una ordenanza municipal que declaró Cotacachi cantón ecológico el cual, aunque no rechaza la minería *de jure*, lo hacía *de facto*. También ocupó la dirección del CGA en su inicio y siempre ha cumplido un papel clave dentro del Comité: “Casi que Intag se ha apropiado del CGA”.<sup>37</sup> Esto ha permitido utilizar los aparatos institucionales de la AUC y del gobierno local para difundir las preocupaciones en cuanto a la minería e ir ubicándolas como tema entre la población urbana y andina. Hace dos años, un miembro de DECOIN fue elegido como uno de los siete concejales del cantón.

El alcalde no fue elegido con una agenda ambiental ni una agenda antiminera. De hecho, en ciertos momentos es posible que la alcaldía hubiera querido explorar la posibilidad de que la minería genere rentas adicionales para el presupuesto municipal. El éxito de las SMO fue que se agarraron del proceso y crearon un ambiente que casi obligaba a que el alcalde asumiera la propuesta ambientalista. Luego, con el tiempo, el mismo comportamiento de Ascendant, al atacar al alcalde en términos personales, concretiza este ambientalismo en la gestión municipal. Hoy, el alcalde es otro actor en el proceso del MS.

Mientras este proceso se daba a nivel cantonal, consolidando nexos dentro y fuera del cantón, otro proceso se dio en Intag. Como parte de la estrategia de DECOIN por buscar alternativas productivas (ver más adelante), se crearon una serie de organizaciones nuevas: la Coordinadora de Mujeres, la Asociación Agroartesanal de Caficultores del Río Intag (AACRI); Grupos de Ecoturismo, la Coordinadora de Jóvenes de Intag y otros. De una u otra manera, estas organizaciones permiten “des-DECOINizar” la cara pública

---

37. Vale notar que algunos observan que este mismo hecho ha llevado a que el tema minero domine el debate ambiental cantonal con el efecto de marginar otros problemas ambientales serios. También es de notar que la empresa minera no está en el CGA—sin embargo, en los últimos tiempos las empresas florícolas, el otro actor de gran capital en el cantón, ocupan un puesto en el comité.

grupos de otras sectores del cantón: la Coordinadora de Mujeres jugó un papel clave en la organización de la primera asamblea de organizaciones de mujeres del cantón y al mismo tiempo colocó el tema minero en un espacio central en la agenda de la asamblea.

### *Consolidación y educación ambiental*

Más allá de ser un período de ampliación y articulación, estos años permitieron una mayor consolidación tanto de las SMO como del MS. Las nuevas organizaciones fueron ocupando otros espacios de la vida cotidiana: las relaciones de género y de generación, la producción de café, las prácticas artesanales etc. El hilo que une este proceso de consolidación es la educación ecológica (o quizás, recordando las palabras del geólogo, la educación *política-ecológica*) y, en este sentido, cabe recordar que DECOIN se funda como organización de educación ambiental. Desde 1995, DECOIN ha movilizado fondos tanto para actividades explícitamente educativas como para actividades diversas que tienen efectos educativos (por ejemplo, la compra de bosques protectores de fuentes de agua).

Uno de los efectos de crear, y colonizar, el Comité de Gestión Ambiental ha sido permitir expandir esta actividad educativa y darle el sello de legitimidad del gobierno local. Con fondos tanto municipales como externos, el CGA junto a la AUC llevaron la educación ambiental a escuelas y comunidades dentro y fuera de Intag, lo cual sirvió para expandir las preocupaciones ambientales hacia una población mayor. El efecto fue rotundo, tal como muestra una encuesta AUC/IEE 2005, donde alrededor del 70% de la población estaba en contra de la minería.<sup>39</sup> Estas preocupaciones compartidas nutren los lazos entre SMO y SM.

---

38. Sin embargo, sigue siendo el caso que varios de los puestos directivos y administrativos dentro de estas organizaciones se ocupan por personas que eran presentes en los pasos iniciales de DECOIN.

39. Otro dato consistente con esta encuesta es que en 2005, la Federación de Barrios Urbanos discutió el tema de la minería, y de los 16 barrios miembros, solo 4 terminaron favoreciendo la entrada de la minera.

En este proceso de educación ambiental, el periódico local del Intag también ha jugado un papel innovador. Este se creó en el 2000 con el fin de proveer mayor información local y ampliar la base de la participación en el debate local sobre el desarrollo que anteriormente estaba de alguna manera limitada a DECOIN, la AUC, y el gobierno local. Con un tiraje mensual o bimensual de 300 a 400 copias y alcanzando de tres a cuatro personas por copia, el periódico ha cubierto temas del desarrollo y da mucha atención al tema minero. Mientras este no es un instrumento de las SMO, se ubica dentro del proceso de movimiento social.

### *Desarrollo territorial rural sin la minería*

Estamos convencidos que para frenar la minería tenemos que ofrecer alternativas ... prácticamente productivas ... que ofrecen trabajo.

Después del retiro de Bishi Metals, la población empezó a exigir alternativas económicas. Frente a ello, nuevas organizaciones, casi todas con raíces en DECOIN, lanzaron varias actividades productivas alternativas con ejes en la producción de café orgánico y turismo ecológico y solidario.<sup>40</sup> La propuesta caficultora surgió de la Asociación Agroartesanal de Caficultores del Río Intag (AACRI), creada en 1998 y que ahora tiene 270 socios dispersos en 39 comunidades en tres cantones colindantes con Intag. Esta intenta promover nuevas técnicas, certificación, procesamiento del café y nuevos canales de comercialización nacional e internacional. También crea demanda para bolsas de cabuya (para el envase del café) que son producidas por 30-40 mujeres y la organización de mujeres de Intag.

Aunque se han promovido varias iniciativas de ecoturismo a nivel comunal, la más grande es una colaboración entre el municipio y la Coordinadora de Jóvenes de Intag en la cual el municipio cofinanció con apoyo de la cooperación española la rehabilitación de las piscinas de Nangulvi. Este centro fue transferido a la Coor-

---

40. Esto quizás refleja el hecho de que el empresario cofundador de DECOIN ya tenía una iniciativa de ecoturismo y sembraba café orgánico.

dinadora con la finalidad de que lo maneje y genere opciones económicas para la juventud en Intag.

No cabe duda que estas actividades intentan promover formas de DTR incluyentes —en el sentido de crear nuevas organizaciones sociales y ofrecer posibilidades económicas a mujeres, adultos jóvenes y campesinos. Sin embargo, la cobertura de estas iniciativas queda relativamente limitada y su viabilidad económica insegura. AACRI depende de subsidios provenientes de proyectos y donaciones para poder seguir operando y la viabilidad del proyecto ecoturístico en Nangulvi depende de eventos del municipio y de las diferentes organizaciones sociales de la zona y, por lo tanto, de la cooperación.<sup>41</sup> Más significativo, sin embargo, es que estas actividades no compensan las deficiencias estructurales del DTR en Intag que hacen que una buena parte de los jóvenes salgan de Intag y no vuelvan.<sup>42</sup> En la medida en que las pocas ganancias tienden a ser invertidas en la educación de los hijos, una vez que estos salen a educarse, se urbanizan y no vuelven.<sup>43</sup>

### *Lazos transnacionales y resistencia a la minería*

Lo que nos vale en esta lucha son las alianzas con algunas organizaciones internacionales. “Si no aplicas la fuerza no pasa nada”.<sup>44</sup>

En términos etnográficos —y personales— lo que llamó nuestra atención durante una primera entrada a la zona de Intag es la cantidad de personas extranjeras viviendo, entrando, trabajando o radicando en la zona (catalanes, españoles, italianos, cubanos, japoneses, norteamericanos y británicos). Esta presencia es indicador,

---

41. Dicho esto, muchos hoteles de lujo y hostales en Quito no son tan diferentes, de igual manera dependen de la cooperación y el gasto público por su viabilidad.

42. Estas observaciones se basan en entrevistas con informantes clave provenientes de varias comunidades de estas parroquias. Comparado con Yanacocha, tampoco hay evidencia de que esta situación sea diferente en presencia de la minería.

43. Un fenómeno que se ha visto en otros casos: ej. Bebbington et al., 2002; 1996.

44. Las citas son de actores dentro del proceso del MS en Cotacachi-Intag.

y consecuencia, del papel que han jugado los nexos transnacionales tanto en el surgimiento del MS en Intag como en la implementación del experimento municipal de Cotacachi. Si bien hemos visto que en Cotacachi, como en Cajamarca, el MS nace en gran medida de las redes y organizaciones de la vida cotidiana de ciertos inteños, los lazos transnacionales han jugado un papel mucho más formativo allí que en Cajamarca.

Tales lazos transnacionales ayudaron a sentar algunas de las bases que permitieron el surgimiento del MS. El nexo entre RAN y Acción Ecológica llevó —de forma casi accidental— a que AE vaya a la zona en 1991/2. Durante los primeros cinco años del proceso de movimiento social, las redes transnacionales del MS eran casi completamente aquellas de AE. Estas redes tenían una cierta coherencia ideológica,<sup>45</sup> fuertemente opuesta a la minería y, por lo general, a favor de la acción directa como instrumento de resistencia. También jugaron un papel clave no solo en crear capacidades sino sobre todo cierta conciencia y cierto discurso local sobre la minería, lo cual apoyó las tendencias de los activistas locales quienes no estaban dispuestos a negociar. Fue también RAN quien hiciera que GGF se involucrara en el caso.

En la medida en que DECOIN se consolidó, el punto de contacto para estos lazos transnacionales empezó a cambiar de AE hacia DECOIN. Pesaban varios factores aquí. Primero, una cierta tensión sobre quién debería liderar el proceso (DECOIN buscaba mayor protagonismo) y segundo las competencias lingüísticas del cubano-norteamericano, pues no cabe duda que su dominio del inglés ha ayudado mucho en abrir un abanico de relaciones con organizaciones y personas en los EEUU, Inglaterra y Canadá.

Después del ataque al campamento en 1997 y la reducción en el perfil de AE, se empezó a tejer redes algo distintas, no tan dependientes del mundo de ATI y AE. Varios son los “accidentes” que apoyaron este proceso. Así, los nexos con Rainforest Concern

---

45. Si bien no tanto hoy en día desde que AE se distanció de ATI. Su lazo con OLCA sigue.

en Inglaterra nacieron porque un oficial de la organización vio un programa de televisión sobre el caso de los osos de Intag. Rainforest luego movilizó fondos de un filántropo para apoyar DECOIN en la educación ambiental y la compra de (ahora 600 ha.) de bosques protegidos. Los nexos con Japón<sup>46</sup> nacieron a raíz de una visita de una conservacionista australiana quien había vivido en Japón, ella facilitó el contacto con un empresario japonés quien visitó Intag y luego se comprometió a comprar el café de la AACRI (sigue comprando hasta ahora). Con el tiempo, esta persona también jugó un rol en facilitar visitas de líderes de Intag-Cotacachi a Japón y en promover el ecoturismo inteo en Japón.

Al mismo tiempo un conjunto de lazos transnacionales personales también han jugado un rol importante. La página web de DECOIN se administra desde California y el financiamiento inicial del periódico Intag y de su página web también dependió de los lazos personales y capacidades culturales-lingüísticas de su fundadora norteamericana (radicada en Intag). Otro ejemplo son los nexos que se han formado entre el empresario y profesores en los EEUU, los cuales han sido la base para un programa de voluntarios “testigos” —jóvenes quienes trabajan y viven en la zona minera.<sup>47</sup>

Estos lazos transnacionales dependen en gran medida de las redes y los contactos personales de una sola persona, lo cual introduce una debilidad estructural en el MS de Intag. Como respuesta, ciertos actores transnacionales —y locales— han intentado diversificar las bases de liderazgo dentro del MS (ej. el apoyo de algunas agencias al CGA y la AUC). La lección de Cajamarca es que esto también tiene sus riesgos en la medida en que distintos liderazgos jalan al MS en distintas direcciones, lo cual en el caso de Intag todavía no se ha dado.

Estos varios lazos han jugado roles claves durante los últimos años. Cuando Ascendant compró la concesión en 2004, inició un

46. Porque Bishi Metals fue una empresa japonesa.

47. Esta iniciativa es una mezcla entre turismo solidario y vigilancia social. Los jóvenes visitan, y reportan sobre sus experiencias, sobre todo cuando son testigos de alguna violación de los derechos de los pobladores locales.

programa de desarrollo comunitario que intentó generar apoyo para la mina y que tuvo el efecto de promover tensiones y divisiones en Intag. También intentó deslegitimar un conjunto de actores y SMO, entonces empezaron a ocurrir incidentes violentos, amenazas de muerte y amenazas de pleitos (por ejemplo en contra del periódico *Intag*). Al mismo tiempo, empezó a comprar terrenos en la zona de la concesión. Estas diferentes acciones generaron descontentos, incertidumbres y temores que indujeron el proceso de movilización defensiva observado en la década de 1990.

En este proceso el gran limitante para Ascendant fue su base financiera. Al inicio esta base era limitada al capital de sus socios. Para ampliar el programa de desarrollo social, la compra de tierras y la exploración necesitaba convertirse en una empresa pública y vender acciones. Ascendant inició este proceso entre el 2004 y 2005 y preparó un prospectus para un IPO (venta inicial de acciones) en la Bolsa de Valores de Toronto. Frente a esta situación, algunos actores decidieron que la pelea principal tenía que llevarse a cabo en Canadá (donde la empresa es registrada) y los EEUU (donde tiene su oficina principal). El filántropo quien había apoyado DECOIN en educación ambiental y compra de bosques protectores contactó a Amigos de la Tierra Inglaterra. Aunque dijeron que no querían trabajar el tema, le pusieron en contacto con Amigos de la Tierra Canadá quienes tenían interés pero no tenían fondos ni personal. El filántropo decidió apoyarlos, conjuntamente con Mining Watch Canadá y la Canadian Environmental Legal Association, para trabajar el tema de empresas mineras canadienses, incluido Ascendant. En paralelo, en los EEUU, DECOIN siguió otra acción legal en la cual sus lazos con GGF jugaron un papel clave. Durante 2005 GGF puso a DECOIN en contacto con una organización que busca apoyo jurídico a defensores del medio ambiente. La organización encontró una firma de abogados que se ha comprometido a representar a DECOIN en los EEUU *pro bono*.

Esta colaboración entre Canadá, Inglaterra y Cotacachi buscaba convencer a la Superintendencia de la Bolsa de Toronto que el prospectus que Ascendant había preparado era incorrecto y que

desestimaba el nivel de oposición local a la mina y por lo tanto los riesgos inherentes al proyecto. Esto tuvo influencia en las declaraciones públicas de la empresa.<sup>48</sup> Sin embargo, al final fracasó como estrategia cuando la empresa empezó a vender acciones el 22 de noviembre de 2005.

El próximo paso fue, quizás, inevitable. El 10 de diciembre, 2005, después de una reunión del Consejo de Desarrollo Comunitario de las comunidades de Junín, entre 70 y 300 comuneros<sup>49</sup> decidieron volver a la estrategia que les había resultado exitosa en 1997. Ocuparon y quemaron una instalación del programa de desarrollo social de Ascendant. Ascendant (2005b) insiste que el ataque no afectará su plan de trabajo, aunque durante los primeros meses de 2006 han seguido una serie de encuentros tensos entre Ascendant, su empresa de relaciones públicas y las comunidades.

#### **4. Interpretaciones y resultados: Cotacachi y Cajamarca comparados**

##### ***Sobre los movimientos socioambientales***

##### ***Surgimiento***

Volviendo a la distinción propuesta por Melucci sobre cómo surgen los movimientos sociales (véase capítulo 1) ambos casos estudiados nos muestran que tal surgimiento hay que entenderlo en términos de la demanda y la oferta. Tanto en el caso peruano como en el ecuatoriano los MS nacen de las redes y las estructuras de la vida cotidiana: redes para el control de abigeato, redes de fe, solidaridad y recreo entre jóvenes, redes alrededor de la Iglesia local, redes

---

48. Esto se nota en las diferencias entre el prospectus para accionistas preparado el 24 de junio de 2005 y aquel preparado el 29 de agosto del mismo año. (ver: <http://www.sedar.com/DisplayCompanyDocuments.do?lang=EN&issuerNo=00022376>).

49. Las estimaciones e interpretaciones del evento varían entre DECOIN (2005) y Ascendant (2005b).

universitarias y otras. Por lo general, no han sido redes donde el tema ambiental primaba, ni eran redes o personas con ideologías radicales o “movimientistas”. Eran redes cotidianas que por una u otra razón se radicalizaron y se ambientalizaron. Con el tiempo, varias de estas redes se consolidaron en la forma de SMO, casi siempre con algún lazo transnacional que les ayudaron a formarse y financiarse como organización.

La “radicalización” de estas redes tiene que ver con la dimensión “demanda”. No cabe duda de que en ambos casos esto pasa cuando la vida cotidiana se vio colonizada por proyectos mineros que no solo implicaban transformaciones ambientales y de paisaje, sino también que no respetaban ciertas prácticas sociales y sentidos de “buen comportamiento”. Unos actores se radicalizan porque son o serán directamente agredidos (p. ej. los dirigentes iniciales de FEROCAFENOP), otros porque otros son agredidos (p. ej. los párrocos), otros porque el ambiente es (o será) agredido y hay ausencia de debate público sobre el tema (ej. ECOVIDA) y otros porque ven su acceso a recursos naturales (sobre todo agua) amenazado (ej. la población cajamarquina). Todo poder produce resistencia y en estos casos la entrada de la minería produjo la radicalización que luego lo resiste.

En ambos casos el avance del MS ha involucrado el tejido de vínculos entre estas redes iniciales y otras. El caso de Cotacachi es lo más impactante en este sentido, inclusive en términos espaciales. Los contactos entre el sacerdote y el ecologista de zonas diferentes permitieron luego que el caso Junín se hiciera visible y que los dos grupos de jóvenes se unieran e hicieran juntos el trabajo de tejer contactos dentro de Intag. A partir de 1996, cuando entra el gobierno (de tipo “alternativo”) de Auki Tituaña, los actores en Intag aprovechan la oportunidad para ir tejiendo redes y promoviendo conciencia del tema minero con grupos de la sierra y el centro urbano. Para estos grupos —aunque la minería no les afectará directamente— la colonización que se vive es una que no respeta el experimento de gestión territorial en la cual están invirtiendo tanto esfuerzo.

Con el tiempo se fueron tejiendo cada vez mayores redes transnacionales, en parte porque las SMO locales las han buscado, en parte porque los casos han atraído a los actores transnacionales. En ambos casos, el MS se transnacionalizó; sin embargo, sería un error entender esta transnacionalización como un proceso dirigido por actores globales, buscando actores locales, apoyándolos y dándoles los recursos que necesitan. En ambos casos es igualmente probable que los actores locales buscan y jalen actores internacionales hacia sus localidades y los hacen cómplices en los procesos de producción de espacio y gobernanza ambiental. La *glocalización* puede ser producida desde lo local tal como desde lo global.

Además, ambos casos demuestran que los actores nacionales influyen mucho en la forma en que estas glocalizaciones de la gobernanza ambiental se dan. Tanto los capitales nacionales (ej. Buenaventura) como las SMO nacionales (ej. Acción Ecológica) han jugado roles importantes. En diferentes momentos las SMO nacionales han provisto capacitación, información y recursos a las SMO locales, a la vez de facilitar nexos con otros actores externos. De hecho, en la transnacionalización de los movimientos, estos actores han jugado claves roles de bisagra. Las SMO nacionales también influyen en el ambiente político de una manera que puede abrir o estrechar las posibilidades de buscar formas de gobernanza ambiental más incluyentes. Al mismo tiempo los logros de las SMO locales son de suma importancia en las estrategias de las SMO nacionales (e internacionales), quienes por sí mismos no tienen raíces locales. Sirven como casos emblemáticos y el poder mostrar relación con estos casos les da legitimidad a las organizaciones nacionales. De hecho, esto puede ser una fuente de tensión entre lo local y los otros niveles, tal como se vio en la relación con CONACAMI en Cajamarca y la relación entre DECOIN y Acción Ecológica.

El rol de estos nexos entre distintos actores en el surgimiento de MS nos sugiere las siguientes preguntas: ¿dónde termina el MS?, ¿cuáles son sus límites? ¿Estamos hablando de varios movimientos locales, otros nacionales y otros transnacionales o de un solo movimiento con expresiones distintas en distintos lugares?

Si volvemos a la definición inicial de MS propuesta en el capítulo 1 (*i.e.*, procesos de acción colectiva difusa en términos espaciales y temporales que, aunque sean difusos y tengan sus altibajos, se sostienen en el tiempo), la discusión empírica sugiere que es más útil hablar de *un* solo movimiento unido por un conjunto básico de preocupaciones compartidas. Dentro de este movimiento existen distintas tendencias que pueden crear tensiones y a la vez divisiones; también existen diferentes niveles de organicidad, con procesos en algunos lugares que son más colectivos y otros que giran casi completamente alrededor de la acción de uno y otro SMO. Justamente este es uno de los roles claves de estas SMO, sostienen al movimiento durante períodos de baja, lo mantienen vivo.

### *Formas y discursos*

Mientras en Cajamarca el MS se caracteriza por tener varios procesos que corren en paralelo, varias SMO con distintos orígenes (sociales, políticos etc.), una cierta distancia entre la población rural y las SMO y una débil articulación urbana-rural, en Cotacachi el MS ha sido un proceso más integrado, de relación cercana entre las SMO y la población, y con articulación entre grupos urbanos y rurales los cuales tienen raíces comunes en el DECOIN, en el gobierno local de Auki Tituaña o las comunidades de Junín (tres esferas que son, además, relacionadas).

Quizás la diferencia más significativa radica en la relación MS-gobierno local. El proceso en Cotacachi se distingue por el nivel de articulación con el gobierno local y la sinergia entre los procesos del MS y los del gobierno local. El MS colonizó ciertos espacios abiertos por el municipio; la alcaldía asumió la posición del MS; se crearon lazos entre Intag y otros sectores de Cotacachi; y la organización social creada por la alcaldía como su contraparte civil (la Asamblea de Unidad Cantonal) se convirtió en otra SMO dentro del MS. El gobierno municipal sirvió para anclar el proceso de Intag como un proceso cantonal.

En Cajamarca, la relación entre el MS y el gobierno municipal ha sido muy distinta. El gobierno local nunca asumió la posición del MS de una manera sostenida. En ciertos momentos quiso enfocar el debate en cómo optimizar el canon minero, en otros ha criticado a la mina y en otros declaró la intangibilidad de Quilish. Pero en ningún momento ha trabajado de cerca con el MS o con las SMO. Nunca asumió el rol de articular los diferentes actores dentro del MS.

Tal como existe mayor dispersión de actores, también existe mayor dispersión de discursos y proyectos políticos dentro del MS de Cajamarca en comparación a Cotacachi. En Cajamarca coexisten discursos sobre la nacionalización de Yanacocha, la no-deseabilidad de la minería y la necesidad de buscar relaciones más fructíferas con la empresa; o sea, discursos en pro, en contra o ambivalentes frente a la minería. Esto en sí debilita al MS, además de facilitar que otros lo debiliten. En cambio en Cotacachi el discurso es mayoritariamente antiminerero. Es un discurso que ha sido construido conscientemente por un grupo pequeño de SMO y personas quienes han podido convencer a la población.<sup>50</sup> Al poder ocupar ciertos espacios de gobernanza ambiental dentro del municipio, este proceso de construcción ha sido más efectivo.

Esta noción de construir un discurso nos recalca la importancia de la educación ambiental y el rol que ha jugado en ambos casos. En gran medida, la educación ambiental ha sido el nexo entre las SMO y el MS, así como el instrumento a través del cual se han amplificado y difundido las preocupaciones en cuanto a la minería. Esta educación ha tomado muchas formas: un sinnúmero de talleres comunales, videos, publicaciones por internet y escritas, trabajo con profesores y alumnos, enseñanza superior, volantes etc.<sup>51</sup>

---

50. Utilizamos el término “construido” en un sentido analítico no peyorativo. El discurso no nació de la nada, fue cultivado.

51. Aunque es de notar que los medios masivos no han sido un instrumento importante, en gran medida porque su línea editorial ya es pro minera o porque dependen demasiado de las empresas y sus subcontratistas al momento de vender espacio para hacer anuncios y propaganda.

El efecto ha sido la creación de una esfera pública local en la cual ciertas ideas siguen siendo visibles y, en determinados momentos, nutren los procesos de movilización más masiva.

Finalmente, vale notar que los discursos de los MS —y el balance entre los distintos “subdiscursos” dentro del MS— han evolucionado en el tiempo de una manera que va relacionada con los mismos conflictos ambientales. Esta evolución ha sido más notable y quizás más coherente en Cotacachi. Cabe recordar que, antes de la llegada de Bishi Metals, Junín y las parroquias de los alrededores eran zonas de colonos cuyos discursos y prácticas fueron sumamente modernizantes (y no ambientalistas). Estos eran colonos quienes cortaban, quemaban y ocupaban el bosque para sembrar sus cultivos y pastos. Estos discursos generaron las primeras expectativas de la población local frente a la minería (expectativas que giraban alrededor del crecimiento del mercado local y la generación de empleo). En la medida en que las expectativas no fueron satisfechas, el conflicto se agudizó y la presencia de actores externos (el empresario conservacionista, el cura, Acción Ecológica, ONG internacionales ecologistas y de desarrollo) lo intensificó.

En este proceso el discurso de la población y del *proto*-MS empezó a cambiar, primero era un discurso conservacionista y de desarrollo sustentable y luego pasó a un discurso político ecológico y de resistencia. Este cambio —de un conservacionismo hacia un ecologismo político— también se dio en algunas de las SMO involucradas a raíz de las interacciones entre ellas con actores externos; de un discurso de resistencia pura se pasó hacia la resistencia propositiva con un discurso que hablaba de proyectos alternativos, otras fuentes de ingreso, etc. Casi simultáneamente con este proceso, el discurso también se territorializó y, en este sentido, tal como sugiere la teoría, el discurso sobre la justicia ambiental y aquel sobre la producción del espacio se fusionaron. Esta territorialización del discurso también tiene explicación *glocal*. Al mismo tiempo que reflejaba la influencia del discurso del desarrollo local participativo (que en Cotacachi provenía de la iniciativa cantonal del municipio), esta iniciativa tenía como referencias tanto las propuestas del movimiento

indígena nacional como de las ONG especializadas en el tema del desarrollo local quienes tenían lazos políticos con el movimiento indígena y mantenían lazos con el movimiento latinoamericano de desarrollo y democracia local. Esta evolución discursiva refleja cómo la construcción de discursos también ha sido un proceso glocal, influido tanto por actores e ideas en diferentes niveles como por la misma dinámica del conflicto local.

### *Lazos transnacionales*

Si bien la “demanda” para los MS es una respuesta a una cierta transnacionalización del DTR en ambos casos, los lazos transnacionales dentro de la sociedad civil no jugaron papeles determinantes en el surgimiento inicial de los MS y más bien sus aportes han sido distintos. Por un lado han ayudado a mantener vivos las SMO durante períodos de baja movilización social. Sobre todo dan aportes tanto financieros como de sustancia a las *estrategias* de los MS y las SMO. Comparten ideas y experiencias sobre posibles estrategias (ej. OA sugirió que los actores en Cajamarca lleven su caso a la CAO), facilitan nexos con otros actores quienes pueden apoyar estrategias (ej. GGF ha facilitado nexos con abogados ambientales y grupos locales en los EEUU) y cumplen roles específicos dentro de estas estrategias (ej. OA mantiene vínculos de diálogo con Newmont y eventualmente la CFI; Amigos de la Tierra Canadá ayuda con la incidencia del MS de Cotacachi hacia la bolsa de Toronto).

Otro papel ha sido hacer que estos casos se vuelvan más visibles a nivel internacional. La red de ATI ayudó mucho en visibilizar el caso de Cotacachi-Intag; OA ha visibilizado el tema minero en los Andes en términos más generales y junto con GGF apoyó un video sobre Yanacocha que ahora tiene vida propia en el mundo activista; también GGF apoyó en la nominación (exitosa) de activistas de Cajamarca para premios internacionales; Global Response ha difundido ambos casos entre sus miembros quienes escriben peticiones y ha facilitado la movilización de estudiantes en Colorado quienes han protestado fuera de las reuniones de los accionistas

de Newmont. Esta visibilización genera mayor presión sobre las empresas y atrae mayor apoyo a los MS.

Estos roles requieren lazos con actores locales y nacionales y, en varios sentidos, los actores transnacionales necesitan a los actores locales, tal como los actores locales requieren sus nexos internacionales. Sin embargo, son relaciones donde existen diferencias de poder y se dan las “fricciones” descritas por Tsing. Aunque el tema de tensiones no es muy presente en los casos, estas por lo general se dan cuando las SMO locales perciben que los transnacionales adquieren demasiada visibilidad en actividades que han sido lideradas por las SMO. También hay casos en donde las SMO locales perciben que les falta poder para influir en las estrategias de los transnacionales (por ejemplo, ATI definió que su campaña minera se enfocaría en la banca multilateral cuando varios de sus afiliados de América Latina querían privilegiar la incidencia en las empresas; los activistas en Cotacachi hubieran querido mayor discusión con GGF sobre estrategias). En otros casos, las SMO aceptan esta influencia, como en el caso de FEROCAFENOP quien aceptó las sugerencias de Project Underground de no tomar la mina por la fuerza y la sugerencia de OA-Washington de llevar Yanacocha a la CAO.

Más allá de si estas sugerencias fueron las más adecuadas, sus efectos han sido determinantes para los MS y las SMO. Entre otras cosas, la decisión de transnacionalizar los intentos de incidencia han implicado una cierta redistribución de recursos por parte de las SMO. Implican la inversión de tiempo, esfuerzo, atención y fondos en actividades que se orientan hacia actores que radican fuera del país: la Corporación Financiera Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Bolsa de Toronto etc. En varios casos, se ha invertido mucha energía con pocos resultados —por ejemplo, en aquel de la CFI donde se ve muy poco cambio no obstante todo el trabajo invertido. Además, el trabajo invertido en incidencia internacional viene a costo de actividades que buscan fortalecer la relación entre SMO y poblaciones más amplias. Finalmente, el hecho de que los dirigentes tengan que viajar

para incidir y para hacer visible su caso genera críticas desde la población en el sentido de que estos líderes “pasan todo su tiempo viajando”. En este sentido la transnacionalización de la atención de las SMO lleva efectos no siempre positivos para los MS.

### ***Sobre los MS y la gobernanza ambiental***

El contexto de la minería hace evidente que, antes de pensar en gobernanza, primero es indispensable pensar en relaciones de poder. En los casos estudiados —sobre todo el de Cajamarca— existen enormes desigualdades de poder, de fondos de financiamiento y de otros recursos entre los actores. Este poder distorsiona las instituciones de gobernanza, no solo porque (como en el caso de Cajamarca) las empresas mineras terminan cubriendo los costos operativos de oficinas públicas y de mesas de concertación, sino también porque distorsiona y crea sistemas de incentivos en los cuales muchos de los actores involucrados terminan pensando en la posibilidad de acceder a recursos de la empresa y a puestos de trabajo (como muestra, Yanacocha tiene varios empleados quienes antes trabajaron en las ONG, SMO y entidades públicas). En tal contexto, la posibilidad de que los MS influyan significativamente en la gobernanza parece remota, aunque no inexistente.

Si distinguimos entre los tres niveles —local, nacional e internacional— en los cuales existen reglas que estructuran la GA, podemos decir que tanto en Cotacachi como en Cajamarca los MS han tenido alguna influencia a nivel local e internacional, pero mucho menos a nivel nacional. En ambos casos, los MS han logrado ordenanzas municipales que restringen ciertas actividades mineras y aunque el poder legal de tales ordenanzas no es tan seguro, su poder simbólico es importante.

También en ambos casos se han logrado espacios de concertación, no obstante que en Cajamarca estos espacios han sido débiles. A algunas de las mesas de diálogo les falta legitimidad, otras casi no se reúnen y es difícil argüir que estos espacios hayan tenido mucho efecto en las prácticas socioambientales de la minera

Yanacocha, salvo por el sistema de monitoreo de agua montado por la mesa de la CAO que induce mayor cuidado por parte de la empresa. En varios casos, las mesas han provocado diferencias entre SMO. De hecho es legítimo sugerir que, adrede o no, la creación de mesas ha servido más bien como un instrumento que permite que la mina postergue cualquier cambio real, porque la mesa da la impresión de un cambio de gobernanza ambiental sin que realmente lo constituya.

En Cotacachi la situación es distinta; aquí se han creado nuevas prácticas de concertación que después de nueve años de funcionamiento se puede ahora categorizar como instituciones: la Asamblea de Unidad Cantonal y sus comisiones. Aunque estos espacios tampoco han tenido algún efecto directo en las prácticas de las empresas, han permitido mayor convergencia entre actores sociales quienes cuestionan la mina y han dado mayor peso y legitimidad a sus quejas y estrategias de incidencia; o sea la concertación ha fortalecido el MS llevando a que sus otras estrategias de incidencia tengan mayor efecto en la GA y el DTR.

Si, como sugerimos antes, las empresas mineras constituyen el espacio privilegiado de gobernanza ambiental, estas no han respondido directamente a estos procesos de concertación, pero en ambos casos han cambiado sus prácticas en respuesta a formas de acción directa y movilización masiva.<sup>52</sup> En el caso de Cajamarca, pareciera que la empresa cambió por su preocupación de que tales movilizaciones masivas puedan influir en la imagen de la empresa frente a sus inversionistas (sobre todo los inversionistas institucionales) y perder la confianza de estos. En Cotacachi, la respuesta fue más bien irse, lográndose un cambio dramático en la GA.

A nivel nacional los MS han tenido mucho menos efecto en la GA. En ambos casos, las políticas no han cambiado sustancialmente y siguen favoreciendo las empresas. Los Ministerios de Energía y

---

52. Y con presión del Estado (central) porque es quien tiene que cargar con los costos políticos de las movilizaciones (represión, imagen de estabilidad y autoridad, etc.).

Minas en ambos países se caracterizan por tener lazos fuertes con el sector minero, ofreciendo poca posibilidad de que los movimientos nacionales puedan incidir en leyes o políticas. Además en ambos países la legislación ambiental es sectorizada y son los ministerios quienes hacen efectiva la legislación ambiental. Aunque en noviembre 2005 el gobierno peruano adoptó una nueva Ley General del Ambiente, el proyecto de ley perdió mucho contenido cuando el Congreso rechazó el artículo que, en ausencia de estándares nacionales, identificaba los estándares de la OMS como aplicables en Perú. Del mismo modo, intentos de proseguir procesos judiciales en ambos países tampoco han generado resultados para las SMO —ni nacional, ni localmente.<sup>53</sup> Se podría sugerir que en Perú un logro a nivel nacional ha sido la creación del Grupo de Diálogo y su presentación en 2006 de una nueva agenda para la minería en Perú. Aunque ni el Grupo ni su agenda tengan poder formal, su existencia puede ser vista como un cambio en la gobernanza ambiental nacional en el sentido de que permite conversaciones que antes no eran posibles entre ciertos actores. Solo el tiempo mostrará si esto lleva a cambios en la GA real.

A nivel transnacional los dos principales canales a través de los cuales existe la posibilidad de influir en la GA tienen que ver por un lado con el Grupo Banco Mundial donde se intenta hacer que el Banco insista en ciertas “buenas” prácticas y, por otro lado, con las empresas donde se intenta ejercer presión sobre sus prácticas internas.

Los circuitos del Banco Mundial son importantes aunque ambiguos en ambos casos. Por un lado el BM ha promovido inversión minera —directamente con la inversión de la CFI en Yanacocha e indirectamente en Intag vía su apoyo al Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA)— lo cual amplió la exploración geológica (incluyendo en Cotacachi) y promovió un conjunto de cambios normativos y legislativos que hicieron que la

---

53. La comisionada para conflictos de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca comentó que, aunque recomienda a las comunidades que abren acciones legales, ella sabe que no les van a resultar porque no serán atendidas.

inversión minera sea más atractiva en el Ecuador. En ambos casos los SMO han intentado influir en el BM, pero con poco éxito. A raíz de las protestas de una SMO en Intag, se abrió un “Inspection Panel” sobre PRODEMINCA pero este concluyó que las quejas de las comunidades eran exageradas. En el caso de Yanacocha, OA no encuentra mucha apertura en la CFI para discutir problemas y de hecho percibe que la CFI no tiene mayor influencia sobre la empresa minera.

Por otro lado, en el caso de las empresas, la evidencia de que se haya podido afectar sus prácticas ambientales vía acciones transnacionales es solamente indirecta. Sin embargo, al hacer mucho más visibles (en Canadá y los EEUU) los problemas ambientales de ambos casos, varios de estas acciones transnacionales han creado un clima que presiona a que las empresas presten cada vez mayor atención al tema ambiental.

### ***Los movimientos sociales y el desarrollo territorial rural***

Los conflictos entre las empresas mineras y otros actores sociales son, en gran medida, conflictos entre distintas visiones para el desarrollo territorial: “Tenemos visiones diferentes de lo que es el desarrollo” comentó un activista en Cotacachi. Son conflictos sobre (i) cuáles deben ser las bases productivas de un DTR; (ii) qué tipos de espacio y relación sociedad-medio ambiente deberían ser producidos en el proceso del DTR; (iii) la deseabilidad de sustituir entre diferentes tipos de activos en el proceso de DTR; y, (iv) quiénes deberían controlar este proceso. En ambos casos, los MS cuestionan las visiones de las empresas y los ministerios y hacen más visible la noción de que existen visiones alternativas (aunque, como comentamos anteriormente, no necesariamente “mejores”). Además, en Cotacachi el MS ha empezado a sustanciar su visión alternativa con propuestas organizativas y productivas.

Estos conflictos sobre el DTR como proyecto normativo tienen sus orígenes en el proceso de DTR como un proceso político-económico. El aumento casi sostenido, y en algunos casos

estrepitoso, de los precios de minerales produce nuevas cadenas productivas (o “extractivas”) que se insinúan en las áreas rurales donde existen los minerales y los jalan para que entren a nuevos mercados. Estos mismos procesos económicos también producen (o inducen) actores (empresas, consultoras, el Estado) quienes quieren promover esta insinuación de cadenas productivas en los espacios rurales pues de alguna forma se beneficiarán de la extracción (con ingresos, rentas, impuestos, divisas, etc.) y, por lo tanto, ayudan al proceso: promueven cierta forma de transformación rural. Estos procesos globalizan el DTR que se da en estos espacios; luego, las respuestas de los actores locales, con sus distintas visiones, historias, imaginarios, etc., *glocalizan* este DTR.

La intervención de la minería cuestiona y promete desarticular las formas existentes (y tradicionales) de producción y de ocupación del espacio. “Coloniza” estos mundos de la vida cotidiana (cf. Habermas). La expansión de la frontera minera —directa, vía la compra, el uso y el control de la tierra e indirecta, vía sus efectos en los recursos naturales (ej. agua) fuera de la zona de influencia directa— implica conflictos con formas existentes de uso de la tierra. En este proceso, tanto en Cotacachi como Cajamarca, se han contrapuesto visiones agropecuarias-campesinas-familiares y visiones mineras/empresariales del desarrollo territorial. Los movimientos sociales en ambos casos insisten en que la gobernanza de este desarrollo territorial debería ser un proceso incluyente y concertado en donde prima la democracia local. Las empresas y los ministerios, en cambio argumentan que los derechos privados en el subsuelo y el suelo dan al propietario la libertad de decidir cómo se desarrollan estos espacios. En cierto sentido, son conflictos entre el poder relativo de la ciudadanía y de la propiedad en procesos de DTR.

En cambio, el desacuerdo sobre las bases productivas de un proceso de DTR es un poco distinto en los dos casos. En Cotacachi el MS insiste en que una visión agropecuaria-campesina-conservacionista debe primar para la totalidad del territorio de Cotacachi. Además hay amplio consenso dentro del MS sobre esta visión. En

Cajamarca, en cambio, hay mayor diversidad de visiones dentro del MS (unas permitiendo más minería, otras permitiendo menos). Sin embargo la visión más común entre las SMO parece ser una que combina la minería y la agricultura, pero que permite menos minería que lo que espera la empresa Yanacocha (el caso emblemático de esta diferencia es el conflicto sobre Quilish).

Otra diferencia entre las visiones de los MS y las empresas radica en el nivel de riesgo socioambiental que un proceso de DTR debería permitir. Los MS proponen visiones que reducen el nivel de riesgo en términos del potencial daño para al medio ambiente y la salud pública; las empresas permiten mayor riesgo, en gran medida porque argumentan que el riesgo es manejable.<sup>54</sup> Relacionado con esto, mientras las empresas y el Estado promuevan visiones del DTR que permiten una amplia (si bien no infinita) sustitución entre diferentes formas de capital en este proceso, los MS (tanto las SMO como la población rural y urbana) manejan visiones que por lo general la aceptan menos e insisten en mantener ciertos niveles de capital natural y social, sobre todo en temas de calidad y cantidad de agua, pero también de ciertas formas de vida. Manejan horizontes de tiempo distintos y enfatizan el largo plazo mucho más que las empresas; al enfatizar el largo plazo cuestionan y rechazan formas de DTR que arriesgan las bases de activos necesarios para sostener este largo plazo.

Finalmente, existen diferencias sobre el mismo concepto de territorio. El MS en Cotacachi insiste en la integridad de un territorio con el nombre Cotacachi, el cual abarca Intag, la zona andina y el centro urbano. De hecho, en cierto sentido el MS (incluyendo el gobierno local) ha ayudado en crear este concepto de Cotacachi. Por lo tanto, insiste en que cualquier decisión sobre la minería debería involucrar moradores de todo este territorio y nadie más. En Cajamarca, la visión territorial del MS es mucho menos elaborado o coherente y no se percibe una estrategia tan clara como

---

54. Y porque al final ni ellos ni sus hijos tendrán que vivir en estos territorios.

en el caso de Cotacachi para producir cierto concepto de territorio. Si alguna visión territorial hay en el MS, esta parece combinar un concepto de cuenca y de departamento. Se enfatiza que cualquier decisión sobre la minería debería basarse en una reflexión sobre el efecto de la actividad minera a nivel de cuenca; y se enfatiza que la minería solo tiene sentido si la unidad administrativa de Cajamarca obtiene significativo provecho económico de la extracción.

Estas visiones de territorio —la una mucho más consolidada, la otra más frágil y plural— tienden a ser distintas a las visiones que tienen las empresas y los ministerios. Por lo general, las empresas tienen interés sobre todo en los espacios del proyecto minero más las comunidades colindantes (donde las empresas requieren de apoyo). Este enfoque más localizado se ubica dentro de otra lectura, más global, que piensa en las relaciones entre las distintas inversiones de la empresa a nivel internacional. Dicho esto, en el caso de Cajamarca, se nota que —con el tiempo, y a raíz de los conflictos que han ocurrido— Yanacocha ha ido pensando cada vez más en la región de Cajamarca. Por necesidad tanto política como operativa, ha tenido que ir pensando en la relación entre sus inversiones y los recursos hídricos de la región, y en la relación entre sus inversiones y la generación de oportunidades económicas regionales. Los ministerios, en cambio, parecen seguir pensando solo a nivel de la mina —aprueban proyectos mineros basados en un análisis a nivel de mina y no a nivel regional— y de la nación (argumentando que las inversiones mineras son importantes para la economía nacional). No manejan un concepto de territorio integrado.

En la confrontación entre estas visiones, un argumento de fondo gira alrededor de la potencialidad económica de cada visión. Tanto los ministerios centrales como las empresas insisten en que un futuro agropecuario conllevará una pobreza perpetua tanto para la zona como para el país. “Vivimos con tanta pobreza [...] si no explotamos lo único que tenemos, ¿qué hace el país con una economía tan quebrada?”. Este es un discurso que apareció en cada entrevista con estos actores. Por su parte los actores de los movimientos sociales insisten en que no hay evidencia de que la minería

haya reducido la pobreza de una manera significativa en las zonas de influencia directa. En todo caso, se puede sugerir que no hay tanta evidencia ni de que la minería ha reducido la pobreza y desigualdad en Cajamarca, ni de que las propuestas alternativas (de café orgánico, ecoturismo y artesanía) en Cotacachi han tenido mayor efecto ni tienen gran viabilidad económica al momento.

Otro argumento de fondo es sobre el nivel de riesgo inherente en la visión minera. Gran parte del debate está en “lo que dicen los datos”, sobre todo los datos sobre la calidad y cantidad de agua. En esto existe mucho desacuerdo no solo sobre la interpretación y validez de diferentes bases de datos cuantitativos, sino también sobre los tipos de datos e indicadores que cuentan. Muchos de los conflictos en Cajamarca se caracterizan por una situación en la cual la mina presenta interpretaciones basadas en protocolos positivistas para argumentar una posición, mientras las comunidades y las SMO presentan datos basados en el conocimiento vernacular (ej. la desaparición de ciertas especies) para fundamentar una posición opuesta. Gran parte del conflicto y desencanto en Cajamarca se fundamenta en discrepancias profundas sobre qué tipo de conocimiento cuenta y, por lo tanto, en el sentido de que unos ciudadanos valen menos que otros porque su conocimiento no cuenta.

## **5. Conclusiones: la glocalización y la esfera pública**

La experiencia en Cotacachi difiere mucho de aquella de Cajamarca y la comparación nos da algunos elementos para entender las condiciones bajo las cuales los MS influyen en la GA y el DTR. Mucho depende de hasta qué punto la economía política determina las dinámicas del DTR y el nivel de autonomía que tienen los MS frente a esta economía política. Si bien es una broma (seria) entre las SMO en Cotacachi que deben agradecer a la minería porque la resistencia les ha exigido creatividad, organización y unión en niveles mayores a los que hubieran existido sin la minería, siguen siendo bastante autónomos frente a la economía política

de la minería. Ello, no es así en Cajamarca donde la dinámica de la mina determina las dinámicas de las SMO y los espacios de concertación. La mina financia tanto a organizaciones locales como varias de las actividades de las mesas. La omnipresencia de la mina en la economía regional crea un conjunto de intereses a favor de la minería, los cuales siempre implicarán que la base social del MS difícilmente llegará a ser la mayoría de la provincia. Mientras tanto la mina tiene la capacidad financiera e intelectual para saber cómo dividir y debilitar a sus opositores y para ejercer presión sobre las agencias que financian a las SMO.<sup>55</sup>

Esta diferencia —un MS autónomo, otro no— se debe en parte a otros elementos del medio y las mismas dinámicas internas del MS. En Cajamarca el MS adolece de varias debilidades (distintos liderazgos, distintas visiones de la problemática minera y de las opciones para Cajamarca, nexos débiles entre las SMO y la población rural, etc.) y no ha podido aprovechar de los nuevos espacios de GA que han surgido o que podrían haber surgido. En Cotacachi el MS es más uniforme, más claro en su visión y goza de un gobierno local no solo comprometido con su visión sino que además crea un ambiente que favorece la consolidación del MS.

Sin embargo, quizás la mayor explicación de la diferencia entre los dos casos es que en Cotacachi la resistencia empezó antes de que la mina se instalara lo cual le dio muchas ventajas frente a la empresa. Aquí el factor clave tuvo que ver con información. Cuando Yanacocha empezó, la población no tenía acceso al EIA, no había mayor debate local y no había conocimiento de otras minas de Newmont. Además todo esto se dio en un contexto nacional autoritario donde la información era escasa y la organización social restringida. En cambio, en Cotacachi RAN, Acción Ecológica y luego DECOIN difundieron información y el ambiente político permitió debate público y organización social. En este sentido, la historia y las condiciones iniciales han pesado mucho en la trayec-

---

55. En 2005 el gobierno canadiense exigió —por razones de política externa— que Canadian Lutheran World Relief deje de apoyar a ADEA, ECOVIDA y GRUFIDES.

toria de los dos casos, sugiriendo que en la relación entre MS, GA y DTR hay mucha dependencia histórica (*path dependence* en inglés).

Pero no hay que ser demasiado determinista. Más allá de estas observaciones lo cierto es que los procesos de DTR en ambos casos han sido distintos (de lo que hubieran sido) a consecuencia de la existencia y las acciones de los MS. Esto ocurre en gran parte porque la existencia de los MS ha hecho posible y necesario un argumento sobre el DTR que de otra manera no se hubiera dado. En este sentido los MS en ambos casos han politizado el “desarrollo” (Escobar, 1995; Álvarez et al., 1998; Dagnino, 2005) o, más precisamente, han mostrado que todo tipo de desarrollo y de DTR es político. Quizás esta es la contribución más importante de los MS y quizás se la pierde de vista cuando se insiste en buscar efectos materiales de los MS en la pobreza, la inclusión social o la equidad. Quizás el aporte clave de los MS es que estos han creado una esfera pública en donde el desarrollo se vuelve un tema de debate público, un debate en el cual se escuchan mayores voces que las que se hubieran oído sin el MS. Ni las empresas ni las agencias estatales se preocuparon por crear tal debate; de hecho, quisieran que no existiese y, en ambos casos (aunque mucho más en Cajamarca) es evidente que estos actores intentan cerrar la posibilidad de debate en los medios de comunicación a través de la “compra” de estos medios (cf. Zárte y Durand, 2005 también). Una de las contribuciones de los MS —o más bien las SMO— ha sido la creación y mantenimiento de otros espacios que permiten la existencia de una esfera pública para debatir el significado del DTR en presencia de la gran minería.

¿Dónde están estas esferas públicas? Existen en las páginas web de las SMO, en sus publicaciones, en el material que distribuyen, en las reuniones que organizan y en las conversaciones cotidianas que nacen de esto. También existen en las comunidades campesinas, en el Grupo de Diálogo, en las publicaciones de Oxfam América, y en las campañas de Amigos de la Tierra Internacional. Existen en los espacios físicos donde protestó Segunda Castrejón en Denver y en las calles de Cajamarca durante la protesta sobre

Cerro Quilish. Existen en las redes promovidas por Acción Ecológica y en las discusiones de aula que usan los materiales producidos por estos actores. Existen en las publicaciones del *New York Times* sobre el caso de Yanacocha. Tal como con los procesos, el MS y las SMO que las producen, estas esferas también son *glocales*.

## 6

### *Minería, migración y transformaciones en los medios de subsistencia en Cajamarca, Perú*

JEFFREY BURY

#### **1. Introducción**

Desde inicios de los años de 1990, tras el viraje peruano hacia las políticas económicas neoliberales, las operaciones mineras transnacionales han convertido al país en uno de los principales exportadores sudamericanos de recursos minerales. En el proceso, las nuevas “mega” operaciones mineras de base transnacional han pasado a ser unas de las más grandes y más influyentes propietarias de tierras y agentes de cambio en regiones del país que tradicionalmente han estado afectadas por elevadas tasas de pobreza y desempleo. A medida que estas operaciones han escalado la cordillera peruana en búsqueda de recursos minerales, también han inyectado grandes cantidades de inversión extranjera directa e introducido nuevas tecnologías de minería, todo lo cual ha dado lugar a amplios cambios ecológicos, económicos y sociales en las áreas circundantes a dichas operaciones. Adicionalmente, las nuevas operaciones mineras transnacionales han introducido importantes poblaciones de empleados extranjeros y nacionales, consultores, proveedores, organizaciones ambientalistas internacionales y nacionales y diversas ONG en las regiones donde operan.

En Cajamarca estas operaciones han tenido efectos significativos tanto en las estrategias de subsistencia rurales como urbanas (ver capítulo 2). Este capítulo discute algunos de estos efectos, con un énfasis particular (si bien no exclusivo) en las estrategias de subsistencia rurales en tres comunidades donde se realizó un estudio de caso, las mismas que se encuentran dentro del área de influencia de la mina Yanacocha. Luego de una discusión conceptual, el capítulo traza, en primer lugar, algunos de los efectos sobre los medios de subsistencia de la gente que continúa residiendo en comunidades rurales e igualmente explora las transformaciones que se están dando en los activos y recursos a partir de los cuales las unidades domésticas construyen sus medios de subsistencia. La parte restante del capítulo examina un segundo conjunto de efectos —no obstante relacionado— en los medios de subsistencia producidos por estas operaciones mineras: los efectos sobre los patrones de movilidad de los medios de subsistencia. Estos cambios provienen tanto del desplazamiento a gran escala de las unidades domésticas y comunidades —el cual tiene lugar cuando las minas adquieren tierras para sus operaciones— como de los nuevos patrones de inmigración que siguen a las inversiones mineras. Tal como se verá, estas operaciones han contribuido a cambios significativos en el movimiento de las poblaciones entre las regiones de la costa y la sierra del Perú, al movimiento transnacional de gente hacia y desde los Andes y a la organización espacial general del comportamiento migratorio de la unidad doméstica.

## **2. Los medios de subsistencia y las nuevas geografías de la migración**

Durante la década pasada, estudios en geografía y en desarrollo han aportado significativamente al conocimiento de la forma cómo son producidos los medios de subsistencia de pobladores rurales y acerca de los tipos de recursos sobre los que se basan. Lo que surgió de muchos de esos debates es que las estrategias de producción de los medios de subsistencia son complejas, diversas,

dinámicas y apelan a una variedad de recursos empleados en forma combinada (Chambers y Conway, 1992; Chambers, 1995). Nuevas investigaciones han propuesto marcos más complejos para comprender cómo interactúan los patrones de acceso, los recursos y los medios de subsistencia de las unidades domésticas (e.g., Bebbington, 1999; Leach et al., 1999; Scoones, 1998). Estos nuevos marcos proveen indicadores más comprehensivos para medir cómo están cambiando la cantidad y calidad de los recursos en un área geográfica dada, al mismo tiempo que ofrecen un vínculo entre la terminología del desarrollo económico y el uso sostenible de recursos (DFID, 1999; UNDP, 2001; World Bank, 2000).

El elemento común de estos nuevos enfoques es el énfasis puesto en un amplio conjunto de recursos al que acceden las unidades para construir sus medios de subsistencia. Si bien existen algunas diferencias entre las denominaciones y las distintas categorías conceptuales, los investigadores se basan en la heurística de la terminología del capital para identificar varias categorías importantes de recursos sobre los cuales se producen los medios de subsistencia. En términos generales, los investigadores han identificado cuatro importantes tipos de recursos de capital que están involucrados en la producción y el cambio de los medios de subsistencia. Estos incluyen los capitales producidos, humanos, naturales y sociales (Bebbington, 1999; Scoones, 1998). Por lo general, el capital producido ha sido concebido como formado por los ahorros y los activos líquidos convertibles, así como por los flujos monetarios regulares —tales como los ingresos ganados, pensiones, transferencias del Estado y otras remesas. Además, el capital producido también ha sido concebido como teniendo un componente infraestructural, el cual incluye edificaciones, y servicios de transporte y energía eléctrica (Lewis, 1955). Se considera que el capital humano se refiere a los activos que se basan en el cuerpo, tales como las habilidades, la educación, el conocimiento, la capacidad para trabajar y la salud (Shultz, 1964; Strauss y Thomas, 1995). El capital natural, tal como ingresó a las discusiones sobre el desarrollo en los años de 1990, se considera que consiste de dos elementos: recursos

no renovables, tales como los minerales, los bosques y los suelos y recursos renovables, tales como los servicios del ecosistema y el ciclo de nutrientes (Costanza y Daly, 1992; Barbier, 1994).

La noción de capital social, como un activo para los medios de subsistencia le debe bastante a las tempranas formulaciones del concepto realizadas por James Coleman (1988) y Robert Putnam (1993). Ellos emplearon el concepto para referirse, respectivamente, a las estructuras relacionales (tanto horizontales como verticales) que facilitan la acción y a los elementos de la sociedad civil que han impulsado el desarrollo económico y la buena gobernanza en la Italia moderna. A partir de estos estudios es que los investigadores (*e.g.*, Woolcock, 1998; Harris y De Renzio, 1998) han elaborado de manera sustancial sobre la noción de capital social. Si bien las definiciones conceptuales del capital social todavía vienen siendo debatidas, la noción general es que el *stock* de confianza mutua o “conexiones” que existen entre la gente proveen un flujo de recursos que posibilita tanto resolver problemas como la propia dedicación a las actividades económicas y políticas.

En general, si bien el debate sobre los recursos de capital todavía está en curso y los elementos de los marcos basados en recursos de capital (tales como el capital social) todavía están siendo debatidos, la utilidad potencial del marco teórico probablemente sea mejor demostrada por la rápida adopción del enfoque entre las organizaciones oficiales del desarrollo (*e.g.*, World Bank, 2000). Si bien los marcos teóricos sobre las estrategias de subsistencia rurales han sido adoptados rápidamente en todo el mundo, todavía existe un trabajo empírico relativamente escaso que lo lleve a cabo en los contextos locales, puesto que gran parte de la investigación anterior se hizo a nivel de proyectos específicos antes que a nivel de economías políticas regionales (*e.g.*, Ashley, 2000; Ashley y Carney, 1999; Farrington, 1999). Este capítulo demuestra cómo es que estos marcos pueden contribuir a comprender los cambios en las estrategias de subsistencia rurales que tienen lugar cuando tales economías regionales son transformadas por nuevas formas de inversión minera.

La movilidad ha sido, desde hace mucho, una parte importante de los medios andinos de subsistencia, aunque quizás ha pasado a ser una estrategia crecientemente importante de las unidades domésticas para reducir la dependencia de los recursos del capital natural, así como para ganar acceso a, y sacar ventaja de, los cambiantes recursos de capital humano y capital social. En particular, este ha sido el caso a medida que la región ha pasado a estar crecientemente urbanizada y que las políticas neoliberales han acicateado cambios significativos en la geografía y la magnitud de la inversión estatal y privada a través de toda la costa y la sierra.

En respuesta a tales efectos, la literatura ha buscado describir los cambios recientes en los patrones y los comportamientos migratorios,<sup>1</sup> para comprender etnográficamente la forma en la que los migrantes responden a estos nuevos contextos (McHugh, 2000), y para ofrecer así “una rica descripción de los costos sociales y culturales del desarrollo neoliberal” (Lawson, 2000: 174). La segunda parte del análisis en este capítulo contribuye a estos debates prestando atención al caso específico de la migración en áreas afectadas por recientes rondas de inversión dirigidas a la extracción de minerales. Elaborando a partir de los esfuerzos previos para examinar los procesos de migración que se dan en torno a las operaciones mineras auríferas en distintos países (Crush, Jeeves y Yudelman, 1991; Long y Roberts 1978, 1984), y bajo diferentes contextos económicos (Becker, 1983; Godfrey, 1992; Moodie y Ndatshe, 1994), el capítulo explora cómo es que la migración ha sido afectada durante el período más reciente de neoliberalismo y expansión minera en la región (*e.g.*, Dore, 2000; Szablowski, 2002).

---

1. Esto incluye importantes nuevas investigaciones acerca de los procesos de migración transnacional, remesas y migración urbana (Conway y Cohen 1998; Jokisch 2002; Jones 1998; Pries 2004), así como del comportamiento migratorio regional y nacional (Cole 1989; Larson, Harris y Tandeter 1995; Mayer 2002; Mutersbaugh 2002 Hays-Mitchell 2002; Lawson 1998).

### 3. La minería y los medios de subsistencia en Cajamarca

Las unidades domésticas y las comunidades de la región de Cajamarca coexisten junto con las operaciones de MYSA. Los medios de subsistencia de estas unidades domésticas deben ser comprendidos en el contexto mayor de la geografía física, histórica y humana de la región, la cual ha influido enormemente en su composición y en la distribución de recursos a partir de los cuales producen tales medios.

En términos físicos, la región que rodea a la mina se ubica a gran altitud, en los valles interandinos de los Andes peruanos del norte, entre los 2,800 y 4,300 metros de altitud. El clima de la región está marcado por dos variaciones estacionales importantes y la población humana que vive en la zona circundante a la mina está distribuida en términos verticales entre cuatro zonas de vida altitudinales. Además, la población humana está casi totalmente situada en un contexto rural. Por ejemplo, el año 1993, cuando la mina inició sus operaciones, más del 90 por ciento de los 1.3 millones de personas en el departamento de Cajamarca (la división política más grande en la que se encuentran la ciudad de Cajamarca y MYSA) eran residentes rurales (Indacochea et al., 1998).

Según casi todos los estándares, Cajamarca es una región muy pobre. Hacia finales de los años de 1990, el ingreso per cápita en el departamento era inferior a la mitad del promedio nacional y a menos de un tercio del ingreso per cápita en Lima, el 86% de las viviendas carecía de servicios de agua o electricidad, cerca de dos tercios de niños del primer grado de la escuela primaria padecía de malnutrición crónica y los caminos y el transporte motorizado prácticamente no existían en la región (UNICEF, 1998). En términos estadísticos, el 79% de la población no está en condiciones de satisfacer las necesidades básicas, y más de la mitad de la población vive, según Gonzales de Olarte y Trivelli, “en una situación de miseria” (1999: 97).

La extrema pobreza rural de los medios de subsistencia de los cajamarquinos está inseparablemente vinculada a una sucesión

de transformaciones históricas en la región. Cajamarca fue uno de los puntos focales centrales de la conquista española cuando Francisco Pizarro capturó y asesinó al gobernante Inca, Atahualpa, en Cajamarca. Posteriormente, la geografía física y humana de la región estuvo dominada por haciendas, fábricas textiles y operaciones mineras argentíferas. Como resultado, la población humana pronto fue concentrada en grandes reducciones, las que permanecieron por siglos. Deere (1990) calcula que a comienzos del siglo XX, el departamento de Cajamarca tenía una de las más altas concentraciones de poblaciones habitando en haciendas en el país.

A inicios del siglo XX, Cajamarca atravesó otra importante transformación a medida que la economía de la región se reorientó a la crianza de ganado y la producción lechera. Las grandes haciendas que intensificaron la producción ganadera y lechera expulsaron a los campesinos y los forzaron a ocupar tierras más marginales o a emigrar a la costa en búsqueda de trabajo. Estos cambios condujeron a un drástico despoblamiento de las tierras productivas en la región, y en los años 1960, cuando el gobierno militar del Perú implementó una reforma agraria radical, Cajamarca tenía la menor concentración de población que vivía en haciendas en el país. Anticipando medidas radicales de reforma agraria y la pérdida de sus tierras, los grandes terratenientes redistribuyeron preventivamente sus tierras más productivas en los valles fértiles, negándoles de esta forma a los campesinos locales el derecho a reclamar estas tierras. Hacia mediados de 1981, y al término del proceso de reforma agraria, solo el 10% de las unidades domésticas rurales en Cajamarca habían recibido nuevos terrenos (Deere, 1990).

Hacia mediados de los años 1980 y hasta el presente, las estrategias de subsistencia rurales en la región que rodea a la mina se han basado en el acceso y el uso de un conjunto complejo y diverso de recursos, el cual cambia frecuentemente a lo largo del tiempo y varía entre unidades domésticas. No obstante, el recurso más importante, que forma parte de la mayoría de actividades de subsistencia de la unidad doméstica, ya sea directa o indirectamente, es el capital natural. Prácticamente todas las actividades de las unidades

domésticas que tienen lugar en las comunidades del estudio de caso están relacionadas con el acceso a los recursos del capital natural, tales como la tierra y los recursos hídricos.

Las estrategias de subsistencia basadas en el capital natural que producen las unidades domésticas se basan fundamentalmente en la producción agrícola, la agroforestería y la crianza pecuaria. En términos generales, las unidades domésticas rurales utilizan varias pequeñas parcelas ubicadas a lo largo de zonas de ecológicas producción, con escaso acceso al riego mejorado o al aterrazamiento. A través del acceso a estos recursos de la tierra, las unidades domésticas producen una diversidad de productos agrícolas, principalmente tubérculos, maíz, granos y pastos cultivados tales como la alfalfa. Adicionalmente, las unidades domésticas también crían una diversidad de animales tales como ganado vacuno, ovino y porcino, los cuales rotan estacionalmente entre las parcelas y entre zonas ecológicas verticales. Los productos agroforestales también están distribuidos entre las distintas parcelas, los mismos que abastecen de leña (la mayor fuente de energía para las comunidades que están distribuidas alrededor de MUSA) y materiales de construcción. Las unidades domésticas también dependen de actividades basadas en el capital natural para producir productos lácteos, tales como queso y leche, y participan de la producción artesanal de cerámica y textiles.

Las unidades domésticas también acceden a un complejo conjunto de recursos de capital producido, humano y social. Con el fin de acceder a recursos de capital producidos, las familias venden una parte de su producción agrícola y pecuaria en las ferias o a las empresas lecheras. Sin embargo, las unidades domésticas están tan solo marginalmente integradas a los mercados locales y regionales, y cuentan con un acceso limitado a los recursos de capital producido. En consecuencia, las unidades domésticas dependen de la migración estacional y semipermanente ya sea a la costa, Lima u otras regiones del país para acceder a capital financiero bajo la forma de salarios. Las unidades domésticas también dependen del capital humano tal como educación y capacitación para la

producción agropecuaria, así como para el cuidado de la salud familiar. Por último, las familias utilizan los recursos del capital social a través del acceso a redes intra e inter familiares para actividades tales como la siembra, la cosecha, el pastoreo y cuidado de sus rebaños.

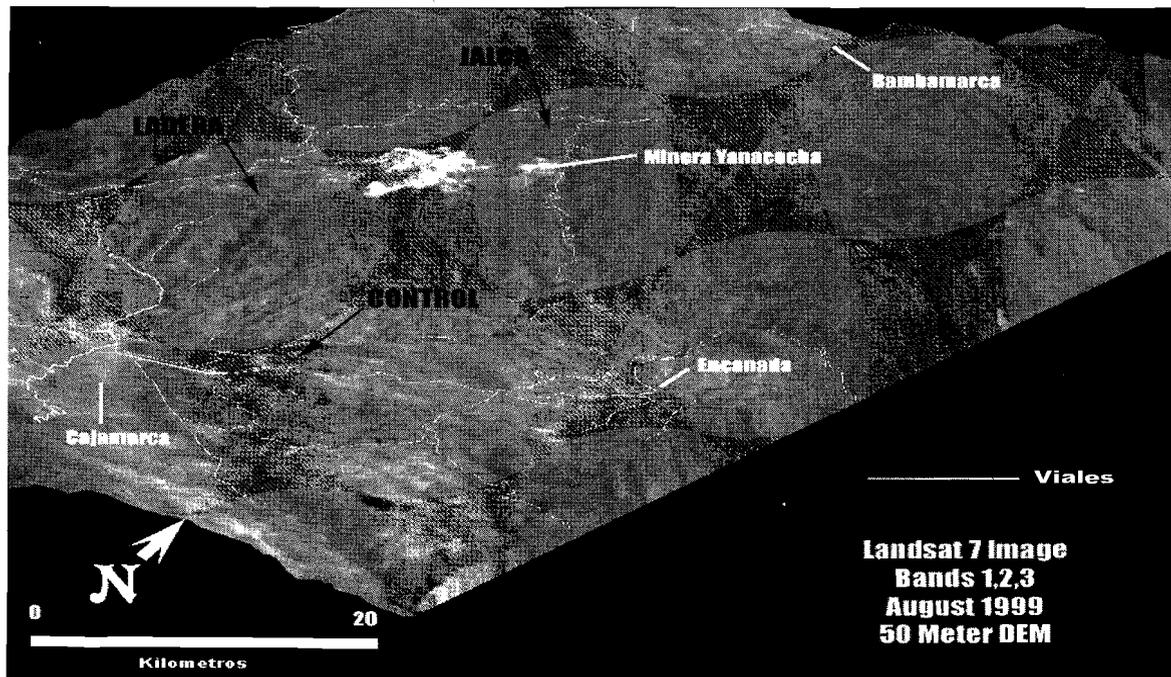
## **Una década de transformaciones de los medios de subsistencia**

Hacia comienzos de los años 1990, bajo el acuerdo de coinversión entre Newmont y la Compañía Buenaventura S.A., la Minera Yanacocha (M<sub>YSA</sub>) pasó a ser la más grande propietaria de tierras e inversionista de la región. Las operaciones de la mina ubicadas por encima de la ciudad han generado impactos sustanciales en los alrededores inmediatos (véase gráfico 6.1).

Las operaciones e impactos de la mina son percibidos tanto en la ciudad de Cajamarca como en la zona entorno al distrito. Además, debido a que M<sub>YSA</sub> ha pasado a ser rápidamente la más grande operación de extracción por lixiviación con cianuro en el mundo y la mina aurífera más grande de Latinoamérica, ha captado una cantidad importante de atención nacional e internacional. En consecuencia, los impactos de la mina han sido fuertemente debatidos y discutidos en una diversidad de foros regionales, nacionales e internacionales.<sup>2</sup> Sin embargo, no se ha realizado en la región ningún estudio comprehensivo que emplee los marcos de los medios de subsistencia y muy pocos estudios han incorporado consideraciones metodológicas transparentes y rigurosas.

- 
2. Por ejemplo, GRADE (2000), Kuramoto (1999) e Indacochea et al. (1998), todos han realizado evaluaciones de los impactos de M<sub>YSA</sub> en la región, particularmente los impactos económicos en la ciudad de Cajamarca y en la región en general. Además, Martínez et al. (2000) ha desarrollado un estudio exhaustivo de las actividades rurales de M<sub>YSA</sub> rural. Sobre estudios críticos de las actividades de M<sub>YSA</sub>, véase también Burke y Gibbins (1999). Adicionalmente, se han escrito una serie de estudios académicos sobre M<sub>YSA</sub>. Por ejemplo, véase Martin (1999) y Wendell (2000). Para una revisión más amplia de estos trabajos, véase Bury (2002).

**Gráfico 6.1**  
**UBICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASO**



Nota: Perspectiva elevada del modelo topográfico de la región de Cajamarca con imagen Landsat visible sobrepuesta mostrando la escala del proyecto de la Minera Yanacocha con la ubicación de las comunidades del estudio de caso (señaladas en negro).

En pocas palabras, y tal como se señaló en el capítulo 2, los impactos de MYSa en la región han transformado radicalmente el contexto económico, humano, natural y social. En términos de los impactos económicos, para el año 2000 MYSa había invertido más de \$ 2,000 millones en instalaciones mineras, empleado a más de 7,000 trabajadores provenientes de todo el Perú, y adquirido miles de hectáreas de terrenos de cientos de propietarios (Martínez et al. 2000; MYSa 2002). Adicionalmente, MYSa ha alterado de manera importante la infraestructura de la región mediante la construcción o mejoramiento de caminos, instalaciones eléctricas y edificaciones. Más aún, las operaciones de la mina están transformando drásticamente los recursos del agua y de la tierra de la región a través de minas a tajo abierto, cúmulos aterrazados en las pozas de lixiviación revestidas, desviaciones de cursos de agua y modificaciones en la cobertura de la tierra. A partir de los impactos de las actividades de extracción aurífera de MYSa, la mina ha implementado también una serie de programas sociales tanto en la ciudad de Cajamarca como en las comunidades que rodean a la mina. Los programas sociales de MYSa empezaron en 1993 cuando la mina inició sus operaciones. Desde entonces, MYSa ha implementado diferentes programas para impulsar el desarrollo económico en la región, los cuales han tenido diferentes metas, métodos de implementación e impactos.<sup>3</sup> En general, estos programas han incluido apoyo alimentario y de salud, la construcción de postas médicas y escuelas, la construcción de caminos, la asistencia técnica, programas de reforestación, desarrollo agrícola, crédito rural y la construcción de sistemas de agua potable (Indacochea et al., 1998).

### **Consideraciones metodológicas**

Desde que MYSa inició sus operaciones en la región de Cajamarca, ha afectado significativamente el acceso y utilización que las uni-

---

3. Para revisiones de los programas sociales de MYSa, véase Caravedo (1998), Chang (1997), GRADE (2000) y Martínez et al. (2000).

dades domésticas hacen de los recursos así como las actividades de migración de estas unidades. Para evaluar los vínculos existentes entre las actividades mineras de Newmont y el cambiante comportamiento migratorio y de acceso a los recursos de las unidades domésticas en la región, se realizó un estudio de caso en la región durante 25 meses y en tres períodos de trabajo de campo entre 1999 y el 2005, así como entrevistas en la sede de Newmont en Denver, Colorado. Eso incluyó la revisión de archivos, entrevistas a informantes claves y la aplicación de dos cuestionarios separados a las poblaciones del estudio de caso. La revisión de archivos fue conducida empleando fuentes estatales y regionales así como la documentación de la Newmont Mining Corporation tanto en los Estados Unidos como en el Perú. Adicionalmente, se realizaron amplias entrevistas claves a los líderes locales de la sociedad civil, a representantes de organizaciones no gubernamentales y a representantes de la Newmont Mining Corporation y a sus socios peruanos.

El primer cuestionario a las unidades domésticas fue aplicado empleando un diseño de investigación basado en una evaluación de estudio de caso, dirigida y cuasi experimental, de los impactos de las actividades de MYSA en las unidades domésticas de tres comunidades. Estas comunidades fueron elegidas con el propósito de estudiar la naturaleza geográficamente diversa de los medios de subsistencia en la región y los impactos de MYSA sobre el acceso a los recursos de las unidades domésticas. También se prestó atención a las diversas zonas de producción ecológicas en la región y las comunidades fueron elegidas de las dos zonas más predominantes. La primera comunidad seleccionada (a la que denomino Ladera) presenta los mayores impactos transversales ocasionados por la mina y sus programas sociales. La segunda comunidad seleccionada (Jalca), se aproxima a un rango intermedio de impactos. La tercera comunidad (Control) fue elegida para contar con un control experimental, donde ha ocurrido, por acción de MYSA, muy pocos impactos indirectos y ninguno directo. Esta última comunidad se seleccionó para encarar la escasez de investigaciones

**Cuadro 6.1**  
**MUESTRAS DEMOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS**  
**DEL ESTUDIO DE CASO**

	LADERA	JALCA	CONTROL
Muestra total de unidades domésticas	19	20	20
Población total de la muestra	100	142	107
% de la comunidad	18%	25%	25%
Edad promedio de entrevistados	42	44	43
% de género de la muestra:			
Varones	47%	53%	50%
Mujeres	50%	50%	50%

*Fuente:* Elaboración propia.

de línea de base de las unidades domésticas en la región previas a 1993. De esta manera, Control fue seleccionada para aproximarnos a las condiciones de línea de base previas a la presencia de MYSa en la región. Dentro de cada una de las tres comunidades que forman parte del estudio de caso, se entrevistó a una muestra al azar de 20 unidades domésticas empleando procedimientos de mapeo participativo. En total se entrevistó a 59 unidades domésticas durante el trabajo de campo. El cuadro 6.1 resume la demografía de la muestra de unidades domésticas para cada comunidad incluida en el estudio.

El segundo cuestionario fue aplicado a ex propietarios de tierras en el área de las operaciones de MYSa. En total fueron consideradas 20 unidades domésticas en la región de Cajamarca empleando una metodología de cascada. El método de cascada fue utilizado debido a que muchos propietarios de tierras han emigrado a otras localidades de la región y son muy difíciles de localizar. Los encuestados individuales identificaron la localización de otros ex propietarios de terrenos, pero, en un intento de evitar los sesgos potenciales relacionados con las relaciones familiares, sociales y

subcomunales, se generó una sección transversal lo más grande posible de ex propietarios de tierras con respecto a su localización. Sobre la base de esta metodología de muestreo, fueron entrevistadas las unidades domésticas de 12 comunidades, lo que representa cerca de un tercio de las comunidades que han sido afectadas por las actividades de compra de tierras de MYSA entre 1992 y el 2000.

Ambos cuestionarios emplearon tanto componentes cualitativos como cuantitativos con el fin de evaluar los cambios en el comportamiento migratorio, el acceso a recursos y las estrategias de subsistencia de la unidad doméstica. El primer cuestionario estaba compuesto de 123 preguntas que evaluaban las características de la unidad doméstica y sus actividades de subsistencia, así como los cambios en el acceso a recursos producidos, humanos, naturales y sociales. Además, se analizaron las actividades de migración de las unidades domésticas entre 1992 y el 2000. El segundo cuestionario estaba compuesto por 45 preguntas y se orientaba particularmente a los cambios en el comportamiento migratorio y en el acceso de las unidades domésticas a los recursos naturales, ingresos, educación y actividades de subsistencia relacionadas con las transferencias de tierras iniciadas por MYSA entre 1992 y el 2000.

Las siguientes secciones presentan un análisis de los resultados del estudio de caso para todo el trabajo de campo. Las primeras secciones examinan las maneras en las que la mina ha afectado el acceso a recursos de las unidades domésticas. Por lo general, MYSA ha tenido efectos positivos en el acceso a los recursos de capital producido y humano, pero efectos negativos con relación al acceso a los capitales natural y social. Estas secciones ilustran las formas en las que los medios de subsistencia de las unidades domésticas están siendo transformados como respuesta a estos cambios. Las siguientes secciones examinan las maneras en las que MYSA ha afectado el comportamiento migratorio de las unidades domésticas a escala de análisis local, regional, nacional e internacional. Al hacerlo, estas secciones ilustran la naturaleza y extensión espacial de las transformaciones de los medios de subsistencia que han tenido lugar en la región.

## ***Transformaciones de capitales***

### *Los impactos en el capital producido y en el capital humano*

Los cambios más significativos que se han producido en el acceso a, y la utilización de, los recursos por parte de las unidades domésticas y las comunidades del estudio de caso son aquellos relacionados con el capital producido. Esto se debe en gran medida al hecho de que MYSA ha priorizado las mejoras en la infraestructura rural, pero también se debe a la naturaleza de las actividades extractivas de recursos naturales de MYSA. En términos de infraestructura, MYSA ha mejorado o construido caminos, edificado bancos comunales de semilla de papa y postas de salud, mejorado o instalado sistemas de agua potable y sistemas de riego mejorado y construido letrinas en las comunidades. En términos de recursos financieros, MYSA ha tenido efectos en la generación de ingresos de la unidad doméstica a través de la provisión de infraestructura, la compra de tierras y los programas de empleo y crédito rural. Esto ha afectado a los activos tangibles producidos de las unidades domésticas, especialmente a los recursos agropecuarios que poseen estas unidades. En general, los cambios en el capital producido que han tenido lugar en las comunidades del estudio de caso son diversos y generalmente están incrementando de manera positiva las capacidades y las oportunidades de subsistencia de las unidades domésticas. Sin embargo, estos cambios se están dando de manera desigual tanto entre comunidades como entre unidades domésticas.

Uno de los rasgos más saltantes de los cambios en el capital producido en las comunidades del estudio de caso está relacionado con la construcción de caminos y otra infraestructura física. Entre 1994 y 1999, MYSA mejoró más de 133 km. de caminos en la región (Martínez *et al.*, 2000). Dado que los caminos que MYSA ha mejorado con frecuencia atraviesan o pasan cerca de pequeñas comunidades que se hallan alrededor de la mina, ha impactado también en el acceso de estas a la cambiante infraestructura física de la región, aumentando el acceso de las unidades domésticas a los

mercados locales y regionales para productos agropecuarios y lácteos. Los encuestados en Jalca, la comunidad del estudio de caso más impactada por las mejoras en infraestructura realizadas por MYSA, informaron acerca de aumentos significativos en el acceso a los mercados debido a la construcción de los nuevos caminos, mientras que en Ladera y Control, donde no se han implementado mejoras en los caminos, los encuestados informaron incrementos mucho menores. El cuadro 6.2 ilustra estos cambios en las comunidades del estudio de caso.<sup>4</sup>

Otro importante cambio en el acceso a los recursos del capital producido que ha estado teniendo lugar es aquel relacionado con el capital financiero. En general, las unidades domésticas informaron de algunos incrementos en sus activos financieros en las comunidades del estudio de caso afectadas por la mina. Estos incrementos están relacionados con el hecho de que las unidades domésticas han vendido tierras a la mina, han vendido más productos pecuarios y agrícolas y han accedido y convertido el crédito en activos productivos de subsistencia. Sin embargo, esos impactos han sido desiguales y aislados a través de las unidades domésticas y las comunidades. A pesar de estas limitaciones, una evaluación general del ingreso total de la unidad doméstica sugiere que ha aumentado en Ladera y Jalca desde que la mina empezó sus actividades. Por ejemplo, el 15% de los encuestados en Ladera y el 5% de los encuestados en Jalca señalaron que ahora ellos están ganando más que antes de que la mina empezara sus operaciones. La información contextual recabada en las entrevistas cualitativas sugiere que los entrevistados que señalaron mayores ingresos atribuyen también estos aumentos a las actividades de MYSA.

MYSA ha afectado también el acceso de las unidades domésticas a, y la utilización de, los recursos de capital humano en las comuni-

---

4. Jalca es la única comunidad donde se han finalizado los trabajos de construcciones de caminos y han sido mantenidos por MYSA. Por lo tanto, mientras que Ladera ha experimentado la más grande sección transversal de impactos en los recursos de capital, Jalca ha experimentado los impactos más significativos en el capital producido en relación con la construcción de caminos.

**Cuadro 6.2****CRECIENTE ACCESO DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS A LOS MERCADOS**

ACTIVIDADES DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA	JALCA	CONTROL	LADERA
% de unidades domésticas que señalan un mayor acceso para productos agrícolas	65	35	21
% de unidades domésticas que señalan un mayor acceso para productos pecuarios	70	25	16
% de unidades domésticas que señalan un mayor acceso para productos lácteos	45	15	11

*Fuente:* Elaboración propia.

dades del estudio de caso. Esto se debe principalmente a los programas sociales de MYSA en la medida que han estado dirigidos al mejoramiento del acceso de las unidades domésticas a los recursos de educación y salud. En general, los tipos de recursos que han sido afectados son la educación formal y la de capacitación técnica de adultos, los servicios de salud, atención preventiva de la salud y los servicios de agua y desagüe.

Uno de los principales elementos de capital humano sobre el que los programas sociales de MYSA han impactado en las comunidades del estudio de caso es el acceso a la educación y a la capacitación. Este incluye incrementos en la disponibilidad y duración de la educación formal para los niños, así como la provisión de programas de capacitación y educación para adultos. En Ladera y Jalca, los programas sociales de MYSA han impactado significativamente tanto en la calidad de la educación formal como en su disponibilidad. Entre 1994 y 1998 MYSA construyó o mejoró escuelas en Ladera y Jalca, donó mobiliario escolar y útiles para los niños, contribuyó a los costos de transporte de los maestros, mejoró las cocinas escolares y brindó energía eléctrica a las escuelas con paneles de energía solar. En términos comparativos, Ladera y Jalca muestran mayores tasas de acceso a los recursos de capital humano que la comunidad control. El cuadro 6.3 ilustra estos cambios en términos de tasas de asistencia

**Cuadro 6.3****CAMBIOS EDUCACIONALES EN LAS COMUNIDADES DEL ESTUDIO DE CASO**

	LADERA	JALCA	CONTROL
% de unidades domésticas con niños asistiendo a la escuela	79	85	65
% de niños que cuentan con útiles escolares	63	70	50
% de niños que comen en la escuela	68	15	35
% de unidades domésticas que señalan que tienen un mayor acceso a maestros	68	40	20

*Fuente:* Elaboración propia.

escolar, útiles escolares, desayuno escolar y acceso a maestros en las comunidades del estudio de caso.<sup>5</sup>

Otro aspecto de los recursos de capital humano que los programas sociales de MYSA han afectado en las comunidades del estudio de caso es el de la salud. En combinación con otras mejoras de capital, tales como infraestructura y educación, las unidades domésticas han estado en condiciones de acceder a una diversidad de prácticas preventivas de salud y a nuevos servicios de salud. En términos comparativos, las incidencias diferenciales de enfermedades entre las comunidades del estudio de caso demuestran de hecho algunas diferencias que podrían estar relacionadas con las actividades de MYSA. El cuadro 6.4 ilustra el número promedio de enfermedades por unidad doméstica a lo largo del período 2000-2001.

En general, Ladera tiene la incidencia más baja de enfermedades, que es donde MYSA ha implementado la más grande sección

5. Los indicadores utilizados en el cuadro 3 para medir el acceso a educación fueron considerados medidas representativas útiles para ilustrar el creciente acceso de las unidades domésticas a oportunidades educativas así como a mejoras en la calidad de la educación que estaban recibiendo los niños. Estas medidas son consideradas como de menor validez de las capacidades de capital humano. En realidad, la medición de incrementos en el conocimiento o la comprensión dentro de las unidades domésticas no estaba dentro del alcance de este proyecto.

**Cuadro 6.4****EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES EN LAS COMUNIDADES DEL ESTUDIO DE CASO**

ENFERMEDAD	LADERA (OCURRENCIA PROMEDIO POR UNIDAD DOMÉSTICA EL AÑO PREVIO)	JALCA (OCURRENCIA PROMEDIO POR UNIDAD DOMÉSTICA EL AÑO PREVIO)	CONTROL (OCURRENCIA PROMEDIO POR UNIDAD DOMÉSTICA EL AÑO PREVIO)
Respiratoria	2.4	4.65	3.65
Digestiva	0.7	1.6	0.45
Dermatológica	0.2	1.75	0.3

*Fuente:* Elaboración propia.

transversal de programas y mejoras relativas a la salud. Sin embargo, tal como muestra el cuadro 6.4, no existe una tendencia comparativa consistente entre los datos de las tres comunidades del estudio de caso. De este modo, una conclusión tentativa sería que Ladera ha experimentado por lo menos algunos impactos positivos en el acceso a recursos de salud.

### ***Los impactos en el capital natural y el capital social***

El capital natural constituye uno de los principales recursos para los medios de subsistencia en las comunidades del estudio de caso. MYSA ha impactado en el acceso de las unidades domésticas a, y en la utilización de, los recursos hídricos y la tierra ya sea a través de las operaciones de la mina o mediante los efectos de sus propios programas sociales. En general, MYSA ha afectado negativamente el acceso de las unidades domésticas a los recursos del capital natural.

Las operaciones mineras de gran escala de MYSA han tenido impactos sustanciales en los recursos hídricos a los que las unidades domésticas acceden en la región. En las comunidades del estudio de caso, MYSA ha impactado su acceso a recursos hídricos en tres campos: agua potable, recursos de vertiente y abastecimiento de agua para riego.

De las tres comunidades del estudio de caso, el acceso de Ladera al agua potable ha sido el más impactado por MYSA puesto que esta comunidad se encuentra por debajo de las operaciones de la mina. Los entrevistados señalaron que ahora el agua está turbia, con mal olor, tiene un sabor horrible y ellos creen que el agua es la responsable de los problemas de salud humana y pecuaria, así como del amarillamiento y la atrofia de las cosechas. Sin embargo, si bien las unidades domésticas están muy preocupadas por la cambiante calidad del agua que ellas utilizan, no están en condiciones de demostrar científicamente que el agua está contaminada. Ellos comprenden que el agua ahora porta una gran cantidad de sedimento y que ha cambiado tanto de sabor como de olor, lo que a ellos también les sugiere que el agua está contaminada. Por lo tanto, existe una difundida *percepción* entre las unidades domésticas acerca de que MYSA, debido a que está contaminando el agua, es también la responsable del incremento de los *riesgos* de los problemas de salud de las unidades domésticas, de las enfermedades y muertes de los animales y de los fracasos agrícolas.<sup>6</sup> Sin embargo, esto se halla en abierto contraste con las frecuentes afirmaciones de los entrevistados de MYSA acerca de que la mina no está contaminando los recursos hídricos en la región y que sus descargas de aguas satisfacen las regulaciones que norman la calidad del agua.

MYSA comenzó a monitorear los recursos de agua en la región antes de que comenzaran las operaciones mineras, empezando en 1991 y continuando hasta 1993 (MYSA-EIA 1994). A partir de este dato de archivos, se elaboró una línea de base sobre la calidad del agua. Las muestras de agua fueron recolectadas para 26 diferentes

---

6. Es importante notar que mientras que las unidades domésticas en Ladera generalmente mencionaron menos incidencias de enfermedad a lo largo del 2000-2001, los encuestados también atribuyeron como causa de muchos de estos problemas a los impactos del MYSA sobre el recurso agua que rodea a la comunidad. Esto también ocurrió en el caso de las enfermedades y muertes del ganado.

elementos a través de más de 100 puntos de monitoreo del agua que habían sido establecidos a través de toda la región con el fin de evaluar cómo y dónde estaba cambiando la química del agua debido a las actividades mineras de MYSA. La información sobre el agua presentada en esta sección incluye los resultados de evaluaciones del agua del período de línea de base (1991-1993) hasta 1999. Sin embargo, los datos del agua no son cronológicamente uniformes debido a que el Ministerio de Energía y Minas del Perú y MYSA no permitieron que el personal del proyecto de investigación tuviera un acceso completo a los datos relevantes de monitoreo del agua.

Antes de que MYSA empezara sus operaciones mineras señaló en los informes de evaluación de impacto ambiental que cumpliría con los estándares de calidad del agua establecidos por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA) que regulan sus operaciones en Nevada, porque pretendía ser una líder en lo que se refiere a calidad medioambiental en el Perú (MYSA-EIA, 1994). Estos estándares son significativamente mayores que los estándares peruanos a los que la mina está legalmente obligada a respetar.

En el Perú, las dos instancias administrativas que legalmente hacen cumplir los estándares de calidad del agua son el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Salud. Los estándares de calidad del agua del Ministerio de Energía y Minas son los que MYSA está legalmente obligada a respetar. Estos estándares establecen concentraciones máximas para un conjunto limitado de elementos y exigen que las operaciones mineras presenten trimestralmente resultados de pruebas de agua para demostrar que estas son conformes. El Ministerio de Salud cuenta con dos conjuntos adicionales de estándares de agua que regulan la calidad del agua para consumo humano (Clase II) y para producción agrícola (Clase III). El cuadro 6.5 detalla las normas de calidad del agua para cada una de las diversas agencias antes mencionadas, así como los estándares de calidad del agua establecidos por el Banco Mundial.

**Cuadro 6.5**  
**PARÁMETROS DE ESTÁNDARES DE AGUA**

PARÁMETRO	MysA (MG/L) <sup>a</sup>	CLASE II (MG/L) <sup>b</sup>	CLASE III (MG/L) <sup>c</sup>	MEM (MG/L) <sup>d</sup>	BANCO MUNDIAL (MG/L) <sup>e</sup>
Aluminio	.05-.2	.10	.20	...	...
Arsénico	.05	.10	...	1	1
Bario	2	...	...	...	...
Cadmio	.005	.01	.05	...	.1
Calcio	...	...	...	...	...
Cromo	.05	.05	1	...	...
Cobalto	...	1	...	...	...
Cobre	1.3	1	...	1	.3
Cianuro	.2	.2	1	1	.5
Fluoruros	2-4	1.5	2	...	...
Hierro	.3-.6	.3	1	2	2
Plomo	.05-.1	.05	.1	.4	.6
Magnesio	125-150	...	150	...	...
Manganeso	.05-.1	.1	.5	...	...
Mercurio	.002	.002	.01	...	.002
Nitratos	10	...	100	...	...
PH	6.5-8.5	5.0-9.0	5.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0
Potasio	...	...	...	...	...
Selenio	.05	.01	.05	...	...
Sodio	...	...	...	...	...
Sulfatos	250	...	400	...	...
Zinc	5	5	25	3	1
Sólidos disueltos	500-1000	...	...	...	...
Sólidos en suspensión	25	...	...	50	...

<sup>a</sup> Los estándares de MysA según los estándares del Perfil I Nevada, fuente: MysA-EIA 1999.

<sup>b</sup> Estándares del agua para consumo humano según el Ministerio de Salud del Perú.

<sup>c</sup> Los estándares del agua para riego y consumo animal.

<sup>d</sup> Los estándares del Ministerio de Energía y Minas.

<sup>e</sup> Estándares de calidad del agua del Banco Mundial.

Fuentes: MysA-EIA 1999; MysA-EIA 1995.

Hasta mediados de los años de 1990, MYSA sostenía que estaba manteniendo los estándares ambientales USEPA, por lo que fue reconocida por el Ministerio de Energía y Minas como líder de la calidad ambiental del sector minero (Ministerio de Energía y Minas 1998). Sin embargo, en respuesta a los cargos de fines de los años 1990 acerca de que MYSA estaba contaminando las vertientes de agua de la región, los funcionarios de la mina desde entonces han apelado a los estándares de Clase III (MYSA-SUNASS, 1999). En general, sobre la base de las posiciones cambiantes de MYSA respecto a los estándares de calidad del agua que gobiernan sus operaciones, no queda claro cuáles son los estándares que deben ser reconocidos. En términos legales, a MYSA solo se le exige cumplir con los estándares del Ministerio de Energía y Minas. No obstante, las declaraciones de relaciones públicas de MYSA han sostenido que están satisfaciendo estándares más exigentes.

Resolver qué estándares son los que MYSA está obligada a mantener y qué estándares debería mantener es un tema difícil y contencioso que esta investigación no pretende resolver. En consecuencia, los resultados sobre calidad del agua presentados en el cuadro 6.6 comparan los datos de la química del agua para elementos seleccionados de los cuatro estándares relevantes para la vertiente cercana a Ladera a la que las unidades domésticas acceden de manera regular para el consumo humano y animal (los lineamientos del Banco Mundial están excluidos de los datos existentes). En los datos sobre el agua, no se informó de aumentos significativos en las concentraciones de metales pesados o contaminantes tales como arsénico, cianuro, plomo, mercurio y selenio. Por lo tanto, estos datos han sido excluidos de los datos presentados en el cuadro 6.6.

El cuadro 6.6 ilustra que entre 1991 y 1999 MYSA violó muchas veces sus propios estándares establecidos, y aquellos de otras agencias reguladoras, en la vertiente cercana a Ladera. Por ejemplo, el promedio de sólidos disueltos y en suspensión, así como las concentraciones de cobre, hierro, zinc, manganeso y sulfato excedieron muchas veces los estándares establecidos por la propia MYSA y, en

### Cuadro 6.6

#### RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA MEDICIONES SELECCIONADAS EN LADERA

PARÁMETROS DE CONCENTRACIONES (n=45)	PROMEDIO DE LÍNEA DE BASE 1991-1993 (mg/l) (n=5)	DESCARGA PROMEDIO 1993-1999 (mg/l)	VALOR MÁXIMO (mg/l)	% DE N POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES DE MYSA	% DE N POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES CLASE II	% DE N POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES CLASE III	% DE N POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES DEL MEM
Sólidos disueltos	44.05	1162	5220	31	n/a	n/a	n/a
Sólidos en suspensión	n/a	294	2192	98	n/a	n/a	93
Cobre	.032	.49	6.29	22	22	n/a	22
Hierro	1.24	23.76	93	76	76	76	76
Zinc	.038	1.72	5.99	9	9	0	11
Manganeso	.04	5.10	17.56	80	80	76	n/a
Potasio	.85	2.48	9	n/a	n/a	n/a	n/a
Calcio	2.29	97	249	n/a	n/a	n/a	n/a
Sulfatos	20.94	741	2410	44	...	44	...
Sodio	1.81	154	1560	n/a	n/a	n/a	n/a

Fuente: MYSA-EIA 1999, 1995, 1994; MEM-AMB 1999, 1998a, 1998b.

varios casos, en concentraciones extremadamente altas. En informes trimestrales entregados al Ministerio de Energía y Minas, MYSa reconoció que las concentraciones de sólidos en suspensión, cobre, hierro, manganeso y zinc en la vertiente fueron demasiado altos, pero esto no ha sido reconocido públicamente, ni MYSa ha sido citado por las autoridades peruanas por ninguna infracción referida a la calidad de las aguas (e.g., MEM-AMB 1998a, 1998b, 1999). Los incrementos observados en las concentraciones de sodio, potasio y calcio no están regulados por estándares peruanos o de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos; sin embargo, sin duda han alterado igualmente los recursos de la calidad del agua en la vertiente.

En general, la información sobre el agua ilustra que la calidad del agua en la vertiente cercana a Ladera, a la que acceden las unidades familiares para la producción de sus medios de subsistencia, efectivamente ha bajado. Por lo tanto, es bastante posible que sean ciertos los reclamos de los entrevistados acerca de que el agua ha causado problemas en la salud y en los animales. El tema más frecuente y que merece ser resaltado es que la calidad del recurso agua en la vertiente ha disminuido, en ciertos casos de manera muy alarmante desde que MYSa inició sus operaciones. Por lo tanto, para las unidades familiares de Ladera, ha existido una disminución sustancial en su capacidad de acceso a fuentes de agua limpia y segura para sus animales, sus cultivos y para consumo humano.

El último conjunto de cambios en el acceso a los recursos de capital natural que han ocurrido en la región desde que MYSa inició sus operaciones está relacionado a los recursos de la tierra a los que las unidades domésticas acceden y utilizan en sus estrategias de medios de subsistencia. Dos cambios importantes han tenido lugar desde que MYSa empezó sus operaciones en la región. Primero, debido a que MYSa ha comprado una gran cantidad de terrenos en la región, los precios de la tierra han subido drásticamente. En consecuencia, en Ladera y Jalca, el valor de la tierra también ha aumentado. Esto es importante porque a medida que subían los precios de la tierra también lo hacían las oportunidades

de las unidades domésticas de convertir sus propiedades en otras formas de capital productivo para las actividades dedicadas a los medios de subsistencia. Por ejemplo, unos pocos entrevistados en Ladera vendieron tierras a otras unidades domésticas o a especuladores de tierras con el fin de invertir en oportunidades de negocio en Cajamarca; sin embargo, muy pocas unidades domésticas se han involucrado en este tipo de actividad.

Por otro lado, los incrementos drásticos en los precios de la tierra también han tenido consecuencias negativas para las unidades domésticas que cuentan con pocas parcelas, lo que incluye a la mayoría de unidades domésticas de las comunidades del estudio de caso. Por ejemplo, las unidades domésticas en Ladera que no tenían suficientes terrenos antes de que la mina iniciara sus operaciones no han podido adquirir tierras adicionales. Varios entrevistados en Ladera señalaron que ellos no podían alimentar a sus familias porque no tenían suficientes terrenos y no podían comprar más porque eran muy caros. Además, los impactos negativos del alza en los precios de los terrenos han sido más graves para las unidades domésticas que vendieron sus tierras a la mina a precios bajos. No han podido reemplazar sus tierras y, en varios casos en Ladera, fueron forzados a trasladarse a otras comunidades o a la ciudad de Cajamarca porque no tenían suficientes tierras para sus cultivos o sus ganados.

El segundo cambio en el acceso a los recursos de la tierra que está en curso se relaciona con la calidad de los terrenos. En general, la presión sobre los terrenos de las unidades domésticas ha aumentado desde que la mina empezó sus operaciones. Estos cambios están vinculados estrechamente con los aumentos en el capital producido dado que las unidades domésticas han aumentado sus cabezas de ganado, adoptado nuevos cultivos e intensificado la producción de cultivos en tierras agrícolas. Esto es particularmente importante en el caso de los ex propietarios de tierras que vendieron sus propiedades a la mina, dado que ellos con frecuencia no tienen suficiente tierra de pastoreo para su ganado. Ellas han tenido que intensificar el uso de sus tierras para satisfacer tanto las nece-

sidades de sus crianzas como de su producción agrícola. El efecto de esto ha acelerado la degradación de sus terrenos.

Un indicador de cómo las unidades domésticas han intensificado el uso de los recursos de la tierra se basa en la respuesta de los entrevistados a las preguntas relativas a las prácticas en las tierras de barbecho. En Ladera y Jalca, el 95% de los entrevistados indicaron que ellos rotaban sus cultivos y hacían descansar sus tierras con el fin de recuperar la fertilidad del suelo. Sin embargo, los entrevistados indicaron que desde que la mina empezó sus operaciones, el tiempo de barbecho se ha acortado considerablemente. La principal razón que señalan los entrevistados para esto es la necesidad de cultivar más pastos para sus rebaños, los cuales han aumentado en la medida que las unidades domésticas han destinado el nuevo crédito y el ingreso a la compra de cabezas de ganado.

La relación existente entre la intensificación del uso de tierras y la creación de capital producido, como el ganado por ejemplo, representa un proceso importante que se está dando en ambas comunidades del estudio de caso afectadas por las actividades de MYSA. En general, la relación es tal que a medida que va en aumento el capital producido (e.g. la tenencia de ganado) para las unidades domésticas, está decreciendo el capital natural en la forma de calidad de suelos. Esto debe ser tomado con reservas debido al hecho de que algunas unidades domésticas también han destinado algunos recursos de capital producido hacia las prácticas de manejo de suelos tales como el uso de fertilizantes, pero esta práctica es muy limitada a través de las comunidades de este estudio de caso.

La última categoría de transformaciones de recursos que ha ocurrido desde que MYSA inició sus operaciones en la región es aquella relacionada con el capital social. Las unidades domésticas en las comunidades del estudio de caso dependen del acceso a redes de relaciones y organizaciones fuera de la unidad doméstica para producir sus medios de subsistencia. Estos vínculos constituyen un arreglo importante y diverso de recursos que varían desde redes horizontales intracomunales entre unidades domés-

ticas a redes verticales de relaciones con organizaciones comunales y supracomunales. En general MYSA ha erosionado el acceso a los recursos del capital social interunidad doméstica en las comunidades del estudio de caso a través de su interacción con las unidades domésticas y las organizaciones comunales. Adicionalmente, las relaciones entre las unidades domésticas y los recursos de capital social supracomunal también han cambiado drásticamente. Esto incluye el nuevo acceso, y no siempre positivo, a organizaciones supracomunales y un giro en los vínculos de las unidades domésticas y las comunidades con redes de protesta social nacional y transnacional.

En el ámbito de las relaciones entre unidades domésticas, los impactos negativos más significativos que MYSA ha tenido en el acceso a los recursos de capital social provienen de la forma en la que han interactuado de manera desigual con las unidades domésticas en las comunidades del estudio de caso. En general, los impactos de los programas sociales de MYSA, las prácticas de contratación y las estrategias de adquisición de terrenos han sido muy desiguales y carentes de transparencia. Esto ha conducido a un aumento de la desconfianza, la diferenciación social y el conflicto entre unidades domésticas. A nivel comparativo, las medidas de las diferencias percibidas entre las unidades domésticas ayudan a ilustrar cómo ha decrecido el capital social interunidades domésticas. El cuadro 6.7 ilustra que en Ladera, donde los impactos de MYSA han sido los mayores, los niveles de las diferencias percibidas entre las unidades domésticas también son los mayores. Las entrevistas claves y las respuestas cualitativas de las unidades domésticas señalan que los niveles de diferenciación han aumentado desde que MYSA inició sus operaciones en la región. Por lo tanto, las redes de reciprocidad e intercambio entre unidades domésticas en Ladera han pasado a ser más asimétricas.

Uno de los hallazgos más notables con respecto al capital social es que a medida que MYSA ha impactado negativamente en el acceso de las unidades domésticas a los recursos naturales y sociales, tales impactos también han movilizado y fortalecido las relaciones po-

**Cuadro 6.7****PERCEPCIONES DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS ACERCA DE LAS DIFERENCIAS EN LAS COMUNIDADES DEL ESTUDIO DE CASO**

MEDIDA	LADERA (% DE QUIENES PERCIBEN UNA GRAN DIFERENCIA)	JALCA (% DE QUIENES PERCIBEN UNA GRAN DIFERENCIA)	CONTROL (% DE QUIENES PERCIBEN UNA GRAN DIFERENCIA)
Educación	73	70	45
Dinero	52	30	30
Desigualdad	85	75	55

*Fuente:* Elaboración propia.

líticas entre las unidades domésticas y las organizaciones supracomunales que se centran en la resistencia a estos cambios. Estos vínculos se han expandido hasta el nivel transnacional. Por lo tanto, en un sentido, MYSA ha generado la oposición a sus operaciones debido a la forma en la que ha elegido interactuar con las comunidades locales afectadas por sus actividades. Un ejemplo de los hallazgos del estudio de caso que mejor ilustra este argumento en un sentido comparativo tiene que ver con la manera en la que las unidades domésticas han sido movilizadas en las comunidades más impactadas por MYSA. El cuadro 6.8 ilustra que en Ladera, donde MYSA ha impactado más fuertemente sobre el acceso a recursos, más unidades domésticas han hablado con funcionarios del gobierno acerca de problemas, han participado en protestas y se han unido a campañas políticas. Las entrevistas cualitativas confirmaron que estas actividades están relacionadas a problemas con la mina.

En general, muchas de las redes verticales que las unidades domésticas han establecido con instituciones supracomunales han incrementado tan solo en forma mínima su acceso a nuevos recursos puesto que ellas han sido temporales o han estado controladas por MYSA. Sin embargo, otro conjunto de fuertes redes

**Cuadro 6.8****CAPITAL SOCIAL DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS Y LA RESISTENCIA A MYSA**

UNIDADES DOMÉSTICAS QUE:	LADERA (% DE UNIDADES DOMÉSTICAS)	JALCA (% DE UNIDADES DOMÉSTICAS)	CONTROL (% DE UNIDADES DOMÉSTICAS)
Han hablado con funcionarios del gobierno	21	0	0
Han participado de una protesta	21	10	0
Se han unido a una campaña política	20	5	5

*Fuente:* Elaboración propia.

verticales, que son en gran medida de naturaleza política, han sido establecidas con relación a los impactos negativos de MYSa sobre el acceso a los recursos de capital natural y social. Por lo tanto, a medida que las unidades domésticas han experimentado estos impactos negativos, ellas han movilizadado y creado el acceso a un nuevo conjunto de relaciones con actores supracomunales que están ostensiblemente preocupados por aliviar estos impactos y crear nuevas oportunidades para el mejoramiento de sus medios de subsistencia.

## **5. Los nuevos patrones de migración en el norte del Perú**

Durante los 50 años pasados la población del Perú ha atravesado un profundo reordenamiento espacial. Partiendo de una población predominantemente rural durante la primera mitad del siglo, hoy en día más del 70% de la población vive en centros urbanos (INEI, 2002), como consecuencia de una masiva salida de gente de las sierras andinas y áreas rurales de la costa. En particular, Lima y Callao han experimentado un inmenso flujo de inmigrantes. Más de un tercio de los 28 millones de habitantes del país vive en el

**Cuadro 6.9**  
**CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE CAJAMARCA**

	POBLACIÓN	TASA DE CRECIMIENTO (%)	DENSIDAD POP. (POR KM <sup>2</sup> )	MIGRACIÓN NETA (%)
1855	204,218		6	
1876	212,746	0.18	6	
1940	494,412	1.33	15	
1961	746,938	1.98	22	14
1972	919,161	1.90	27	23
1981	1,045,569	1.44	31	30
1993	1,259,808	1.70	37	32

Fuentes: INEI, 2002; Frías, 1995.

área metropolitana de Lima y Callao, de los cuales aproximadamente un 40% son inmigrantes recientes (ibíd.). Si bien Lima ha sido el destino urbano más grande para los migrantes a lo largo de todo el país, la migración a centros urbanos secundarios de la costa también ha sido significativa durante las pasadas décadas. Estos centros urbanos secundarios, que incluyen a las ciudades de Chiclayo, Trujillo y Piura en la parte norte del país, se han convertido en destinos importantes para los migrantes regionales provenientes de las áreas serranas.

Los cambios poblacionales en el departamento de Cajamarca son similares a las tendencias nacionales a gran escala de las décadas pasadas (véase cuadro 6.9). En 1993, 1.3 millones de personas vivían en el departamento de Cajamarca, 5.7% del total de la población del Perú (INEI y UNFPA, 1996). Entre 1940 y 1993, la población del departamento aumentó 2.3 veces y, como se señaló antes, es principalmente rural (Indacochea et al., 1998). La emigración también ha aumentado significativamente en el departamento y, entre 1961 y 1993, la emigración neta (el porcentaje total de la gente que sale con relación al total de la población) del departamento aumentó desde el 14% hasta el 32% (Frías, 1995).

*Los cambios en la movilidad y migración de las unidades domésticas en Cajamarca*

La migración es un elemento clave de las estrategias de subsistencia de las unidades domésticas en la región de Cajamarca. Históricamente, los miembros de la unidad doméstica han migrado a la costa, Lima y dentro de la propia región en pos de trabajo.<sup>7</sup> Una de las actividades de migración de corto plazo más importantes es la de los miembros varones de la unidad doméstica quienes viajan a la costa para trabajar en las plantaciones de arroz y caña de azúcar o en la industria de servicios. Generalmente, las familias grandes, o aquellas que cuentan con menos terrenos, envían a los miembros varones a la costa para trabajar como peones en las plantaciones al final de la estación de lluvias (enero-abril) o a las grandes ciudades para trabajar en puestos de servicios no calificados. Con frecuencia es la mejor época de migración puesto que ya se ha sembrado y tanto los cultivos como los rebaños pueden ser cuidados con una dedicación mínima. Los miembros del hogar varones que viajan a la costa con frecuencia trabajan varios meses y luego retornan con sus ingresos antes de la cosecha. En muchas unidades domésticas donde se da este tipo de migración, con frecuencia son el varón jefe de familia o el hijo varón mayor quienes viajan a las zonas costeras.

Además de las actividades de emigración de los varones, las mujeres de la unidad doméstica también viajan a las principales ciudades como Lima para trabajar en el sector servicios como amas de casa o como trabajadoras del hogar. Con frecuencia, cuando los hijos son enviados a Lima para vivir con parientes o conocidos de la familia con el fin de trabajar, lo hacen por extensos períodos de tiempo. En efecto, cuando los hijos de la unidad doméstica emigran a Lima para encontrar un trabajo (y remitir sus ingresos a sus familias), esto con frecuencia deviene en una forma de migración casi permanente dado que con frecuencia no retornan, y si lo hacen, no es sino hasta varios años después.

---

7. Las tendencias generales de la migración a lo largo del siglo pasado han sido extensamente tratadas por Deere (1990) y Taylor (1994).

Otro tipo importante de actividad migratoria que practican las unidades domésticas se da dentro de la región. Este tipo de migración es realizada tanto por los varones como por las mujeres de la unidad doméstica. Los varones migrantes informaron que con frecuencia viajan a las zonas de selva del departamento para involucrarse en trabajos manuales y crianza de animales en términos temporales, pero con frecuencia por varios meses. Además, tanto los varones como las mujeres migrantes viajan a la ciudad de Cajamarca para participar en actividades de trabajo manual y de servicios tales como servicios de lavandería y trabajo doméstico. En general, los miembros varones de la unidad doméstica laboran en el sector de trabajos manuales, mientras que las mujeres viajan a los mercados y trabajan como trabajadoras del hogar.

En las comunidades del estudio de caso, un promedio de 27% de unidades domésticas señalaron que por lo menos un miembro de la familia migra para generar ingresos para la unidad doméstica. El cuadro 6.10 presenta algunos de los hallazgos más importantes con relación a la migración presentes en las comunidades del estudio de caso.

Los cambios más significativos en el comportamiento migratorio de las unidades domésticas desde que MYSA empezó sus operaciones en la región de Cajamarca pertenecen a las actividades de “corto-plazo” y “corta-distancia”. Estas actividades migratorias cambiantes están directamente relacionadas con las operaciones de MYSA, particularmente con la construcción de caminos. Dado que las operaciones y las exploraciones de MYSA cubren más de 1,000 km<sup>2</sup> en la región, y puesto que existían pocos caminos que podía sostener el paso de maquinaria pesada y grandes cantidades de tráfico, entre 1994 y 1999, MYSA construyó o mejoró más de 133 km de caminos en la región (Martínez et al., 2000).

De manera similar a los hallazgos de otros investigadores preocupados por los impactos de los caminos en los patrones de migración rural (e.g., Godfrey, 1992; Rudel y Richards, 1990; Udall, 1981) en Cajamarca la construcción de caminos ha profundizado la integración de las unidades domésticas en procesos económicos

**Cuadro 6.10**  
**CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN EN LAS COMUNIDADES**  
**DEL ESTUDIO DE CASO**

CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN	LADERA	JALCA	CONTROL
% de unidades domésticas con por lo menos un migrante	21	40	20
Miembros de la familia que migran	Varón jefe de familia (n=2) Hijos (n=1) Hijas (n=2)	Varón jefe de familia (n=4) Hijos (n=5) Hijas (n=4)	Varón jefe de familia (n=4) Hijos (n=1) Hijas (n=1)
Destinos de migración	Cajamarca	Cajamarca Costa Selva Lima	Cajamarca Costa Regional
Ocupaciones durante la migración	Trabajo manual Trabajo doméstico	Trabajo manual Trabajo doméstico	Trabajo manual
Duración de la migración	Menos de 6 meses (n=1) Más de seis meses a un año (n=2) Más de 1 año (n=1)	Menos de 6 meses (n=5) Más de seis meses a un año (n=3) Más de 1 año (n=5)	Menos de 6 meses (n=3) Más de seis meses a un año (n=2) Más de 1 año (n=2)
Promedio de ingreso anual	800 soles US\$ 229	400 soles US\$ 114	925 soles US\$ 264

*Fuente:* Elaboración propia.

y sociales mayores. Dado que los caminos que MYSa ha mejorado con frecuencia atraviesan o pasan cerca de pequeñas comunidades cercanas a la mina, dichos caminos también han impactado en el acceso a la cambiante infraestructura física de la región, incrementado el movimiento de corto plazo de la unidad doméstica a mercados de productos locales y regionales.

El vínculo más importante entre la construcción de caminos y la movilidad de corto plazo se da a través del incremento en el acceso de las unidades domésticas a los mercados para productos agrícolas, pecuarios y lácteos, los cuales constituyen la mayor parte de las actividades de subsistencia de las unidades domésticas en las comunidades del estudio de caso. En el cuadro 6.2 vimos cómo la infraestructura mejorada ha afectado el acceso de las unidades domésticas a los mercados para productos agrícolas, pecuarios y lácteos en el caso de las comunidades del estudio de caso. En general, los entrevistados en la comunidad del estudio de caso más impactada por las mejoras en infraestructura realizadas por MYSa, Jalca, señalaron un aumento significativo en la movilidad a los mercados locales y regionales debido a la construcción de nuevos caminos, mientras que Ladera y Control, donde las mejoras de caminos no se han incrementado o mantenido, informaron de mucho menores aumentos.

En general, las unidades domésticas informaron acerca de incrementos en la frecuencia de sus movimientos a los mercados regionales, lo cual ha intensificado la articulación de las comunidades rurales en actividades económicas de mayor escala. Sin embargo, se debe tener cierto cuidado para interpretar la naturaleza temporal de estos resultados en la medida que existen otros factores que influyen en el impacto de más largo plazo de los caminos en la movilidad de las unidades domésticas. Por ejemplo, si bien los caminos se pueden construir, también necesitan extenderse hasta las comunidades, ser mejorados y recibir mantenimiento regular. En Ladera un menor número de entrevistados respondió que habían experimentado incrementos en el acceso a mercados para sus productos agrícolas, ganaderos y lácteos, debido a que el camino mejorado no llega hasta la comunidad, no es transitable en época de lluvias y no está siendo mantenido regularmente. La mayoría de entrevistados en la comunidad indicó que todavía acceden a los mercados en caballos o mulas durante por lo menos tres meses al año debido a que el camino no facilita un acceso suficiente. Así, considerando en conjunto los impactos de

los caminos en Control y Jalca, un análisis más fino de los impactos de la construcción de caminos sobre los cambiantes patrones de migración nos dice que, por lo general, estos son por naturaleza de corto plazo o parciales en caso los caminos no se encuentren lo suficientemente extendidos o no sean de una calidad adecuada o no tengan un mantenimiento regular.

Si bien las actividades de MYSA han contribuido a incrementar las actividades migratorias de corto-plazo y de corta-distancia en la región, ha habido menos impactos significativos sobre el comportamiento migratorio de mediano y largo plazo de las unidades domésticas. Los representantes de la mina han sostenido que las mejoras en los caminos también han permitido la integración de las comunidades rurales a los mercados laborales regionales y que esto ha generado nuevas oportunidades de empleo, lo que ha disminuido la migración fuera de la región (*e.g.*, Martínez et al., 2000). Las respuestas de los entrevistados sobre este tema no sostenían este argumento. Mientras que algunos entrevistados indicaron que el nuevo empleo vinculado a la mina y la creciente demanda de materiales de construcción habían creado oportunidades de trabajo para los miembros de la familia en Cajamarca, el 95% de los que respondieron en las tres comunidades indicaron que el comportamiento migratorio de mediano y largo plazo se había mantenido sin cambios o realmente se había incrementado.

Los incrementos en las actividades migratorias fueron atribuidos al hecho de que las unidades domésticas han sido capaces de utilizar nuevas redes de transporte para facilitar la migración hacia áreas de la costa y hacia Lima. Debido a que la movilidad desde las comunidades rurales se había incrementado y a que las unidades domésticas ahora son capaces de moverse más rápidamente a otras áreas del país para realizar trabajo asalariado, las unidades domésticas indican que están más dispuestas a invertir más tiempo en estas actividades y a migrar con mayor frecuencia a lo largo del año. En general, menos del 10% de los entrevistados indicaron que la migración de mediano y largo plazo haya disminuido en la región. Así, a pesar de los impactos de la mina

sobre las actividades migratorias de corto plazo, ha habido impactos insignificantes o, en muchos casos, un incremento de las tasas de migración hacia fuera de más largo plazo y de gran distancia.

### *La modificación de los patrones de migración regionales*

Otra importante modificación en los patrones de migración regionales ha sido un significativo movimiento de unidades domésticas fuera de las comunidades que rodean la mina o donde actualmente la mina se encuentra desarrollando operaciones. Estos desplazamientos son el resultado directo de las transformaciones medioambientales de gran escala relacionadas con las operaciones mineras de MYSA así como con la creciente presión sobre los restantes recursos de tierra en la región.

A fin de explotar los depósitos de oro, MYSA ha sido requerida de acuerdo a la ley peruana a presentar los denuncios mineros para tener los derechos minerales del subsuelo así como a comprar los derechos de los terrenos superficiales a los dueños. En el área de las operaciones de MYSA, estos dueños en gran medida han sido unidades domésticas que ostentaban derechos de tenencia de tierra legalmente reconocidos. Además, algunas de las reservas de terrenos en el área también eran conducidas por instituciones colectivas e informales de tenencia de tierras dispersas entre unidades domésticas y comunidades.

Bajo el nuevo régimen neoliberal peruano, los denuncios de MYSA por derechos minerales se han incrementado drásticamente. Tal como se ha señalado en el capítulo anterior, un mayor número de denuncios mineros del subsuelo, que cubren un área mayor de terreno, fueron presentados por MYSA en la región entre 1991 y el 2003 que en todo el período de denuncios mineros registrados para la región (desde fines de 1800). Comenzando desde principios de los años 1990, MYSA se involucró en una serie de iniciativas de titulación rápida de tierras y actividades de compra de tierras en las comunidades alrededor de la mina para obtener los derechos de uso de la tierra de la superficie en la región. Entre 1992 y el 2000,

Mysa adquirió más de 11,000 hectáreas de tierra en la región por un monto aproximado de US\$ 5 millones (Mysa, 2002). Esto incluye 259 distintas compras de tierra en 44 diferentes comunidades, donde las parcelas adquiridas variaban desde menos de una hectárea a más de 1,000 hectáreas (Martínez y Oblitas, 2002).

El precio que Mysa pagó por estas tierras en la región también ha sido un importante factor para el comportamiento migratorio de los propietarios de tierras. Desde 1992, Mysa comenzó a comprar tierras por menos de US\$ 80 por hectárea. Sin embargo, desde 1992 los precios de la tierra se han incrementado drásticamente. Sobre la base de las respuestas de las unidades domésticas de las comunidades del estudio de caso, entre 1992 y 1996, los precios de las tierras ubicadas alrededor de la mina se incrementaron en 600%. Estos grandes incrementos en los precios de la tierra también se han difundido rápidamente a lo largo de la región. Consiguientemente, cuando muchas unidades domésticas vendieron sus tierras a Mysa, los precios de las tierras se estaban incrementando tan rápido que ellos fueron, en muchos casos, incapaces de comprar nuevas tierras o la misma cantidad o calidad de tierras en la región.

En general, como consecuencia de las grandes actividades de compra de tierras realizadas por Mysa, la inflación en el precio de la tierra y el rápido incremento de los derechos por denuncios mineros, muchos propietarios han tenido que migrar a nuevas localidades de la región. Por lo general, esto ha traído como resultado un desplazamiento grande y casi de manera permanente de la población de la región, ya sea a comunidades ubicadas a menores altitudes o hacia la ciudad de Cajamarca. Por ejemplo, el 75% de las unidades domésticas en las 44 comunidades que vendieron sus tierras a la mina entre 1992 y el 2000, se han mudado a comunidades vecinas a menores altitudes. Adicionalmente, el 17% de las unidades domésticas que vendieron sus tierras a Mysa se han mudado a la ciudad de Cajamarca (*ibíd.*).

De acuerdo con lo señalado en las entrevistas con ex dueños de propiedades en Cajamarca, las unidades domésticas que vendieron tierras a la mina durante este período han migrado a la ciudad per-

manentemente o planean mantener sus alojamientos en la ciudad como lugar de residencia principal. Más de la mitad de entrevistados indicaron que no tenían posibilidades de comprar nuevas tierras similares a sus terrenos anteriores en las comunidades aledañas debido a la inflación de precios, lo que los forzó a mudarse a la ciudad en búsqueda de vivienda y nuevos medios de subsistencia. En general, las estrategias de migración regional han cambiado espacialmente hacia abajo en altitud y hacia la ciudad de Cajamarca en respuesta a las actividades mineras auríferas de MYSA.

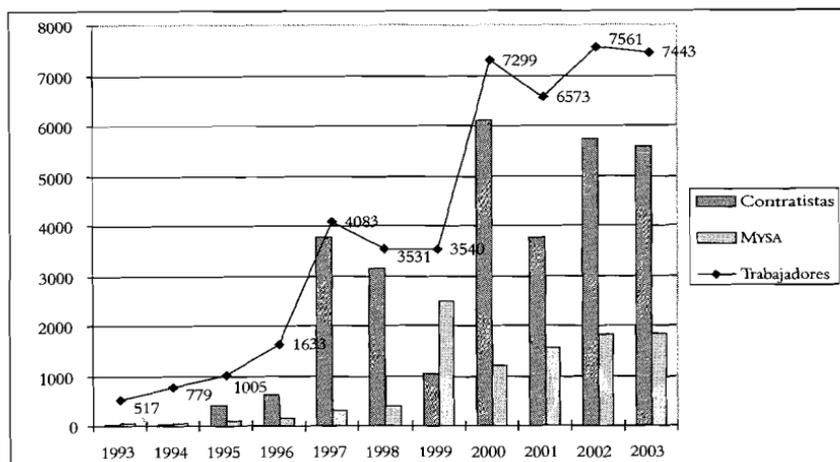
### *Los cambios en los patrones de migración nacionales*

Las operaciones de MYSA también han afectado los patrones migratorios entre Cajamarca y el resto del país. Conforme la producción minera y la escala de las operaciones de MYSA se ha ido incrementado desde 1993, también se ha generado un influjo significativo de migrantes de corto plazo y casi permanentes hacia la región en busca de empleo. Para el 2000, el empleo directo de MYSA y el empleo relacionado a la subcontratación ha llegado a más de 7,000 personas (véase gráfico 6.2).

Si bien más del 90% de los empleados y los contratistas de MYSA, solo el 44% de ellos son de la región Cajamarca (MYSA, 2004). Esto indica nuevos sustanciales flujos de migración de las zonas de la costa, especialmente desde Lima. El perfil demográfico de los migrantes que se trasladan a la región refleja, en gran medida, la naturaleza de las actividades de MYSA. El cuadro 6.11 proporciona un desagregado más detallado por género, estado civil, lugar de nacimiento, lugar desde donde migró y edad de los empleados de MYSA.

Como indica el cuadro 6.11, una abrumadora mayoría de los empleados de MYSA son hombres y tienen entre 26 y 50 años. Además, más de la mitad de los empleados de la mina, por su lugar de nacimiento o por el lugar desde donde han migrado, provienen de zonas distintas a Cajamarca. Esto se debe principalmente a que las operaciones de MYSA se apoyan en ingenieros

Gráfico 6.2  
EMPLEO DE MYSA 1993 - 2003



Fuente: MYSA, 2002.

de minas, operadores de maquinaria pesada y profesionales de fuera de la región altamente calificados. Tanto Newmont como Buenaventura emplean directamente personal de la región, pero una gran mayoría de estas personas son atraídas de operaciones internacionales de todo el planeta, facultades de minería de Lima o de grandes operaciones mineras de todo el país. Los subcontratistas que tienen relaciones de larga data con estas dos empresas se han trasladado a la región y han reubicado instalaciones administrativas y de abastecimiento, así como a los empleados asociados con estas oficinas. El empleo directo en la región tiende a ser de baja especialización, de bajo pago y temporal, ya sea para los socios operadores o para los subcontratistas que brindan servicios a la mina. Como consecuencia, el movimiento de gente a escala nacional ha estado estrechamente vinculado a los particulares requerimientos de trabajo asociados a las operaciones mineras, y están altamente concentrados en redes de empleo bien establecidas entre los socios operadores de la mina y los subcontratistas.

En general, las actividades de MYSA han contribuido a incrementar el crecimiento poblacional en la región, el mismo que está

**Cuadro 6.11**  
**EMPLEADOS DE MYSA Y MIGRACIÓN - 2003**

GÉNERO	%	LUGAR DESDE DONDE MIGRÓ	%
Masculino	92	Cajamarca	44
Femenino	8	Otras localidades (incluyendo el extranjero)	66
ESTADO CIVIL		EDAD	
Soltero	34	18-25 años	5
Casado	66	26-36 años	55
LUGAR DE NACIMIENTO			
Cajamarca	48	37-50 años	37
Otras localidades	52	51 años o más	3

(Total N=1857)

Fuente: MYSA 2004

superando las tasas de crecimiento departamental y nacional. Mientras que las tasas de crecimiento para el departamento de Cajamarca en promedio se ubicaron por debajo del 2 por ciento durante la década pasada, entre 1995 y el 2000, en los tres distritos que rodean a la mina, la población se ha incrementado en 8.8 por ciento o en aproximadamente 22,000 personas (INEI, 2002). Esto refleja un movimiento hacia fuera de la mina, así como la llegada de nuevos migrantes a la región desde el resto del país. Este, sin duda, es también un estimado conservador en la medida que muchos empleados y trabajadores de la mina migran estacionalmente desde otras áreas del país.

### ***Migración internacional hacia Cajamarca***

Si bien las actividades de MYSA dependen principalmente de empleados y subcontratistas peruanos, la naturaleza altamente técnica de la operación minera, así como su magnitud relativa con relación a las operaciones mineras globales, también ha estimulado significativos flujos de migrantes internacionales hacia la región

de Cajamarca. Estos migrantes internacionales reflejan la naturaleza global de las operaciones extractivas altamente especializadas, así como nuevos tipos de redes y relaciones sociales y económicas que están siendo establecidas entre Cajamarca y la esfera internacional.

La fuente de esta internacionalización de Cajamarca se relaciona de manera más importante al flujo de bienes y servicios hacia la región adecuados a las actividades de MYSa. Si bien la mina emplea un número bastante pequeño de personal extranjero que ha migrado de manera temporal como, es responsable por el manejo de las operaciones de la mina y de las adquisiciones de materiales y servicios, lo cual todavía depende de manera significativa de fuentes globales. Los cuadros 6.12 y 6.13 resumen estas relaciones entre 1993 y 1998.

La mayoría de empleados extranjeros en la región representa a importantes intereses globales empresariales o de contratistas de extracción minera que incluyen a Newmont Mining Corporation, Odebrecht, Zublin, Bechtel, Ingersoll Rand, Baker Hughes y Atlas Copco. Adicionalmente, la mayoría de empleados extranjeros y nacionales que representan estos intereses vienen de Australia, Canadá, Sudáfrica y los Estados Unidos.

Estos migrantes internacionales han dado inicio a importantes cambios en la región, principalmente debido al lugar en el que han elegido vivir. Debido a que representan operaciones globales, interactúan en muchos diferentes países y son pagados de manera significativamente más alta que los peruanos, han tendido a afincarse en el distrito de Cajamarca de Baños del Inca. Mientras que la mayoría de peruanos ha elegido vivir en la ciudad de Cajamarca, los empleados extranjeros han formado un asentamiento internacional que refleja los patrones tradicionales de enclave de las antiguas operaciones mineras del país (*e.g.*, Becker, 1983; Long y Roberts, 1984).

Si bien el número y el tipo de empleados extranjeros reubicados en Baños del Inca no han sido bien documentados, la evidencia secundaria ilustra claramente la magnitud de los cambios ocurridos en la comunidad. Entre 1993 y el 2002 la población de la

**Cuadro 6.12**  
**ORIGEN DE BIENES Y ADQUISICIONES DE MYSA 1993-1998**

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Cajamarca	6.2%	12%	6.4%	7%	6.2%	3%
Lima y provincias	52.9%	73.9%	60.5%	72.1%	71.7%	77.9%
Extranjero	40.9%	14.1%	33.1%	21%	22.1%	19.1%
Total (US\$)	7,677,496	15,600,168	26,618,054	30,304,296	37,592,148	68,285,359

*Fuente: MYSa 2002*

**Cuadro 6.13**  
**ORIGEN DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE MYSA 1993-1998**

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Cajamarca	2%	3.2%	10.3%	11.5%	14.5%	15.6%
Lima y provincias	88.8%	80%	74.7%	78.9%	75.8%	72.8%
Extranjero	9.2%	16.7%	15%	9.7%	9.7%	11.5%
Total (US\$)	36,351,326	51,805,439	75,912,551	101,144,394	166,831,588	174,775,748

*Fuente: MYSa 2002*

localidad se incrementó en más del 20% (INEI, 2002). También ha habido grandes alzas en el precio de la tierra en la comunidad, así como cambios significativos en el uso de la tierra, conforme han surgido nuevos tipos de casas y alojamientos alrededor de los históricos baños termales de la comunidad.

Finalmente, además de la migración internacional de empleados y contratistas de MYSa, la región también se ha visto articulada a una serie de otras redes de migrantes internacionales. Debido al enorme tamaño y naturaleza técnica de las operaciones mineras de MYSa, las radicales transformaciones sociales y medioambientales que ha generado en la región, el amplio descontento social y los conflictos asociados con sus actividades, los innovadores programas sociales y medioambientales de Newmont y su posición como precursor de la nueva revolución minera en el Perú neoliberal, la región también se ha convertido en un importante punto focal para otros migrantes ambientalistas, académicos, no gubernamentales e industriales. Si bien muchos de estos migrantes permanecen en la región por un corto período de tiempo, han contribuido a una presencia creciente de redes globales en la región. En cierto sentido, desde que MYSa comenzó sus operaciones en la región, Cajamarca se ha convertido en uno de los pueblos del *boom* aurífero del siglo XXI.

## 5. Conclusiones

Sobre la base de la evaluación presentada en este capítulo acerca de la forma en que MYSa ha afectado los recursos de capital producido, humano, natural y social al que acceden las unidades domésticas para producir sus medios de subsistencia en las comunidades del estudio de caso, un conjunto importante de conclusiones es que ha habido incrementos en el acceso a recursos de capital producidos y humanos, además, disminuciones en el acceso a recursos de capital natural y social. Sin embargo, estas conclusiones están sujetas a precauciones significativas en la medida que las transformaciones de los recursos que están teniendo lugar en la región

de Cajamarca no han sido uniformes, ni han estado distribuidos de manera similar entre unidades domésticas y comunidades. Por lo tanto, a medida que se interpretan los resultados de la investigación debe tenerse en cuenta la compleja y desigual distribución geográfica de cambios que ha tenido lugar en los medios de subsistencia.

El acceso de las unidades domésticas y la utilización de recursos de capital se han transformado en las comunidades del estudio de caso desde que MYSA comenzó sus operaciones en la región de Cajamarca, los medios de subsistencia en cada zona también han ido cambiando. En general, en Ladera, la producción agrícola se ha intensificado, aunque los recursos de capital natural se han visto amenazados. Además, las unidades domésticas que vendieron tierras en zonas más altas que MYSA han tenido que reducir su tenencia de ganado o concentrar sus animales en zonas más bajas, intensificando de esta manera la presión sobre la tierra. Consiguientemente, debido a que el uso de la tierra se ha intensificado y se ha incrementado su precio en la región, la producción ganadera tiene menos posibilidades de ser desarrollada por las unidades domésticas.

Por otro lado, en Jalca las unidades domésticas han intensificado sus actividades ganaderas. Por ejemplo, en la medida que el camino a Jalca ha sido mejorado, las unidades domésticas han tenido relativamente más acceso a los compradores de ganado y al mercado para sus productos lácteos. Así, han incrementado sus cabezas de ganado y están teniendo una mayor producción de lácteos, de tal forma que su portafolio de productos ha variado. Es más, en ambas comunidades del estudio de caso afectadas por las operaciones de MYSA, el acceso a recursos de capital social interfamiliares ha mermado, pero los vínculos verticales con organizaciones nacionales e internacionales se han visto fortalecidos en la medida que se ha incrementado su preocupación por los impactos negativos de la mina. En general, los medios de subsistencia de las unidades domésticas en las comunidades afectadas por MYSA han entrado a una nueva fase de transición, la cual es incierta y está

compuesta de cambiantes oportunidades de acceso a recursos y a capacidades de subsistencia.

Esta investigación también sirve como un ejemplo de la manera en que los marcos analíticos de los medios de subsistencia pueden contribuir a nuestra comprensión de las transformaciones locales en estudios geográficos. Si bien existen algunas limitaciones para utilizar el enfoque de medios de subsistencia, este posibilita a los investigadores enfocar un complejo conjunto de indicadores dentro de categorías discretas y organizarlas en una matriz de conclusiones generalizable gruesamente. En esta investigación, el enfoque de medios de subsistencia permite entender la manera en que un conjunto complejo de recursos en el que se basan las unidades domésticas para producir sus medios de subsistencia está siendo transformado, así como la manera en que la nueva economía minera peruana de base transnacional se encuentra vinculada a estas transformaciones. Estas son preguntas importantes no solo para estudios de desarrollo sino también para entender las geografías del cambio local y su relación con escalas mayores de análisis. En general, los estudios geográficos de esta naturaleza se beneficiarían adoptando un enfoque de medios de subsistencia como medio para evaluar estos asuntos.

Los cambiantes flujos de migración en Cajamarca también ilustran que los patrones de migración en la región se han ido modificando como respuesta a las operaciones de MYSA. Estos cambios incluyen la creación de redes de migrantes transnacionales que han convergido sobre la región de una manera desigual, un rápido influjo de migrantes y empleados mineros de todo el Perú, un cambio radical de concentraciones poblacionales fuera de los lugares de operación de MYSA y más abajo cerca de la ciudad de Cajamarca y una intensa articulación de las actividades basadas en migraciones de corto plazo a los procesos económicos y sociales regionales mayores. Estos cambios en la dinámica migratoria y de movilización también ilustran la compleja naturaleza multiescalar y multitemporal del comportamiento migratorio en respuesta a los pasados quince años de neoliberalismo peruano. Estos cambios

de escala nacional se han introducido en un período de operaciones mineras transnacionales de gran escala sin precedentes que están transformando rápidamente los contextos naturales y sociales de la sierra del Perú. En este sentido, entender la forma en que los patrones de migración están cambiando en relación con la nueva industria minera peruana es una cuestión importante no solo para la población nacional mayormente rural y profundamente empobrecida, sino también para los académicos interesados en las relaciones entre el neoliberalismo, la transformación regional y los patrones de migración en los Andes.



## **Sección 4**

---

### **Conclusiones**



## 7

### *Conclusiones: minería, neoliberalización y reterritorialización en el desarrollo rural*

ANTHONY BEBBINGTON Y  
LEONITH HINOJOSA VALENCIA

LAS DIVERSAS CONTRIBUCIONES que forman este volumen plantean reflexiones que se combinan en tres dimensiones. Geográficamente, son un recorrido a través de Perú, Ecuador, Bolivia y Guatemala. Institucionalmente, abordan temas relativos a sistemas de tenencia de tierras, reformas del sector minero y una amplia liberalización de las leyes y normas que rigen la inversión, la explotación de recursos y los sistemas impositivos que se aplican a la minería. En el ámbito de las organizaciones, nos han permitido analizar el actuar de movimientos sociales, comunidades, empresas, las ONG, Banco Mundial, municipalidades, los ministerios de Energía y Minas y otras dependencias del gobierno central que rigen sobre el sector minero. Aunque diversas en naturaleza, estas dimensiones son todas parte de un tema único: la dinámica territorial en espacios rurales impactados por la minería y los cambios sociales que la acompañan.

En este capítulo final buscamos conectar los diversos puntos de reflexión propuestos y, sobre la base de ellos, derivamos afirmaciones teóricas que permitan entender la naturaleza de los cambios sociales y territoriales que se dan en el área rural. En particular, consideramos que los diversos casos presentados sugieren cinco

grandes campos temáticos de análisis recurrentes y que, habiendo surgido en su mayoría a partir de los 1990 y convergido en los mismos lugares, han provocado y estructurado nuevas formas de conformación del territorio rural y procesos de cambio que son sustancialmente diferentes de aquellos observados en períodos anteriores. Estos campos son:

- *Neoliberalización.* Las relaciones entre neoliberalismo, reforma institucional y cambios en los derechos de acceso y de control de recursos naturales constituyen un campo de cambio. La neoliberalización se caracterizaría por ser un proceso que incluye un cambio societal amplio donde el poder de entidades privadas y los derechos que adquieren se hacen marcadamente visibles, al mismo tiempo que la presencia del Estado en el ámbito rural se debilita, y los procesos democráticos se vuelven cada vez menos eficaces en la resolución de conflictos.
- *Transnacionalización.* La creciente importancia de actores globales dentro de los procesos de cambio en espacios locales es otro tema recurrente. Este involucra la confluencia de actores globales y locales en espacios conjuntos de acción que atraviesan diversas escalas e impactan la trayectoria de territorios locales. Tales actores globales operan simultáneamente dentro de diversas esferas —en el Estado (p. ej., el Banco Mundial y la IFC), en el mercado (p. ej., las empresas transnacionales mineras y financieras) y en la sociedad civil (p. ej., las redes transnacionales de activistas y las ONG internacionales).
- *Movilización.* Los conflictos alrededor de la minería y del desarrollo rural también han envuelto nuevas formas, generalmente más visibles, de movilización social y de acción colectiva que se dan a diferentes escalas (comunal, intercomunal, microregional, nacional e internacional) de acuerdo con las circunstancias. Esta movilización resulta ser un producto de la neoliberalización, como lo es de la transnacionalización y de la propia historia de los territorios locales. Entonces la movili-

zación también vuelve a constituir la reestructuración del desarrollo rural.

- *Desintegración.* La desintegración resulta de la confluencia de dos tendencias que se originan cuando se redefinen las economías políticas de las comunidades y otros espacios locales. Primero se da una tendencia hacia una creciente individualización y aparición (o reforzamiento) de relaciones conflictivas entre los residentes de áreas afectadas por las industrias extractivas. Luego se da una tendencia hacia un incremento en la incertidumbre y la vulnerabilidad de las estrategias de vida de las poblaciones rurales, debido al cambio —generalmente reducción— en el acceso a los activos naturales que son la base para construir sus medios de vida.
- *Reterritorialización.* Este campo es, al final, el resultado de los procesos anteriores y uno de especial interés dado el tema del libro. La reterritorialización de áreas rurales en zonas de montaña incluye cambios que resultan de su inserción en espacios económicos más amplios, cambios en las formas y procesos de gobernanza de estas áreas, y cambios en las formas de interdependencia (real y percibida) entre diferentes áreas.

En la siguiente sección pasamos a desarrollar cada uno de estos campos temáticos de análisis, para luego cerrar con una reflexión sobre sus implicancias para la agenda de investigación de ecología política preocupado con temas de minería, territorio y desarrollo rural.

## **1. Neoliberalización**

### ***Reestructuración institucional y la promoción de la inversión en industrias extractivas***

El fenómeno de articulación a la economía internacional a través de la exportación de bienes primarios no es totalmente nuevo en la historia económica de los países andinos. Tanto el siglo XIX

como el XX han estado plagados de *boom* mineros cuyos efectos finales, dada la forma en que la riqueza generada por la explotación fue utilizada por los gobiernos de turno, no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave (Thorp y Bertram, 1978; Fitzgerald, 1979) y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida.

El *boom* más reciente —el cual constituye el objeto de análisis de este libro— se distingue de alguna manera de los anteriores por haberse dado de forma más planificada y por ser un fenómeno que forma parte de reordenamientos societales de mayor envergadura. Esta característica sobresale tanto en el capítulo de Holt-Giménez como en el capítulo 2 de Bury. Ambos autores documentan los procesos de reforma institucional, pensados y dirigidos por un conjunto de actores nacionales e internacionales. Dichas reformas estuvieron orientadas a liberalizar el sector minero en Perú y en Guatemala,<sup>1</sup> facilitando e incentivando la inversión extranjera en el sector. Así, para el caso peruano, Bury comenta:

[En 1991] la Ley de Promoción de la Inversión Extranjera (Decreto Legislativo N° 662), la cual abrió todos los sectores de la economía peruana a la inversión extranjera directa (IED). Bajo esta ley, a los inversionistas extranjeros se les garantizó igual trato y se eliminaron todas las restricciones para las remesas de ganancias, dividendos, regalías, acceso al crédito doméstico, y la adquisición de suministros y tecnologías en el exterior. Además, con el fin de atraer la inversión extranjera, el gobierno ofreció paquetes de estabilidad tributaria a los inversionistas extranjeros (Decreto Legislativo N° 757) por plazos de diez a quince años. (Bury, en este volumen).

De esta forma, todas las empresas mineras grandes que desde entonces han realizado explotación minera han gozado de estos

---

1. Reformas parecidas se dieron en Ecuador también, aunque el gobierno actual parece dispuesto a cuestionar la legalidad de los préstamos del Banco Mundial que financiaron tales reformas.

arreglos de estabilidad tributaria, de no tener que pagar regalías durante un cierto período y de pagarlas a tasas muy reducidas cuando se diera el caso —entre uno y tres por ciento.<sup>2</sup> En Guatemala Holt-Giménez describe arreglos curiosamente muy parecidos:

[El período posguerra] condujo a uno de los códigos de minería más draconianos desde la conquista española. De acuerdo con la nueva legislación minera, las empresas no solo son de propiedad extranjera en un 100%, sino que las anteriores regalías obligatorias del orden del 6% fueron sustituidas por una de tan solo 1% y el impuesto a la renta fue reducido del 58% al 31%. En un país donde los consumidores pagan hasta US\$ 140 mensuales por agua, las cantidades sustantivas de agua requeridas para procesar la mina de oro son gratis para las empresas mineras.

Bajo tales condiciones no es difícil esperar también el surgimiento de un *boom* minero en este país.

Pero además de sus efectos en la inversión minera, las reformas legislativas pro inversión a gran escala constituyeron parte —y por cierto, parte importante— de proyectos de reforma mucho más amplios. De hecho, la amplitud de los procesos que se generaron hace que la palabra “reforma” quede chica para describirlos. Ambos capítulos nos dejan más bien con la sensación de que lo que ha estado en juego ha sido más bien un proyecto de reestructuración de las sociedades peruana y guatemalteca bajo contextos particulares que ameritan ser analizados con cuidado.

Primero, en ambos casos, se trata de sociedades después de un conflicto armado. Bury analiza el caso de Minera Yanacocha, la primera inversión extranjera importante después de más de una década de conflicto armado en Perú; y, Glamis Gold (comprado en noviembre, 2006, por Goldcorp Inc.), el caso estudiado por Holt-Giménez, es también la primera inversión minera en el altiplano occidental de Guatemala, la cuna y principal campo de

---

2. Como referencia, el impuesto a la renta en Perú en ese período fue de 30% y, en un país como Botswana, las regalías para la explotación de diamantes están en 10% (Christian Aid, comunicación personal, 2007).

batalla de la guerra interna en ese país. De manera significativa, ambos proyectos mineros eran a la vez proyectos que tendrían el efecto de lograr nuevamente la ocupación de las zonas altas en guerra por parte del gran capital.

Segundo, ambos capítulos, y en particular el de Holt-Giménez, insisten en la importancia de ver la expansión minera como parte de reestructuraciones económicas mayores. Holt-Giménez muestra que el neoliberalismo impulsado y financiado por el Banco Mundial —donde privatización, reforma agraria y creación de reservas medioambientales estuvieron incluidas— dieron pie a un proceso regresivo de distribución de la tierra en el cual los pobres indígenas del altiplano occidental guatemalteco (los con y los sin tierra) fueron los grandes perdedores. La modificación de marcos de inversión y de regulación, en buena cuenta condicionados para tener acceso a crédito internacional, y la necesidad imperiosa del fisco nacional de obtener los recursos financieros necesarios para la reconstrucción del país después del conflicto armado crearon un escenario propicio para la implantación de un sector privado minero con origen internacional, bajo el supuesto de que este modernizaría el sector y transferiría al gobierno ingresos frescos para sus programas de reconstrucción y rearticulación del país a la economía internacional. Pero además, Holt-Giménez no solo insiste en la necesidad de ver las relaciones entre reformas en los sectores minero, agrario y ambiental, también sugiere que hay que entenderlos en el contexto centroamericano, caracterizado por la liberalización del comercio y la integración regional.

En el caso de Perú, Bury se limita a sugerir relaciones de tipo más local y regional entre gran capital y reestructuración del uso del territorio. No obstante, este primer nivel de relaciones permite aproximarse a una siguiente escala de análisis que incluye las relaciones entre el sector minero-energético y el conjunto de inversiones de gran envergadura que se avizoran en programas de integración latinoamericana, como el constituido por la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que además incluyen infraestructura vial y portuaria. Aunque

todavía de forma intuitiva, nuestras percepciones están orientadas a resaltar las conexiones que se irían dando entre un conjunto de inversiones cuyo fin no es sino el de facilitar la expansión masiva de ciertos sectores (hidrocarburos, minero, producción de soya) e integrarlos a mercados internacionales, sobre todo asiáticos. Nuevamente, a juzgar por las iniciativas de inversión impulsadas por los megaproyectos que conforman la plataforma logística centroamericana, algo parecido se pretendería realizar en Centroamérica.<sup>3</sup>

Para algunos de los actores —sobre todo las instituciones financieras internacionales— estos proyectos societales tenían otro objeto, el de disminuir la influencia de las elites nacionales que no estaban dispuestas a ceder al cambio estructural. No obstante, en el caso guatemalteco, dado que dichas elites todavía tienen el control de buena parte del poder político nacional, la estrategia de integración al comercio internacional se dio en paralelo a la implementación segmentada de la reforma agraria y a un paquete desordenado de programas sociales que no incluían ninguna medida de tipo redistributivo. De hecho, la reforma agraria no se implementó en el altiplano occidental donde las elites terratenientes buscan desarrollar agricultura de exportación. Considerando tales hechos, Holt-Giménez nos deja con una pregunta, válida para cualquier país en el que se observen contextos y hechos similares, respecto a cuál es la relación entre el *boom* minero y la consolidación o usurpación de las elites nacionales tradicionales.

### ***Reestructuración institucional y derechos al medio natural***

Esta nueva ola de inversión extranjera focalizada en la minería ha traído consigo un crecimiento exponencial de la producción y exportación primaria minera, con el respectivo incremento de recursos financieros para la caja fiscal de gobiernos nacionales y

---

3. Para Centroamérica ver la iniciativa sobre dinámicas territoriales liderado por Prisma ([www.prisma.org.sv](http://www.prisma.org.sv)); sobre IIRSA ver <http://www.iirsa.org>.

locales. Al mismo tiempo ha significado cambios en los patrones locales de tenencia de tierras y en los activos que las poblaciones locales del área rural tienen para estructurar sus estrategias de vida. La consecuencia inmediata de la reestructuración institucional en los sistemas de propiedad y de uso de la tierra ha sido una reestructuración del uso y control del territorio rural que ha sido resistida y enfrentada de diversas formas y de acuerdo a las circunstancias específicas de cada localidad.

La reestructuración legal de las instituciones nacionales, que desde inicios de la década de 1990 facilitaban la implantación del gran capital bajo condiciones de liberalización del movimiento de capitales (*i.e.*, igualdad de trato para inversionistas extranjeros, eliminación de restricciones para la remesa de ganancias, estabilidad tributaria de largo plazo) y de privatización, no estuvo acompañada de una reestructuración legal del sistema de uso, control y propiedad de la tierra al mismo ritmo. Consecuentemente, las modificaciones en las leyes de catastro minero, sin mayor atención a los derechos consuetudinarios de las comunidades campesinas y de sus miembros, solo abrieron puertas para el ejercicio de transacciones “de mercado” sobre todo casuísticas y donde, frente a un estado ausente en su rol fundamental de garantizar reglas justas de juego para el intercambio, los agentes económicos con acceso a información y plenitud de recursos (grandes empresas transnacionales y nacionales) impusieron a la población rural criterios, valor y formas de relacionamiento para la adquisición de sus tierras. Esto generó un tipo de mercado de tierras totalmente distorsionado e inestable, tanto para la propia empresa minera como mayor demandante, como para los propios pobladores rurales que en algún momento buscan expandir su acceso a capital natural mediante la compra de nuevas parcelas.

No obstante los “mecanismos de mercado” utilizados, el consiguiente control y uso concentrado de recursos en manos de empresas privadas ubica el problema de los campesinos andinos localizados en territorios con potencial minero en el centro del debate en la ecología política sobre “justicia ambiental”, esto es,

una situación en la cual los individuos y grupos más vulnerables dentro de sociedades locales se ven desplazados de los medios y recursos que habilitan sus estrategias de vida y fuerzan —o, en el mejor de los casos, aceleran— cambios en sus formas de vida que, aunque atractivos en el inmediato y corto plazo, generan conflicto en el mediano y largo plazo.

## 2. Transnacionalización

Todos los capítulos de este volumen resaltan el rol y la importancia de actores internacionales, cada uno involucrado en particulares redes que conectan los espacios nacionales y locales. Esta característica común encontrada en los diversos casos estudiados podría eventualmente ser interpretada como un efecto del sesgo inducido en la selección de casos, dados los lazos laborales de los investigadores con organizaciones internacionales (como en el caso de Holtz-Giménez, quien en su momento trabajaba para el Bank Information Centre, organización que centra su trabajo en seguir las acciones del Grupo del Banco Mundial) o por intereses académicos respecto a organizaciones internacionales (como es el caso de los autores del capítulo 5). Tal sesgo podría llevar a sobredimensionar la importancia de organismos internacionales o de la visibilidad que se le atribuye a los conflictos relacionados a las grandes explotaciones mineras, cuando dichas organizaciones se encuentran involucradas.

No obstante, sin negar la posibilidad de sesgo en el análisis, nos parece que el otro extremo, es decir, reducir al mínimo la importancia de la transnacionalización, sería también un error dada la fuerza de los hechos que demuestran lo contrario. Así, por el lado del sector privado, el involucramiento de empresas internacionales y el predominio de transacciones en mercados financieros internacionales es una característica fundamental de las operaciones mineras a gran escala. Por el lado del gobierno, junto a la variada intervención de instituciones financieras, es más llamativo —por decir lo menos— que las representaciones diplomáticas de los

países cuyas empresas mineras buscan asentarse en países del Sur, se involucren en formas de relacionamiento con gobiernos y empresas que resultan poco transparentes. Finalmente, por el lado de la sociedad civil, las ONG internacionales incluyendo aquellas que organizan campañas han centrado su actuar en las industrias extractivas dadas las muestras de los efectos perversos sobre los derechos humanos, la calidad ambiental y los riesgos de salud asociados y la inseguridad sobre los medios de vida de las poblaciones locales en cuyos territorios se asientan.

Sin embargo, estos distintos actores internacionales no pueden actuar solos. Para operar en escenarios de países del Sur, las empresas internacionales empresariales necesitan socios locales o al menos colaboradores locales quienes —a decir de un oficial de una empresa minera internacional en Perú— faciliten que el dinero llegue a “la gente indicada”, es decir, aquellas personas locales a quienes se debe pagar para que la inversión avance. En varios casos, estos actores internacionales requieren y establecen sus propias redes con la policía local, los militares y los servicios de inteligencia. Tanto ellos, como las agencias financieras internacionales, requieren de las habilidades y servicios de una gama amplia de ‘consultores’ quienes se encargan de realizar líneas de base, estudios de factibilidad, estudios de impacto ambiental, etc. Estos consultores son, a su vez, parte de redes que conectan compañías que operan tanto en países del sur como del norte. De la misma forma, las organizaciones de la sociedad civil internacional necesitan de aliados locales y nacionales para acceder a información y adquirir legitimidad, de acuerdo con sus principios organizacionales basados en el trabajo de socios.

Visto desde los actores locales y nacionales, estos buscan y/o necesitan de actores internacionales para llevar adelante sus propósitos. En el caso de proyectos mineros (de la escala que fuera) las compañías de origen nacional requieren acceder a la tecnología desarrollada por empresas globales y a los circuitos financieros en los que estas se manejan. Los gobiernos nacionales, por su parte, necesitan de las empresas internacionales para expandir la frontera

minera y generar las divisas que desesperadamente van buscando los respectivos ministerios de economía y finanzas. En cuanto concierne a organizaciones locales, si bien estas necesitan menos de actores globales para actuar localmente —y de hecho, algunas dirían que no necesitan nada— en la práctica, muchas de sus acciones en torno a conflictos mineros serían difícilmente ejecutadas sin el financiamiento, el acceso a la información y a los medios de comunicación que sus contrapartes o colaboradores internacionales proveen, así como los debates y la sensibilización pública que estos últimos llevan adelante directamente en países del norte.

Por estas razones, en vez de referirnos únicamente a procesos de globalización o de internacionalización para entender las relaciones de causa-efecto entre minería, territorio y conflicto, proponemos que es mucho más apropiado hablar de un fenómeno de transnacionalización. Es decir, así como el mercado, el Estado y la sociedad civil son los pilares que estructuran tales relaciones causales, las redes que cruzan países y hemisferios determinan las formas finales que estas adquieren. Dichas redes hacen posible que los actores puedan actuar tanto en la comunidad de Yanacanchilla, el cantón de Cotacachi o en el altiplano guatemalteco, donde están los yacimientos mineros, como en las grandes metrópolis de Londres, Toronto, Denver, Washington o Nueva York, donde están los centros de operaciones de las grandes empresas, de las instituciones y los mercados financieros o las grandes ONG y fundaciones. Ergo, lo transnacional es ahora una característica innegable del paisaje local; por lo tanto, un análisis cauto del territorio rural y de sus cambios no puede darse sin tomar en cuenta esta dimensión.

### 3. Movilización

Aunque en diverso grado, cada uno de los capítulos de este volumen sugiere que los procesos de neoliberalización y de transnacionalización han estado acompañados por procesos de movilización. Para nosotros, *movilización* es el término genérico que traduce lo

que Holtz-Giménez llama “resistencia territorial”, Bury “formación de capital social”, Bebbington et al. “movimientos sociales” y Damonte “resistencia”; todos ellos, procesos que describen la noción de organizarse para dar respuesta a intromisiones y nuevas formas de dominación externas. En tanto movilización describe únicamente un fenómeno organizativo de respuesta social, creemos que el término tiene la ventaja de dejar de lado disquisiciones respecto a la dimensión de estas respuestas —y por lo tanto evita la discusión sobre qué debe o no denominarse movimiento social— y, además, incorpora la noción de organizarse para negociar, y no solo para rechazar. En breve, movilización describe los procesos de acción colectiva que los diversos casos presentan cuando hablan de reacciones sociales frente a la minería.

Siendo que la movilización surge de forma inducida por la presencia expansiva de la minería y de las formas en las que esta se da. Los distintos capítulos sugieren que la expansión minera induce la movilización. Mientras las agresiones o mal comportamiento de las empresas mineras y entidades estatales pueden ser factores que intensifiquen la movilización, esta es —a fondo— una respuesta colectiva a los riesgos, las incertidumbres, y las pérdidas de acceso a recursos naturales avizorados por la llegada de la minería.

Por ejemplo, para el caso del territorio del altiplano occidental guatemalteco, Holt-Giménez describe cómo el resultado neto de la implantación de empresas mineras transnacionales en territorios de comunidades indígenas y el mejoramiento de la infraestructura y las facilidades financieras para el sector de agroexportación nacional en el resto del área rural fue la reducción en el acceso de las poblaciones indígenas tanto a tierra como a otros medios naturales de los cuales depende su subsistencia. Frente a ello, la respuesta fue la confluencia de los campesinos *con y sin* tierra en una agenda común de “resistencia territorial” que busca de alguna forma garantizar su acceso al medio natural y de frenar la redistribución regresiva de la tierra, así como de enfrentar cualquier otra estrategia que, aunque de forma indirecta y lejana, incrementa la posibi-

lidad de excluirlos del medio rural. Sea que esa fue una respuesta al destierro, o al incremento del riesgo, nos parece que sigue siendo útil entender a la movilización como una respuesta a lo que Haberman, llama “la colonización de la vida diaria” (Habermas, 1984; 1987; véase el capítulo de Introducción).

Aun cuando la movilización estaría reflejando reacciones individuales conectadas con sentimientos colectivos, nos parece importante también señalar que su significado, las formas que esta adquiere y las estrategias que incluye tendrían que entenderse de forma más profunda. Así, en algunos casos, la movilización estaría influenciada por memorias colectivas o experiencias previas de conflictos similares (como fue el caso de la segunda quema del campamento minero en Cotacachi); en otros casos, es el resultado de recuerdos más antiguos, pero aún presentes, como sugiere Damonte para el caso de Antamina en Perú. Al mismo tiempo, otros actores sociales invocan memorias colectivas con el afán de ofrecer *sus* interpretaciones de estas movilizaciones locales. En este sentido, los casos peruano y guatemalteco son de especial interés por sus similares historias recientes de insurgencia terrorista y de conflicto armado, las cuales permiten a ciertos actores —en particular, del Estado y de empresas mineras— a enmarcar las protestas contra la minería utilizando términos que sugieren conexiones con tales movimientos alzados en armas. Para las organizaciones de la sociedad civil la sugerencia de tales conexiones es políticamente peligrosa (y éticamente espantosa en términos de derechos ciudadanos). La manipulación de la memoria colectiva orientada a una interpretación perversa de la movilización social, reduce los márgenes de maniobra de activistas locales e induce a las organizaciones que las apoyan a reducir su participación —o al menos su visibilidad. En el caso peruano, no cabe duda que es exactamente esto lo que ha pasado con algunas ONG internacionales quienes de alguna manera se han distanciado de los conflictos mineros para protegerse de las críticas y guardar su imagen institucional.

Añadido a la importancia de historias sociales locales y nacionales para contextualizar las movilizaciones, Damonte nos muestra

también que hay factores de tipo más individual que explican las formas que estas toman. Dentro de estos estarían la presencia de líderes locales con experiencia en organización política y capacidades de negociación; también el grado en el cual estuvieron expuestos a principios de la teología de la liberación.

En cualquier caso, nos parece que estas observaciones además de interés empírico tienen sobre todo significado teórico. Así, si recapitulamos la discusión presentada en el capítulo de Bebbington et al. y los conceptos presentados en la introducción, encontramos que la movilización no debería ser entendida simplemente como una respuesta “habermasiana” a los esfuerzos de colonización de la vida diaria. La movilización está más bien profundamente enraizada en historias, memorias y significados. Esta es una interpretación similar a la que Crossley (2002) sugiere cuando interpreta que la noción de *habitus* y práctica de Bourdieu es relevante para pensar acerca de las formas que los movimientos sociales toman (o para pensar sobre aquellos casos en los cuales estos no llegan a surgir). Es aquí donde encontramos la mayor contribución que Damonte realiza con su rico trabajo etnográfico: para entender la movilización social en áreas afectadas por la minería, se necesita ver y entender las historias locales de la vida diaria así como sus historias de resistencia.

Los diversos casos presentados también sugieren que la movilización no es puramente local. Esto nos lleva de vuelta a la discusión presentada en el capítulo de Bebbington et al. sobre el rol de las “organizaciones de los movimientos sociales” en apoyar, orientar o, inclusive, distorsionar la movilización. Aquí, aun evitando una discusión sobre movimiento social, el punto crucial de enfoque teórico es la interfase entre estas organizaciones y las aspiraciones y ansiedades traducidas en acciones que surgen de las comunidades locales.

Un aspecto importante que rescatamos de los diversos casos es que no se puede generalizar respecto del origen, motivación y características de estas organizaciones, lo cual nos da pie a desdeñar opiniones que dentro de los gobiernos o las empresas mineras se

vierten cuando se refieren a todas ellas como “radicales ambientalistas y antimineros que buscan subvertir la modernización y el desarrollo”. Dentro de las organizaciones de los movimientos sociales estudiadas, encontramos a las ONG, organizaciones con origen de Iglesia, la Iglesia misma, grupos de jóvenes, universidades, entre otras. Aún más, estas organizaciones se distribuyen en un rango que va de las “radicales antiminería” hasta aquellas con posiciones mucho más moderadas (como la de grupos de la democracia cristiana) que se involucran porque perciben que los proyectos mineros atentan contra principios básicos de dignidad humana.

Habiendo dicho esto, creemos que hay dos tipos de generalizaciones que podemos sugerir para todos los casos. Uno es que la Iglesia Católica ha jugado un papel significativo de apoyo, concientizando, facilitando y mediando. Otro es que las relaciones entre comunidades locales y los actores no locales son siempre complicadas. No se trata de sugerir que tales relaciones son siempre tensas, o que los actores externos imponen agendas, se trata más bien de resaltar que tales relaciones se caracterizan por estar en constante negociación y, por tanto, suelen ser frágiles. Esta situación favorece los intereses de gobiernos centrales y de empresas mineras, quienes buscan exacerbar tal fragilidad y generan relaciones bilaterales directas con las comunidades locales, “negociando” con ellas.

Un aspecto muy poco abordado en los diversos capítulos cuando exploran la conexión entre lo local y lo nacional es el papel que juegan los partidos políticos. En ello, Damonte es el más explícito, sugiriendo que la movilización en Chuquiña estaba conectada al Movimiento al Socialismo (en ese momento en la oposición). Para el caso de Cajamarca, se dijo que los activistas dentro de los movimientos antimineros estaban también involucrados con partidos políticos que iban desde grupos de ultraizquierda hasta grupos de centro (especialmente los campesinos). De esto rescatamos una cierta lectura de la presencia de partidos (o grupos partidarios) políticos; pero, lo que definitivamente no encontramos es algún tipo de información y análisis de las conexiones —si es que

ellas existen— entre las estrategias de los partidos políticos, las estrategias de quienes participan y promueven las movilizaciones y las estrategias de aquellos que buscan desarticular los movimientos sociales. Nos parece un campo que requiere mayor estudio y reflexión en forma urgente.

#### 4. Desintegración

No obstante el crecimiento sostenido del PBI de países latinoamericanos en los últimos 15 años, asociado al *boom* de exportaciones mineras, la aspiración de que países como el Perú, Ecuador, Bolivia o Guatemala —o, para ser más rigurosos, sus pobladores pobres de sierras rurales— dejen de ser “mendigos sentados en bancos de oro” parece todavía lejana. El reto permanente para los gobiernos nacionales, regionales y locales, así como para las empresas transnacionales, las agencias de la comunidad internacional y las propias organizaciones de base, ha sido el de pensar y negociar las estrategias de desarrollo rural que involucren los territorios de las poblaciones que tienen más que perder cuando las estrategias de desarrollo nacional se basan en la explotación de los recursos naturales a gran escala.

La reestructuración de la propiedad del capital natural, es decir, su traspaso a la gran empresa privada, no ha garantizado un cambio del rol de la minería en la dinamización y el desarrollo de las economías locales y regionales. El hecho de que la mayor parte de la explotación minera esté en manos de un gran capital transnacional cuyas características tecnológicas y de gestión son diferentes, no parece haber generado mayor cambio respecto de lo que la minería aportó bajo mayoritaria propiedad estatal, o bajo regímenes de mediana y pequeña explotación minera en el pasado.

A consecuencia de la nueva ola de inversión minera, las forma de propiedad, el valor de la tierra, la intensidad en el uso de los suelos y la distribución vertical de los patrones de uso de tierras han sido irreversiblemente modificados; también las estructuras sociales locales han sido trastocadas. Disputas legales y tensiones

internas dentro de los territorios rurales concernidos han seguido al avance de un capital minero que ha acelerado la implantación de una economía de mercado sobre todo improvisada y caótica. Al “desorden en la distribución socio-espacial de los derechos de uso de tierra” (Bridge, 2002), le ha seguido una ‘revalorización’ del recurso tierra a veces explosiva e inmanejable como producto tanto de la ausencia de mecanismos que habiliten mercados de tierras más ordenados como de la presencia de restricciones económicas e institucionales que limitan el acceso de los comuneros a nuevo capital natural (tierra u otros). En un contexto medioambiental en que el porcentaje de tierras de uso agrícola es pequeño y uno histórico, donde la población rural que tradicionalmente ha estado acostumbrada a un uso vertical de la tierra, con sistemas de producción y estrategias de vida diversificados de acuerdo a su acceso a diversas zonas ecológicas, ha tenido un acceso limitado a las tierras más productivas, los temas de reforma agraria y los de redistribución de activos se ponen en agenda.

Ello supone que los cambios de actividad económica rural con base en las economías campesinas son difíciles de lograr si es que el motor que motiva tal cambio es únicamente la venta de terrenos y la disposición de un dinero que fácilmente puede ser volátil en el tiempo o cuya inversión en capital humano no necesariamente genera retornos en el corto plazo. En esto, las similitudes entre los hallazgos de Bury y Damonte son llamativos. Ambos concluyen que a raíz de la expansión minera:

- Las comunidades perdieron acceso a ciertas zonas de producción o vieron su acceso drásticamente reducido.
- Los efectos de la pérdida de acceso a estas zonas de producción en los medios de vida de la población comunal van desde la intensificación agraria hasta la “descampesinización”.
- Los fondos de compensación recibidos por los comuneros desplazados o quienes vendieron sus terrenos, se utilizaron

en poco tiempo y tuvieron poco impacto en el bienestar familiar.

- La migración del campo a la ciudad de personas afectadas por la minería ha sido, en general, un proceso complicado y a veces doloroso.

El efecto de la minería en las estructuras sociales y políticas locales es también significativo; de nuevo, este tema salta a la vista en los capítulos de Damonte y Bury. Luchas internas por recursos y liderazgos se exacerbaban frente a la posibilidad de derivar beneficios económicos de la negociación con las empresas. Peleas sobre quién trabajaba para la empresa y quién no, o quién vendía servicios a la empresa y quién no, se volvieron comunes. Conflictos personales, comunales e intergeneracionales se suceden, reorganizando las estructuras locales, pero también las formas cómo diversas organizaciones de la sociedad civil se interrelacionan entre sí, y luego cómo estas se vinculan con el Estado central y la gran empresa privada. En términos generales el ambiente en las comunidades se ha vuelto más movido, más inseguro y mucho más teñido de chismes de corrupción respecto a cuando la empresa no estaba (ver conclusiones parecidas para el caso de Piura en Bebbington et al., 2007). Mientras tanto los programas y proyectos sociales que las empresas llevan a cabo en estas comunidades parecen tener poco impacto positivo, a la vez que profundizan (sea por accidente o por diseño) algunas de las tendencias desarticuladoras en las comunidades.

Otra área de análisis y de acción es el de la comunidad (campesina o indígena) ya no solo como espacio de articulación de individuos que comparten recursos comunes sino también espacio de representación política y de base para los movimientos sociales. En la discusión sobre el futuro del área rural, el tema de preservación de un ambiente natural que permita a los individuos rurales seguir desarrollando sus tradicionales estrategias de vida mediante el acceso a tierra y agua (*i.e.*, a través de la agricultura y la ganadería

extensiva) o de otras no tan tradicionales (como la forestería comercial o el ecoturismo) no está solo; lo acompaña la cuestión de qué tipo de derecho de propiedad sobre el medio natural es el que permite una explotación más eficiente y sostenible de tales recursos. Aquí, un régimen de propiedad individual se contrapone a uno comunitario, tanto en lo que corresponde a propiedad sobre la tierra como sobre los activos físicos y monetarios que se derivan de la venta de recursos comunes.

No obstante la opinión de algunos sobre la relativa eficiencia de regimenes comunitarios, lo que es cierto es que, frente a la ausencia de reglas claras para las transacciones de mercado o cuando el riesgo de exclusión es alto, el argumento comunitarista gana espacio cuando se muestran casos donde la propiedad común es la única que facilita la eventual no extradición del espacio rural. En esta ambivalencia del debate sobre la comunidad, la eficiencia y sostenibilidad económica de un régimen de propiedad se subyuga a la necesidad de un espacio político común que asegure representatividad y capacidad de negociación de grupos en situación de desventaja, o inclusive de un espacio de ejercicio ciudadano. Dicho esto, también pareciera que algunas comunidades se encuentran dispuestas a sacrificar estos espacios —como Damonte sugiere cuando nota que en la comunidad de Carhuayoc, los comuneros llegaron al punto de considerar la disolución de la comunidad como paso previo para recibir pagos de la empresa minera.

Del mismo modo, en Cajamarca hay comunidades que han firmado convenios con la empresa minera en la cual entregan sus derechos de agua a la empresa y la empresa se compromete a financiar un proyecto de reasentamiento de la comunidad en tierras regadas de la costa. La minería sin lugar a dudas provoca cambios institucionales, debilita a las comunidades, pero en algunos casos pareciera que las propias comunidades participan activamente en este proceso de debilitamiento y eventual desaparición institucional.

## 5. Reterritorialización (redefinición territorial)

Las distintas contribuciones contenidas en este volumen, nos sugieren varias pautas importantes para pensar el proceso de redefinición territorial que viene inducida por la expansión de la industria minera. La primera tiene que ver con la modificación de las bases sobre las cuales se conforman los territorios en espacios rurales. Estas bases se refieren a:

- El medio natural (el espacio físico) que posibilita el desarrollo de las estrategias de vida de las poblaciones locales y las estrategias de desarrollo local, pero que también es un espacio sobre cuyo uso compiten las empresas mineras —precisamente por contener recursos explotables altamente rentables— junto al Estado que busca el mayor valor agregado que ese espacio físico puede generar, dadas las rentas que de ello deriva;
- La estructura institucional que determina los límites verticales y horizontales tanto para la propiedad como para el derecho de uso del suelo y subsuelo y de acceso a los recursos que el medio natural contiene, es decir, quién accede, a qué y en qué condiciones;
- Las relaciones sociales que emanan de la convivencia y del compartir espacios comunes. Estas relaciones subyacen el proceso de construcción social del territorio, tal como Schejtman y Berdegú (2004) sugieren.

Los casos presentados por Bury, Damonte y Bebbington et al. muestran que la explotación minera a gran escala trastoca, cambia y hasta remueve estas bases por efecto; en pocas palabras, reestructura el territorio como resultado. Holtz-Giménez nos presenta una mirada un poco diferente y sugiere que la reestructuración territorial es por iniciativa. Todos ellos, de una manera u otra se refieren a una cierta condición de fragilidad institucional, sea porque existen vacíos legales (como en el caso peruano) o porque hay una intencionalidad de cambiar la estructura misma (como en varios casos), la cual,

junto a la tensión propia y el eventual conflicto que introduce la expansión minera, provoca un estado de incertidumbre que caracterizaría a los procesos de redefinición territorial.

De esta forma, los procesos de reterritorialización van junto a los de cambio institucional y los de desintegración comunal. En los casos presentados, el avance en la reestructuración institucional para facilitar la introducción del capital financiero minero, no ha estado acompañado de una reestructuración (y en varios casos la necesaria creación) de una estructura institucional que reduzca el deterioro ambiental y provea los mecanismos de mitigación y compensación necesarios para garantizar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las estrategias de vida de las poblaciones rurales en zonas con potencial minero. A consecuencia, se introducen elementos adicionales de vulnerabilidad, se genera movilización, se atrae actores nacionales e internacionales preocupados por estos temas.

La segunda dimensión tiene que ver con un efecto de traspase de escalas que la explotación minera provoca en la reterritorialización. De espacios locales, generalmente segmentados, y con escasas formas institucionalizadas de interacción, una vez introducida la gran minería, se pasa a formas territoriales continuas que articulan no solo los espacios rurales directamente afectados (por ejemplo, comunidades campesinas contiguas) sino además espacios conexos que, estando en el área rural o en la urbana, de una manera u otra se sienten afectadas. El capítulo de Bebbington et al. documenta muy bien este fenómeno.

Por la geografía de montaña, este es un tema que traspasa las comunidades directamente afectadas, involucra al conjunto del área rural y concierne al ámbito regional. La dependencia de poblaciones rurales y urbanas relativamente alejadas de zonas rurales mineras respecto de los servicios ambientales que estos territorios generan —y que los capítulos sobre Cajamarca ilustran bien en el caso de producción de agua potable en la sierra norte peruana— sugiere un nuevo espacio de análisis y de intervención. Este vuelca la atención a la idea de un territorio “regional” el cual, más allá de

criterios administrativos para la gestión del territorio, se fundamenta en una concepción ecológico-económica del territorio regional (ver también Bebbington et al., 2007, para el caso de Piura).

Una tercera dimensión de la reterritorialización tiene que ver con la transnacionalización. Aquí, lo que los capítulos de Damonte y de Bebbington et al. dejan ver es que los cambios que se inducen en los territorios —y las resistencias que se generan frente a tales cambios— no son solo el producto ‘natural’ de la implementación de una estrategia de desarrollo minera que impacta espacios locales. Son también el resultado de cómo los actores locales conciben *su* territorio rural y de las visiones que los actores no locales y los internacionales tienen sobre cómo debería ser este y, por tanto, de las estrategias de desarrollo rural deseables para hacer tangibles tales visiones.

O sea, si bien los territorios de altura han dejado de ser espacios netamente “locales” desde hace mucho tiempo, la presencia de lo internacional en la vida cotidiana, en las estrategias de vida, en las formas de hacer y pensar política, y en el paisaje físico, se ha vuelto mucho más evidente con la llegada de la nueva minería. En este sentido, los territorios influidos por la minería se han transformado en espacios “glocales” —no solo desde el punto de vista de activistas más o menos cosmopolitas, sino también para la población en general.

Como resultado de estas tres dimensiones de reterritorialización, y parafraseando a Escobar (1995), nos resulta evidente que estos territorios se han vuelto más “híbridos” que nunca. Este proceso de hibridización muestra la amalgama entre lo campesino-indígena y lo minero; entre escalas; entre lo local y lo global; entre circuitos económicos locales y otros circuitos internacionales; entre distintas autoridades y fuentes de poder. Aquí radica la esencia de la reterritorialización provocada por la gran minería en espacios rurales: la producción de territorios muchísimos más híbridos que antes.

En cierto sentido, los conflictos alrededor de la minería pueden entenderse como conflictos sobre quiénes van a gobernar este proceso de hibridización y sobre qué tipo de territorio híbrido es

que se va a construir. De hecho, en la medida en que el mismo concepto de “territorio” trae consigo una cierta noción de control y gobernanza (Sack, 1986), las redefiniciones de territorio que se están dando constituyen redefiniciones de la gobernanza de áreas rurales. Que estas redefiniciones sean peleadas no debe ser gran sorpresa. Las inversiones mineras en zonas de altura casi siempre se dan en áreas que nunca han estado plenamente incorporadas en el Estado-nación que las contienen (aunque ello sea solo cartográficamente). Siempre se han ubicado en las fronteras de un modelo clásico (y unitario) de gobernanza y donde los poderes de un Estado nacional, el de autoridades indígenas tradicionales y el de caciques y gamonales locales han sido relativos y entremezclados en procesos de flujo y reflujo. Por ser territorios conformados sobre la base de fronteras culturales e institucionales, el alcance de la hibridación en el área rural dominada por la minería no es claro y esto provoca que sean espacios inciertos, con el correlato de que su gobernanza también es incierta. Esto puede ser interpretado como un punto de quiebre en la construcción de naciones y países, pero también puede ser entendido como un fenómeno económico-político espacializado en el cual la construcción de nación y país se da de formas poco convencionales y del cual poco conocemos.

La nueva expansión minera parece indicar que, después de siglos de ambivalencia y negligencia, por fin, el Estado central —y el capital internacional— quieren borrar estas fronteras y producir estructuras nacionales con territorios locales incorporados a circuitos económicos internacionales. Pero, además quieren hacerlo con mucha rapidez, a veces a través del uso de la fuerza (otra vez) y sin una negociación previa sobre los términos en lo que se dará esta incorporación. Diera la impresión de que son muchos los actores quienes quieren resistir esta incorporación y esta forma de reterritorialización, y quienes no muestran certeza respecto de querer entregar buena parte de la gobernanza de los espacios locales a actores externos y muchas veces privados. En este sentido, si la reterritorialización significa un reordenamiento de la gobernanza del espacio, los conflictos alrededor de la minería no son, real-

mente, conflictos mineros, son más bien conflictos de gobernanza entre centros y periferias, conflictos sobre las relaciones de escala y de poder que finalmente regirán la estructura política y administrativa del país. Nuestro temor como analistas, fundamentado en antecedentes históricos, es que frente a dicha resistencia, los poderes centrales terminarán utilizando la fuerza autoritaria para imponer el orden territorial que este nuevo ciclo económico requiere. Si es ese el resultado, y considerando que quienes están en la resistencia son sobre todo poblaciones campesinas históricamente excluidas del proceso de generación de ciudadanía nacional,<sup>4</sup> sabremos que aquellas partes de la población para quienes tanto tiempo demoró la aparente llegada de la ciudadanía, aun no serán ciudadanos verdaderos de los Estados que pretenden servirlos.

## **6. Hacia una ecología política de la transformación territorial en áreas afectadas por las industrias extractivas: elementos para una agenda**

Para la mayoría de conocedores que han observado la expansión del sector minero en los últimos años, lo discutido en este libro es solo el inicio de un fenómeno de mayor envergadura. Si Perú y Chile fueron los primeros puntos de la expansiva global de la industria minera en Sudamérica a inicios de los 1990 (Bridge, 2004), Centroamérica es un nuevo punto de frontera para la próxima década (Bridge, comunicación personal 2005). Más aún, si a esto se añade el probable crecimiento exponencial en la extracción de hidrocarburos en Perú y la expansión sostenida en Ecuador y Bolivia, sería casi imposible ignorar la centralidad del desarrollo de industrias extractivas para cualquier discusión sobre desarrollo rural y territorio.

Esta expansión permanente establece claramente una serie de agendas políticas. Para los gobiernos centrales y regionales, el reto

---

4. Véase López (1997) para el caso peruano.

está (o debería estar) en descubrir cómo gobernar dicha expansión, de forma tal que se reduzca la posibilidad de conflicto, al mismo tiempo que se garantice la protección de derechos humanos y de activos ambientales tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Parte de esta agenda necesariamente tendrá que girar en torno a la construcción de un esquema fiscal que, lejos de ser diseñado en función de facilitar la expansión de la frontera minera *a cualquier costo*, esté más bien orientado a favorecer las necesidades tanto nacionales como regionales de inversión pública y a garantizar el buen manejo de varios patrimonios nacionales (del suelo, del subsuelo y del agua). Esto significa un diseño cuidadoso de regalías y de impuestos que, junto con mecanismos adecuados de transferencia, asegure que el ingreso generado se traduzca en recursos frescos para financiar estrategias de desarrollo regional que contrarresten los efectos perversos de centralismo crónico que caracteriza a la mayor parte de economías latinoamericanas. Este punto en la agenda política va más allá de la simple relación entre minería, sistema impositivo y crecimiento económico. Como una cuestión urgente de política pública, el reto central es el de pensar en formas de gobierno del sector minero que ayuden a la consolidación de las todavía frágiles democracias latinoamericanas.

Otro elemento clave de una agenda política giraría alrededor del fortalecimiento de capacidades para planificar tanto la expansión minera, como el uso de los ingresos que esta genera. Por un lado esto pasa por la urgente tarea de crear sistemas de zonificación ecológica con trincheras —es decir, una zonificación que pueda resistir cualquier intento, de una empresa o un Ministerio de Energía y Minas, de cambiar lo planificado con tal de permitir una explotación minera más. Ello supone que los organismos que rigen para la protección del medio ambiente (los ministerios de Medio Ambiente y sus similares), así como sus instrumentos legales, tengan el poder suficiente dentro de la estructura del Estado para garantizar una expansión minera técnica y democráticamente planificada. Por otro lado, el fortalecimiento institucional implica

un esfuerzo grande por construir capacidades en gobiernos locales y regionales para usar —otra vez, de una manera técnica y democráticamente legítima— los nuevos recursos fiscales a los cuales acceden de la minería.

Tales son algunos de los elementos de nuestra visión sobre una agenda en el campo de la política. En el campo de la investigación los retos no son menores, particularmente en el área de ecología política. En esta última sección pasamos, entonces, a sugerir de forma esquemática cuáles podrían ser elementos de una ecología política de la minería y la transformación territorial en América Latina. Cabe señalar que algunos de estos elementos se encuentran más desarrollados en los distintos capítulos y también que, siendo la agenda grande, el desarrollo de estos elementos solo podrá darse a través de redes multidisciplinarias de investigación que además reúnan investigadores con actores sociales.

Los elementos de agenda que se proponen parten de dos supuestos extensivamente elaborados en los diversos capítulos de este libro: (i) que la minería está transformando las economías políticas de territorios tanto nacionales como subnacionales; y, (ii) que en este proceso de transformación se encuentran operando actores a distintas escalas y desde diferentes posiciones en el mundo. Estos dos supuestos nos llevan a tres tareas empíricas. Primero, se necesita entender la naturaleza de estas transformaciones; segundo, se requiere entender los actores como tales; y tercero, se tiene que analizar cómo funcionan las relaciones de escala en la transformación de territorios regionales.

### ***Analizando transformación***

Gran parte de los argumentos políticos sobre la minería —y sus implicaciones para el desarrollo y la democracia en América Latina— giran alrededor de discrepancias sobre los efectos que los proyectos mineros han tenido en sus zonas de influencia y las regiones colindantes. Hay discrepancias sobre sus efectos en la economía local, en la pobreza, en las instituciones públicas y

políticas, en los derechos humanos, en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local. En su conjunto, estos puntos de discrepancia reflejan diferencias —a veces profundas— sobre la interpretación que tienen los distintos actores sobre las formas de transformación territorial que han estado desencadenadas por la minería. La misma existencia de estas discrepancias, que muchas veces terminan endureciéndose en posiciones encontradas y en conflictos permanentes, demuestra la ausencia de información medianamente analítica e independiente sobre las transformaciones en proceso. Ausente esta información, la posibilidad de tener debates racionales y propositivos sobre minería, desarrollo y democracia se trunca. Sin tales debates la posibilidad de acercarse a la resolución de conflictos también queda muy distante.

En este contexto, la tarea de documentar las distintas dimensiones de la transformación territorial y luego analizar las relaciones causales en juego, es realmente urgente. Esta documentación tiene que ser multidimensional y, por lo tanto, multidisciplinaria, sin reducirse a tocar temas solo de pobreza y medio ambiente. Dicho esto, un trabajo fundamental es la documentación de cambios ambientales. De hecho, varios de los capítulos de este libro señalan que un tema recurrente en los conflictos minería-desarrollo son los argumentos sobre quién tiene la verdad respecto de los impactos medioambientales de la minería y sobre la validez de tipos de conocimiento. Si bien el trabajo académico no evade la insinuación de que está influenciado por intereses políticos, temas como el cambio ambiental ocurrido en áreas afectadas por la minería, de los factores causantes de tales cambios, de las formas en que estos impactan las estrategias de vida de las poblaciones locales y el propio desarrollo local, constituyen áreas promisorias para la generación de conocimiento. Además, y como por ejemplo muestran los estudios realizados por la Universidad de Saint Louis sobre el estado de salud de los habitantes de La Oroya en Perú, tal tipo de investigación es de directa utilidad para la formulación de políticas. Lo propio sucedería con estudios sobre agua, suelos y calidad de aire.

Otra tarea es la documentación de cambios en los medios de vida en las zonas mineras y en las relaciones sociales dentro y fuera de las comunidades. Para este tema los capítulos de Damonte, Bury y Bebbington et al. dan ciertas pautas analíticas y metodológicas; además sugieren la importancia de un análisis fino de cambios en los medios de vida para entender las respuestas sociales y políticas de las poblaciones locales. Sobre esta base se hace además necesario documentar los cambios en la distribución social de activos, ingresos y oportunidades económicas pues, como señala Gorruti (2004), son los impactos redistributivos de la minería los que generan el mayor malestar. En el capítulo 5 se toca el tema, pero a este nivel queda mucho por hacer.

Otro campo clave es el análisis de las transformaciones institucionales. En lo que corresponde a cambios en las instituciones de tenencia de, y acceso a, los recursos, Bury nos da pautas en el capítulo 2, pero cambios en otras instituciones también merecen un análisis fino. Aquí lo menos estudiado y quizás de mayor importancia para la legitimidad del Estado —y para la democracia— son los cambios que se dan en las instituciones judiciales, policiales y de periodismo en las zonas mineras. Siendo la calidad de estas instituciones clave para las posibilidades de existencia de una esfera pública local y regional en la cual se debata la acción e impactos de la minería, de la dirección de sus cambios dependerá el malestar o el apoyo que se genere en la población y las organizaciones sociales.

Finalmente están también los cambios en las instituciones de gobierno. En los conflictos sobre la minería se hace muchas acusaciones —desde las empresas, el gobierno central y las organizaciones sociales— de que en las zonas mineras los gobiernos locales “se politizan” y/o “se venden”. Ante un tema tan sensible, es importante entender cómo la presencia tanto de la minería como de los movimientos sociales lleva a cambios en las relaciones entre el gobierno local, los partidos políticos y los actores económicos y sociales.

La tarea de documentar la transformación es, entonces, amplia. Sin embargo, no termina con la documentación. Toda esta materia

empírica luego debe servir de base para analizar las relaciones causales en juego, particularmente para analizar las relaciones causales entre minería y desarrollo vistas desde distintas conceptualizaciones del desarrollo. Hasta ahora, los argumentos en pro y en contra de la minería se basan en supuestos sobre las relaciones entre minería y desarrollo. Una documentación sistemática de las transformaciones territoriales daría la base para probar y/o rechazar estos distintos supuestos. Mientras tanto, para la teoría, serviría como base para analizar la relación entre economía política y agencia humana en la producción de territorios.

### *Analizando actores*

La necesidad de entender los actores se vuelve evidente al momento de reconocer lo poco que se sabe —más allá de lo anecdótico— de cómo ellos operan y actúan. Así, se conoce muy poco de la cultura y el accionar de las empresas mineras, sean nacionales o internacionales; tampoco se sabe mucho del funcionamiento de las entidades públicas involucradas: los ministerios de Energía y Minas, de Economía y Finanzas y los gobiernos locales. No nos sorprende que los diversos capítulos tengan poca información sobre las dinámicas internas de las empresas privadas pues ellas son menos accesibles, excepto para los consultores quienes son contratados por las propias empresas y cuyo uso de información está totalmente limitado por acuerdos de confidencialidad. Si algo resulta de conversar con tales consultores en medio de cenas ejecutivas, el pedazo de información que se filtra carece de validez científica y es empíricamente insuficiente para entender a las empresas y sus actores. Reconociendo tal dificultad, lo poco que dejan entrever los diversos capítulos permite apreciar que las acciones y dinámicas de las empresas son perceptibles una vez que se toman en cuenta las corrientes divergentes que se observarían entre las empresas y los actores al interior de ellas. En otras palabras, conocer los términos generales de los planes financieros no ayuda a entender las formas en las cuales las compañías afectan los procesos territoriales. Una observación

similar se puede efectuar en torno al Estado. De todas maneras, el estudio de las dinámicas internas de las empresas y del Estado es una tarea analítica urgente e importante.

Aunque se entiende algo más del accionar y la cultura de ciertas organizaciones que operan dentro de los movimientos sociales, tampoco existe mayor información sobre los movimientos sociales en sí mismos. Aquí existe otro problema y es que los compromisos normativos de ciertos autores limitan hasta cierto punto sus capacidades de revelar en forma escrita y analítica información crítica sobre los movimientos sociales, con lo cual se sigue manejando conceptos sesgados —quizá románticos— de estos movimientos. Esto es particularmente cierto para casos a nivel local y nacional, pues a nivel internacional parece haber mayor análisis crítico de los movimientos transfronterizos y de las organizaciones internacionales.

Finalmente, aunque poco a poco se amplía nuestro entendimiento del accionar del Banco Mundial, tanto a nivel general como con respecto a las industrias extractivas, este conocimiento sigue siendo escaso y las secciones del Banco Mundial que son más importantes para la minería (la Corporación Financiera Internacional y la Asociación Multilateral para Garantizar las Inversiones) son, de lejos, lo que menos se conoce. Lo propio puede decirse para entidades como la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano del Desarrollo cuyas inversiones en infraestructura prometen crear condiciones propicias para grandes inversiones, incluidas las mineras. El capítulo de Holtz-Giménez es el que más claramente plantea la importancia central del Grupo del Banco Mundial en el desarrollo minero en Guatemala y sugiere que, para entender el papel que esta organización ha jugado, su estrategia de expandir la industria extractiva tiene que ser juzgada a partir del marco mayor respecto de lo que el Banco busca lograr en este país. Sin embargo, los análisis del caso guatemalteco y el de la IFC en Cajamarca se dan solo a nivel de la organización como un todo. En este volumen se explora muy poco las disputas y las redes en torno a la minería dentro de estos organismos internacionales y

cómo estos influyen en los resultados en espacios locales. De la misma forma, hay mucho por investigar para entender cómo es que en la práctica tanto la IFC como el IBRD logran presencia local, con quiénes trabajan, por qué y con qué tipo de información y cómo todo esto influye en la forma en que estas organizaciones impactan el desarrollo local.

Dado que se requiere pasar de descripciones generales y hasta anecdóticas a un profundo entendimiento de la estructura, racionalidad y formas de operación de los actores involucrados en la relación minería y desarrollo, parece que el tipo de enfoque metodológico que mejor se adecua para tal tarea es un trabajo etnográfico, es decir, desde dentro de las organizaciones. En tal trabajo, algunas de las preguntas más importantes serían las siguientes: ¿Cómo forman estos actores sus interpretaciones de “lo que hay que hacer” y cómo forman sus estrategias para hacerlo? ¿Cómo se hacen presentes a nivel nacional y subnacional; qué lazos construyen, cómo, por qué y con qué efectos? ¿Qué tipo de debates sobre industrias extractivas se dan dentro de estas organizaciones y cómo es que ciertas opiniones se vuelven dominantes? Respuestas adecuadas a estas preguntas permitirán dejar de lado estereotipos e ideas preconcebidas de la relación entre estos actores y la economía política del desarrollo.

### ***Analizando relaciones de escala***

Otro elemento de una agenda de investigación es el análisis de las relaciones entre escalas, es decir, el análisis de actores y procesos teniendo en cuenta las diversas escalas de espacio y tiempo en las cuales se suceden. Este tema es central y presenta dos matices respecto de contribuciones anteriores.

Primero, pensar en escalas de análisis no debería traducirse en un simple retorno a la cadena de explicación de Blaikie (1985), pues dicho modelo tiende a crear un sentido de influencia unidireccional: de lo global hacia lo local. Deja también la sensación de que actores locales y nacionales no pueden hacer mucho frente a

actores más poderosos que operan a escalas mayores. En la propuesta analítica planteada aquí se busca evitar esta trampa y pasar a considerar a los actores “locales” y “nacionales” con capacidades para lograr construir redes, alianzas y discursos que les permiten influir en otros actores aparentemente más poderosos.

Segundo, es importante entender las transformaciones locales no solo como consecuencias de una economía política globalizada. Esto no quiere restar importancia al hecho de que lo global está casi siempre presente en la extracción de recursos naturales a nivel industrial, sea a través del capital de inversión, los mercados para los productos extraídos o las empresas participantes en la extracción de los recursos. Tampoco desdeña la presencia de lo global en los movimientos sociales que surgen en respuesta a la actividad extractiva, sea a través del flujo de fondos de solidaridad de individuos u organizaciones hacia los grupos locales, de vínculos entre los movimientos locales y los actores internacionales, o a través de las ideas que circulan acerca de formas de gobernanza alternativas a aquellas que se vienen dando con la industria extractiva. Lo que se plantea es que es de igual importancia investigar hasta qué punto los actores y los procesos “locales” influyen en otras escalas, o sea, considerar hasta qué punto las relaciones de causalidad también van desde lo local hasta lo nacional y lo internacional.

Dos temas pueden servir para ilustrar la necesidad de conectar escalas. Aunque sea como hipótesis, se puede sugerir que existe la posibilidad de que las campañas internacionales de incidencia llevadas por los movimientos locales —aun cuando estos se den en coordinación con otros— puedan terminar modificando los discursos globales de varios tipos de actores internacionales. Otro tema, vital en una ecología política de la minería, sería el análisis de las consecuencias que tienen las transformaciones territoriales locales en otras escalas mayores. La dimensión más obvia aquí es lo ambiental, subrayando la necesidad de realizar un trabajo que intente, por ejemplo, analizar las relaciones entre transformaciones en zonas mineras y la disponibilidad y calidad de agua en otras áreas, o entre transformaciones locales y cambios en sistemas climáticos.

Pero además, hay una dimensión político-económica que también merece análisis. Por ejemplo, se ha dicho que la transformación que se ha dado en Cajamarca a raíz de la Minera Yanacocha ha sido de mucha importancia para la CFI como accionista, es decir, que la CFI se ha beneficiado a tal nivel de esta inversión que ha podido financiar otras actividades de la corporación que de otra manera hubieran sido imposibles. Escenarios parecidos se puede imaginar para empresas privadas quienes, ganando tanto a raíz de ciertas inversiones que generan transformaciones territoriales, generan el capital y la experiencia necesaria para proceder con otras inversiones en otros territorios, como parece ser el caso de la Minera Yanacocha que habría permitido que Minas Buenaventura abra nuevas inversiones mineras en otras partes del país.

Finalmente, para concluir subrayamos una vez más la gran necesidad de analizar a las localidades no como entes aislados. De entenderlas como parte de un sistema que conecta diversas escalas y contiene a diversos actores depende la capacidad que tengamos de hacer análisis rigurosos y de generar teorías acertadas. Ello también es aplicable en el ámbito de la política pues cuestiona la difundida estrategia de ministerios y de empresas mineras de insistir en discutir los procesos de expansión minera mina por mina y no como parte de redes de territorios y circuitos económicos interconectados. Es esta conversación mayor, multiescalar, que hará posible una cabal comprensión y la mejora de las relaciones entre minería, desarrollo y democracia.

## BIBLIOGRAFÍA

- ABERCROMBIE, T. A.  
1998 *Pathways of Memory and Power: Ethnography and History Among an Andean People*. Madison, WI.: University of Wisconsin Press.
- ALBÓ, X.  
2002 *Pueblos indios en la política*, vol. 55. La Paz: Plural Editores y CIPCA.
- ÁLVAREZ, S., E. DAGNINO y A. ESCOBAR (eds.)  
1998 *Cultures of Politics, Politics of Cultures: Re-visioning Latin American Social Movements*. Boulder: Westview.
- ARANA, M.  
2002 *Resolución de conflictos medioambientales en la micro-cuenca del río Porcón, Cajamarca 1993-2002*. Tesis para optar el grado de maestría en Sociología de la PUCP.  
2004 "Retos y lecciones de la crisis del Quilish para la empresa minera", en *Grufides*, artículo N° 53. Cajamarca: Grufides.
- ARIAGADA I., y MIRANDA F. (eds.)  
2005 *Capital social y programas de superación de la pobreza: aprendizaje de las experiencias nacionales*. Santiago: United Nations Commission on Latin America.
- ASAD, T.  
1973 *Anthropology & the Colonial Encounter*. Londres: Ithaca Press.
- ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL/IEE  
2005 *Resultados preliminares de la encuesta opinión pública sobre el proceso participativo en Cotacachi*. Mimeo. IEE.
- ASCENDANT COPPER CORPORATION  
2005 *Amended and Restated Preliminary Prospectus, Initial Public Offering, August 26, 2005*. Ascendant Copper Corporation.

- 2005b "Ascendant Copper to Replace its Recently Destroyed Medical Clinic in Ecuador". Comunicado de prensa Vancouver, Canadá. 13 de diciembre de 2005.
- ASHLEY, C.  
2000 "Applying Livelihood Approaches to Natural Resource Management Initiatives: Experiences in Namibia and Kenya", en *ODI Working paper* N° 134. Londres: DFID.
- ASHLEY, C. y D. CARNEY  
1999 *Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experiences*. Londres: DFID.
- ASTE, J., J. DE ECHAVE y M. GLAVE  
2003 *Procesos multiactores para la coestión de impactos mineros en Perú. Informe final*. Lima: Eco, CooperAcción, GRADE.
- 2004 *Procesos de concertación y desarrollo en zonas mineras*. Lima: Eco, CooperAcción, Grade.
- AVINERI, S.  
1968 *The Social and Political Thought of Karl Marx*. Cambridge: Cambridge U.P.
- BAILY, S. L. y E. J. MIGUEZ  
2003 *Mass Migration to Latin America*. Wilmington: Scholarly Resources.
- BALLARD, C. y G. BANKS  
2003 "Resource Wars: The Anthropology of Mining", en *Annual Review of Anthropology* 32: 287-313.
- BANCO MUNDIAL  
1996 *World Development Report 1996*. Oxford: Oxford University Press.
- 1998 *Guatemalan Land Administration Project: Project Appraisal Document*. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- 2000 *World Development Report 1999*. Oxford: Oxford University Press.

- 2003 *Process Framework of Possible Adverse Impact on Communities Settled in the Western Highlands*. Washington D.C.: The World Bank Group: 67.
- 2005a *Country Assistance Strategy for the Republic of Guatemala*, Washington D.C.: The World Bank Group: 116.
- 2005b *Program Document for a first broad-based Growth Development Policy loan in the Amount of US\$ 100 Million to the Republic of Guatemala*. Washington D.C.: The World Bank Group: 54.
- 2005c *Project Completion Note: Western Altiplano Natural Resources Management Project (Loan 7175 - GU)*. Washington D.C.: The World Bank Group: 6.
- 2005d *Riqueza y sostenibilidad: dimensiones sociales y ambientales de la minería en el Perú. Unidad de Gestión del País-Perú. Desarrollo ambiental y social sostenible, región Latinoamérica y El Caribe*. Washington D.C.: Banco Mundial.
- 2006 *Project to Support the Rural Economic Development Program*. Washington D.C.: The World Bank Group: 101.
- BARBIER, E.  
1994 "Natural Capital and the Economics of Environment and Development", en Jansson A. M. Hammer M. Folke C. y Costanza R. (eds.), *Investing in Natural Capital: the Ecological Economics Approach to Sustainability*, p. 291-322. Washington, D.C.: Island Press.
- BARRANTES, R.  
2005 "Minería, desarrollo y pobreza en el Perú: o de cómo todo depende del cristal con que se mire", en R. Barrantes, P. Zárate y A. Durand, *Té quiero pero no: minería, desarrollo y poblaciones locales*, pp. 17-79. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- BARRANTES, R., P. ZÁRATE y A. DURAND  
2005 *Té quiero pero no: minería, desarrollo y poblaciones locales*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

BAVISKAR, A.

- 1995 *In the Belly of the River: Tribal Conflicts over Development in the Narmada Valley*. Delhi y Nueva York: Oxford University Press.

BEBBINGTON, A.

- 1999 "Capitals and Capabilities: a Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty", en *World Development* 27(12): 2021-2044.
- 2000 "Reencountering Development: Livelihood Transitions and Place Transformations in the Andes", en *Annals of the Association of American Geographers* 90:495-520.
- 2002 "Geographies of Development in Latin America?", en G. Knapp (ed.), *Latin America in the 21st Century: Challenges and Solutions*, pp. 105-148. Austin: University of Texas Press.
- 2004 "Movements and Modernizations, Markets and Municipalities: indigenous federations in rural Ecuador", en R. Peet y M. Watts (eds.), *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*, pp. 394-421. Londres: Nueva York: Routledge.
- 2004 "NGOs and Uneven Development: Geographies of Development Intervention", en *Progress in Human Geography* 28(6): 725-745.
- 2005 "Donor-NGO Relations and Representations of Livelihood in Non-governmental Aid Chains", en *World Development* 33(6): 937-950.

BEBBINGTON, A. QUISBERT J. y TRUJILLO, G.

- 1996 "Technology and Rural Development Strategies in a Small Farmer Organization: Lessons from Bolivia for Rural Policy and Practice", en *Public Administration and Development* 16(3): 195-213.

BEBBINGTON, A., GUGGENHEIM, S., OLSON, E., y WOOLCOCK M.

- 2004 "Exploring Social Capital Debates at the World Bank", en *Journal of Development Studies* 40 (5):33-64.

- BEBBINGTON, A., H. CARRASCO, L. PERALBO, G. RAMÓN, J. TRUJILLO y V. TORRES  
1993 "Fragile Lands, Fragile Organizations: Indian Organizations and the Politics of Sustainability in Ecuador", en *Transactions of the Institute of British Geographers* 18(2): 179-196.
- BEBBINGTON, A., M. CONNARTY, W. COXSHALL, H. O'SHUAGNESSY y M. WILLIAMS  
2007 *Minería y desarrollo en el Perú, con especial referencia al proyecto Rio Blanco, Piura*. Lima: IEP, CIPCA, Oxfam internacional y Peru Support Group.
- BEBBINGTON, A., R. ROJAS y L. HINOJOSA  
2002 *Contributions of the Dutch Co-Financing Program to Rural Development and Rural Livelihoods in the Highlands of Perú and Bolivia: Synthesis Report*. Los Países Bajos: Stuurgroep.
- BECKER, D.  
1983 *The New Bourgeoisie and the Limits of Dependency: Mining, Class, and Power in 'Revolutionary' Peru*. Princeton: Princeton University Press.
- BEVERLEY, J.  
1999 *Subalternity and Representation: Arguments in Cultural Theory*. Durham: Duke University Press.
- BIEKART, K.  
2005 "Seven Theses on Latin American Social Movements and Political Change", en *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 79:85-94.
- BLAIKIE, P.  
1985 "The Political Economy of Soil Erosion". Harlow: Longmans.  
1999 "A Review of Political Ecology: Issues, Epistemology and Analytical narratives", en *Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie* 43 (3/4): 131-147.
- BLAIKIE, P. y H. BROOKFIELD (eds.)  
1987 *Land Degradation and Society*. London: Methuen.

BOOTH, D. (ed.)

1994 *Rethinking social development: theory, research and practice*. Harlow: Longmans.

BORRAS JR., S.

2006 "Redistributive Land Reform in 'Public' (Forest) Lands? Lessons from the Philippines and their Implications for Land Reform Theory and Practice", en *Progress in Development Studies*, 6(2): 123-145.

BRAUN, B. y N. CASTREE (eds.)

2000 *Remaking reality*. Londres: Routledge.

BRENNER, N.

2007 "A Thousand Leaves: Notes on the Geographies of Uneven Spatial Development", en R. Keil y R. Mahon (eds.), *The New Political Economy of Scale*. Vancouver: University of British Columbia Press.

BRIDGE, G.

2002 "Grounding Globalization: the Prospects and Perils of Linking Economic Processes of Globalization to Environmental Outcomes", en *Economic Geography*, 78: 361-386.

2004 "Mapping the Bonanza: Geographies of Mining Investment in an Era of Neoliberal Reform", en *The Professional Geographer*, 56(3): 406-421.

BROWN, L. A.

1991 "Place, Migration, and Development in the Third World: An Alternative View with Particular Reference to Population Movements, Labor Market Experiences, and Regional Change in Latin America". Nueva York: Routledge.

BRYANT, R.

1996 "Romancing Colonial Forestry: the Discourse of 'forestry as progress' in British Burma", en *The Geographical Journal* 162 (2): 169-178.

BRYANT, R. y S. BAILEY

1997 *Third World Political Ecology*. Londres: Routledge.

BURKE, A. y G. ALISON

1999 *Un informe sobre los impactos medioambientales, sociales y culturales de Minera Yanacocha S.R.L.* San Francisco: Project Underground.

BURY, J.

2002 "The Political Ecology of Transnational gold Mining Corporations and the Transformation of Livelihoods in Cajamarca, Perú", Tesis doctoral inédita, Department of Geography, University of Colorado-Boulder.

2004 "Livelihoods in Transition: Transnational Gold Mining Operations and Local Change in Cajamarca, Perú", en *Geographic Journal* 170(1): 78-91.

2005 "Mining Mountains: Neoliberalism, Land Tenure, Livelihoods and the New Peruvian Mining Industry in Cajamarca", en *Environment and Planning A* 37(2): 221-239.

BURY, J. y A. KOLFF

2003 Livelihoods, Mining and Peasant Protests in the Peruvian Andes, en *Journal of Latin American Geography* 1: 3-17.

CANADIAN PRESS

2005 *Ecuadoreans Burn Clinic at Canadian Copper mine. 'Outraged' Ascendant Says Staff Assaulted*. Canadian Press. Wednesday, December 14, (2005) Page B5.

CAO-IFC-MIGA

2005 *Report of the Independent Evaluation of the Mesa de Diálogo y Consenso CAO-Cajamarca*. Washington: CAO-IFC.

CARAVEDO, B.

1998 *El impacto social de las empresas mineras en el Perú*. Lima: Seguimiento Análisis y Evaluación para el Desarrollo.

CASTILLO, M. A.

- 1994 "A Preliminary Analysis of Emigration Determinants in Mexico, Central America, Northern South America and the Caribbean", en *International Migration* 32: 269-287.

CASTLES, S. y M. J. MILLAR

- 1993 *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Nueva York: Guilford Press.

CHACÓN, R.

- 2002 "Rondas campesinas y ecologismo popular en los tiempos de la segunda conquista de Cajamarca (provincias de Cajamarca y Hualgayoc, 1999-2001)". Ponencia II Encuentro Metropolitano de Jóvenes Investigadores Sociales (JOVIS) (2002) UNMSM.
- 2004 "Rondas campesinas de mujeres, participación social y política, y problemática ambiental en Bambamarca". X Seminario Permanente de Investigación Agraria. Lima: SEPIA, <http://www.sepia.org.pe/sepias/genero/05%20Sepia%20chac%F3n.pdf>

CHAMBERS, R.

- 1995 "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?", en *Environment and Urbanization* 7:173-204.

CHAMBERS, R. y R. CONWAY

- 1992 "Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century", en *IDS Discussion Paper* 296. Brighton: IDS.

CHANG, J.

- 1997 "Asociación Yanacocha Newmont Mining Corporation". Cajamarca.

CHASE, J. (ed.)

- 2002 *The Spaces of Neoliberalism: Land, Place and Family in Latin America*. Bloomfield, Connecticut: Kumarian Press.

CHATTERJEE, P.

- 1993 *Nationalist Thought and the Colonial World: a Derivative Discourse*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

CHIRIBOGA, M.

- 1987 "Movimiento campesino e indígena y participación política en Ecuador. La construcción de identidades en una sociedad heterogénea", en *Ecuador Debate* 13: 87-122.

CLARK, D., FOX, J., y TREAKLE, K.

- 2003 *Demanding Accountability: Civil Society Claims and the World Bank Inspection Panel*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

COLE, J.

- 1989 "Internal Migration in Peru", en *Geography Review* 3(1): 25-31.

COLEMAN, J.

- 1988 "Social Capital in the Creation of Human Capital", en *American Journal of Sociology* 94: 95-120.

CONACAMI

- 2000 "El rostro de la minería en las comunidades del Perú, Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería". Lima.

CONITE

- 2001a *Registered Foreign Investment*. Lima: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras, <http://www.mef.gob.pe/peruinv.htm>

- 2001b *Peru Legal Framework for Mining*. Lima: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras.

CONKLIN, B. y L. GRAHAM

- 1995 "The Shifting Middle Ground: Amazonian Indians and Ecopolitics", en *American Anthropologist* 97(4): 695-710.

CONWAY, D. y J.H. COHEN

- 2001 "Consequences of Migration and Remittances for Mexican Transnational Communities", en *Economic Geography* 74: 26-45.

- COOPER, F., A. ISAACMAN, F. MALLON, W. ROSEBERRY y S. STERN  
1993 *Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor, and the Capitalist World System in Africa and Latin America*. Madison: University of Wisconsin Press.
- COOPERACCIÓN  
1999 *Minería y comunidades, acción solidaria para el desarrollo*. Lima: CooperAcción.
- COOPERACCIÓN (ed.)  
1999 *Minería y comunidades*. Lima: CooperAcción.
- CORONADO, F.  
2003 "Santo Tomás: evaluación ambiental de la comunidad (Lago Uru Uru-Oruro)". 1.th ed. Oruro, Bolivia: Centro de Ecología y Pueblos Andinos-Programa de Investigación de Ingeniería Química.
- COSTANZA, R. y H. DALY  
1992 "Natural Capital and Sustainable Development", en *Conservation Biology* 6: 37-46.
- COWEN, M. y R. SHENTON  
1996 *Doctrines of Development*. Londres: Routledge.
- 1998 "Agrarian Doctrines of Development: Part 1", en *Journal of Peasant Studies* 25: 49-76.
- CROSSLEY, N.  
2002 *Making Sense of Social Movements*. Buckingham: Open University Press.
- CROWSON, P.  
2000 "International Mining: a Perspective" CEPMLP On-line Journal, Volume 4, <http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/article4-3.htm>

- CRUSH, J. S., A. JEEVES y D. YUDELMAN  
 1991 *South Africa's Labor Empire: a History of Black Migrancy to the Gold Mines*. Boulder: Westview press.
- DAGNINO, E.  
 2007 "Challenges to Participation, Citizenship and Democracy: Perverse Confluence and Displacement of Meanings" en A. Bebbington, D. Mitlin, S. Hickey (eds.) *Can NGOs Make A Difference? The Challenge of Development Alternatives*. Londres: Zed.
- DAMONTE, G.  
 2000 *Llegaron al pueblo: apuntes sociales sobre los proyectos mineros en el Perú*. Manuscrito.
- DECOIN  
 2005 "Communities in Intag Take Direct Measures Against Ascendant's Mining Facilities". [www.decoin.org](http://www.decoin.org) (visto el 10 de diciembre 2005).
- DEERE, C. D.  
 1990 *Household and Class Relations: Peasants and Landlords in Northern Peru*. Berkeley: University of California Press.
- DEERE, C. D. y M. LEÓN  
 2001 *Empowering Women: Land and Property Rights in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- DENSLow, J. S. y C. PADOCH  
 1988 *People of the tropical rain forest*. Berkeley. Washington, D.C.: University of California Press; Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service.
- DENVER POST  
 2004 "The high cost of gold" y varios artículos, 12-13 de diciembre del 2004.
- DESCOLA, P., P. GÍSLI y EUROPEAN ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS  
 1996 *Nature and Society: Anthropological Perspectives*. Londres y Nueva York: Routledge.

DFID

1999 *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. Londres: Department for International Development.

DÍAS MARTINS, M. (ed.)

2005 *El Banco Mundial y la tierra: ofensiva y resistencia en América Latina, África y Asia*. San José, Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigación.

DIRVEN, M.

2006 "Agglomeraciones en torno a recursos naturales en América Latina y el Caribe: políticas de articulación y articulación de políticas". Libro CEPAL N° 88. Santiago de Chile: United Nations Economic Commission for Latin America.

DORE, E.

1988 *The Peruvian Mining Industry: Growth, Stagnation and Crisis*. Boulder: Westview Press.

2000 "Environment and Society: Long-term Trends in Latin American Mining", en *Environment and History* 6: 1-29.

ECOVIDA

2005 *La minería de oro a cielo abierto y sus impactos ambientales*. Cajamarca: Ecovida.

EDELMAN, M.

2003 "Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks", en H. Anheier, M. Glasius y M. Kaldor (eds.), *Global Civil Society*, pp. 185-220. Londres: Oxford University Press.

EGUREN, F.

2004 "Las ONGs y el desarrollo rural. Un ensayo provisional", en *Debate Agrario* 38: 159-187.

ESCOBAR, A.

1995 *Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

- 1996 "Constructing Nature", en R. Peet y M. Watts, *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*, pp. 46-68. Londres: Routledge.
- 2000 "Notes on networks, and antiglobalization social movements" Preparado para la *Session on Actors, Networks, Meanings: Environmental Social Movements and the Anthropology of Activism (2000)*, AAA Annual Meeting, San Francisco, November 15-19.
- 2001 "Culture Sits in Places: Reflections on Globalization and Subaltern Strategies of Localization", en *Political Geography* 20 (2): 139-174.
- ESCOBAR, A. y S. ÁLVAREZ (eds.)  
 1992 *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy*. Boulder, Co., Westview Press.
- EVANS, P. (ed.).  
 1996 "State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development". Berkeley: Institute for International Studies.
- FARRINGTON, J. (ed.)  
 1999 *Sustainable Livelihoods in Practice: Early Applications of Concepts in Rural Areas*. Londres: ODI.
- FARRINGTON, J. y A. BEBBINGTON  
 1993 *Reluctant partners?: Non-governmental Organizations and the State in Sustainable Agricultural Development*". Nueva York: Routledge.
- FITZGERALD, E. V. K.  
 1979 *The Political Economy of Peru, 1956-78: Economic Development and the Restructuring of Capital*. Cambridge: Cambridge University Press.
- FLORA, J., C. B. FLORA, F. CAMPANA, M. BRAVO y E. FERNÁNDEZ-BACA  
 s.a. *Social Capital and Advocacy Coalitions: Examples of Environmental Issues from Ecuador*. Mimeo.

FLUWEGER, M. E.

1998 *Es un monstrro grande y pisa fuerte*. Quito: Abya Yala.

FONER, N., R. G. RUMBAUT y S. GOLD (eds.)

2000 *Immigration Research for a New Century: Multidisciplinary Perspectives*. Nueva York: Russell Sage Foundation.

FOX, J. y BROWN, D. (eds.)

1998 *The Struggle for Accountability: The World Bank, NGOs and Grassroots Movements*. Cambridge: MIT Press.

FRÍAS, C.

1995 *Pobreza campesina: solo un problema rural? Cajamarca, economía, espacio y tecnología*. Lima: ITDG.

GAROZ, B., A. ALONSO y S. GAUSTER

2005 *Balance de la aplicación de la política agraria del Banco Mundial en Guatemala 1996-2005*. CONGCOOP.

GIDDENS, A.

1979 *Central Problems in Social Theory*. Londres: Methuen.

1984 *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.

GLAVE, M. y G. DAMONTE

2002 "Evaluación independiente del Programa de Reubicación de la Compañía Minera Antamina".

GLAVE, M., G. DAMONTE y M. INURRITEGUI

2003 "Evaluación independiente del Programa de Post-Reubicación de la Compañía Minera Antamina".

GLEDHILL, J.

2000 *Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics*. Londres: Sterling, Va., Pluto Press. 2a. ed.

GODFREY, B. J.

1992 "Migration to the Gold-mining Frontier in Brazilian Amazonia". *Geographic Review* 82: 458-469.

- GODOY, R. A.  
1990 *Mining and Agriculture in Highland Bolivia: Ecology, History, and Commerce Among the Jukumanis*. Tucson: University of Arizona Press.
- GONZÁLES DE O., E. y C. TRIVELLI  
1999 *Andenes y desarrollo sustentable*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- GORDILLO, G.  
2002 "Remembering 'the ancient ones': Memory, hegemony, and the Shadows of State Terror in the Argentinian Chaco", en W. Lem y B. Leach (eds.) *Culture, Economy, Power: Anthropology as Critique, Anthropology as Praxis*, p. 177-190. Albany: State University of Nueva York Press.
- GORRITI, G.  
2004 "Yanacocha: el campo y la mina", en *Ideele* 166: 12-25.
- GRADE  
2000 *Gran minería y la comunidad*. Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo.
- GRAMSCI, A.  
2000 *The Gramsci Reader: Selected Writings, 1916-1935*. (Editado por D. Forgacs). Nueva York: Nueva York University Press.
- GTMA-NOVIB  
2000 *Minería y contaminación ambiental en el Perú*. Lima: Grupo Temático Medio Ambiente.
- GUHA, R.  
1983 *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*. Delhi: Oxford University Press.
- GUHA, R. y G. C. SPIVAK  
1988 *Selected Subaltern Studies*. Oxford & Nueva York: Oxford University Press.

GUHA, R. y J. MARTÍNEZ ALIER

1997 *Varieties of Environmentalism: Essays North and South*. Londres: Earthscan Publications.

GUHA, R., D. D. ARNOLD, D. HARDIMAN, S. AMIN, D. CHAKRABARTY,  
P. CHATTERJEE, G. PANDEY, G. BHADRA, G. PRAKASH y SUSIE J. THARU

1994 *Subaltern studies: writings on South Asian history and society*. Delhi y Oxford: Oxford University Press.

GWYNNE, R. y C. KAY

2000 "Views from the Periphery: Futures of Neoliberalism in Latin America", en *Third World Quarterly* 21:141-156.

GWYNNE, R. y C. KAY (eds.)

1999 *Latin America Transformed: Globalization and Modernity*, Sevenoaks, Kent: Edward Arnold.

2004 *Latin America Transformed: Globalization and Modernity*, 2a. edición. Nueva York: Oxford University Press.

HABERMAS, J.

1971 *Legitimation Crisis*. Boston. Beacon Press.

1984 *The Theory of Communicative Action (vol. 1)*. Cambridge: Polity Press.

1987 *The Theory of Communicative Action (vol. 2): System and Lifeworld*. Cambridge: Polity Press.

HARRISS, J. y P. DE RENZIO

1998 "'Missing Link' or Analytically Missing? The Concept of Social Capital: an Introductory Bibliographic Essay", en *Journal of International Development* 9: 919-937.

HARVEY, D.

2003 *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

HAYS-MITCHELL, M.

- 2002 "Resisting Austerity: A Gendered Perspective on Neoliberal Restructuring in Peru", *Gender and Development* 10: 71-81.

HOLT-GIMÉNEZ E.

- 2006 *Campesino a campesino: Voices from Latin America's farmer to Farmer Movement*. Oakland: Food First.

HUALLACHAIN, B. y RICHARD MATTHEWS

- 1996 "Restructuring of Primary Industries: Technology, Labor, and Corporate Strategy and Control in the Arizona Cooper Industry", en *Economic Geography* 72(2): 196-215.

IMF

- 2001 *Peru Selected Issues*, IMF Country Report N° 01/51. Washington, DC: International Monetary Fund.

INACC

- 2003 *Denuncias mineros en el Perú*. Lima: Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero.

INDACOCHEA, A., B. AVOLIO, L. BEDOYA, J. CARILLO, G. NEGRÓN,  
L. SÁNCHEZ y M. SANTILLANA

- 1998 *Cajamarca competitiva*. Lima: Sawya Ediciones SRL.

INEI

- 2000 "La medición de la pobreza en el Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática", <http://www.inei.gov.pe/inei4/novedad/novedad.htm>.

- 2002 *La migración en Perú*. Lima: Instituto Nacional de Estadística.

- 2005 *Perú en números*. Lima: Instituto Nacional de Estadística.

INEI y UNFPA

- 1996 *Perú: Departmental Population Statistics*. Lima: Instituto Nacional de Estadística.

- INGETEC  
2003 "Informe final de la auditoria ambiental y evaluaciones ambientales de las operaciones de Minera Yanacocha en Cajamarca", INGETEC, Colombia, <http://www.ingetec.com.co>.
- INSTITUTO CUÁNTO  
2005 *Anuario estadístico: Perú en números 2005*. Lima. Instituto Cuánto.
- JELIN, E.  
2002 *Los trabajos de la memoria*, vol. 1. Madrid: Siglo XXI de España Editores, Social Science Research Council.
- JOKISCH, B.  
2002 "Migration and Agricultural Change: The Case of Smallholder Agricultural Change in Highland Ecuador", en *Human Ecology* 30: 523-550.
- JONES, R. C.  
1998 "Remittances and Inequality: a Question of Migration Stage and Geographic Scale", en *Economic Geography* 74: 8-26.
- KECK, M. y K. SIKKINK  
1998 *Activists Beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- KLAK, T. (ed.)  
1998 *Globalization and Neoliberalism: the Caribbean Context*. Lanham, Maryland: Rowman y Littlefield.
- KLAK, T. y V. LAWSON  
1990 "An Introduction to Current Rresearch on Latin American Cities", en *Economic Geography* 66: 305-309.
- KUCZYNSKI, P.  
2000 "The Impact of Privatization in Perú", en M. H. Birch, J. Haar (eds.), *The Impact of Privatization in the Americas*, pp. 99 -114, Miami: North-South Center Press.

KUCZYNSKI, P. y J. WILLIAMSON

- 2003 *After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America*, Washington, D.C.: Institute for International Economics.

KURAMOTO, J.

- 1999 *Las aglomeraciones productivas alrededor de la minería: el caso de Minera Yanacocha S.A.* Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo.

- 2004a “Impactos de la minería: desarrollo insuficiente y deterioro ambiental”, en *Perú Económico* 1/8/2004.

- 2004b “Conflictos mineros en el Perú: retos y oportunidades”, en *Revista Horizonte Minero* 1/11/2004.

KURAMOTO, J. y M. GLAVE

- 2002 “Minería, minerales y desarrollo sustentable en Perú”, en *Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable*, pp. 529-591. Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) - Iniciativa de Investigación sobre Políticas Mineras (IIPM).

LA HORA

- 2004 “En Intag dijeron basta”, “Problema de minas en Junín toca fondo” Varios reportajes. Quito.

LARSON, B., O. HARRIS y E. TANDETER

- 1995 *Ethnicity, Markets and Migration in the Andes: At the Crossroads of History and Anthropology*, Durham: Duke University Press.

LAWSON, V.

- 2000 “Arguments Within Geographies of Movement: The Theoretical Potential of Migrants’ Stories”, en *Progress in Human Geography* 24: 173-189.

LEACH, M. R. MEARNS y I. SCOONES

1997 "Environmental Entitlements: a Conceptual Framework for Understanding the Institutional Dynamics of Environmental Change", en *Discussion Paper 359*, Brighton: IDS.

1999 "Environmental Entitlements: Dynamics and Institutions in Community-based Natural Resource Management", en *World Development* 27(2): 225-247.

LEM, W. y B. LEACH

2002 *Culture, Economy, Power: Anthropology as Critique, Anthropology as Praxis*. Albany: State University of Nueva York Press.

LEWIS, A. W.

1955 *The Theory of Economic Growth*. Homewood: R. D. Irwin.

LEYVA, A. y J. JANCKE

2002 *Crónica de la presencia de Minera Yanacocha S.R.L, en Cajamarca*. Lima: FEDEPAZ.

LONG, N. y B. ROBERTS

1978 *Peasant Cooperation and Capitalist Expansion in Central Perú*. Austin: University of Texas Press.

2001 *Mineros, campesinos y empresarios en la sierra central del Perú. (Miners, Peasants, and Entrepreneurs: Regional Development in the Central Highlands of Perú)*. 1984. Edición en inglés. Cambridge: Nueva York). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

LONG, N. y LONG A. (eds.)

1992 *Battlefields of Knowledge. The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development*. Londres: Routledge.

LÓPEZ JIMÉNEZ, S.

1997 *Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: IDS.

- LOWENTHAL, A.  
1975 *The Peruvian Experiment: Continuity and Change Under Military Rule.* Princeton: Princeton University Press.
- MALLON, F.  
1995 *Peasants and Nation.* Berkeley: University of California Press.
- MARTIN, J.  
1999 "Thwarting Violence: a Case Study of Newmont Gold Company", Tesis de maestría no publicada, Ohio University.
- MARTÍNEZ ALIER, J.  
2002 *The Environmentalism of the Poor: a Study of Ecological Conflicts and Valuation.* Cheltenham y Northampton: Edward Elgar Publishing.
- MARTÍNEZ J. N. y J. J. OBLITAS  
2002 *Situation and Condition of the Families that Sold Land to MYSRL 1992-2000.* Cajamarca, Perú: CES E.I.R.L.
- MARTÍNEZ, J. N., J. H. VILLA, E. GERMAN, M. MENDO, P. MATILDE, C. MARIO, L. ANGULO y J. JACKELINE  
2000 *Evaluación de impacto del programa de desarrollo rural en las comunidades aledañas a MYRSL 1993-1999.* Cajamarca: Asociación Yanacocha.
- MARTÍNEZ-ALIER, J.  
2002 *The Environmentalism of the Poor -a Study of Ecological Conflicts and Valuation.* Cheltenham: Edward Elgar.
- MAYER, E.  
2004 *Casa, chacra y dinero. Economías domésticas y ecología en los Andes.* Javier Flores Espinoza (trad.) (*The Articulated Peasant: Household Economies in the Andes.* 2002. Edición en inglés. Boulder: Westview Press). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- MCADAM, D., J. MC CARTHY y M. ZALD  
1988 "Social Movements", en N. Smelser (ed.), *Handbook of Sociology*, pp. 695-737. Londres: Sage.

MC CARTHY, J. y M. ZALD

1977 "Resource Mobilization and Social Movements", en *American Journal of Sociology* 82(6): 1212-1241.

MC HUGH, K. E.

2000 "Inside, Outside, Upside Down, Backward, Forward, Round and Round: A Case for Ethnographic Studies in Migration", en *Progress in Human Geography* 24: 71-89.

MC MAHON, G. y F. REMY

2001 *Large Mines and the Community: Socioeconomic and Environmental Effects in Latin America, Canada, and Spain*. Washington DC: The World Bank.

MELUCCI, A.

1985 "The Symbolic Challenge of Contemporary Movements", en *Social Research* 52(4): 789-816.

MEM-AMB

1998a *Informe de monitoreo ambiental Carachugo/Maqui Maqui/Yanacocha: resultados del monitoreo de aguas julio-diciembre 1997*. Lima: Ministerio de Energía y Minas.

1998b *Informe de monitoreo ambiental Carachugo/Maqui Maqui/Yanacocha: resultados del monitoreo de aguas enero-junio 1998*". Lima: Ministerio de Energía y Minas.

1999 *Informe de monitoreo ambiental Carachugo/Maqui Maqui/Yanacocha: resultados del monitoreo de aguas julio-diciembre 1998*". Lima: Ministerio de Energía y Minas.

MIGNOLO, W.

2005 "On Subalterns and Other Agencies", en *Postcolonial Studies: Culture, Politics, Economy* 8(4): 381-407.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

1998 "Referential Mining Plan" (<http://www.mem.gob.pe/new/mineria/planrefe/indice.html>) acceso 3 de agosto.

- 2000 *Mining Investment 1992-2007*, Lima, Perú: Ministerio de Energía y Minas.
- 2000 *Plan de referencia para la minería 2000-2009*. Lima: MEM.
- 2001 *Inversión en minería 1992-2007*. Lima: MEM.
- MOODIE, T. D. y V. NDATSHE  
1994 *Going for Gold: Men, Mines, and Migration*. Berkeley: University of California Press.
- MOREL, R.  
2005 *¿Quién es responsable de la responsabilidad social? Cajamarca. Minera Yanacocha*. Mimeo.
- MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE COTACACHI  
2000 "Ordenanza declarando Cotacachi un 'cantón ecológico' ". Cotacachi.
- MURRA, J.  
1985 "El archipiélago vertical, revisited", en S. Masuda, I. Shimada y C. Morris (eds), *Andean Ecology and Civilization: An Interdisciplinary Perspective on Ecological Complementarity*, pp. 3-19. Tokio: Tokyo University Press.
- MUTERSBAUGH, T.  
2002 "Migration, Common Property, and Communal Labor: Cultural Politics and Agency in a Mexican Village", en *Political Geography* 21: 473-495.
- MYSA  
2002 *Yanacocha: Its Commitment With Cajamarca*. Cajamarca, Perú: Minera Yanacocha.
- 2004 *Yanacocha: Its Commitment With Cajamarca*. Cajamarca, Perú: Minera Yanacocha.

MYSA-EIA

- 1994 *Anexo D: estudio de calidad de agua para línea de referencia EIA de Maqui Maqui*, pp. 152-234, Lima: Ministerio de Energía y Minas.
- 1995 *Estudio complementario final del impacto ambiental: proyecto Carachugo*. Lima: Ministerio de Energía y Minas.
- 1999 *Estudio complementario de impacto ambiental: proyecto Carachugo*, Lima: Ministerio de Energía y Minas.

MYSA-SUNASS

- 1999 "Carta a Intendente de Normas y Fiscalización de Peter Orams Cassinelli, Superintendente de Medio Ambiente", 18 de mayo.

NASH, J.

- 1993 *We Eat the Mines and the Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines*. Nueva York: Columbia University Press.

NEWMONT

- 2002 *South American Operations*. Denver: Newmont Mining Corporation.
- 2004 *Newmont Annual Report*. Denver: Newmont Mining Corporation.
- 2005 *Newmont Annual Report 2005*. Denver: Newmont Mining Corporation.

NUEVA YORK TIMES

- 2005 "Tangled Strands in Fight over Perú Gold Mine". *Nueva York Times*, 25 de octubre.

NUGUENT, D.

- 2002 "Erasing Race to Make the Nation: The Raise of 'the People' in the Northern Peruvian Andes", en D. Nuguent (ed.), *Locating Capitalism in Time and Space: Global, Restructuring, Politics, and Identity*. Stanford, California: Stanford University Press.

- OLICK, J. K.  
1998 "Introduction: Memory and the Nation: Continuities, Conflicts, and Transformations", en *Social Science History* 22(4): 377-387.
- ORTNER, S.  
1995 "Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal", en *Comparative Studies in Society and History* 37 (1): 173-193.
- OSSIO, J.  
1998 *Empresas mineras y poblaciones rurales*. Lima: Instituto de Estudios Energéticos Mineros.
- OSTROM, E.  
1996 "Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development", en *World Development*, 24(6): 1073-1087.
- PALSSON, G.  
1996 "Human Environmental Relations: Orientalism, Paternalism and Communalism", en P. Descola y P. Palsson (eds.), *Nature and Society: Anthropological Perspectives*, pp. 63-81. Londres y Nueva York: Routledge.
- PAREDES, M.  
2005 "Conflicto minería-comunidades y discurso indígena". Ponencia presentada a SEPIAXI, Perú: El problema agrario en debate, Trujillo, 16 al 19, agosto, 2005.
- PEET, R. y WATTS M. (eds.)  
2004 *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*. Londres y Nueva York. Routledge. 2a. edición.
- PELUSO, N. L. y M. WATTS  
2001 *Violent Environments*. Ithaca: Cornell University Press.
- PERU MONITOR MONTHLY  
2000 "Mining: Plenty of Glitter", en *Peru Monitor Monthly* 7: 75- 78.

PERU REPORT

1999 *Perú Reporting*. Lima.

PRIES, L.

2004 "Determining the Causes and Durability of Transnational Labour Migration Between Mexico and the United States: Some Empirical findings", en *International Migration* 42: 3-39.

PRINCEN, T. y M. FINGER

1994 *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global*. Londres y Nueva York: Routledge.

PROINVERSIÓN

2002 *Perú: indicadores económicos y sociales*. Lima: Proinversión.

PROJECT UNDERGROUND

1999 *Las rondas campesinas defienden la vida. Un informe sobre los impactos medioambientales, sociales y culturales de Minera Yanacocha S.R.L.* Berkeley: Project Underground.

2003 *El camino de la mínima resistencia: Una evaluación de la forma en que la oficina del Ombudsman y Asesor manejó la reclamación en contra de Minera Yanacocha*. Berkeley: Project Underground.

PROMOTORES Y CONSULTORES ANDINOS SRL

2000 *Directorio minero del Perú*. Lima.

PULGAR VIDAL, J.

1981 *Las ocho regiones naturales del Perú*. Lima: Editorial Universo.

PUTNAM, R.

1993 *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.

- RADCLIFFE, S.  
1999 "Latina Labour: Restructuring of Work and Renegotiations of Power in Contemporary Latin America", en *Environment and Planning A* 30 (2): 1-13.
- RAYMOND, L., Bryant, R. T.  
1996 "Romancing Colonial Forestry: The Discourse of 'Forestry as Progress' in British Burma", en *The Geographical Journal* 162(2): 169-178.
- RIMM  
2002 *Memoria: II Conferencia Internacional Mujeres y Minería* (16 al 25 septiembre, 2000). Iroco, Oruro, Bolivia: Red Internacional Mujeres y Minería.
- RIVERA CUSICANQUI, S.  
1987 *Oppressed But not Defeated: Peasant Struggles Among the Aymara and Quechua in Bolivia, 1900-1980*, vol. 85.1. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.
- ROBBINS, P.  
2004 *Critical Political Ecology*. Oxford: Blackwell.
- RUDEL, T. y S. RICHARDS  
1990 "Urbanization, Roads, and Rural Population Change in the Ecuadorian Andes", en *Studies in Comparative International Development* 25: 73-89.
- SACK, R.  
1986 *Human Territoriality: Its Theory and History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SAID, E. W.  
1978 *Orientalism*. 1a. ed. Nueva York: Pantheon Books.
- SALAS, I.  
2004 "El retroceso de Yanacocha", en *Actualidad Indígena* Año 1, N° 31-15 de diciembre de 2004-Servicio de Información Indígena SERVINDI.

2006 "Quilish Hora Cero: Cajamarca, la lucha de un pueblo que defiende su vida y dignidad". Cajamarca.

s.a. Varios artículos en [www.voltairenet.org/](http://www.voltairenet.org/).

SALDÍVAR L. y H. WITTMAN

2005 "Acuerdo de paz y fondo de tierras en Guatemala", en M. Dias Martins, *El Banco Mundial y la Tierra: Ofensiva y Resistencia en América Latina, África y Asia 163-185*, San José: Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones.

SALEEM, A. y L. BEHRENDT

2001 "Mining and Indigenous Rights: The Emergence of a Global Social Movement", en *Cultural Survival Quarterly*, Spring.

SARLO, B.

2005 *Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

SAUER, S., S. SCHWARTZMAN y F. BARRIOS (eds.)

2003 *The Negative Impacts of World Bank Market Based Land Reform*. Washington, D.C.: Rede Brasil.

SCHEJTMAN, A y J. BERDEGUÉ

2004 "Desarrollo territorial rural", en *Debates y Temas Rurales 1*, RIMISP, Santiago de Chile.

SCHMINK, M. y C. WOOD

1988 "The 'Political Ecology' of Amazonia", en J. Sloan Denslow y C. Padoch (eds.), *People of the Tropical Rain Forest*, pp. 38-57. Berkeley; Washington, D.C.: University of California Press; Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service.

SCHULTZ, T.

1964 *Transforming Traditional Agriculture*. Yale University Press, New Haven.

SCHWALB, F.

2000 *Cajamarca: dinamización de la economía local*. Cajamarca: IPAE.

- SCOONES, I.  
1998 "Sustainable Rural Livelihoods: a Framework for Analysis", en *IDS working paper 72*. Brighton: Institute for Development Studies.
- SCOTT, J. C.  
1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- 1990 *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.
- SEIFERT, R.  
2003 *Yanacocha: ¿El sueño dorado?* Cajamarca.
- SERAGELDIN, I. y A. STEER (eds.)  
1994 "Making Development Sustainable: from Concepts to Action", en *Environmentally Sustainable Development, Occasional Paper Series N° 2*. Washington DC.: World Bank.
- SHERRY, B. O.  
1995 "Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal", en *Comparative Studies in Society and History* 37(1):173-193.
- SILVEY, R.  
2004 "Power, Difference and Mobility: Feminist Advances in Migration Studies", en *Progress in Human Geography* 28: 490-506.
- SILVEY, R. y V. LAWSON  
1999 "Forum: Placing the Migrant", en *Annals of the Association of American Geographers* 89: 121-132.
- SKELDON, R.  
1997 *Migration and Development: A Global Perspective*, Harlow: Longman.
- SLATER, D.  
1989 *Territory and State Power in Latin America*. Nueva York: St Martin's Press.

- SMITH, G.  
1989 *Livelihood and Resistance: Peasants and the Politics of Land in Perú*. Berkeley: University of California Press.
- SOLANO, L.  
2005 *Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder*. Ciudad de Guatemala: Infopress Centroamericana.
- STARN, O.  
1999 *Nightwatch: the Politics of Protest in the Andes*. Durham: Duke University Press.
- STERN, S. (ed.)  
1987 *Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries*. Madison: University of Wisconsin Press.
- STRAUSS, J. y D. THOMAS  
1995 "Human Resources: Empirical Modeling and Household and Family Decisions", en J. Behrman y T. N. Srinivasan (eds.) *Handbook of Development Economics* volumen III. Londres: Elsevier, Science.
- SWYNGEDOUW, E.  
1997) "Neither Global nor Local: Glocalization and the Politics of Scale", en K. Cox (ed), *Spaces of Globalization. Reasserting the Power of the Local*, p. 137-166. Nueva York: Guilford Press.
- SZABLOWSKI, D.  
2002 "Mining, Displacement and the World Bank: A Case Analysis of Compañía Minera Antamina's Operations in Peru", en *Journal of Business Ethics* 39: 247-273.
- TAUSSIG, M.  
1980 *The Devil and Commodity Fetishism in South America*. Chapter Hill: University of North Carolina Press.
- TAYLOR, L.  
1994 *Estructuras agrarias y cambios sociales en Cajamarca, siglos XIX-XX*. Cajamarca. Perú: Asociación Obispo Martínez Compañon.

- THORP, R. y G. BERTRAM  
 1978 *Perú 1890-1970: Growth and Policy in an Open Economy*. Nueva York: Columbia University Press.
- THORP, R., E. CÁRDENAS y J. A. OCAMPO (eds.)  
 2000 *An Economic History of Twentieth-century Latin America*. Nueva York: Palgrave.
- TSING, A.  
 2004 *Friction. An Ethnography of Global Connections*. Princeton: Princeton University Press.
- UDALL, A.  
 1981 "Transport Improvements and Rural Out Migration in Colombia", en *Economic Development and Cultural Change* 29: 613-629.
- UNICEF  
 1998 *Informe Anual PROANDES Cajamarca 1998*. Cajamarca: UNICEF.
- UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME  
 2001 *Human Development Report 2000*. Nueva York: Oxford University Press.
- VALDERRAMA, M.  
 1999 "La cooperación internacional entre la Unión Europea y América Latina: un balance", en *Ayuda en Acción/ALOP 1999, La realidad de la ayuda externa: América Latina al 2000*, pp. 49-57. Lima: Ayuda en Acción/Action Aid/ALOP.
- VANCLAY, F. y D. A. BRONSTEIN  
 1995 *Environmental and Social Impact Assessment*. Chichester. Nueva York: J. Wiley.
- WENDELL, K.  
 2000 "Beggars on a Bench of Gold: Identities and Multinational Mining in the Cajamarca Region". Tesis no publicada. Department of Anthropology, Yale University.

WOOLCOCK, M.

- 1998 "Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework", en *Theory and Society* 27: 151-208.

YANACOCHA

- 2005 *Cajamarca. Yanacocha: responsabilidad social y ambiental 2004*. Lima: Minera Yanacocha.

ZÁRATE, P. y A. DURAND

- 2005 "El desarrollo a la vuelta de la mina: percepciones sobre desarrollo, pobreza y minería", en R. Barrantes, P. Zárate y A. Durand, *Té quiero pero no: minería, desarrollo y poblaciones locales*, pp. 81-123. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

ZIMMERER, K.

- 1999 "Overlapping Patchworks of Mountain Agriculture in Peru and Bolivia: Toward a Regional-global Landscape Model", en *Human Ecology*, 27:135-165.

ZORILLA, C.

- 1999 "The Struggle to Save Intag's Forests and Communities from Mitsubishi." Otavalo. Mimeo.

## NOTAS SOBRE LOS AUTORES

**Anthony Bebbington** es profesor de Medio Ambiente, Sociedad y Desarrollo del Instituto para la Gestión y Políticas del Desarrollo en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Formado como geógrafo, ha trabajado como profesor asociado de la Universidad de Colorado-Boulder, científico social en el Banco Mundial, e investigador del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED), el Institute de Desarrollo del Ultramar (ODI) y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Su trabajo en América Latina se enfoca en los siguientes temas: sociedad civil, estrategias de vida y desarrollo; ONG, movimientos sociales y desarrollo rural; e industrias extractivas y movimientos sociales. También ha trabajado sobre la sociología del conocimiento dentro del Banco Mundial. Entre sus libros están: *Los actores de una década ganada* (Abya Yala 1992, con G. Ramón y colegas), *El capital social en los Andes* (2001, Abya Yala, con V. H. Torres), *NGOs and the State in Latin America* (1993, Routledge, con G. Thiele), *The Search for Empowerment: Social Capital as Idea and Practice at the World Bank* (2006, Kumarian, con M. Woolcock, S. Guggenheim y E. Olson), *Development Success: Statecraft in the South* (2007, Palgrave, con W. McCourt) y *Minería y desarrollo en el Perú: con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura*, c. Michael Connarty, Wendy Coxshall, Hugo O'Shaughnessy y Mark Williams (2007, Instituto de Estudios Peruanos, CIPCA, Oxfam y Peru Support Group.).

**Jeffrey Bury** es *Assistant Professor* en el Departamento de Estudios Medioambientales de la Universidad de California-Santa Cruz. Su trabajo de investigación se centra en los cambios medioambientales, políticos y económicos en los Andes, donde él ha venido trabajando durante la última década.

**Gerardo Damonte Valencia**. Ph.D. Antropología. Cursó sus estudios de grado en la Universidad Católica del Perú y de doctorado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Desde 1996 sus trabajos de investigación y publicaciones se enfocan en temas sociales relacionados con el desarrollo de industrias extractivas en Perú y América Latina. Los proyectos de investigación en los que ha participado han recibido apoyo de agencias y organismos internacionales. Actualmente vive en Perú, donde se desempeña como investigador asociado del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y como profesor en la unidad de posgrado de la Universidad de San Marcos.

**Leonith Hinojosa** es investigadora y *fellow teacher* en el Instituto para la Gestión y Políticas del Desarrollo en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Su trabajo de investigación está orientado a estudiar la economía-política e institucional de procesos de cambio económico y desarrollo, principalmente en países andinos y con énfasis en el rol que juegan las organizaciones no gubernamentales y los proyectos de desarrollo. Como consultora ha trabajado en formulación, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo y también desempeñado labores gerenciales en organismos de desarrollo.

**Eric Holt-Giménez** es agroecólogo y profesor de Desarrollo. Realizó investigaciones durante dos años sobre las inversiones del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina. Ha enseñado en la facultad de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Santa Cruz y en el Honors Program in Global Ecology de la Universidad de Boston. Tiene treinta años de experiencia como metodólogo e investigador rural. Su último libro, *Campesino a campesino* relata las experiencias del movimiento campesino para la agricultura sostenible en Mesoamérica. Actualmente dirige el Instituto de Estudios sobre Alimentos y Desarrollo/ Food First, de Oakland California, USA.

**Denise Humphreys Bebbington** (A.B. en Historia, Universidad de California, Berkeley; MSc en Administración del Desarrollo, The American University, Washington, D.C.) fue coordinadora del Programa en Latinoamérica del Global Greengrants Fund. Es miembro fundadora e investigadora del Instituto para la Transición Social y Medioambiental, trabaja en temas de desarrollo en Latinoamérica y ha laborado en la Fundación Interamericana y en Catholic Relief Services. Actualmente es investigadora asociada honoraria en el Institute for Development, Policy and Management en la Universidad de Manchester, donde viene trabajando su tesis de doctorado en temas de conflictos sobre recursos naturales en los Andes.

**Jeannet Lingan** es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha trabajado en temas de minería e industrias extractivas desde el año 2003 en las ONG Labor y Oxfam América. Su experiencia principal es en sistematización e investigación. Actualmente está culminando una maestría en Desarrollo y Medio Ambiente en la London School of Economics and Political Science.

**Juan Pablo Muñoz.** Director de Terranueva, fundación ecuatoriana que promueve el fortalecimiento de actores sociales para la democratización de la sociedad. Trabaja en dos ejes principales: la agricultura sustentable y la participación ciudadana en la gestión pública. Coordina el Grupo Democracia y Desarrollo Local que reúne a 7 ONG del país. También es secretario de la Mesa Agraria, espacio de convergencia de las principales organizaciones campesinas del Ecuador. Es codirector de la revista *Entre Voces*, medio bimestral de opinión política. Ha realizado estudios de pregrado en Antropología Social (PUCE-Ecuador) y Antropología Aplicada (UPS-Ecuador) y de posgrado en desarrollo local y gestión pública (Universidad Andina Simón Bolívar), de planeación participativa y resolución de conflictos (ASSCOM-Italia) y sobre nuevos métodos para la antropología aplicada (Universidad de Georgia). Ha publicado varios libros y artículos en diversas revistas de Ecuador, Chile y México.

**Martin Scurrah** tiene un PhD. en Administración de la Universidad de Cornell y ha trabajado como investigador, consultor y profesor universitario en el Perú y Australia. Ha publicado libros y artículos sobre la participación política, el Estado y la reforma agraria, el cooperativismo y la autogestión, y los conflictos ambientales. Durante casi diez años fue director regional de Oxfam América. Actualmente trabaja como investigador y consultor independiente.



Impreso en los talleres gráficos de:  
**TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA**  
Psje. María Auxiliadora 156 - Breña  
Telfs.: 332-3229 / 424-8104  
Lima-Perú